

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Freddy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Hernán Ibarra Crespo
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 45

ECUADOR: US\$ 15,50

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 15

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$ 5,50

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Magenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazul Offset

ECUADOR DEBATE 87

Quito-Ecuador, Diciembre 2012

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Diálogo sobre la Coyuntura: Una escena electoral pautada por la supremacía del Estado / 7-16

Conflictividad socio-política: Julio-Octubre 2012 / 17-26

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos en la Costa del Ecuador, 1980-2009

Rafael Guerrero / 27-50

El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly

Eduardo González Calleja / 51-72

Sectores medios y ciclo de protesta antineoliberal ecuatoriano:

El caso de la Unión Nacional de Educadores

David Suárez, Lama Alibrahim, Miguel Ruiz / 73-94

Del altermundialismo a la protesta de los indignados:

¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?

Julie E. Massal / 95-122

El movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador

Sara Latorre Tomás / 123-146

DEBATE AGRARIO-RURAL

“Organización comunitaria por el agua: caso de la comunidad del ‘río trenzado”

Andrea Ponce García / 147-160

ANÁLISIS

Pueblos indígenas en Canadá: libre determinación y derechos a la tierra

Shin Imai / 161-176

Ecuador y Venezuela en la lupa: entre el neodesarrollismo y el populismo

César Ulloa Tapia / 177-188

2 Índice

RESEÑAS

El pensamiento político de los movimientos sociales / 189-192
Toacazo. En los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria / 193-196

PRESENTACIÓN

En Diciembre de 1982 salió el primer número de *Ecuador Debate*. Este número 87, diciembre 2012 conmemora 30 años de editar regular e ininterrumpidamente la revista que aspiramos, como lo señalamos en la presentación del primer número, en 1982, “sistematice una aproximación teórico-política y un debate que por su naturaleza prioritaria justifiquen este esfuerzo editorial”. Después de 30 años, por parte del CAAP, asumimos que el esfuerzo está justificado. Esto gracias a que, como también lo expresamos en ese primer número, “es un aporte de personas, grupos e instituciones interesadas en explicar opciones diversas..”; hemos contado con esos valiosos y generosos aportes.

El Tema Central de este número 87 está dedicado a explorar diversas experiencias y lecturas de la acción colectiva, definida con amplitud como todas aquellas acciones que expresan reivindicaciones de grupos sociales con ciertos niveles de organización. Como se conoce, la noción de acción colectiva tiene un alcance más amplio que el de movimiento social y es sobre todo una producción social en la que intervienen actores colectivos constituidos en un marco conflictivo y político. Sin duda, el sociólogo norteamericano Charles Tilly (1929-2008) fue quién con sus investigaciones sobre movilizaciones, motines y huelgas en distintas épocas históricas, contribuyó a crear un marco de análisis donde se destacan los reper-

torios y las lógicas de la acción colectiva. Como es característica de la revista, los artículos reunidos buscan establecer puntos de referencia que permitan ampliar los horizontes de investigación en torno a la acción colectiva que requiere dejar de lado perspectivas maniqueas o conspirativas.

Sostiene Rafael Guerrero que las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra. Sin embargo desde 1990 se observa la emergencia de organizaciones de segundo grado, articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las comunidades eclesiales de base, cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de los pequeños productores rurales. Desde hace unas tres décadas, los estudios de Charles Tilly han ejercido una amplia influencia en la historia y sociología de la acción colectiva. Según Eduardo González Calleja, las elaboraciones teóricas de Tilly establecieron un estilo riguroso de investigación cimentado en amplias series de datos que han permitido entender las lógicas históricas y políticas de protestas, rebeliones y movilizaciones. La síntesis de González Calleja es una adecuada introducción al estudio de Tilly. La Unión Nacional de Educadores (UNE) es una organización gremial que representa a los maestros de la educación primaria y secundaria. David Suárez, Lama Alibrahim y Miguel Ruiz

analizan como en las diversas fases del período neoliberal, la UNE se mantuvo cohesionada y desplegó sus repertorios de protesta, principalizando la huelga como mecanismo de movilización. Su extensa red organizativa ha sabido promover las demandas del magisterio junto a un vínculo político con el Movimiento Popular Democrático.

El surgimiento de las movilizaciones de los indignados obliga a entender sus dinámicas, procurando situar las problemáticas relaciones entre lo local y lo global como afirma Julie Massal; así, se torna necesario analizar los rasgos sobresalientes de las movilizaciones altermundistas con la finalidad de encontrar los aspectos comunes y las diferencias con las protestas de los indignados precisando los marcos locales y globales de estas movilizaciones que deben ser evaluadas con mayor atención. Sara Latorre Tomás ofrece una interpretación de las movilizaciones de sectores populares rurales opuestos a la minería cuya trayectoria se inició en la década del noventa del pasado siglo. Antes y durante el gobierno de Correa se han producido movilizaciones antimineras en el marco de una amplia variedad organizativa a escala local. En tanto que la estrategia gubernamental ha procurado deslegitimar y debilitar esas acciones.

En la sección Debate Agrario-Rural, se incluye un artículo de Andrea Ponce García relativo al caso de las comunidades de la Chimba (Olmedo, Cayambe) donde se evidencian tensiones relativas a la distribución y los derechos consuetudinarios que regulan el acceso al agua. Son expresiones de una conflictividad entre las comunidades y otra ex-

terna con las empresas florícolas. El agua se ha convertido en el elemento central que articula tanto rivalidades como alianzas comunitarias.

En la sección Análisis se presentan dos artículos. Shin Imai estudia como las relaciones entre el Estado canadiense y las naciones indígenas originarias revelan una trama de conflictos derivados de los derechos y la jurisdicción de los territorios indígenas. Esto ha sido particularmente evidente en torno a la implantación de minería en esos territorios. Tanto la consulta previa como la posibilidad de veto a las actividades mineras involucran la intervención del Poder Judicial que en determinados casos puede parar y terminar proyectos de explotación. En tanto que César Ulloa Tapia propone identificar aspectos de carácter político y económico respecto de la relación neodesarrollismo y populismo basado en el análisis de los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez. Si bien los dos gobiernos y sus líderes, guardan diferencias e irrumpen en la vida de los países en contextos particulares, sin embargo también se asemejan en estilos y estrategias para cautivar a sus electorados.

El Diálogo sobre la Coyuntura recoge las opiniones de Felipe Burbano, José Sánchez-Parga, Carol Murillo y Hernán Ibarra en torno al nuevo proceso electoral resaltando los ejes de la campaña. La Conflictividad Socio-Política entre Julio-Octubre 2012 muestra que aunque el número de conflictos tiende a decrecer desde mediados de 2011, éstos han adquirido una mayor visibilidad mediática. En este sentido, las denuncias de corrupción y la conflictividad in-

dígena se prestan a un tratamiento mediático persistente.

En la sección Reseñas, Hernán Ibarra analiza *El pensamiento político de los movimientos sociales*, una compilación de Carolina Larco y León Espinosa; y Emilia Ferraro reseña *Toacazo. En los andes equinocciales tras la reforma agraria* de Víctor Bretón Solo de Zaldívar.

Un especial agradecimiento a nuestro gran amigo Pablo Ospina por su atención y decidida voluntad de apoyo

al Tema Central de este número de la revista; como se reconoce en algunos de los artículos, éstos formaron parte de un proyecto mayor por él coordinado.

Esta gratitud es también extensiva a todos los amigos y colegas que con sus dones hicieron posible no solo 30 años de vida de *Ecuador Debate* sino sobre todo el haber cumplido con las razones de su edición. Muchas gracias. Seguiremos en el intento de propiciar el debate de experiencias e ideas transformadoras.

COYUNTURA

Diálogo sobre la Coyuntura: Una escena electoral pautada por la supremacía del Estado

Participantes: Felipe Burbano, Profesor Investigador de FLACSO Sede Ecuador; Hernán Ibarra, Investigador Principal del CAAP; Carol Murillo, Profesora de la Universidad Central del Ecuador; José Sánchez Parga, Investigador Principal del CAAP.

Las elecciones de febrero de 2013 están signadas por una mayor estructuración de la oposición política al gobierno de Alianza País que incidirá también en una composición de la Asamblea con importantes bancadas opositoras. Los temas relativos a la oposición Estado y mercado junto a otros sobre la seguridad y los estilos de gobierno predominan en las propuestas electorales de los candidatos presidenciales.

Hernán Ibarra. El nuevo proceso electoral que tendrá en febrero de 2013 la primera vuelta electoral para la elección presidencial y la elección de asambleístas, tiene como condición la asignación de escaños que beneficia a las candidaturas y organizaciones políticas que posean mayorías, junto a la conformación de distritos en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha que favorece a las corrientes políticas con mayor penetración territorial. Rafael Correa y AP aspiran a repetir los triunfos de 2006 y 2009.

El problema de la inscripción de partidos y movimientos que forzó a una reinscripción tuvo como consecuencia una reducción de éstos. En las elecciones de 2009 participaron 13 partidos, 37 movimientos nacionales y 203 de carácter local. En estas elecciones participa-

rán 11 movimientos y partidos nacionales y 59 movimientos locales. Esta sensible reducción, sin embargo, muestra una fragmentación en varias corrientes que van desde la izquierda hasta la derecha con distintos matices expresados en 8 candidaturas a la presidencia.

El hecho de que Alianza País, la institucionalidad estatal y la figura presidencial aparezcan fusionadas en la acción política, torna a este proceso electoral en una concreción del peso dominante del Estado que está en capacidad de movilizar amplios recursos logísticos a favor de sus candidatos. Por ello, el espacio político aparece fuertemente definido por el Estado como el factor que organiza las posiciones de los actores políticos.

Uno de los ejes de la confrontación electoral que atraviesa los discursos y propuestas de los candidatos presiden-

ciales es la pugna entre Estado y mercado. De un modo u otro, esta oposición define la campaña política. Para las corrientes de derecha se trata de limitar la intervención estatal y dar mayor espacio a las iniciativas empresariales. Para las corrientes de izquierda se trata de mantener esa intervención y con diversos matices, profundizar las reformas ya llevadas a cabo por este gobierno. Evidentemente, no es un antagonismo de tipo abstracto sino que adquiere un contenido muy concreto como ha sido la polémica sobre el incremento del Bono de Desarrollo Humano.

¿Cuáles son las posibilidades de los candidatos contendientes a Correa? ¿Está en discusión el modelo de desarrollo? ¿Son factibles medidas de mayor radicalización?

José Sánchez-Parga. Encuentro siempre una cierta incomodidad tratar de hacer encajar las categorías políticas en la situación actual, por ejemplo, el tema de la representación política cuando lo que estamos viendo es un fenómeno de representatividad política. Esto nos obligaría más bien a considerar estos fenómenos de distinta manera, la crisis de la representación política de más de una década nos obliga a considerar como los políticos se han vuelto representativos, pero ¿de qué?, yo creo que se vuelven representativos en parte por ciertos perfiles de donde proceden, pero también en parte porque son producidos con la misma campaña electoral.

El otro tema es el de la oposición o de los opositores, yo creo que también la oposición política se ha transformado en estas últimas décadas, no ha habido una oposición política en los términos

clásicos, relativamente homogénea, con propuestas alternativas a lo que está haciendo el gobierno, sino opositores políticos que además son potenciales candidatos electorales. Toda la oposición política desde hace más de dos años se ha jugado en esto. He analizado en estos últimos años los conflictos indígenas, que han estado apostando a potenciales candidatos opositores, el caso desde mi punto de vista más llamativo es el de Lourdes Tibán quién que ha sido entrevistada entre 2009 – 2011, treinta y dos veces por los medios, dos veces por CNN. Ha sido una opositora que se ha fraguado en la oposición política, eso creo que le está dando fuelle para su campaña actual como candidata. Otro elemento que también forma parte de esta clarificación es el tema de las derechas, de si es una derecha fragmentada o es derecha más extrema derecha que otra, yo creo que esto también nos obliga a repensarlo, es decir quién hace la derecha, si es un discurso, es una ideología más o menos radical o bien son las posiciones que adoptan los mismos candidatos por su representatividad.

Carol Murillo. Lo que me ha llamado la atención realmente después de que se definieron los 8 candidatos es cómo; sobre todo en el gobierno de Rafael Correa, la cuestión mediática se ha exacerbado terriblemente. Ya hemos visto que los medios de comunicación privados se han convertido en espacios de oposición, casi sustitutos del discurso político; además, el gobierno que también tiene medios, y que tiene a un presidente que habla todos los sábados, copa algunos espacios mediáticos. Entonces, creo que hay una exacerbación política de los es-

pacios mediáticos, de esa edificación de la política, y como nunca la política está más en los medios que en cualquier otra parte. La misma construcción mediática del candidato Lasso, que durante meses salía a decir *que él era* Guillermo Lasso; Lucio Gutiérrez menos, porque recorre el país, lo mediático en él no es tan efectivo como en los otros, no hay una construcción de marketing, es como que si estéticamente no fuera consumible, lo que sí es Lasso o lo que podría ser el discurso de redentor del pastor Zabala, eso me llamó la atención.

Como nunca los medios de comunicación, o a través de los medios, se escenifican discursos ni tanto propuestas. Uno puede estar en desacuerdo con el modelo o el proyecto de Correa, pero creo que allí hay una propuesta, allí hay un desarrollo, durante 6 años hemos visto que se hacen cosas y, en el otro lado, creo, se ha construido un discurso muy en abstracto, en defensa de la libertad de expresión, del derecho, de la institucionalidad, etcétera, y eso a su vez daría la impresión que nos remite a la institucionalidad anterior a Correa, cómo si eso fuera mejor, pero siempre mediada por el escenario mediático, por los discursos mediáticos. Entonces los políticos luchan por hacer política en estos escenarios y disputan el dominio del escenario mediático con el Presidente, por eso no quieren que el presidente siga apareciendo en la televisión cada sábado, o en la radio o en las cadenas de todos los días. Antes, una cadena era una cosa muy azarosa, hoy es otra cosa, es una manera de existir en la imagen o en el imaginario de quien está viendo la televisión, de quien está oyendo la radio, y como

también los medios han relativizado esas categorías políticas como la izquierda como la derecha de un modo maleable.

Felipe Burbano. Me da la impresión de que nadie puede competir con Correa en el escenario mediático. Ha estado presente, copando sus espacios, en los últimos seis años, y eso le da una ventaja enorme sobre sus oponentes. Además, cuenta con un aparato montado, que viene funcionando desde un tiempo atrás, y que ahora puede movilizarlo con facilidad para enfrentar la campaña. Sobre los temas de discusión, los claves van a ser dos: el primero, la relación Estado - mercado, como señalaba Hernán; poner en discusión el alcance de lo que se ha llamado el retorno del Estado, con todas sus implicaciones y excesos; y el segundo, que podríamos llamar la herencia de Montecristi, topa dos aspectos: el modelo político delineado en la nueva constitución —de concentración del poder, de hiperpresidencialismo— tal como sugieren desde el centro y la derecha; o el retorno a los orígenes y fundamentos del proceso refundacional teniendo en cuenta el ideal de una democracia ciudadana y participativa, vulnerado por el actual gobierno, como plantea la izquierda. De otro lado, encuentro que la oposición no ha terminado de depurarse con relación a su propio pasado; hay una dispersión en la derecha, donde podría haber cuajado una candidatura más fuerte y desafiante; un gran vacío en el centro izquierda —todos dejaron solo a Correa en ese espacio— mientras la izquierda intenta volver a un momento refundacional —el de Montecristi— que ya pasó.

Carol Murillo. Creo que si van a haber unos debates, pero van a ser margi-

nales, no creo que el debate de esa profundidad que tú planteas en plena campaña electoral cobre fuerza. Creo que el eje de la campaña va a ser varios escándalos, no porque estos no sean importantes, sino porque el nivel de confrontación no va a poner sobre el tapete precisamente temas abstractos, por decirlo de alguna manera. Serán pocos los candidatos que de verdad pongan eso, por ejemplo, Alberto Acosta al comparar este modelo de Estado con el que proponen las izquierdas y alguna cosa superficial que haga Lasso. Pero en la discusión de la campaña, me parece, estos temas parecen densos, esto es lo de fondo obviamente, y si ganase alguien de la derecha esto es lo que va a pasar, pero creo que el discurso de la campaña no girará en torno a estas cosas.

José Sánchez-Parga. Lo que se ha planteado me parece muy importante, no se ha trabajado lo suficiente como los medios se han convertido en el lugar en la política. Hoy la política se hace en los medios, y en ese sentido hay que reconocerlo, los medios son un actor mediático, es otro nuevo poder con una composición de intereses muy fuertes, creo que eso es muy interesante.

Cuando analizamos la conflictividad, hemos constatado un fenómeno muy singular, hoy cada vez más los conflictos tiene un efecto de exposición mediática. Los actores del conflicto tienden a esta exposición mediática del conflicto para dar una visibilidad y para dar una fuerza y por otra parte te encuentras con lo que podríamos llamar el efecto de amplificación mediática del conflicto por parte de la prensa. Nos llama la atención, un número excesivo de conflictos en determi-

nado sector y en realidad es un conflicto pero que ha sido reproducido el mismo por varios medios durante varios días, hay a veces el conflicto registrado que se anuncia la movilización del conflicto registrado el día de la movilización y después las opiniones sobre los resultados de ella, yo creo que el fenómeno es muy importante.

Cuando se mira lo que son los actos de prensa, editoriales, noticias, reportajes, opinión y entrevistas, con posicionamientos políticos de los 4 grandes periódicos del país, la frecuencia es alrededor de casi 10 diarios en promedio. Para decir cómo está politizado esto y sería interesante ver lo que va a ocurrir durante la campaña, creo que es un escenario político muy crispado y en confrontación con las actuaciones del presidente.

Carol Murillo. Yo escribí un pequeño ensayo para un libro sobre la protesta social en el Ecuador y había que buscar como los medios cubrieron la protesta social en un período. Tomé la Ley del agua, estudié *El Universo* y *El Comercio* durante 6 meses, y como nunca los grupos sociales, sobre todo los grupos de izquierda tuvieron una escenificación con fotografías y entrevistas, y era llamativo porque en otras ocasiones ellos han sido casi descritos como vándalos. Llegué a la conclusión de que habían tenido una gran cobertura porque era una forma de materializar la oposición que tiene este gobierno, entonces, un dirigente fue entrevistado montones de veces.

Esas movilizaciones continuas contra la Ley del agua hicieron retroceder al gobierno y a la Asamblea, cuando su Presidente dijo que se quedaba en el lim-

bo. Esa fue una de las peores derrotas que ha tenido el gobierno, pero fue lo suficientemente manejado para que no pareciera una derrota. Pero esa fue una gran derrota y tuvo un acompañamiento mediático muy importante, porque no solamente se hacían entrevistas sino que hacían análisis, hacían investigación, comparaban las fuentes de agua, una serie de cosas y cómo se había legislado el asunto de Interagua en Guayaquil, incluso dijeron que había llegado a una entente o pacto con Nebot. Pero cuando el gobierno dijo esa ley se para, la cosa murió y los medios ya se quedaron sin nada... aunque la idea era seguir. Este es un ejemplo de cómo en este caso, este conflicto contra el gobierno cobró una relevancia especial por la cobertura y porque además los que estaban contra la ley aprovechaban ese escenario para darle más fuerza a su lucha, y tuve la impresión de que el gobierno perdió no solo políticamente en la Asamblea sino que perdió mediáticamente, no pudo construir un discurso contramediático para ese hecho.

Felipe Burbano. Tengo la sensación de que los medios van a ser relativamente neutralizados en esta campaña con todas estas disposiciones alrededor del Código de la Democracia. Los medios están en una situación donde van a tener que balancear sus coberturas, cuidar se mucho, equilibrar sus informaciones, es decir, hacer más de escenario que de actor, aunque un escenario pobre. Me gustaría tener una visión más de conjunto, menos coyuntural, de la forma cómo los medios han cubierto la protesta y los conflictos sociales desde el retorno a la democracia. Creo que en muchos me-

dios ha existido una sensibilidad y una preocupación democráticas genuinas hacia ciertas reivindicaciones, como las de los indígenas en la década de los noventa. No siempre han sido tratados como vándalos.

José Sánchez-Parga. Entre la protesta social actual y la que comienza en los años 90 creo que hay un cambio de ciclo muy evidente. El conflicto social es un conflicto reivindicativo, democrático, políticamente representable, el ciclo de la protesta es distinto, no es democrático, no es políticamente representable. Y por eso ha tenido y sigue teniendo estas metamorfosis que pasa del movimiento social a las movilizaciones de protesta. El paradigma neoliberal de 90 modifica la acción, la lucha social y la organización.

Hernán Ibarra. No debemos olvidar que antes de la década del 90, los medios tendían a dar una baja cobertura a las movilizaciones laborales o campesinas. Me parece que en esa década hay un cambio en la profesión periodística, los periodistas tenían un mejor nivel de formación para cubrir este tipo de eventos. Antes, lo que predominaba como información de las organizaciones y movilizaciones sociales era lo que provenía de boletines de prensa y comunicados pagados que podían aparecer publicados en algún periódico. En los 80 y 90 los mismos reporteros o los mismos periodistas empezaron a recoger datos de los actores, pero también los medios comenzaron a cambiar parcialmente en su concepción respecto a las demandas de la población. Sobre todo en la época del ajuste empezaron a darse cuenta que había un malestar social en la sociedad y me parece que eso también tiene que ver

con un cambio en la profesión periodística con un mayor nivel de sensibilidad y periodistas más situados desde el centro hacia la izquierda que recogen estos eventos y eso se evidenciaba en los periódicos de alguna manera.

Felipe Burbano. Creo que en los años 80 hubo un cambio, hablo al menos por mi experiencia en Diario Hoy. Las protestas, las huelgas, desde el inicio de los ajustes estructurales, se cubrían con mucha precisión y minuciosidad para detallar y describir bien su alcance y significado en un momento de cambio del modelo económico. Hay una sensibilidad democrática de muchos medios frente a los dramáticos cambios que traen consigo las políticas de ajuste estructural. Esa misma experiencia continuó en la década de los 90 con los levantamientos y movilizaciones indígenas. La sensibilidad de los medios hacia el movimiento indígena fue enorme. La capacidad de los medios para reflejar y amplificar el conflicto, para ver en él dinámicas democratizadoras, creo que es un tema por investigar.

Hernán Ibarra. Desde hace mucho tiempo estamos hablando de una crisis de representación política, sobre todo con la idea de una falta de conexión entre actores sociales y actores políticos y al hecho de que aparte de ciertos segmentos de la izquierda donde esta vinculación ha ocurrido históricamente, en realidad está sucediendo un desajuste entre sectores sociales específicos y sus representantes políticos. Este desajuste de la representación política afectó profundamente al centro político que en el transcurso de los últimos diez años prácticamente se esfumó de la escena política. Personajes del centro político giraron

hacia la derecha o también se fueron hacia Alianza País. También está ocurriendo que Alianza País ha estado copando el espacio del centro y el espacio de la izquierda y eso en esta campaña electoral le pone en serios aprietos a las corrientes de izquierda más radicales y cuestionadoras del proyecto Alianza País porque tienen el problema de ofrecer en este caso alternativas diferentes a las que hace la acción de gobierno.

Felipe Burbano. Me llama la atención como todas las candidaturas abandonaron el espacio del centro izquierda. Fuera de Ruptura de los 25 no encuentro una candidatura que intente instalarse en ese espectro del marco ideológico. Todos abandonaron ese espacio por razones de estrategia electoral: prefirieron ubicarse en la derecha para tratar de construir desde allí alguna alternativa al gobierno, pero la consecuencia fue un sobrepoblamiento con Gutiérrez, Noboa, Lasso, Rodas, disputándose su representación. La izquierda radical, que intenta criticar a Correa por haber traicionado el proyecto original de Montecristi, quiere revivir un momento refundacional que, como dije, ya pasó, fue apropiado por Correa y Alianza País. Nadie, o muy pocos, quieren volver a otro momento refundacional.

José Sánchez-Parga. Ese discurso político ideológico de la izquierda, ¿qué repercusión tiene en las bases electorales de todos esos movimientos y partidos y candidatos?, ese es el problema o sea, en qué medida es determinante de las posiciones políticas y las opciones de las bases electorales. Creo que mucha gente va a votar por unos y por otros al margen de

ese discurso político, creo que eso es lo grave. En Francia es una derecha que se divide con una tendencia de ese centro hacia la derecha extrema y otra más centrista. Cuan relevantes son esos posicionamientos o discursos o ubicaciones de la ideología política, el 90% de la gente que va a votar por Correa no vota porque tiene un discurso de izquierda, sino por lo que hizo, por posiciones más sociales, la gente que ve las reformas.

Felipe Burbano. De todos modos, en la política hay un juego de posicionamientos entre las fuerzas y las candidaturas que participan y compiten, y creo que los electores identifican ese juego de competencia. El juego de la lucha política permea sobre los electores que perciben diferencias.

Carol Murillo. Respecto del centro, de la izquierda y de la derecha llama la atención que los del centro se han ido hacia la derecha, y en la izquierda radical está Alberto Acosta, y Correa oscila. Mucha gente de la derecha y también en los medios trata de diferenciar a Alberto Acosta y a Correa, como que Acosta es más radical y más de izquierda, y no saben —o lo saben— que al decir eso le están haciendo un favor a Correa; porque si Acosta ganara “haría cosas peores”, estandarizaría la economía, como ellos mismos dicen. He escuchado esto en radio Democracia, a Acosta por poco le dicen sí, “pero tú creaste el monstruo, tú eres más culpable que el monstruo exista”...

Felipe Burbano. Me parece que Correa ha empezado a diferenciar a Acosta de sus socios políticos, es decir, del MPD y de Pachakutik. Con ello, lo que intenta es mostrar que, más allá de Acosta, quien fue parte de la revolución, uno de

sus ideólogos incluso, hay una izquierda infantil, radical, que no entiende bien las cosas. La irrupción de esta izquierda le ayuda al gobierno en dos sentidos: a diferenciarse de ella —no somos el cuco que nos pinta la derecha— pero tampoco puede abandonar sus promesas de cambio y transformación.

Carol Murillo. Aunque Acosta y los de izquierda dicen que Correa desde la izquierda se viró a la derecha, porque así como lo acusan de izquierdizante los de la derecha, Alberto Acosta y su pléyade de acompañantes le dicen un postneoliberal.

José Sánchez-Parga. Un filósofo alemán, Ulrich Beck, dice que Angela Merkel es social demócrata para adentro y para afuera ultraneoliberal. Eso es lo que está haciendo Correa, ¿quién no lo hace? Los márgenes de autonomía de los gobiernos en Europa o aquí, sean de derecha o sean de izquierda son cada vez menores. En Europa se gobierna ya no desde Bruselas, es Frankfurt quien gobierna; Europa y todos los jefes de gobierno son tecnócratas. Qué margen de maniobra tienen el gobierno español cuando tiene que abaratar todavía más los despidos y subir todavía más el IVA.

Puede ser interesante discutir en otra ocasión qué tipo de Estado está produciendo el modelo de gobierno actual. Qué está detrás de estas políticas gubernamentales, de toda esa contratación pública que es única en la historia de estas tres décadas. La contratación de asesores y consultores ha sido masiva, para cada función se ha creado un órgano, es impresionante el crecimiento que tienen las instituciones del Estado.

Felipe Burbano. Este va a ser un tema de discusión fuerte: ¿qué ha significado

el retorno del Estado desde la economía, la política y el sistema político, ligado a un estilo de gobierno con un liderazgo tan fuerte? Este es un tema delicado para la derecha porque ve con preocupación este creciente poder estatal pero no puede decir mucho en contra de él por temor a ser acusada de querer volver a la larga noche neoliberal. La derecha no sabe qué hacer frente al Estado, tampoco puede volver sobre un discurso del mercado para criticar los excesos.

Hernán Ibarra. Lo que podemos ver en los planteamientos de Lasso o de Rodas es la idea de racionalizar la intervención del Estado, es decir no se trata de negar la intervención del Estado ni su papel regulador, ni su papel protagonista en la inversión pública. Lasso y Rodas lo que cuestionan es el sobredimensionamiento que tiene el Estado como institución y también están cuestionando el peso que tiene el desarrollo de un aparato estatal creciente. Hay una crítica al tamaño del Estado pero tienen mucho cuidado en proponer temas de los años 90 como el de las privatizaciones. Este tipo de planteamientos no están en la escena para nada, aunque ideológicamente ellos estarían muy de acuerdo en volver a plantear este tipo de temas, ponen mucho cuidado en mencionarlos.

En algún momento de la campaña va a aparecer el tema de la seguridad, un tema que está latente. Algunos candidatos social cristianos a representantes ya han posicionado nuevamente la seguridad como un problema central, este tema va a seguir asomando vinculado a la ineficacia del aparato de justicia, al crecimiento de la delincuencia y la necesidad de políticas de tratamiento con mano du-

ra, tal como la derecha ha sostenido en las discusiones sobre las reformas al Código Penal.

Carol Murillo. El día que Correa lanzó la candidatura del vicepresidente, yo noté que a pesar de que Correa sigue teniendo toda la parafernalia izquierdista, ese día construyó un discurso que sin ser anti-izquierdista, que sin ser totalmente pragmático, se ponía en el centro. No quiere un vicepresidente que represente ideológicamente nada, quiere un vicepresidente que le signifique a la gente que hay un *equipo de trabajo*. Me llamó mucho la atención como estaban todos con jean azul y camiseta verde, ese lenguaje de la ropa me dijo mucho, es como decir “esos son ingenieros que están trabajando, esa gente está trabajando, nosotros queremos un equipo de trabajo”. Cuando Correa presentó a todos los candidatos de la Asamblea, que ideológicamente la mayoría no tiene una presencia o un discurso reconocible, la imagen diría: esta gente es mi equipo. El candidato a vicepresidente es parte del equipo, como ya la vicepresidencia, desde Lenin Moreno, rompió ese encantamiento perverso de ser el conspirador y ahora se convierte en alguien más del equipo, no es un ser que está esperando que se caiga el presidente sino que trabaja, que tiene un gran nivel de acción. Al desideologizar el discurso lanza un mensaje, que éste es un gobierno, no importa si es de izquierda o de derecha, no llega a decir eso, pero sugiere que es una izquierda pragmática, una izquierda útil, no una izquierda lírica o infantil, una izquierda que trabaja.

Felipe Burbano. Comparto esa percepción de que la candidatura de Jorge

Glas fue una derrota de los sectores más ideológicos de Alianza País. El objetivo es dar esa imagen de un gobierno tecnocrático, de un gobierno eficiente, de un equipo de trabajo. Ahora, eso es posible porque este gobierno se politiza de otra manera, de la forma de conducción política del presidente, yo diría de su estilo populista, confrontador. No necesita de un ideólogo en la vicepresidencia para politizarse. La definición que ha hecho Carlos de la Torre del gobierno de Correa como tecnopopulismo me parece acertada: se trata de una forma sui generis de conciliar dos principios que resultaban, desde ciertas perspectivas teóricas e históricas, excluyentes. Alianza País concilia dos principios de legitimación con mucha eficacia.

José Sánchez-Parga. Algunos hemos sido reacios a tomar el populismo como una categoría analítica. Si se ve el tipo de políticas que se están aplicando en este gobierno como en el caso de la universidad. Creo que a la universidad había que meter mano, había de hacer una reforma universitaria, pero lo que se está haciendo, aplicando un modelo vertical.

Felipe Burbano. Una cosa es que ellos se presenten como unos tecnócratas eficaces y otra cosa es que sean eficaces, parece que es un mecanismo de legitimidad hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los sectores medios y hacia una visión modernizadora del Estado. En las cadenas de todos los lunes, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación presenta la imagen de un gobierno hipermodernizado, tecnologizado, unos dedos que topan unas pantallas y hacen milagros. Habría que investigar qué sectores del Estado responden mejor a un

manejo tecnocrático, son más eficaces; en ese sentido, creo que es un gobierno que combina dos mecanismos de legitimación hacia la sociedad, uno tecnocrático, dirigido más a las aspiraciones y las demandas de la clase media, a las demandas de modernización de la clase media, muy golpeada después de década y media de neoliberalismo, y otro populista, polarizador, de confrontación con la estructura del poder, dirigido a los sectores populares.

Hernán Ibarra. Y además rompiendo el equilibrio regional que había sido la tradición en buscar la figura vicepresidencial; tenía que ser alguien de la sierra cuando el candidato presidencial era costeño o cuando era serrano tenía que ser alguien de la costa o incluso la cuestión de género en el caso de Bucaram que eligió a Rosalía Arteaga que poseía un perfil regional también. Pero Correa rompe esta lógica regional de la elección de la figura vicepresidencial.

Felipe Burbano. Lo que está en juego en esta tercera elección de Correa es si sigue siendo un proyecto de alcance nacional o si va a ser una campaña y un proceso electoral que vuelva a reeditar y a poner en escena los cortes regionales, fue una interrogante que dejó la consulta de mayo del 2011, en donde las votaciones se dividieron y la revolución apareció más bien como un fenómeno mayoritariamente costeño, perdió en las provincias con población indígena de la sierra y en la amazonia. Es intrigante esa declaración que hizo Correa hacia algunos meses cuando dijo que Guayaquil va a ser el nuevo bastión de la revolución ciudadana, no sé si eso marca el desplazamiento de la revolución hacia Guaya-

quil y hacia la costa. No sé cuánto vaya a jugar el corte regional en esta elección, que es la otra variable que siempre inter-

viene en los procesos electorales, más allá de este juego de clasificación ideológica del que hemos hablado.

Conflictividad Socio-Política Julio-Octubre 2012

Aunque el número de conflictos tiende a decrecer desde mediados de 2011, éstos han adquirido una mayor visibilidad mediática. En este sentido, las denuncias de corrupción y la conflictividad indígena se prestan a un tratamiento mediático persistente.

Como se observa en el anterior período expuesto en el análisis del anterior número de la Revista (Marzo-Junio 2012), no sólo se mantiene la tendencia decreciente del número de

conflictos desde hace más de un año, durante los cuatro últimos períodos registrados, sino que además se observa una tasa de reducción mensual de la frecuencia de los conflictos en los últimos períodos.

Número de conflictos por mes

FECHA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
JULIO / 2012	61	26.64%
AGOSTO / 2012	68	29.69%
SEPTIEMBRE / 2012	51	22.27%
OCTUBRE / 2012	49	21.40%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: -UI-CAAP-

Los datos confirmarían las dos hipótesis explicativas de la reducción del número de conflictos tras su alza durante los años 2009-2011: al politizarse el conflicto social y adoptar la forma de protesta antigubernamental, ésta en parte se

desgasta (a diferencia de los conflictos reivindicativos, que se reforzaban con sus persistencias), y en parte tiende también a reducirse cuando cambia el escenario político y se reducen los frentes de oposición del mismo gobierno.

Reducción de los conflictos: julio 2011-octubre 2012

Períodos	Número Conflictos
Julio – Octubre 2011	286
Nov. – Febrero 2012	252
Marzo – Junio 2012	249
Julio – Octubre 2012	229

Fuente: *Ecuador Debate*, Nos. 84, 85, 86

De otro lado, sigue manteniéndose el “efecto de exposición mediática” de los conflictos y de sus dirigentes y protagonistas, que tienden a hacer lo más mediáticas posibles todas las formas de conflictividad emprendida; así como el “efecto de ampliación mediática” de la conflictividad social por parte de una prensa en oposición política, la cual tiende a repetir o prolongar en los medios todo tipo de conflicto.

Género del conflicto

Respecto al período anterior disminuye el número de conflictos de los sectores indígenas y campesinos, se mantiene la frecuencia en el sector urbano barrial, pero aumenta significativamente en el ámbito cívico regional.

Género del conflicto

GENERO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CAMPESINO	6	2.62%
CIVICO REGIONAL	26	11.35%
INDIGENA	9	3.93%
LABORAL PRIVADO	53	23.14%
LABORAL PUBLICO	51	22.27%
POLITICO LEGISLATIVO	15	6.55%
POLITICO PARTIDISTA	21	9.17%
PUGNA DE PODERES	3	1.31%
URBANO BARRIAL	45	19.65%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Se reducen también los conflictos en los sectores laborales, tanto en el privado como sobre todo en el público, respecto al período anterior pasando respectivamente de 62 a 53 y de 70 a 51. Hay que

señalar que siendo el sector laboral el que presenta el promedio del mayor porcentaje de los conflictos (en torno al 50%), es también el que se muestra más sensible a la conflictividad periódica.

Evolución del conflicto laboral público y privado

Períodos	Número conflictos	Porcentajes
Julio 2011- Octubre 2011	150	52.45%
Noviembre2011- Febrero2012	123	48.81%
Marzo – Junio 2012	132	53.01%
Julio – Octubre2012	104	45.41%
Promedios	127	49.92%

Fuente: *Ecuador Debate*, Nos. 84, 85, 86

En cuanto a los conflictos de carácter político aumentan legislativos y sobre todo los partidistas, pero se mantiene estable y relativamente bajo el referido a la “pugna de poderes” (de 4 pasa a 3).

Sujeto del Conflicto

Las frecuencias en referencia a los actores o Sujetos de los conflictos reflejan los mismos datos sobre los sectores sociales o géneros de la conflictividad. Se reducen respecto del período anterior los conflictos campesinos (de 15 a 6) e indígenas (de 16 a 9), así como los empresariales (de 38 a 31).

Sujeto del conflicto

SUJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CAMARAS DE LA PRODUCCION	1	0.44%
CAMPESINOS	6	2.62%
EMPRESAS	31	13.54%
ESTUDIANTES	8	3.49%
FUERZAS ARMADAS	5	2.18%
GREMIOS	11	4.80%
GRUPOS HETEROGENEOS	8	3.49%
GRUPOS LOCALES	18	7.86%
IGLESIA	0	0.00%
INDIGENAS	9	3.93%
ORGANIZACIONES BARRIALES	36	15.72%
PARTIDOS POLITICOS	39	17.03%
POLICIA	1	0.44%
SINDICATOS	5	2.18%
TRABAJADORES	51	22.27%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Crece significativamente el número de conflictos de los grupos heterogéneos (de 4 a 8) y locales (13 a 18). Y también aumenta la frecuencia de la conflictividad política protagonizada por los partidos. Los conflictos partidarios rebasaron durante este período los enfrentamientos legislativos y muchos giraron en torno a la inscripción de candidatos para las futuras elecciones del mes de Febrero 2013.

Objeto del conflicto

Como suele suceder de manera general se confirma la correlación inversa entre las frecuencias de *demandas de financiamiento* hacia el Estado y el gobierno, que aumentan respecto del anterior período (de 37 a 40), y los *rechazos a las políticas estatales* que se reducen (de 46 a 30). Cuando es mucho mayor la reducción de los *rechazos* que el aumento de las *demandas* nos encontraríamos en un escenario político propio de una mayor gobernabilidad.

Objeto del conflicto

OBJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
DENUNCIAS CORRUPCION	59	25.76%
DEMANDAS DE FINANCIAMIENTO	40	17.47%
LABORALES	55	24.02%
OTROS	32	13.97%
RECHAZO POLITICA ESTATAL	30	13.10%
SALARIALES	13	5.68%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Las denuncias de corrupción, convertidas en barómetro de la crispación política, que en parte expresan y en parte provocan dicha crispación, se han convertido además en uno de los conflictos de mayor “amplificación mediática” por parte de la prensa; respecto

del período anterior han pasado de 49 a 59. Las *denuncias de corrupción* son junto con el *conflicto indígena* los dos episodios de la conflictividad más explotados por la prensa, y que se prestan a un tratamiento mediático más repetido y duradero.

Evolución de la denuncia de corrupción

Períodos	Número - %
Noviembre - Febrero 2009	14 (14.29%)
Marzo - Junio 2009	24 (25.26%)
Julio - Octubre 2009	22 (16.42%)
Noviembre - Febrero 2010	37 (16.82%)
Marzo - Junio 2010	59 (21.85%)
Julio - Octubre 2010	59 (16.48%)
Noviembre - Febrero 2011	29 (11.69%)
Marzo - Junio 2011	39 (15.18%)
Julio - Octubre 2011	28 (9.79%)
Noviembre - Febrero 2012	35 (13.89%)
Marzo - Junio 2012	49 (19.68%)
Julio - Octubre 2012	59 (25.76%)

Fuente: *Ecuador Debate*, Nos. 75-86

Estaríamos en presencia de un fenómeno político, cuya frecuencia se presenta en relación inversa a los conflictos socio-políticos; como si la reducción de éstos fuera sustituida por un crecimiento de las *denuncias de corrupción*, cuya mayor frecuencia tiene lugar en períodos de muy corta duración, casi coyunturales. Sin embargo “las denuncias” pueden coincidir tanto con períodos de máxima conflictividad socio-política (2009-2011) como con períodos de reducción general de la conflictividad (2012).

Intensidad del Conflicto

Sobre la intensidad de los conflictos se configura una situación muy particu-

lar durante el último período: si bien aumentan considerablemente las protestas, el resto de repertorio de la conflictividad o modos de su manifestación disminuyen considerablemente respecto del anterior período.

Se reducen las amenazas y bloqueos, los juicios y marchas. Esta información permitiría suponer que si bien el número de protestas sigue siendo relativamente elevado, se muestran cada vez más “desarmadas” de sus diferentes recursos de manifestación y formas de expresión. La reducción del número de paros y huelgas se explica en correspondencia al también menor número de conflictos salariales y del sector laboral.

Intensidad del conflicto

INTENSIDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AMENAZAS	25	10.92%
BLOQUEOS	9	3.93%
DESALOJOS	10	4.37%
DETENCIONES	14	6.11%
ESTADO DE EMERGENCIA	14	6.11%
HERIDOS/MUERTOS	6	2.62%
INVASIONES	1	0.44%
JUICIOS	13	5.68%
MARCHAS	19	8.30%
PAROS/HUELGAS	4	1.75%
PROTESTAS	63	27.51%
SUSPENSION	45	19.65%
TOMAS	6	2.62%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Intervención estatal

Por vez primera el registro “no corresponde” es el más numeroso (62) y representa el 27% del total de intervenciones estatales. Incluso es significativo el aumento de este rubro respecto del período anterior (que pasa de 44 a 62). Según la información obtenida durante el proceso de registro de los datos un nuevo actor político-administrativo aparece interviniendo en ciertos conflictos: el SRI (Servicio de Rentas Internas) involucrado en la *conflictividad fiscal* o tributaria, al convertirse la cuestión de los impuestos en

una nueva forma de conflictividad. Otro actor de carácter ha sido el Consejo Nacional Electoral, que durante el último período tuvo un particular protagonismo en los conflictos planteados por los partidos y su inscripción en las próximas elecciones.

Por lo demás, en casi todas las otras formas de intervención estatal se registra una notable reducción en las actuaciones de los gobiernos provinciales, los Ministros y el Presidente. Sólo los gobiernos municipales han tenido un mayor número de intervenciones respecto del período anterior (de 8 a 18).

Intervención estatal

INTERVENCIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CORTE CONSTITUCIONAL	3	1.31%
GOBIERNO CANTONAL	1	0.44%
GOBIERNO PROVINCIAL	18	7.86%
JUDICIAL	22	9.61%
LEGISLATIVO	14	6.11%
MILITARES/POLICIA	10	4.37%
MINISTROS	39	17.03%
MUNICIPIO	18	7.86%
NO CORRESPONDE	62	27.07%
POLICIA	23	10.04%
PRESIDENTE	19	8.30%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Desenlace del conflicto

En cuanto a la gobernabilidad del conflicto, aunque se observan alteraciones entre los diferentes desenlaces respecto del anterior período, cabría

sostener que el panorama no parece haberse modificado: si bien es mucho mayor el número de conflictos aplazados en su resolución (de 32 a 56), se reduce en cambio el número de conflictos no resueltos (de 33 a 12).

Desenlace del conflicto

DESENLACE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
APLAZAMIENTO RESOLUCION	56	24.45%
NEGOCIACION	78	34.06%
NO RESOLUCION	12	5.24%
POSITIVO	44	19.21%
RECHAZO	30	13.10%
REPRESION	9	3.93%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Y si también son menores los conflictos que han tenido una solución positiva (de 57 a 44), por el contrario se

reduce el número de conflictos rechazados (de 48 a 30). Comparando las diferencias entre los dos períodos, el actual

y el último, entre ambos desenlaces tenemos que son 13 menos los conflictos con solución positiva y 18 menos los rechazados.

Número de conflictos por regiones

La distribución regional de los conflictos apenas se altera en relación al período anterior, y sus ligeras modificaciones en la Sierra y Costa corresponden a la sensible reducción de la conflictividad general.

Número de conflictos por regiones

REGION	FRECUENCIA	PORCENTAJE
COSTA	77	33.62%
SIERRA	133	58.08%
AMAZONIA	18	7.86%
INSULAR	1	0.44%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: -UI-CAAP-

El dato más significativo sigue siendo el notable aumento de los conflictos en la Amazonía, y que expresa una tenencia constante de las últimas décadas y en particular de los últimos años.

Número de conflictos por provincias

Mientras que Guayas (21.40%) y Pichincha (39.74%) concentran el 79.04% de toda la conflictividad nacional el resto de regiones de la Sierra supone el 17.90% y el resto de regiones de la Costa el 13.10%.

En el transcurso de la última década la distribución provincial de la conflicti-

vidad ha respondido a un doble proceso: por un lado, en contra de la fuerte concentración anterior de los conflictos en las provincias de Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil), un creciente número de conflictos tienen lugar cada vez con más frecuencia en otras provincias de ambas regiones; pero por otro lado, este efecto de mayor difusión de la conflictividad en las otras provincias tiende también a concentrarse en aquellas de mayor aglomeración urbana. Por ejemplo, mientras que el promedio de la conflictividad en Azuay era antes del 2010 de 6 conflictos por período (cuatro meses), durante los últimos tres años dicho promedio de conflictos es de 14.

Número de conflictos por provincia

PROVINCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AZUAY	8	3.49%
BOLIVAR	1	0.44%
CAÑAR	5	2.18%
CARCHI	2	0.87%
CHIMBORAZO	4	1.75%
COTOPAXI	3	1.31%
EL ORO	10	4.37%
ESMERALDAS	1	0.44%
GALAPAGOS	1	0.44%
GUAYAS	49	21.40%
IMBABURA	1	0.44%
LOJA	5	2.18%
LOS RIOS	2	0.87%
MANABI	10	4.37%
MORONA SANTIAGO	5	2.18%
NAPO	1	0.44%
ORELLANA	0	0.00%
PASTAZA	5	2.18%
PICHINCHA	91	39.74%
SANTA ELENA	1	0.44%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	5	2.18%
SUCUMBIOS	4	1.75%
TUNGURAHUA	12	5.24%
ZAMORA CHINCHIPE	3	1.31%
TOTAL	229	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Las otras provincias de la Sierra con mayores tasas de crecimiento de la conflictividad en los últimos años ha sido Tungurahua. El crecimiento de la conflictividad en Cotopaxi es muy variable, con picos de 9 y 6 conflictos por período a 3 ó 1; sus ciclos parecen estar muy vincu-

lados a los conflictos indígenas, muy concentrados en esta provincia durante las últimas dos décadas.

En la Costa, excluida Guayas, las tres provincias donde se ha consolidado un mayor crecimiento de los conflictos son Manabí, Esmeraldas y El Oro.

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos en la costa del Ecuador, 1980-2009*

Rafael Guerrero

Las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra.

Esto cambió después de 1980 con la existencia de otras demandas campesinas que no pudieron ser resueltas por las organizaciones. Sin embargo desde 1990 se observa la aparición de organizaciones de segundo grado articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las comunidades eclesiales de base cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de los pequeños productores rurales.

El presente trabajo es un ensayo de interpretación de algunos movimientos campesinos de la costa del Ecuador. No es una historia de estos movimientos sino que busca determinar las condiciones de su conformación, destacando la importancia de la construcción de un discurso y un liderazgo que articula las demandas campesinas. El liderazgo es una condición necesaria para el nacimiento y el desarrollo del movimiento campesino. Es la primacía de lo político en la construcción de un movimiento social. Este trabajo también hace notar la importancia de considerar la presencia de sectores rurales no campesinos – como la iglesia popular y los profesionales de clase media – en la formación y el desarrollo de

los movimientos campesinos de la costa del Ecuador.

Antecedentes

A partir de 1980 existe una tendencia a la descomposición de las organizaciones campesinas, tanto de primer como de segundo grado. Nos referimos especialmente a las cooperativas de producción agropecuaria y a las uniones cantonales. En los cantones Vinces y Baba se debilitan las organizaciones de base y posteriormente entra en crisis la UNOCAVB (Unión de Campesinos de Vinces y Baba), la organización más fuerte y representativa del campesinado de los dos cantones. En Babahoyo desaparecieron las organizaciones de campesi-

* Este artículo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación colaborativo entre el Instituto de Estudios Ecuatorianos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, con el soporte de Ayuda Popular Noruega, Intermon Oxfam y el Ministerio de Cultura del Ecuador.

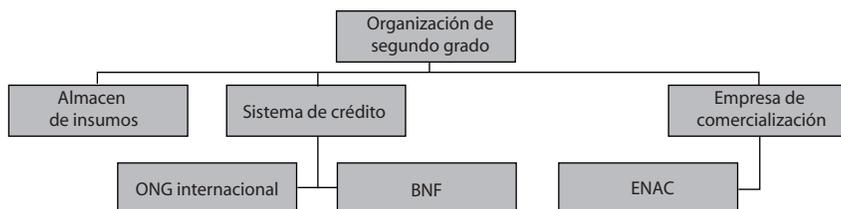
nos, tanto cooperativas como uniones cantonales de cooperativas.

Desde fines de la década de 1970, se produce una incorporación progresiva de los campesinos a los mercados, tanto de insumos agrícolas como de productos. Esta tendencia fue particularmente fuerte en las áreas arroceras de la provincia del Guayas, que cubren los cantones de Lomas de Sargentillo, Urbina Jado, Daule, Santa Lucía y Palestina, territorio de desarrollo de organizaciones como la ACAL, FTAL, ACAE y URCIMA. Una vez que entraron en crisis, la demanda de bienes y servicios que precisan las unidades campesinas familiares fue cubierta por comerciantes y prestamistas locales y ya no por las organizaciones de segundo grado. Este es un hecho significativo. Las organizaciones campesinas de segundo grado realizaron inversiones para crear empresas de comercialización de insumos y productos agrícolas con la intención de desplazar a los comerciantes locales como abastecedores de la demanda campesina tal es el caso, por ejemplo de la UNOCAVB. Para este efecto, tanto en Vinces como en Daule y en otras partes, se crearon empresas de insumos agrícolas, tiendas comunales de venta de bienes de consumo y empresas

agroindustriales de compra y venta de los productos campesinos. Hay que percatarse de la radicalidad del proyecto campesino: se trataba de descomponer la trama de relaciones de dominación que mantenía el capital comercial en los pueblos o centros poblados rurales, creando sistemas de crédito y comercialización alternativos.

En el siguiente diagrama se puede observar la forma de dirección de las empresas que crearon las organizaciones campesinas de segundo grado, OSG como UNOCAVB, URCIMA y ACAL. Las empresas estaban directamente controladas por la organización de segundo grado: los almacenes de insumos y de los sistemas de crédito eran directamente administrados por la organización; no tenían ninguna autonomía. En las empresas de comercialización ocurría lo mismo, salvo en las empresas más grandes que se formaron como sociedades anónimas. La mayoría de los accionistas de estas empresas eran personas jurídicas sin fines de lucro. Estas empresas, además, estaban conectadas a instituciones estatales, especialmente al Banco Nacional de Fomento y a ENAC, que suministraban crédito a tasas subsidiadas y compraban la producción agrícola a precios oficiales.

Diagrama 1
Estructura de la organización de segundo grado y sus empresas



Sin embargo, a partir de 1985 la mayoría de las empresas de las OSG entraron en crisis y desaparecieron. Esto no solamente ocurrió en Vinces, con la empresa de la UNOCAVB sino también en otras organizaciones y cantones. Las quiebras se produjeron en las tiendas comunales, en los almacenes de insumos, en las empresas de comercialización y en los sistemas de crédito agrícola. Nuestra tesis es que la organización campesina y el liderazgo campesino entraron en crisis porque no pudieron responder eficiente y competitivamente a las nuevas demandas de los campesinos de base. Los campesinos dejaron de identificarse con sus organizaciones y dirigentes una vez que éstos dejaron de ser los significantes de los objetos de sus demandas.

La crisis de las organizaciones campesinas en la década de 1980-90 tiene su explicación en la transformación del campesino sin tierra, beneficiarios de la redistribución de las grandes propiedades, en pequeño productor agrícola para el mercado. Las uniones campesinas que se formaron en la década de 1970 – una de las cuales fue la UNOCAVB – eran organizaciones para luchar por la tierra. El sujeto de esos movimientos era, pues, el campesino sin tierra. La cultura de la organización así como sus dispositivos internos habían sido construidos con el fin específico de obtener tierra para los campesinos. Una vez que se agotó el proceso de reforma agraria, lo que quedó en pie fue la nueva empresa campesina familiar, la cual generó nuevas demandas que debían ser cubiertas en el mercado. Este cambio no fue registrado plenamente en todas sus implicaciones y consecuencias por las organizaciones, sus dirigentes y las ONG que los apoyaban.

Las organizaciones campesinas tradicionales no estaban preparadas para responder a estas nuevas demandas que suponían la constitución y/o mejor participación en el mercado; lo que supondría constituir empresas competitivas sobre la base de las reglas de juego mercantil. Las organizaciones campesinas tradicionales no eran agentes del mercado, no conocían las reglas de juego del mercado capitalista sino que operaban con otras reglas de juego y no pudieron adaptarse a las exigencias que plantearon el mercado y la competencia. En las organizaciones campesinas no existía la cultura institucional necesaria para competir en el mercado. Esto significa que si bien las organizaciones fundaron empresas de comercialización de insumos y productos, no supieron administrarlas eficientemente. Hubo otros sujetos mejor preparados para responder a esas demandas: los comerciantes y los prestamistas locales. Las redes informales de comerciantes y prestamistas no pudieron ser erradicadas a pesar de que las organizaciones campesinas contemplaban en sus agendas la formación de empresas de comercialización y programas de crédito para cubrir estas demandas y desplazar al capital comercial y usurario local.

Los movimientos campesinos en el último período

A principios de la década de 1990 los movimientos campesinos de cierta envergadura habían desaparecido en las provincias de Guayas y Los Ríos. En Los Ríos funcionaba, desde mediados de la década, la Unión de Organizaciones Campesinas de Quevedo (UOCQ). En otros cantones de la provincia hay aso-

ciaciones de medianos productores de maíz, pero no movimientos campesinos propiamente dichos. En la provincia del Guayas ocurría una cosa parecida: en la Península de Santa Elena existía la Federación de Comunas de Santa Elena.

Además, con el fin de la reforma agraria y durante la década de 1980 se produjo un repliegue hacia las ciudades de la intelectualidad que en las décadas anteriores apoyó a las organizaciones campesinas. Es posible decir que durante las décadas de 1980 y 1990 la izquierda abandonó el campo costeño. Una de las características del discurso de la izquierda fue su énfasis en la redistribución de la propiedad de la tierra; y una vez que esto ya no fue posible, abandonó el trabajo político con el campesinado.

Pero este flujo de los intelectuales hacia las ciudades es también producto de la crisis del Estado intervencionista en el campo: se redujo la presencia de la burocracia, del Estado central y de organizaciones regionales de desarrollo como CEDEGE. Así, pues, desaparecieron del sector rural algunos agentes que, si bien no eran parte del campesinado y de sus organizaciones, habían sido apoyos para el desarrollo de los movimientos campesinos.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo de un movimiento campesino de cierta envergadura, es la existencia de una organización y de líderes que interpielen a los campesinos a partir de un discurso que recoja sus demandas y valores. Sin esta organización, los grupos campesinos pueden desarrollar acciones pero generalmente no superan la escala del recinto en el cual se asienta el grupo. Este es el caso de muchas asociaciones campesinas de primer

grado que generalmente negocian servicios con los municipios y el consejo provincial respectivos. En realidad, en el campo hay una gran actividad de asociaciones y comités de recinto que regularmente demandan escuelas, caminos, profesores, centros de salud, apoyo para clubs deportivos, guarderías infantiles, etcétera. Pero estos grupos particularistas no logran articularse entre sí en la universalidad propia de un movimiento campesino organizado.

En el campo costeño hay al menos dos hechos que, desde 1990, obstaculizaron la formación de movimientos campesinos de cierta envergadura. Primero, la falta de una organización social y/o política en el sector rural que haya buscado deliberadamente la organización de los campesinos. Segundo, la dispersión de los campesinos.

Sin embargo, a lo largo de la década de 1990, mientras se apagaban las organizaciones campesinas y los comerciantes, plantadores y alcaldes retomaban el control del campesinado, otra organización construía nuevos movimientos campesinos en algunos cantones de las dos provincias. Esta organización es la Iglesia Católica, o mejor dicho, los sacerdotes de algunas parroquias rurales de las dos provincias. Las organizaciones campesinas apoyadas por este sector de la Iglesia Católica no son las únicas que existen actualmente en las dos provincias. Otras organizaciones son la Junta de regantes del Proyecto de Riego Babahoyo y la Asociación Tierra Fértil, del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Pero es discutible que estas dos organizaciones puedan ser consideradas "movimientos campesinos". Un movimiento campesino es un conjunto de pequeños produc-

tores agropecuarios que se organizan para luchar por un proyecto que antagoniza con el sistema político y social vigente. Esto significa que un movimiento de campesinos es un movimiento social *marginal* al sistema político y social y tienen un componente ideológico *anti sistema*. Esto no ocurre con estas dos organizaciones. La Junta de Riego del Proyecto Babahoyo es una organización de pequeños y medianos productores que se limita a administrar el agua sin que haya otra intervención de la Junta. Además, la Junta actúa dentro de los marcos institucionales del Estado sin tener un proyecto de transformación social del campo. Tierra Fértil, por su parte, es una asociación de pequeños productores que tiende a funcionar como una empresa de comercialización de la producción de maíz de sus afiliados y no busca convertirse en una agrupación de más asociaciones de base.

Este no es el único caso que conocemos de una organización campesina que tiende a funcionar como empresa. La Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCASE) agrupa a 2.020 pequeños productores asociados en 16 asociaciones en 16 cantones, pero no se puede decir que sea un movimiento campesino cacaotero. Es una empresa agroindustrial de exportación de la producción de cacao de los pequeños productores. Busca desarrollar la producción y la exportación de cacao pero no apunta a la transformación de las estructuras sociales y políticas del sector rural y del país. Por supuesto, es-

tas asociaciones pueden, en cierto contexto, apoyar el desarrollo de un movimiento campesino, cual no es el caso, al momento, de estas asociaciones.

Movimiento campesino e iglesia popular

Las organizaciones campesinas vinculadas a la Pastoral Rural de la Iglesia Católica están asentadas en los cantones Pedro Carbo y Daule de la provincia del Guayas, y en Vinces, Baba y Palenque, en la provincia de Los Ríos. Se trata de cantones campesinos, en los cuales la pequeña propiedad es muy importante. En la provincia del Guayas, el 71% de las propiedades agrícolas se encuentran en el rango de menos de 1 a 10 has., mientras en Los Ríos llega al 64%.¹ Es un campesinado fuertemente integrado al mercado, dedicado sobre todo a la producción de arroz y maíz, principalmente en Pedro Carbo, Daule y Palenque. En Baba producen, además, cacao. En Vinces los campesinos combinan las tres producciones.

Los cantones presentan altos índices relativos de pobreza. Pedro Carbo es el cantón más pobre del Guayas, con 90,6% de pobreza por NBI. En Palenque y Baba, en Los Ríos, la pobreza atenaza al 92,1% y al 91,5% de la población. Los índices de pobreza en Daule son más bajos que en los otros cantones, pero en la parroquia Laurel es posible que sean superiores al promedio del cantón debido a que la agricultura campesina no tiene los sistemas de riego con los que cuentan otras parroquias.

1 INEC, III Censo Nacional Agropecuario, en www.inec.gov.ec

En Pedro Carbo, la Federación de Organizaciones Campesinas Comunitarias Agrícolas Mons. E. Leuner (FOCCAHL) nació en 1998. Más o menos por la misma fecha emerge PROLICA, en la parroquia Laurel, cantón Daule, donde el trabajo de organización campesina lo inició el P. Lotar, párroco, quien lo dirige hasta ahora. En Los Ríos, las organizaciones "Pueblo Solidario" se constituyen formalmente en 2005 con vida jurídica propia, sin embargo, sus orígenes se remontan años atrás.

Es importante destacar desde el primer momento el clarísimo carácter **eclesial** de la organización campesina desde sus orígenes. Refiriéndose a la formación de *Pueblo Solidario* en la provincia de Los Ríos, Jesús Narváez dice lo siguiente:

Pueblo Solidario es una organización que pertenece de alguna u otra manera -aunque tiene vida jurídica propia reconocida por el Ministerio de Bienestar Social-; sin embargo, son organizaciones que pertenecen a la Iglesia de Los Ríos. Surge precisamente de un proceso muy largo de trabajo pastoral en la Diócesis con los sectores más necesitados del campo. El primer indicio de trabajo tiene que ver con la formación de comunidades eclesiales campesinas, después comunidades eclesiales de base.²

Lo mismo dice Izáscum, una seglar que trabaja en la iglesia de Baba:

En Baba el trabajo fundamental de la parroquia han sido las comunidades eclesiales de base. Ya desde hace 40-50

años. Desde que el grupo Misionero Vasco llegó al Ecuador hubo una corriente fuerte de trabajar a favor de los pobres, que se le llamaba la iglesia de los pobres en ese momento.³

Lo mismo ocurre en FOCCAHL, ubicada en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. Según Fredy Magallán, actual presidente, la organización lleva el nombre de Monseñor Leuner porque él es quien inició el trabajo de organización de los campesinos. En el caso de PROLICA, en la entrevista, el padre Lotar afirma que fue él quien, al principio sin experiencia, empezó a organizar a los agricultores de la parroquia. Igual cosa dicen tanto el dirigente de Pueblo Solidario de Baba, como Benjamín Respaldizca, el sacerdote de Baba, quien en la entrevista señala que es la iglesia de Baba la que decide empezar a organizar a los campesinos para combatir la pobreza.⁴ El Presidente de la Asociación señala en la entrevista el origen y el carácter claramente eclesial de Pueblo Solidario. Entonces, lo primero que se puede afirmar con seguridad, es que la organización campesina nace del liderazgo de los sacerdotes y la Iglesia en los cantones y parroquias en los cuales realizan su trabajo eclesial.

Hay, sin embargo, otro aspecto que debe ser destacado para que quede clara la orientación ideológica del trabajo de los sacerdotes y la iglesia. Como señala Izáscum en el texto citado, en la provincia de Los Ríos el trabajo con las comunidades eclesiales de base empieza hace años atrás con la llegada de los misioneros vas-

2 Entrevista a Jesús Narváez Quinto.

3 Entrevista a Izáscum.

4 Entrevista a Benjamín Respaldizca y al Presidente de la asociación Pueblo Solidario de Palenque.

cos. Entonces, no es necesariamente **toda** la Iglesia Católica la que impulsa la organización de los campesinos sino solo los sacerdotes que se identifican con **la iglesia de los pobres**. Es decir que estamos ante una **variante** particular del discurso católico. Esta variante es la Teología de la Liberación. Jesús Narváez lo señala muy claramente: hay una clara diferencia entre los sacerdotes vascos y otros sacerdotes ecuatorianos. Los primeros están identificados con la Teología de la Liberación y la Iglesia de los Pobres. Es este discurso el que produce las identificaciones que generan la organización campesina no solo en Los Ríos, sino también en Pedro Carbo y Daule.

Pero sería equivocado y simplista entender que la Teología de la Liberación y la Pastoral Social producen un sujeto campesino, o que los campesinos son interpelados por dicho discurso y constituidos así en sujeto de la organización eclesial y campesina. En realidad, la Teología de la Liberación interpela en primer lugar a los sacerdotes y seglares de la Iglesia que se identifican con esa teología y cumplen el papel de agentes en el desarrollo de la organización. Por lo tanto, la cuestión del sujeto de las organizaciones campesinas ligadas a la Iglesia Católica es más compleja en varios sentidos.

En primer lugar, porque dicho discurso no interpela, en primera instancia, a sujetos no religiosos sino ante todo y en primer lugar al católico. Por lo tanto, la Teología de la Liberación interpela, en primer lugar, al sacerdote, como parte del pueblo pobre de Dios. El primero que *Cree*, el primero que se siente *llamado*, es el sacerdote. No hay un sujeto pre-constituido que elaboraría el discurso teológico desde fuera para interpelar a los

demás. El discurso religioso interpela-constituye como sujetos a *todos*, *sacerdotes* y *seglares*. Bien entendida, la Teología de la Liberación *produce* la Iglesia de los Pobres. Los sacerdotes son agentes de este proceso pero el verdadero sujeto es la Iglesia de los Pobres. Aclaremos bien: no es la Iglesia Católica, sino una variante de ésta, la iglesia de los Pobres; la Iglesia Católica *como Iglesia de los Pobres*.

Los sacerdotes y seglares que organizan el movimiento campesino en los cantones mencionados entienden que están haciendo un trabajo eclesial dirigido a desarrollar la Iglesia de los pobres. No hay, por lo tanto, una organización campesina no eclesial, diferente y separada de la misma. Generalmente esto no se tiene en cuenta cuando se hace referencia a las organizaciones campesinas ligadas a la Iglesia Católica porque se toma la organización campesina como un sistema social aparte. Pero no se pueden separar artificialmente los ritos religiosos del trabajo de organización campesina sino que éste debe ser entendido como pastoral social, es decir, como una parte del trabajo eclesial. La pastoral social es una metonimia de la ritualidad de la iglesia popular. Así es entendido por sacerdotes y campesinos.

Es importante hacer notar que el discurso teológico interpela a todos los católicos para hacer una opción por los pobres. Por lo tanto, el discurso construye una oposición entre pobres y ricos. Esta oposición es una de las claves de la Teología de la Liberación porque alude al carácter marginal de este discurso y del sujeto que interpela y constituye. Esto está claro en el discurso del P. Lotar: “yo he visto – dice- las injusticias en las que vive el campesino; no puede avan-

zar [...]”.⁵ Una cosa parecida dice el sacerdote de Baba que argumenta que fueron los altos índices de pobreza de Palenque lo que lo motivó a empezar el trabajo de organización campesina. La denuncia de la injusticia debe ser entendida como parte del discurso teológico que ve el Reino de Dios como un reino de igualdad.⁶ Es en referencia a esta igualdad que las desigualdades y las exclusiones sociales reales son una injusticia. Los pobres son los excluidos.

Entonces, el discurso teológico interpela al católico llamándolo a hacer una opción por los pobres, por lo que el sujeto interpelado son todos aquellos que se sienten llamados a escoger dicha opción. Esta interpelación tiene consecuencias importantes para comprender cuál es el sujeto de esta iglesia popular. Ese sujeto no son solo los campesinos, sino un abanico más amplio de sectores sociales que son importantes para comprender el desarrollo de la organización campesina y popular.

Hay que hacer notar que el discurso teológico antagoniza la relación pobres/ricos. Esto significa que el sujeto interpelado – el pobre, y aquellos que eligen luchar junto a él – es constituido como sujeto del movimiento campesino por oposición al rico. En este sentido, la pobreza no es solamente un hecho objetivo, sino que es una relación social antagónica, construida discursivamente. Los pobres son también los sectores urbanos de escasos ingresos asentados en las cabeceras parroquiales y cantonales en las cuales se encuentra la iglesia local. En todos los ca-

sos analizados, el trabajo de organización de la iglesia incluye los sectores populares de los pueblos y ciudades rurales en las cuales se asienta la iglesia. Narváez señala en su entrevista la existencia de un trabajo de organización de comunidades eclesiales de base en los centros poblados urbanos como Baba o la ciudad de Babahoyo. Izáscum hace referencia al trabajo de la Iglesia de Baba en las escuelas de esta ciudad. En los casos de Laurel y de Pedro Carbo, es evidente la actividad de apoyo de las Iglesias respectivas a la población pobre de estos pequeños centros poblados que tienen un marcado carácter rural.

El sujeto que este discurso interpela y organiza incluye también sectores sociales medios, profesionales que no se encuentran necesariamente asentados en el área rural en el cual se desarrolla el trabajo de organización campesina y popular pero que están identificados con el mismo y lo apoyan. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que es la identificación con el discurso de la iglesia de los pobres lo que logra el respaldo de organizaciones internacionales y de sectores que se encuentran fuera del Ecuador. En PRO-LICA, el dirigente de la organización, señala el respaldo que tiene su organización en instituciones alemanas y suizas. El párroco de Laurel, el padre Lotar, también hace referencia a los recursos económicos que en Europa pudo obtener para apoyar el trabajo de organización campesina. En FOCCAHL, la organización es posible – según Mons. E. Leuner – porque consigue el respaldo de organizaciones como

5 Entrevista al P. Lotar.

6 Entrevista a Izáscum.

MCCH, el FEPP y otras que empiezan a realizar actividades de apoyo a los sectores campesinos y populares de las parroquias y cantones en los cuales opera la Iglesia. En estas organizaciones trabajan profesionales de clase media.

Nuestra observación apunta, entonces, a hacer notar la *complejidad* de los sectores interpelados y constituidos como sujeto de la iglesia popular. El discurso construye articulaciones *entre* diferentes sectores sociales, desde los campesinos hasta sectores profesionales medios, ubicados fuera del Ecuador. Se trata de una *doble articulación*: por un lado, el discurso teológico articula a *cada uno* de estos sectores a la iglesia; por otro lado, el discurso construye articulaciones *entre* los diferentes sectores interpelados. El mejor ejemplo son las ONG y los donantes europeos que apoyan el trabajo del P. Lotar. Pero esto también es válido para el trabajo de organización de los sacerdotes vascos en Los Ríos. En consecuencia, el

movimiento del que estamos hablando no está compuesto solamente de campesinos; en realidad, la organización campesina es uno de los sectores que componen este sujeto *popular-eclesial*. Este discurso es el que permite hacer el trabajo de organización popular y campesina.

En el cuadro N° 1 se puede observar el trabajo desarrollado por las diferentes iglesias en los cantones que hemos mencionado. En todos los casos se trata de organizaciones campesinas en el sentido común y corriente en el cual se suele usar esta expresión, es decir, asociaciones de pequeños productores agrícolas pobres que practican una agricultura familiar. Sus organizaciones tienen vida jurídica propia y se encuentran reconocidas como tales por el Estado. Las fechas de constitución y reconocimiento legal varían y, en el caso de las Asociaciones Pueblo Solidario, son relativamente recientes (3-5 años aproximadamente). FOCCAHL y PROLICA se fundaron a fines de los años 1990.

Cuadro N° 1
El trabajo eclesial de organización campesina

Organización	Cantón	Tipo de organización de Base	N° de Recintos en el Cantón	N° de comunidades de base	%	Número de miembros	Población Rural Involucrada
Prolica	Daule	Comunidad Eclesial de Base	36*	9	25	115	598
Focal	Pedro Carbo	Comunidad Eclesial de Base	110	54	49	1620	8424
Pueblo Solidario Palenque	Palenque	Comunidad Eclesial de Base y Asociaciones	180	50	28	800	4160
Pueblo Solidario Baba	Baba	Comunidad Eclesial de Base	200	40	20	1200	6240

*La información se refiere a la parroquia Laurel

Fuente: trabajo de campo

Pero más allá de la estructura jurídica de la asociación de segundo grado, se encuentra el verdadero soporte de la organización: la comunidad eclesial de base. Como se puede observar en el cuadro, en todos los casos, las organizaciones de base son comunidades eclesiales. Es importante distinguir la comunidad eclesial de las otras formas de asociación que existen en los recintos⁷ en las cuales se encuentran asentadas. Aunque la parroquia eclesial no coincide necesariamente con la parroquia como unidad político-administrativa del Estado ecuatoriano, la Iglesia organiza su trabajo eclesial a base de la estructura de recintos de la parroquia. El recinto existe, como unidad territorial, por el reconocimiento recíproco de sus habitantes como miembros del mismo. El recinto es el espacio en el cual se asientan las organizaciones sociales de primer grado; entre otras, la comunidad eclesial.

En el cuadro aparece el número de comunidades eclesiales de base formadas por la iglesia en cada cantón, y el porcentaje de comunidades eclesiales que hay en cada cantón con relación al número de recintos. Se puede afirmar que cerca del 20% de los recintos cuentan con comunidades eclesiales de base, a excepción de Pedro Carbo, donde el trabajo es mucho más amplio. En el caso de PROLICA, en Laurel, el número de comunidades es considerablemente más bajo en comparación con las demás organizaciones. Es decir que el trabajo de la iglesia en lo que se refiere a la formación de comunidades eclesiales de base no cubre todo el territorio del cantón

aunque seguramente hay una parroquia en la cual el trabajo es más fuerte que en otras. Nos interesa hacer notar el tipo de lazo social que implica la comunidad eclesial de base: es un lazo religioso y afectivo con el líder, el sacerdote y la iglesia. La identificación con el líder genera identificaciones laterales de los miembros de la comunidad eclesial entre sí, como católicos. El mejor ejemplo de esta ligazón con el líder es FOCCAHL.

El nombre de esta organización es: Federación de Organizaciones Campesinas Comunitarias Agrícolas Mons. H. Leuner, FOCCAHL. Las letras /HL/, en las siglas de la organización, hacen referencia al líder. Como dice Fredy Magallán, la organización "lleva el nombre del Monseñor porque fue el gestor de comenzar en las comunidades para hacer las organizaciones [...]".⁸ Dicho de otra manera, el nombre del líder es el significantes al cual se identifican las comunidades eclesiales de base y la organización campesina. La identidad de los campesinos organizados en FOCCAHL es inseparable de ese liderazgo. La letra inicial del apellido del Párrroco funciona en las siglas de la organización como *rasgo diferencial identificatorio* de la misma. Lo que importa retener de esto es que dichas comunidades no se constituyen *sin ese liderazgo*. Esta es la condición de existencia de aquellas. Esto ha sido señalado por algunos de los entrevistados. *La confianza en el líder* aparece como una condición necesaria indispensable para el desarrollo de la organización. Es lo que señala el Presidente de Pueblo Solidario en Palenque:

7 El recinto es la unidad territorial mínima de la parroquia rural en la costa.

8 Entrevista a Fredy Magallán.

“Sin el apoyo de la iglesia habría sido imposible [hacer surgir la organización campesina], imposible porque muchos de nosotros ya no tenemos fe y no nos interesa escuchar nada, vivimos en muchos aspectos desamparados, en este caso por parte de nuestros gobernantes... Pero ahora que la iglesia tomó cartas en el asunto fue algo que como que fue llenando ese vacío.”⁹

Lo dicho por este dirigente nos parece muy significativo. Hace referencia a una falta de liderazgo político que va acompañada de un escepticismo respecto de las posibilidades de organizarse. La crisis de liderazgo político produce atomización social. La desconfianza política se riega al cuerpo social, lo cual obstaculiza cualquier intento aislado de organización cuando proviene de los mismos campesinos o de sectores relativamente débiles, sin autoridad entre la población y sin recursos. La crisis de liderazgo es vivida como un vacío. La iglesia se coloca en ese vacío. Y esto es así, porque el líder religioso es, ante todo, el vehículo de acceso a los objetos de las demandas de los miembros de la comunidad. Esos objetos son, en primer lugar, objetos *religiosos*. Estos objetos son los textos y enseñanza del evangelio y la realización de todos los ritos que en la Iglesia Católica se conocen como sacramentos. Cada una de las comunidades eclesiales de base cuenta con un catequista y con la visita periódica del sacerdote o de miembros del equipo de la iglesia. En consecuencia, la comunidad eclesial de base – urbana o rural –

desarrolla regularmente una actividad de carácter religioso.

El liderazgo del sacerdote y de la iglesia debe ser entendido, ante todo, en relación a esas demandas de objetos religiosos por parte de los sectores populares y campesinos. Los miembros de base de las comunidades establecen con el líder y entre sí lazos afectivos en torno a dichos objetos religiosos. Más aún, en rigor el líder religioso es en sí mismo un objeto religioso. Es por esto que no se puede concebir o interpretar el liderazgo de los sacerdotes en las parroquias y cantones, como algo externo a las organizaciones campesinas que ellos han ayudado a desarrollar, ni se puede concebir la organización campesina como algo externo a la iglesia popular. Se trata de un solo sujeto. El líder religioso es el punto nodal que unifica a todos los sectores que se identifican con la iglesia popular del cantón o la parroquia, vivan o no en la misma, se encuentren o no en el país, sean campesinos o habitantes del centro poblado de la parroquia o la cabecera cantonal.

De acuerdo con Jesús Narváez, las comunidades eclesiales de base son grupos relativamente pequeños. Según otros entrevistados, pueden llegar a tener de 20 a 25 miembros. Este número no es poco significativo. Es el mismo número de socios promedio que suele tener una asociación de pequeños productores agrícolas de primer grado en las provincias de la costa, y en particular, en Los Ríos y Guayas. Las cifras que aparecen en el cuadro sobre número de miembros

9 Entrevista a cuatro miembros de Pueblo Solidario de Palenque.

y población rural involucrada en las organizaciones es una proyección realizada por nosotros a partir de la información que nos suministraron los informantes sobre el número promedio de miembros de las comunidades eclesiales de base.

Por otro lado, las organizaciones no están formadas exclusivamente por comunidades eclesiales de base. En el caso de la asociación Pueblo Solidario de Palenque, además de las comunidades eclesiales existen asociaciones de productores de primer grado, afiliadas a la organización y asentadas en los mismos recintos. Pero es importante diferenciar las asociaciones de base de las comunidades eclesiales porque los vínculos sociales no son necesariamente los mismos. Estamos utilizando la categoría de identificación para dar cuenta de un tipo de lazo social caracterizado por ser un vínculo afectivo formado por una masa alrededor de un líder y entre los miembros de la masa.¹⁰ Este vínculo puede existir o no en una asociación de productores, esto no se ha investigado. La información que recogimos muestra indicios de que existe identificación entre las comunidades cristianas de base y los líderes religiosos de la iglesia popular de la parroquia o el cantón. No excluimos la posibilidad de que esto también exista en las asociaciones de productores agrícolas.

En todo caso, es importante advertir que, según los dirigentes de la Asociación Pueblo Solidario de Palenque, las

comunidades eclesiales de base muchas veces forman parte de las asociaciones de productores que están afiliadas a la organización. Esto implica que en la asociación se pueden distinguir dos tipos de relaciones y sujetos sociales, los que forman parte de la comunidad eclesial y otros que no forman parte. Esto tiene importancia para comprender el liderazgo en la asociación, su cohesión y las capacidades de dirección de la organización de base y de la organización de segundo grado, como veremos.

Aunque los ritos religiosos forman parte de la iglesia popular, la pastoral social marca la diferencia con otras lecturas del catolicismo y del cristianismo. Lo que caracteriza a la teología de la liberación y a la pastoral social es *la articulación de las demandas campesinas y populares en el discurso religioso* y la denuncia de las desigualdades y las injusticias sociales. La comunidad eclesial de base es el grupo, que se reúne semanalmente, es el espacio para el discurso evangélico, entendido como una lectura crítica de la realidad social a partir de la Biblia. Según Izáscum, una de las actividades de la comunidad es la reflexión sobre las carencias y limitaciones de la comunidad en salud, educación y otros. Las actividades de la comunidad eclesial para cubrir las demandas sociales del recinto, se alimentan de esta reflexión. Las actividades religiosas están íntimamente articuladas a esta reflexión crítica sobre

10 El concepto de liderazgo y de masa que estamos usando pertenece a Freud, quien califica de masa precisamente este tipo de vínculo social afectivo. Cuando este vínculo existe, habla de masa. Por eso habla también de *masa de a dos*, cuando entre dos individuos se forma este tipo de vínculo social. Ver Sigmund Freud, "Psicología de las masas y análisis del Yo", en *Obras Completas*, Amorrortu, Buenos Aires, 1976.

las condiciones sociales de vida de los campesinos. La consecuencia es que el discurso religioso articula las demandas de los campesinos, es un discurso campesino y popular. Las actividades de la

iglesia popular y la organización campesina derivan de ese discurso. En el cuadro N° 2 se observa el conjunto de los servicios provistos por la iglesia y las organizaciones campesinas.

Cuadro N° 2
Servicios a las organizaciones y socios de base

Organización	Iglesia y Servicios Religiosos	Salud	Educación formal	Formación de líderes	Riego y drenaje
Prolica	Todos los Sacramentos	Clínica y maternidad	Educación Jóvenes	Catequistas, comercializadores, crédito.	Fondo rotativo para riego y drenaje
Focal	Todos los Sacramentos	Clínica	Trabajo con jóvenes, en educación		Pozos, proyecto de riego
Pueblo Solidario Palenque	Todos los Sacramentos	Clínica		Catequistas, crédito, comercializa dores	?
Pueblo Solidario Baba	Todos los Sacramentos	Clínica	Apoyo a escuelas	Catequistas, comercializadores, crédito.	?

Fuente: Investigación de campo

Organización	Crédito para producción	Asistencia técnica	Comercialización	Industrias	Insumos agrícolas
Prolica	Fondo rotativo	Universidad Católica	Molino	Fábrica de muebles	
Focal	Cooperativa Codesarrollo, Salitre	Tienen asistencia técnica	Comercialización maíz	Exportación Artesanías	
Pueblo Solidario Palenque	Cooperativa de ahorro y crédito propia	Promotores agrícolas	Planta procesadora de maíz y arroz	?	Venta de Insumos agrícolas
Pueblo Solidario Baba	Cooperativa de ahorro y crédito propia	Promotores agrícolas	Planta procesadora de maíz y arroz	?	Venta de Insumos agrícolas

Fuente: Investigación de campo

La información del cuadro N° 2 permite comprender la forma en la que las actividades señaladas contribuyen a la constitución de un liderazgo y de un tipo de organización campesina que tiene

una fuerte connotación religiosa. Empecemos refiriéndonos a la formación de líderes. Esas actividades están fuertemente vinculadas a la estructura de las comunidades eclesiales de base. Cada comu-

nidad eclesial cuenta con un catequista, un promotor en comercialización de productos agrícolas y un encargado o promotor de programas de ahorro y crédito. Además, las organizaciones cuentan con técnicos que proporcionan asistencia a la producción agrícola de los socios de base de la organización. Estos técnicos son campesinos formados como promotores agrícolas. Esto significa que cada comunidad eclesial de base cuenta al menos con 4 líderes o promotores formados. Basta multiplicar este número por cada comunidad eclesial de cada organización campesina para advertir la importancia del trabajo de formación de líderes. En la Asociación Pueblo Solidario de Baba, hay cerca de 160 campesinos y campesinas que han recibido capacitación y entrenamiento para apoyar las actividades de la comunidad eclesial y de la asociación campesina de primer grado. Una suposición verosímil es que existen aproximadamente 612 campesinos y campesinas que actúan como promotores de alguna de las actividades señaladas en las comunidades eclesiales, en las asociaciones de primer grado y en los recintos. En la base de las asociaciones bullen dirigentes realizando una amplia gama de actividades que animan la vida de la organización.

Como señala alguno de los entrevistados, los catequistas y demás promotores de la organización son la condición necesaria para que la iglesia pueda realizar en cada uno de los recintos, incluso actividades propiamente religiosas. Si la iglesia no contara con catequistas en

cada comunidad, no podría extender las actividades religiosas en el territorio. En consecuencia, la formación de catequistas y promotores en las comunidades y recintos es parte del proceso de producción de un sistema que liga cada recinto con la iglesia asentada en la cabecera parroquial o cantonal o en los recintos más alejados. Recordemos que hay cantones que tienen más de 200 recintos entre los cuales la comunicación es mala y en donde la dispersión de los campesinos es significativa. Esto es algo señalado por Benjamín Respaldizca, el sacerdote de Baba, quien trabaja en un cantón que se caracteriza por un fuerte aislamiento relativo de la población campesina, especialmente en la época lluviosa, cuando los caminos se vuelven intransitables y donde el sistema de transporte de pasajeros es particularmente precario y de mala calidad:

“Aquí en la población... eminentemente campesina, Palenque es un cantón agrario, entonces vimos que el campesino es una persona dispersa, no tiene núcleos de población, vive cada uno en su finca y los índices de pobreza son altos, desnutrición y algunas lacras como alcoholismo y hubo también mucha violencia, entonces vimos que la única manera de ir resolviendo el tema de la pobreza era organizar a la gente.”¹¹

El sacerdote tiene muy claro el tipo de relaciones sociales existentes entre los campesinos: la dispersión y la falta de lo que él llama núcleos de población. En estas condiciones, son las comunidades

11 Entrevista a Benjamín Respaldizca.

eclesiales las que pueden conectar a las familias y los recintos entre sí, a través de la organización campesina y de la Iglesia.

Una vez establecido el sistema que conecta la dirección de la iglesia y de la organización campesina con su base social, podemos analizar los servicios que las dos primeras prestan a las organizaciones, sean estas comunidades eclesiales o asociaciones de productores. Aunque quizás resulte obvio, vale la pena decir que cada movimiento y organización cuenta en la cabecera cantonal o parroquial con una Iglesia desde la cual se prestan servicios religiosos a las comunidades.

Una de las actividades que permite cubrir una demanda social particularmente importante en el sector rural, es el servicio de salud. Hay una articulación muy fuerte entre la iglesia y el servicio de salud. Todas las iglesias y organizaciones campesinas mencionadas cuentan con una clínica ubicada en la cabecera cantonal o parroquial. Se trata, en algunos casos, de la organización de salud más importante de la parroquia o el cantón. En el caso de la parroquia Laurel, el P. Lotar señala que la clínica cuenta también con una sala de partos que presta atención las 24 horas del día y una ambulancia. La clínica de Laurel presta servicios a las parturientas que no pueden atenderse adecuadamente en la clínica del Estado en Daule. La ambulancia permite derivar enfermos hacia Guayaquil cuando es necesario. La clínica de Laurel está conectada con la Clínica Kennedy de Guayaquil, cuyo director ha realizado operaciones de cirugía en Laurel y le ha vendido equipos médicos a la clínica.

Las clínicas tienen una botica. Además del servicio que presta, muchas comunidades eclesiales rurales cuentan con un promotor de salud y con un botiquín. El servicio de salud rural de la organización es superior al servicio del Estado que no cuenta con botiquines rurales ni promotores de salud. La Iglesia tiene una amplia experiencia en organización de sistemas de salud. En Vinces existe un dispensario médico atendido por la Iglesia desde hace aproximadamente 35 años. En el servicio de salud de la iglesia en los diferentes cantones y organizaciones, la participación de las mujeres como administradoras y promotoras del sistema es importante. El servicio de salud no atiende solamente población rural sino también a la población asentada en la cabecera cantonal y parroquial, donde está concentrada la actividad comercial. En consecuencia, también los sectores urbanos pueden identificarse con la labor de la clínica y de la Iglesia.

El otro campo de trabajo es la educación. En el caso de la Iglesia de Baba, Izáscum señala que respaldan la educación en las escuelas que lo solicitan. En las escuelas particulares de Baba la Iglesia mantiene promotores de educación para mejorar la calidad y además apoyan el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas. No intervienen en las escuelas fiscales. En Laurel, la Iglesia mantiene un colegio para formación de jóvenes y una cosa parecida hace la Iglesia en Pedro Carbo. Monseñor Leuner señala en la entrevista que el problema de fondo en Pedro Carbo es la mala calidad de la educación. Con la educación se busca capacitar mano de obra joven pa-

ra crear posibilidades de empleo y trabajo. Es decir que hay actividades dirigidas a cubrir una importante demanda de empleo entre los jóvenes, considerados un sector particular cuyas demandas deben ser atendidas.

Las demás actividades que figuran en el cuadro están directamente vinculadas con la economía de los campesinos. Hay que hacer notar que la Iglesia y las organizaciones campesinas están trabajando en un campo que tiene mucha importancia: la construcción de infraestructura de riego y drenaje en las fincas campesinas. Es importante detenerse en este tema por la importancia que reviste para el desarrollo de una economía campesina de bajo riesgo relativo el que sea competitiva. Lo que caracteriza a algunos de los cantones en los cuales se encuentran las iglesias y organizaciones campesinas es la falta de sistemas de riego y drenaje. Los altos índices de pobreza están íntimamente asociados a la falta de estos sistemas lo que se traduce en inundaciones y sequías regulares, pérdida de cultivos, baja productividad, desperdicio de la tierra y la mano de obra familiar en las temporadas secas, dependencia extrema de la época lluviosa y una fuerte inelasticidad de la oferta de productos campesinos.

Los campesinos de PROLICA son productores de arroz. En PROLICA se cuenta con un fondo rotativo prestado a las organizaciones de base para la construcción de pozos y para la nivelación de suelos. El fondo rotativo es devuelto a la organización pagando un interés bajo por el uso del capital durante un período de tiempo determinado. Además, la organización cuenta con un tractor, con el cual se pueden realizar las obras nece-

sarias para nivelar suelos y construir muros y seguramente también pequeños sistemas de control y drenaje de agua. El caso de FOCCAHL es más complejo e importante puesto que también apoya la construcción de pozos y sistemas de riego a nivel de finca en Pedro Carbo. En este cantón, la falta de riego y sistemas de drenaje es particularmente severa y la suerte del cantón está ligada a la posibilidad de contar con obras de infraestructura de riego. La Iglesia y FOCCAHL elaboraron un proyecto de riego que fue presentado a las autoridades de la provincia y de CEDEGE para su ejecución. Como veremos más adelante, en realidad el proyecto de riego y las actividades de FOCCAHL forman parte de un proyecto de desarrollo local que hasta ahora no encuentra respaldo en CEDEGE ni en el Estado central.

Lo que nos interesa destacar por el momento es que fue elaborado por una organización campesina para resolver los problemas de riego y drenaje de todo el cantón. Esto implica una lógica política en la organización, de acuerdo con la cual, partiendo de los intereses particulares de los campesinos como sector social particular, se construye una interpelación universalista, dirigida a todo el cantón.

A partir del riego y el drenaje, las demás actividades y servicios de la organización campesina son formas de cubrir demandas de la economía campesina. Este es el caso de la demanda de servicios financieros como ahorro y crédito. En Pedro Carbo existen varias organizaciones financieras que atienden la demanda de servicios financieros de los campesinos. Estas organizaciones no existían hace 10 años. Como señala el

padre Leuner, él consiguió el apoyo de ONG, como el FEPP, Ayuda en Acción y la Cooperativa Salitre, que tiene una sucursal en Pedro Carbo, creándose los sistemas de ahorro y crédito que operan actualmente en el cantón. Estas ONG no son, obviamente, parte de FOCCAHL pero apoyan el trabajo de la organización campesina y de la Iglesia. La Cooperativa Salitre en sus inicios fue apoyada por Leuner, tiene actualmente sucursales en alrededor de nueve cantones en las provincias de Guayas y Los Ríos. Aunque volveremos sobre el tema más adelante, FOCCAHL es una organización que cuenta con un sistema de ONG a su alrededor que apoyan y potencian el trabajo de la organización y de la Iglesia. Además de las ya mencionadas debe citarse también el MCCH y la Fundación María Luisa Gómez de la Torre.

A nuestro juicio, esta capacidad de articulación de sectores sociales y organizaciones en el proyecto de la iglesia de Pedro Carbo y de FOCCAHL está íntimamente vinculada al discurso de la Iglesia de los Pobres. Es decir, es el resultado de la capacidad interpelatoria de dicho discurso para constituir a esas organizaciones y sectores como sujetos del proyecto de la Iglesia y de FOCCAHL. Esto es muy importante porque la capacidad de respuesta de la Iglesia y de FOCCAHL a las demandas populares y campesinas depende de estas organizaciones y de los recursos que pueden movilizar. Hay que destacar que la existencia de una cooperativa de ahorro y crédito implica un paso más profundo en la formación de un sistema financiero rural, pues se basa en la movilización del ahorro del cantón como fuente de financiamiento de la coo-

perativa. No se trata solamente de un sistema de crédito, sino de una organización financiera con raíces en el cantón.

En esta misma dirección trabaja la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pueblo Solidario", formada por las tres Asociaciones Pueblo Solidario de los cantones Palenque, Vinces y Baba. La sede principal de la cooperativa está en Vinces pero tiene sucursales en las cabeceras de los otros cantones. En Laurel existe un fondo rotativo para financiar las actividades agrícolas que financia también la construcción de pozos y la infraestructura productiva.

Las organizaciones Pueblo Solidario y PROLICA cuentan con empresas industriales de secado y transformación de arroz y maíz para atender la demanda de los productores. En PROLICA, los productores pilan el arroz en el molino y lo venden por su propia cuenta, o en su defecto, la misma empresa compra la producción. Las empresas de las organizaciones de Pueblo Solidario operan de manera similar. La instalación de estas plantas agroindustriales es importante en varios sentidos. Por un lado, agregan valor a la producción agrícola y generan empleo en el campo, especialmente en los momentos de cosecha. Pero, sobre todo, independizan al productor de los comerciantes de los pueblos. Es decir que el establecimiento de estas plantas agroindustriales favorece la rentabilidad y la competitividad de las unidades campesinas de producción y tiende a transformar la red de poder local del capital comercial asentado en los pueblos.

En el cuadro N° 3 se puede apreciar la dependencia de los pequeños productores con respecto al capital comercial local. Lo que interesa destacar es que

son los pequeños productores los que dependen fuertemente de los comerciantes locales para vender su producción. Como se puede ver en el cuadro, los campesinos casi no venden su producción a industriales y exportadores. Solo los medianos y los grandes agricultores pueden hacerlo. Los pequeños, debido a la reducida escala de sus negocios y a la dependencia financiera con respecto a los intermediarios locales, están obliga-

dos a vender la producción al capital comercial y usurario local. La falta de capital propio y de liquidez obliga al pequeño productor a acudir a los comerciantes locales y a vender rápido la cosecha para recuperar liquidez. Se trata de un sistema de dependencia financiera y comercial cuya superación depende de la construcción de sistemas alternativos de cierta escala como los que han desarrollado las organizaciones en mención.

Cuadro N° 3
Comercialización por tipo de comprador y tamaño de UPA
en las provincias de Guayas y Los Ríos

Tamaños de UPA en Has.	TOTAL	Consumidor	Intermediario	Industrial	Exportador
	39730	1199	35804	1325	1402
Menos de 1 Ha.	3852	517	3247	65	23
De 1 a 2 Has	4273	140	3948	127	58
De 2 a 3 Has.	4171	73	3943	75	80
De 3 a 5 Has.	6108	99	5803	111	95
De 5 a 10 Has	8676	132	8055	228	261
De 10 a 20 has.	6444	112	5927	214	191
De 20 a 50 has.	4219	94	3644	222	259
De 50 a 100 Has.	1161	8	821	153	179
De 100 a 200 Has.	533	16	296	66	155
De más de 200 Has.	294	8	120	66	100

Fuente: INEC, III Censo Nacional Agropecuario.

Las organizaciones también han desarrollado experiencias de comercialización de insumos agrícolas que permiten a los productores reducir sus costos de producción realizando economías de escala. La fábrica de muebles de PROLICA genera puestos de trabajo para jóvenes. Las artesanías son parte de las actividades de otra organización campesina asentada en Pedro Carbo, el Centro Agro

Artesanal Nuestra Señora de las Mercedes (CAAM), organización que, además, produce productos agrícolas no tradicionales y mantiene un proyecto de conservación ambiental con financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.

De esta manera, el discurso de la Iglesia y de las organizaciones campesinas en Pedro Carbo articula también interpela-

ciones y significantes ambientalistas que le permite generar identificaciones en organizaciones ecologistas. Lo mismo realizan las otras organizaciones, que mantienen proyectos de conservación de suelos y reducción del uso de insumos agrícolas químicos y diversificación de la producción. Este es el caso de PROLICA que ha mantenido durante años un proyecto de producción hortícola para diversificar la producción.

En conclusión, recapitulando, este conjunto de actividades tiene como finalidad cubrir las demandas campesinas: la pastoral social es este conjunto de actividades sociales, educativas y económicas, que son a la vez religiosas.

Conclusiones

En esta última parte queremos discutir algunos conceptos y extraer algunas conclusiones sobre los movimientos campesinos en la costa del Ecuador, especialmente en lo que concierne al último período. En primer lugar, haremos algunas observaciones sobre la composición social de lo que generalmente llamamos movimiento campesino y de uno de los supuestos implicados en esta expresión. En segundo lugar, realizaremos una reflexión sobre las relaciones entre clases y sectores sociales en el ámbito local – cantonal y provincial – y el desarrollo del movimiento campesino.

Cuando hablamos de organización campesina generalmente hacemos referencia a una organización de pequeños

productores agrícolas pobres que defienden sus intereses y demandas sociales. Generalmente damos por sentado que la organización está compuesta básicamente de campesinos. Los apoyos que esa organización puede tener se entienden como recursos externos y se asume que el liderazgo de la organización es campesino, ya sea porque el mismo recae sobre los dirigentes formales o informales de la organización, o porque posee en el medio la legitimidad necesaria como para decir que lidera al campesinado del área. Este concepto de organización no reconoce los apoyos externos a la organización como parte de ella.

El análisis que hemos hecho de las organizaciones campesinas tiende a cuestionar este concepto de la organización campesina desde varios puntos de vista. Por un lado, en lo que tiene que ver con el sujeto y el liderazgo de la organización o el movimiento campesino. Como hemos visto, aunque la organización posee su directiva formal propia,¹² el verdadero liderazgo de la organización está en la iglesia. Más aún, en rigor no hay un movimiento campesino separado de la iglesia sino una iglesia popular y campesina. Como hemos tratado de mostrar, la organización campesina solo existe porque los pequeños productores son interpelados por un discurso religioso-campesino, por lo tanto, la identidad de los campesinos que forman parte del movimiento solo existe o está constituida por referencia a la iglesia. La identidad de los campesinos es una identidad *relacional*.

12 Vale la pena dejar claro que los sacerdotes entrevistados y los miembros del equipo pastoral con los cuales dialogamos dejaron claro en todo momento que las organizaciones campesinas tenían sus directivas propias democráticamente elegidas y que eran independientes de la iglesia.

Esto quiere decir que la identidad de los sujetos es una posición en un sistema del cual forman parte otros sujetos también determinados dentro del sistema, tal como ocurre no solo con los sacerdotes sino también con organizaciones y profesionales que los apoyan. En este sentido, tenemos al menos tres o cuatro sectores sociales directamente articulados al movimiento campesino y a la iglesia: a) los campesinos, b) los sectores populares de las cabeceras parroquiales y cantonales en las cuales se asienta la iglesia, c) las ONG de profesionales (nacionales y extranjeros) y d) el equipo pastoral de la iglesia local. Entonces, ¿cuál es el sujeto del movimiento campesino? Y ¿qué queremos decir, cuando hablamos de movimiento o de organización campesina? A nuestro juicio, la primera respuesta que se desprende del análisis es que no hay sujeto sin este sistema. En otras palabras, una concepción demasiado estrecha, que solo reconociera como organización campesina a los pequeños productores agrícolas afiliados formalmente a ella no podría comprender y dar cuenta de la forma en la que se constituyen las identidades campesinas en este movimiento social. En el fondo, dicha concepción sería una forma de esencializar el sujeto del movimiento campesino.

El movimiento o la organización campesina solo surgen una vez que se produce el sistema de posiciones del que hemos hablado. Cuando no hay este sistema, no hay movimiento u organización campesina. Puede haber campesinos pero no movimiento campesino. Para que el movimiento campesino se forme, hace falta un liderazgo que los interpele y que cubra sus demandas. Esto no puede

hacerse sin el sistema de relaciones al que hemos hecho referencia, en el cual los campesinos ocupan una de las posiciones pero no la única. En otras palabras, el movimiento campesino surge dentro de una estructura social compuesta por los campesinos, por la iglesia y por las organizaciones de profesionales mencionadas.

Ahora bien, a primera vista este sistema se presenta como un sistema social. Pero las identidades de todos los sectores involucrados en el sistema están referidas necesariamente las unas a las otras. Están connotadas recíprocamente y tienen en la iglesia y en el discurso religioso su punto nodal de articulación. Este punto es básico porque significa que lo que organiza el sistema es la cadena significativa del discurso religioso-campesino-popular. Si esto es cierto, significa que el sujeto del movimiento campesino no se puede localizar en ninguna de las particulares posiciones del sistema porque el sujeto es puramente relacional. No es posible fijar el sujeto en alguna de las posiciones sino que el sujeto es el fluir de una posición a otra.

Esto es lo que ocurre con los significantes que designan las identidades de los sujetos que forman parte del sistema. Dentro de los límites de estas organizaciones, el significante /pobre/ o el significante /campesino/ está generalmente referido al significante /iglesia/ o a otro equivalente. Es decir, forma parte de una cadena significativa en la cual cada eslabón de la cadena remite al siguiente y se determina por medio de esa deriva. Esta cadena significativa produce el sistema porque los diferentes agentes adquieren su identidad a través de la posición que

ocupa el significativo que los representa en la cadena. La cadena significativa produce el sistema social.

Más aún, hay que hacer notar que también las actividades de las organizaciones están connotadas por el discurso religioso. Un buen ejemplo es el sistema de crédito de PROLICA en Laurel. El sacerdote de Laurel insiste durante la entrevista en que el fondo rotativo de la organización suministra recursos a los campesinos a un costo financiero bajo. Leuner en Pedro Carbo dice lo mismo sobre los programas de crédito de las ONG. En otras palabras: el crédito es el crédito pero cuando funciona dentro del sistema de organizaciones de la iglesia popular, está necesariamente marcado por el sistema. Por esto, la tasa de interés en las organizaciones de la iglesia es más baja que en el resto del mercado financiero. El sentido del crédito cambia dentro de la organización por la posición que ocupa en el sistema. Así como el precio del dinero baja, otros precios suben dentro del sistema como por ejemplo, los precios de los productos agrícolas en las empresas agroindustriales de las organizaciones campesinas. De esto se desprende que también las prácticas económicas son significantes y que, como decíamos al principio, son parte del discurso.

Desde esta perspectiva, la iglesia de los pobres no es exterior al movimiento campesino ni el movimiento campesino exterior a la iglesia: son una sola cosa. La expresión "iglesia popular" da cuenta de mejor manera de ese sistema de relaciones en el cual se constituye el movi-

miento campesino porque permite pensar la totalidad de esas relaciones y sujetos involucrados. Es importante volver sobre algunos de los elementos de este sistema, para encontrar el hilo que conduce a la producción del movimiento. En la entrevista que realizamos, el P. Leuner habla de los orígenes de FOCAL:

"[...] era al principio de los años 1990 que nosotros con algunas ONG hemos organizado a los campesinos, artesanos también. También con el MCCH, que es una ONG conocida. Y después, en la segunda mitad de los años 1990, empezando con el FEPP y después con Ayuda en Acción. También con un equipo de la pastoral social y otra ONG hemos ayudado a organizar a los campesinos [...]"¹³

Lo que nos parece importante destacar de este texto es que al empezar a hablar de los orígenes de la organización campesina en Pedro Carbo, Leuner apunta de inmediato a las *organizaciones* con las cuales es posible responder a las demandas y necesidades de los campesinos y a la pastoral social. No empieza por mencionar la pobreza campesina ni habla de campesinos que se organizaron solos. La respuesta de Leuner destaca de inmediato *los sistemas sociales, las instituciones*, desde las cuales y con las cuales se organizan los campesinos. En Pedro Carbo, sorprende la capacidad de la Iglesia para convocar un amplio abanico de organizaciones que acuden a apoyar el trabajo de la organización. Monseñor Leuner reconoce la importancia al hecho de haber contado con el

13 Entrevista a Mons. H Leuner.

apoyo de las ONG: "más importancia [que la pastoral que realizaba el equipo de la iglesia] tenían las ONG porque el trabajo exige bastante profesionalismo en todos los niveles [...]".¹⁴ Alrededor de FOCCAHL trabajan al menos cuatro ONG, además de la Cooperativa Salitre. Es este sistema de instituciones y la Iglesia el que hace posible la organización campesina porque canaliza las demandas del campesinado. Sin dicho sistema, las demandas campesinas habrían seguido articuladas al sistema tradicional de dominación de Pedro Carbo, centrado en el capital comercial y usurario local.

Al respecto, es importante advertir que el trabajo de la iglesia consiste en *hegemonizar* los significantes de las demandas campesinas. Esto queda claro si se tiene presente que los sistemas de crédito y comercialización que construye la Iglesia y la FOCCAHL tienen que competir con el capital comercial y usurero local. La hegemonía política también se juega en el mercado. Los precios que ofrecen la FOCCAHL por la producción de los afiliados o los créditos connotan la organización campesina y la iglesia pero tienen que ser competitivos para atraer la producción y la demanda campesina. Tienen que ser lo suficientemente competitivos como para quebrar las lealtades primordiales del campesino con el capital comercial local.

Este enfoque del P. Leuner, que ve los orígenes de la organización campesina desde las instituciones que responden a las demandas campesinas, nos parece

que hace referencia a lo que Laclau ha llamado *la primacía de lo político en la institución de lo social*.¹⁵ La organización del movimiento campesino es posible a partir de cierta capacidad de respuesta a las demandas campesinas. El movimiento se forma a partir del momento en que los campesinos vinculan sus demandas y valores con una organización en la cual encuentran respuesta. De esta forma se teje una articulación simbólica e imaginaria entre la demanda y una organización que la cubre parcialmente. La demanda campesina es hegemonizada por la nueva organización. Esto es lo que, a nuestro entender, hacen la Iglesia y las ONG que empiezan a organizar la FOCCAHL a principios de los años 1990 en Pedro Carbo. A partir de dicha articulación, se construye una nueva identificación: los campesinos que hasta entonces vendían maíz a algún comerciante de Pedro Carbo, empiezan a recibir ahora crédito en alguna de las ONG que trabajan con la Iglesia.

Hay que advertir que la formación de la nueva identidad campesina depende de una lucha y disputa, en las que ciertas alternativas pueden ser descartadas. Para seguir con el ejemplo del crédito rural, la demanda campesina de crédito puede ser cubierta por diferentes proyectos alternativos. Los comerciantes locales y las sucursales de los bancos comerciales también pueden otorgar crédito a los pequeños agricultores; sobre todo los primeros. Para que la cooperativa de ahorro y crédito de la Iglesia o el programa de

14 Ibid.

15 E. Laclau, *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, p. 52.

crédito de alguna ONG se institucionalice y se desarrolle, es necesario descartar esas otras alternativas. En términos políticos, la demanda de crédito de los campesinos tiene que ser *hegemonizada* por el movimiento y la Iglesia. Con ello se transforman necesariamente las identidades de *todos* los sujetos involucrados en el mercado del crédito. No solo los campesinos sino también los comerciantes, la banca comercial, las ONG, las cooperativas. Todas las piezas del sistema cambian de posición y, por tanto, de identidad. Esto no puede hacerse sin una organización. Esto no es el resultado de la simple agregación progresiva de pequeños grupos campesinos dispersos que se habrían sumado unos a otros por iniciativa propia sino que hay una *organización* – la iglesia – que interpela a los campesinos; hay una organización que *produce* el movimiento campesino.

Pasemos ahora al último punto. Las relaciones entre sectores sociales en el ámbito local y provincial. Del punto anterior se desprende que el movimiento campesino es un sistema de dependencias recíprocas entre campesinos, sacerdotes y profesionales rurales. Dicho de otro modo: aquí hay una “alianza” entre campesinos y sectores medios rurales, eclesiales y no eclesiales. Podríamos entender esta “alianza” como parte del contexto de oportunidad, en el cual los campesinos se organizan porque la clase media rural se radicaliza y se acerca al campesinado. Pero también podemos entenderlo como parte de un proceso de formación de un bloque histórico que *fusiona* en una alianza estratégica a diferentes sectores y clases sociales enfrentadas al sistema de dominación política.

El enfoque gramsciano del bloque histórico nos permite plantear el tema de la hegemonía política con respecto al movimiento campesino en la costa. Hemos visto que los movimientos campesinos analizados tienen una influencia relativa sobre el campesinado de los cantones en los cuales actúan y que muchos grupos y asociaciones campesinas son independientes y negocian directamente con los partidos políticos de turno que controlan los gobiernos locales. Los movimientos campesinos organizados tienen dificultades para extender su influencia sobre el conjunto del campesinado del cantón y sobre la provincia. Pero la “alianza” de los campesinos con la iglesia y los profesionales de los pueblos es una forma de *universalizar* las demandas y significantes campesinos. Por esto entendemos el hecho de que sectores no-campesinos se identifiquen con significantes y demandas campesinas y viceversa. Hay que percatarse de que así como los campesinos se identifican con los significantes católicos, los sacerdotes y profesionales que trabajan con los campesinos también se identifican con los significantes campesinos y montubios. El movimiento campesino resignifica las identidades de todos los sujetos directamente involucrados. ¿Pueden los movimientos campesinos interpelar a otros sectores de la sociedad local y regional creando así las condiciones que faciliten una movilización campesina y popular mucho más amplia?

Esta pregunta no puede ser respondida sin un análisis social y político de los cantones y provincias en las cuales actúan los movimientos campesinos. En la provincia de Los Ríos hay signos claros

de que los medianos productores agrícolas están sometidos al control de monopsonios ubicados en las ramas de la producción de banano, maíz y soya. ¿Es posible que converja la lucha de los campesinos, la iglesia y los profesiona-

les con las demandas de las asociaciones de medianos productores agrícolas de manera que en la provincia se forme un bloque social que pueda ser aprovechado por los campesinos para desarrollar más poder?

El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly* Eduardo González Calleja**

Los estudios de Charles Tilly (1929-2008) han ejercido una amplia influencia en la historia y sociología de la acción colectiva. Las elaboraciones teóricas de Tilly establecieron un estilo riguroso de investigación sustentada en amplias series de datos que han permitido entender las lógicas históricas y políticas de protestas, rebeliones y movilizaciones. Esta síntesis de sus principales aportes propone situar el significado de las modalidades y repertorios de la acción colectiva en diferentes épocas y espacios europeos.

A mediados de los años sesenta del siglo XX, una serie de nuevos programas de investigación marcaron el declive del paradigma del comportamiento colectivo violento como algo anormal, desorganizado o contagioso, y abrieron paso al análisis de la acción concertada como un comportamiento deliberado y racional, dirigido hacia el cambio social. Cuando los investigadores comenzaron a aplicar la perspectiva de la elección racional, las viejas teorías fundamentadas en la ira, la emoción o la frustración comenzaron a caer en el descrédito. Dentro de esta línea de estudio del carácter racional de

la acción colectiva merece mención especial la obra de Charles Tilly (1929-2008). Su estilo “empresarial” de investigación (algunas semblanzas le pintan como un Henry Ford dirigiendo una factoría de estudios cuantitativos sobre huelgas, tumultos del hambre y rebeliones fiscales), su permanente atención a los procedimientos de investigación, el ensamblaje de una prodigiosa colección de datos históricos y la importancia que otorgaba a la crítica, el comentario y la síntesis distinguían su labor de la de otros sociohistoriadores.¹ Su audiencia mixta de historiadores interesados por sus métodos de análisis inno-

* El presente trabajo recupera algunas consideraciones planteadas en mi libro *La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de Poder*, Madrid, CSIC, 2002. Se realiza en el marco del Proyecto de I+D HAR2012-38258-C02-01 del Ministerio de Economía y Competitividad.

** Universidad Carlos III de Madrid

1 Lynn Hunt, “Charles Tilly’s Collective Action”, en Theda Skocpol (comp.), *Vision and Method in Historical Sociology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 244-245, 255 y 257. Una divertida exposición de sus métodos de trabajo, en el texto “How I Work” [http://etss.net/evolution/how_i_work-/tilly.htm].

vadores y de sociólogos que buscan modelos alternativos de acción colectiva y estrategias de investigación histórica que den respuesta a las cuestiones sociológicas que se plantean se explica en buena parte porque Tilly empleaba un lenguaje ambivalente y una metodología que se sitúa a mitad de camino entre la Historia y la Sociología.²

Su formación en diversas tradiciones sociológicas le permitió seguir una línea ecléctica. La influencia de Stuart Mill se percibe en su modelo de movilización, donde hacía hincapié en la importancia de los intereses y de la oportunidad para que la gente actúe colectivamente con el fin de maximizar sus ganancias colectivas. La protesta, como cualquier otra acción colectiva, es una acción marcada por la racionalidad.³ La influencia marxiana resulta también perceptible⁴: Tilly enfatizaba el conflicto sobre el consenso, y destacaba la dimensión política de la acción colectiva, así como la dinámica del capitalismo para entender el desarrollo de las situaciones revolucionarias. En sus trabajos, el Estado aparece como un protagonista social más, que representa los intereses de los grupos sociales dominantes, y cuya legitimación resulta siempre problemática. Sin embargo, la posición relativa de los contendientes no la extraña mecánicamente de su posición en las relaciones de producción, y advertía que la organización económica no

precede necesariamente en su análisis a factores como la formación del Estado o el crecimiento urbano, que con todo tienen una tradición más marxista que el ambiguo término de “modernización”. Tilly rechazaba la noción de leyes generales de desarrollo o modelos generales anacrónicos. Su objetivo era vincular transformaciones específicas en tiempos y lugares particulares con los procesos generales de cambio.⁵

También se acercó a Max Weber cuando describía al Estado como un actor básico que lucha por sus propios intereses y derechos. Consideraba además que las creencias, las costumbres, las visiones del mundo, los derechos y las obligaciones afectan indirectamente a la acción colectiva a través de su influencia en los intereses, la organización, la movilización y la represión.⁶ Sin embargo, se mostró muy duro con Durkheim, a quien criticaba su noción de anomia y el modo en que la hacía derivar de resultados sociales no deseados. Pero sus invectivas se dirigieron sobre todo contra los herederos de la teoría durkheimiana de la patología y la desorientación social, como Huntington, Johnson o Gurr, por la falta de adecuación que existe en sus trabajos entre la evidencia histórica y las hipótesis derivadas de sus investigaciones. En contrapartida, insistió en la racionalidad e intencionalidad de la acción colectiva, y destacó la importancia de la

2 Hunt, “Charles Tilly’s Collective Action”, p. 266.

3 Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Nueva York, Random House-McGraw-Hill Publishing Co./Reading, Addison Wesley Publishing Co., 1978, p. 48.

4 Como se reconoce explícitamente en Charles, Louise y Richard Tilly, *The Rebellious Century (1830-1930)*, Cambridge, Harvard University Press, 1975, p. 274.

5 Charles Tilly, *As Sociology Meets History*, Nueva York, Academic Press Inc., 1981, pp. 44-46.

6 Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 48.

creatividad y de la solidaridad —esto es, la organización—, no de la ansiedad, la furia, la desintegración o la ruptura del control social, a la hora de promover la acción colectiva.

Tilly y sus colaboradores han ofrecido una interpretación del conflicto y de la protesta que parte de una teoría de la acción intencional en ocasiones cercana a la de Gurr o Davies, pero que ha reivindicado el carácter eminentemente político y deliberado de la acción colectiva impulsada por actores concretos, no movidos exclusivamente por vagos estados psicosociales de rebeldía. Su estilo de trabajo seguía las siguientes etapas: 1) basándose en sugerencias realizadas en la literatura especializada y en sus propias intuiciones, Tilly formuló hipótesis que debieran explicar manifestaciones duraderas y transformaciones a largo plazo de la acción colectiva; 2) especificaba las implicaciones de estas hipótesis; 3) elaboraba grandes series de datos referentes a las modalidades y transformaciones de la acción colectiva a largo plazo; 4) comprobaba la adecuación entre los datos empíricos y las implicaciones específicas de las hipótesis; 5) en función de los resultados obtenidos, rechazaba o reformulaba las hipótesis centrales que explican por qué los cambios en la acción colectiva tienen lugar en el modo en que lo hacen y sus específicas consecuencias históricas, y 6) si las hipótesis se dirigían a una misma dirección, elaboraba un modelo más universalmente aplicable, por ejemplo,

el esquema general de movilización presentado en su obra clásica *From Mobilization to Revolution* (1978). Su programa de investigación rechazaba las definiciones y las interpretaciones genéricas e inalterables:

“En lugar de estudiar conductas imperecederas de las multitudes, estudiamos las formas particulares de acción que utiliza la gente en sus reivindicaciones. En vez de estudiar las leyes del movimiento social, estudiamos la emergencia del movimiento social como fenómeno político. En vez de estudiar el poder en general, estudiamos las modalidades del poder dentro de un cierto modo de producción”.⁷

Por ello, su punto de vista resulta de alto valor para el historiador de la violencia: “la organización de una población y su situación política —observaba Tilly— condicionan fuertemente su modo de acción colectiva y ésta limita estrechamente las posibilidades de violencia. Así, cada tipo de grupo participa en modalidades de violencia colectiva significativamente diferentes”.⁸ Como podemos ver, Tilly destacaba los componentes organizativos y estratégicos de una revolución (intereses, estructura y movilización del grupo, oportunidad de la acción) donde Gurr y Davies destacan los componentes “volcánicos”; para unos, la revolución es algo que se organiza; para los otros, es algo que explota. La acción colectiva de protesta, violenta o no, surge directamente de los procesos políticos

7 Tilly, *As Sociology Meets History*, p. 46.

8 Charles Tilly, “Collective Violence in European Perspective”, en Hugh David Graham y Ted Robert Gurr (eds.), *The History of Violence in America*, Beverly Hills, Sage, 1979, pp. 38-39.

centrales de una población, en vez de expresar corrientes difusas de descontento.⁹

Al contrario de los irracionalistas de fines del siglo XIX, que concebían la violencia como síntoma de la mentalidad enfermiza de la multitud, Tilly la percibía como una manifestación de la búsqueda del normal interés colectivo, por parte de grupos a los que se les niega una participación más formal y rutinaria en la toma de decisiones políticas. Pero advierte que “para utilizar modelos de acción racional no es preciso suponer que toda acción colectiva esté básicamente calculada, elegida, deseada, y que sea factible y eficaz. Únicamente es preciso suponer, provisionalmente, una serie coherente de relaciones entre los intereses, la organización, las creencias compartidas y las acciones de los actores”.¹⁰ Para Tilly, los grupos que se implican regularmente en la acción colectiva perciben y prosiguen un conjunto común de intereses, y la acción colectiva requiere coordinación, comunicación y un nivel de solidaridad que se extienda más allá de la acción misma.¹¹

A diferencia de Mancur Olson, Tilly piensa que las personas están motivadas directamente por el interés colectivo, no por cálculos racionales de utilidad puramente personal. La teoría de la elección racional aseguraba que los contendientes están continuamente evaluando los costes y los beneficios de su acción, pe-

ro ambas magnitudes resultan inciertas, porque los rivales en un conflicto sólo disponen de una información parcial sobre la situación política, y todas las partes se implican en una interacción estratégica que aumenta la fluidez de la situación. La gente no actúa, pues, movida por la racionalidad absoluta y objetiva, sino por lo que percibe como razonable y factible en cada momento.

Tilly se reconocía como historiador estructuralista, y criticaba al postmodernismo, puesto que proclamaba la huida del individualismo del conocimiento histórico y reconocía la enorme importancia de las transacciones, las interacciones y las relaciones interpersonales en los procesos sociales.¹² Contemplaba la cultura, entendida como las creencias compartidas y sus objetivizaciones, no como un residuo, sino como un marco en el que tiene lugar la acción, y al discurso como un importante medio de acción, pero negaba que la cultura y el discurso sin agentes agotasen la realidad social existente. Optaba por señalar que las intenciones de los actores no suelen ser unitarias ni claras, ni son siempre previas a la acción, de modo que prefería estudiar el cambio producido en la conciencia de los actores que deriva en relaciones y en interpretaciones compartidas. En opinión de Tilly, la cultura se inserta de lleno en la realidad social y ayuda a transformarla. Su análisis se cen-

9 Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 25.

10 Charles Tilly, *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*, Madrid, Alianza, 1991, pp. 47-48.

11 Charles Tilly, “The Modernization of Political Conflict in France”, en Edward B. Harvey (ed.), *Perspectives on Modernization. Essays in Memory of Ian Weinberg*, Toronto, University of Toronto Press, 1972, p. 74.

12 Ludger Mees, “Entrevista con el profesor Charles Tilly”, *Historia Social* (Alzira), nº 24, 1996, p. 156.

traba en la construcción de la acción social, conectando las condiciones materiales, las identidades comunes, las relaciones sociales, las creencias compartidas y las memorias con las experiencias, la interacción colectiva y la reordenación del poder. Consideraba que las relaciones sociales (más que las mentalidades sociales) son las realidades fundamentales, y asumía que los individuos y los grupos articulan sus intereses antes de la acción. La actividad social rutinaria (producción, intercambio y consumo) afecta a la distribución de recursos, a las redes de relación social entre los diferentes segmentos de población y a su capacidad para actuar conjuntamente. La población actúa dentro de los límites impuestos por las creencias y las convenciones que han establecido en el curso de las interacciones previas, y las acciones individuales y colectivas crean o transforman esos residuos culturales (información, creencias, convenciones, adhesiones, lazos sociales, etcétera), que a su vez impulsan la acción a través de la acumulación de conocimientos y experiencias compartidas y relaciones sociales. De modo que los significados compartidos, las interacciones y los lazos sociales encierran una lógica acumulativa en los procesos de confrontación.¹³ Los repertorios de confrontación y las identidades políticamente disponibles se influyen y cambian mutuamente.¹⁴

Los factores esenciales de la acción colectiva

Tilly presentaba un sistema político compuesto de tres elementos básicos: el gobierno como órgano dotado de los medios de coerción sobre la población, los grupos que tienen acceso al poder y los adversarios. También proponía un modelo procesual de la acción colectiva basado en cinco grandes etapas, que no son estáticas, sino que cambian a lo largo del tiempo, e incluso son diferentes en un momento dado para distintos grupos sociales y organizaciones:

1. Intereses comunes: Se refiere a las aspiraciones de un grupo, y a las pérdidas y ganancias compartidas que resultan de su interacción con los grupos rivales. A largo plazo, las relaciones de producción nos pueden indicar qué intereses van a predominar en cada momento, pero a corto plazo es el propio comportamiento de los grupos el que posibilita la articulación de sus intereses comunes.

2. Organización: Las oportunidades políticas no se pueden aprovechar si no existe una infraestructura organizativa, formal o informal, capaz de canalizar los procesos de acción colectiva. La extensión de la identidad común y de la estructura unificada de un grupo afecta de manera directa a su capacidad para actuar sobre sus intereses, pero que los or-

13 Charles Tilly, *Popular Contention in Great Britain, 1758-1834*, Cambridge y Londres, Harvard University Press, 1995, pp. 38-41.

14 *Ibíd.*, p. 369.

ganizadores del movimiento consigan movilizar a sus bases no depende sólo de la organización formal, sino de las redes sociales donde se integran los seguidores, y de las estructuras de movilización que se establezcan.

3. Movilización: Los movimientos de protesta se forman en torno a una serie de reivindicaciones e ideas compartidas sobre lo que se considera justo e injusto. Los programas para realizar sus demandas y la imputación de sus causas son la base ideológica para la movilización, que puede definirse como el proceso por el cual un grupo adquiere el control sobre los recursos necesarios para la acción colectiva. La movilización proporciona el potencial para esta acción, que se transforma en conflicto mediante la interacción entre el grupo retador y el desafiado. Entre las variables que facilitan la movilización figuran la presencia o ausencia de competidores sobre los mismos recursos, la identificación del programa de acción con los intereses de cada miembro y la cohesión interna del grupo movilizado.

Tilly señalaba dos secuencias típicas del proceso de movilización, mediante el cual un grupo se asegura el control sobre los recursos necesarios para su acción colectiva: la movilización volcánica o espontánea se produce cuando el movimiento surge "desde abajo", se organiza de forma rudimentaria y elabora una ideología a veces tomada del exterior y articulada por líderes carismáticos. La movilización "desde arriba" brota como resultado de una manipulación, conspi-

ración o intermediación organizadora emprendida por las élites, que al comienzo difunden una visión ideológica atractiva, y a continuación una institucionalización del nuevo orden normativo ligado a esta ideología.¹⁵ Tilly diferenciaba además tres tipos de movilización: la *defensiva* aparece como fruto de una amenaza exterior al grupo, que induce a sus miembros a unir sus recursos para combatir al enemigo, como sucede, por ejemplo, en los conflictos de la sociedad rural tradicional (por ejemplo, una *jacquerie*). La movilización *ofensiva* se da cuando un grupo une sus esfuerzos en respuesta a las oportunidades para realizar sus intereses (por ejemplo una revolución), y en la movilización *preparatoria* el grupo une sus esfuerzos anticipándose a futuras oportunidades o amenazas (por ejemplo, una huelga reivindicativa convocada por un sindicato).

El mismo proceso de movilización puede transformar los intereses del grupo y su propia organización. En general, la formación de los movimientos está ligada a la mejora del *status* de los grupos agraviados, no tanto por el hecho de que tales agravios sean creados por la "revolución de las expectativas crecientes", sino sobre todo porque estos cambios reducen los costos de la movilización para otros grupos, y aumentan sus posibilidades de éxito.¹⁶

Hasta este punto, Tilly exponía el "modelo de movilización", que describe la conducta de un contendiente en términos de interés, organización, poder y

15 Piotr Sztompka, *Sociología del cambio social*, Madrid, Alianza, 1995, pp. 319-320.

16 J. Craig Jenkins, "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales", *Zona Abierta* (Madrid), nº 69, 1994, p. 13.

otras variables: es la defensa de un interés colectivo lo que suscita la movilización, entendida como el proceso por el cual un grupo deja de ser pasivo para convertirse en un elemento activo de la vida pública. Para devenir un elemento activo, ese grupo tiene necesidad de organización, que es lo que permite unificar a los actores de una colectividad con vistas a emprender una acción concertada. El grupo estará mejor organizado cuanto más densa sea la red de relaciones internas y más fuerte sea la identidad del grupo.

El paso de la capacidad de actuar a los incentivos u oportunidades para actuar lo da la otra parte de su modelo de acción colectiva: el "modelo político", que da cuenta de las relaciones externas de los contendientes con otros actores, es decir, de las coaliciones y luchas por la conquista o la conservación del poder. Según Tilly, la política capaz de explicar la acción colectiva es "el uso diario del poder, la lucha continua por el mismo, la cambiante estructura del poder cuando éste ha afectado los destinos de las comunidades locales y la gente común".¹⁷ En opinión de McAdam, hay tres factores macropolíticos que inciden en la formación y evolución de los movimientos: una estructura de oportunidades políticas favorables, la aparición de crisis y situaciones de enfrentamiento que debilitan la posición hegemónica de los grupos o coaliciones dominantes, y la ausencia o uso restringido de la repre-

sión estatal, conectada a los dos factores anteriores.¹⁸ Por su parte, Tilly destaca dos factores estructurales que facilitan la aparición de la rebeldía social: el nivel de organización de la población agraviada y las circunstancias que enfrentan a los descontentos con los grupos integrados en el orden político.

4. Oportunidad: La relación entre la protesta y el contexto en que se produce es dialéctica: la acción colectiva tiene la virtualidad de demostrar a otros la posibilidad de actuar, y ofrecer oportunidades a los movimientos menos poderosos o con menos iniciativa. Por medio de la acción colectiva se pone al descubierto las debilidades del oponente, que a menudo sólo pueden constatarse cuando es preciso responder a un reto concreto. También se saca a la luz la existencia de aliados soterrados, tanto dentro como fuera del sistema, y por último se pueden derribar barreras institucionales de modo que se permita la recepción de nuevas demandas. El encuentro entre grupos antagonistas produce modelos de acción colectiva que facilitan oportunidades para otros movimientos en cuatro modos diferentes: expandiendo las oportunidades del propio grupo a través de su propia acción reivindicativa; ampliando las oportunidades para otros grupos de protesta que incluyen nuevas formas de acción en su repertorio; generando oportunidades políticas para sus oponentes, sobre todo cuando un movimiento amenaza a otro en un contexto general

17 Tilly, *The Contentious French*, p. 10.

18 Doug McAdam, «Micromobilization Contexts and Recruitment to Activism», en Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney Tarrow (eds.), *From Structure to Action: Comparing Social Movements Across Cultures*, Greenwich (CT), JAI Press, 1988, pp. 125-154.

de movilización, forzándole a actuar en contra suya, o cuando los beneficios logrados por el primer grupo suponen costes, o puede generar costes, para el segundo, y creando oportunidades políticas para las autoridades y las élites integradas en el sistema. Las oportunidades son desfavorables cuando las acciones reivindicativas dan el pretexto para la represión, y favorables cuando permiten a los grupos políticos oportunistas asumir todo o parte del programa reivindicativo, optando por una política reformista e incluso encabezando el movimiento de protesta.

5. Acción colectiva: Se puede definir como la actuación conjunta de un grupo de personas con el objeto de conseguir intereses comunes. Como el comportamiento colectivo de Smelser, la acción colectiva es un concepto amplio, suficientemente ambiguo y menos ideológico que los de lucha de clases, violencia tumultuaria o desviación social. En *From Mobilization to Revolution*, Tilly describía la acción colectiva como un concepto que implica dos grandes tipos de análisis social difíciles de conciliar: el causal (acción como resultado de fuerzas externas al individuo o grupo) y el intencional (acción como resultado de la elección racional de acuerdo con reglas más o menos explícitas). Para Tilly, la acción colectiva no era un fenómeno espontáneo, sino un proceso basado en la evaluación de costes y beneficios que surgía del desarrollo lógico de los factores anteriormente descritos. El cambio estructural afecta a la acción colectiva de

manera profunda, pero indirecta, a través de la creación, la transformación y la destrucción de grupos con intereses comunes y con capacidad real de movilización. A partir de ese estadio inicial, Tilly esbozaba un modelo secuencial: la acción se desplaza generalmente desde la percepción de los intereses compartidos (ventajas o beneficios que pueden resultar de la acción conjunta) y la organización de los grupos (estructura de grupo, como identidades, lazos y solidaridades comunes que aumentan su capacidad de acción coordinada) a la movilización (adquisición del control colectivo sobre los recursos coercitivos, utilitarios y normativos necesarios para la acción), y de allí a la acción colectiva (aplicación de recursos a fines comunes) cuando surgen oportunidades concretas para actuar eficazmente.¹⁹

Los factores generales que inciden en la acción colectiva son: la solidaridad interna del grupo (cohesión e integración), su autonomía frente al exterior (segmentación o separación respecto a otros grupos sociales), sus capacidades (organización previa y repertorio de acciones conocidas por la gente) y su estructura de oportunidades (aliados exteriores, debilidad del poder, etcétera). La existencia de repertorios de contestación de eficacia contrastada, de redes sociales densas y de una sólida estructura cultural disminuyen los costes de la acción, creando una dinámica de movimiento más amplia y vasta. Estos factores se conjugan para dar lugar a las diversas formas de actuación en común.

19 Tilly, *From Mobilization to Revolution*, pp. 7-10 y 52-55.

Los tipos de acción colectiva

En su análisis de los movimientos populares de protesta en Gran Bretaña entre 1758 y 1834, Tilly elaboró una tipología de las alternativas de dicha acción colectiva contenciosa según el grado de espontaneidad de la misma y los procesos sociales que precipitan la actuación²⁰:

Grado de intencionalidad

1. *Impulsos directos*: cuando la gente actúa dirigida por emociones irresponsables y necesidades primarias como la pobreza, el hambre, la rabia o el miedo.
2. *Conciencia impuesta*: cuando la gente acepta o no es capaz de eludir ideologías construidas por instituciones ajenas a los mismos (iglesias, partidos, poderes locales, etcétera), y actúa bajo las premisas de esos programas externos.
3. *Significados compartidos*: cuando la gente es consciente de lo que hace, porque ha forjado un análisis tradicional, porque alguien ha propuesto un análisis atractivo, o porque ha formado su propia percepción compartida de la situación social, desarrollada en el transcurso de las luchas previas, en la experiencia diaria o como resultado de su exposición a nuevas ideas.

Procesos sociales precipitantes

1. *Tensión social*: la vida social consiste en una confrontación cotidiana entre individuos determinados y la

sociedad, sometida a unos cambios que pueden generar desorden. Cuando la crisis social surge del mal funcionamiento de mecanismos reguladores (hambres, epidemias, guerras), la lucha se aleja de la estructura del poder, y tiene por efecto la ruptura del normal proceso social.

2. *Movilización política*: la acción depende de la implicación de la gente en movimientos organizados o de opinión (asociaciones, iglesias, sociedades, sindicatos, partidos, etcétera) respecto del poder.
3. *Lucha de grupos*: los individuos y grupos comparten intereses y crean significados. La vida social consiste en interacciones entre grupos de intereses, y la rivalidad por la presencia de divisiones religiosas, étnicas, lingüísticas, políticas, etcétera es una consecuencia natural de estas interacciones. Este modo conflictivo permite establecer una línea explicativa entre las luchas diarias y los cambios en la estructura del poder.

Donde hay impulso directo y tensión social se producen *desórdenes* (disrupción temporal del orden político mantenido por la autoridad establecida), lo que supone negar efectividad histórica a la gente ordinaria. En contraste, la conciencia impuesta y la movilización política precipitan el cambio social y el *progreso* cuando los movimientos y líderes en competencia articulan los intereses para el cambio (secularización, urbanización, desarrollo del capitalismo...) de forma más o menos eficaz en el transcurso de

20 Tilly, *Popular Contention in Great Britain*, pp. 30-34.

las movilizaciones cotidianas. Por último, los significados compartidos y los conflictos de grupo pueden dar lugar a *enfrentamientos violentos*. Pero estas divisiones no son tajantes, puesto que el conflicto, la cooperación y la movilización institucional pueden aparecer en un mismo proceso histórico.

La propuesta teórica de Tilly destaca la lógica de la interacción, y señala la importancia de las oportunidades, de los grupos coherentes, de las creencias compartidas, de las coaliciones, de la movilización y la interacción colectiva organizada, de la represión y del facilitamiento, que ponen en relación la confrontación abierta y el ejercicio rutinario del poder, y atribuyen a las luchas de la gente corriente un impacto significativo en los asuntos nacionales.

La acción colectiva siempre tiene lugar como parte de la interacción entre personas o grupos, no como resultado de una actividad individual. Opera dentro de los límites planteados por las instituciones, prácticas y creencias compartidas existentes. Los participantes aprenden, innovan y construyen historias en el curso de esa acción, y cada forma de acción colectiva tiene una historia que canaliza y transforma sus empleos subsiguientes. Cada acción colectiva se integra en repertorios limitados y bien definidos, que son particulares para cada actor, objeto de acción, tiempo, lugar y circunstancias estratégicas.

Una de las formas más comunes de acción colectiva en el mundo contemporáneo es el enfrentamiento o la protes-

ta, que Tilly definía como acción colectiva disruptiva dirigida contra instituciones, élites, autoridades u otros grupos, en nombre de los objetivos colectivos de los actores o de aquéllos a quienes dicen representar. Este tipo de acciones rechazan la mediación institucional, provocan desorganización, interrupción de los procesos económicos y políticos y de la rutina diaria; son expresivas, porque las demandas son presentadas con cargas simbólicas fuertemente emocionales y en términos no negociables; y son estratégicas en su elección de recursos, objetivos y momento. Aunque este tipo de acciones no es necesariamente violento, la forma más directa supone la amenaza de usar la violencia, y su manifestación última es la violencia abierta.²¹

Como los teóricos de la modernización, Tilly propuso un esquema evolutivo de desarrollo de la acción colectiva violenta en tres tipos sucesivos: *primitiva* (la desplegada por las comunidades y asociaciones rivales antes de desarrollo del Estado centralizado: riñas gremiales o escolares, disputas entre ciudades, *pogromos*, violencia bandoleril o milenarista...), *reaccionaria* (la resistencia de grupos comunales autónomos y débilmente organizados que se levantan contra una presunta conculcación de sus derechos adquiridos frente a la penetración del Estado nacional y de la economía capitalista: revueltas campesinas, ocupación de tierras y bosques, motines antifiscales o contra la conscripción, tumultos del hambre, *luddismo*...) y *moderna*, que es desplegada por asociaciones

21 Sidney Tarrow, *Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975*, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 14.

especializadas y organizadas a escala nacional para la acción política o económica, como las huelgas, las manifestaciones, las campañas electorales, las acciones revolucionarias, etcétera. Sus objetivos, relativamente bien definidos, consisten, antes que en la resistencia, en el deseo de controlar una mayor gama de objetivos, programas y demandas.²² Más adelante, Tilly hizo ligeros retoques a esta clasificación tripartita, y diferenciando:

1. La acción colectiva *competitiva* u horizontal (ejecutada sobre los contrincantes en la protesta durante las querellas por recursos y derechos sobre los que no se tiene control previo, y que son reclamados por otros grupos y comunidades rivales, competidoras o participantes), que ha sido dominante en los siglos XV y XVI.
2. La acción *reactiva* (prácticas de autodefensa frente a presiones exteriores, cuando los derechos reclamados fueron establecidos o disfrutados, pero luego revocados o usurpados, como son los motines de subsistencia o quintas), típica de los siglos XVII a XIX, aunque también pueden asimilarse a ella las acciones actuales de gobierno que buscan la destrucción de la oposición, la restricción en la movilización política o la defensa a

ultranza de la estabilidad del sistema político.

3. La acción *proactiva*, en torno a reclamaciones que han sido anunciadas, pero que aun no han sido disfrutadas. La protesta proactiva suele ser una forma de acción colectiva más organizada y extensa, que sustituye la base comunitaria por otra asociativa (huelgas, manifestaciones, pronunciamientos, etcétera), y es la que más ha proliferado en los últimos dos siglos. Este tipo de violencia puede ser clasificado a su vez en palaciega (cuando persigue una simple sustitución de élites), reformista (que busca cambios parciales en algunas instituciones) o revolucionaria (cuando pretende un cambio absoluto del poder y de las instituciones sociales básicas).

La huelga, la manifestación, el terrorismo o la guerra de guerrillas pueden ser competitivas, reactivas o proactivas, o las tres a la vez, dependiendo de la intención de los actores, que puede dirigirse a varios objetivos a la vez. Pero el motín o la revuelta del hambre sólo pueden establecer demandas reactivas.

Así pues, el modelo político propuesto por Tilly toma en consideración las oportunidades que se ofrecen a los gru-

22 Charles Tilly, "Collective Violence in European Perspective", en Hugh David Graham y Ted Robert Gurr (eds.), *The History of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives. A Report submitted to the National Commission in the Causes and Prevention of Violence*, Nueva York, Bantam Books, 1969, pp. 89-100 y "Town and Country in Revolution", en John Wilson Lewis (ed.), *Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia*, Stanford, Stanford University Press, 1974, pp. 271-302 y Tilly, Tilly y Tilly, *The Rebellious Century (1830-1930)*, pp. 44-54. Hay que advertir que, a la hora de ensayar estas tipologías, Tilly ha utilizado indiscriminadamente los términos "contestación", "acción colectiva violenta" y "repertorios de acción colectiva".

pos en lucha, así como los riesgos de represión a los que se exponen durante el conflicto. La amenaza de una represión ejercida desde el poder político incrementa lógicamente el coste de entrada del grupo en la acción colectiva. A la inversa, el hecho de tener acceso al poder del Estado, en tanto que grupo integrado en el mismo, es una ventaja, ya que, en este caso, se está cubierto de una intensa represión política.

La evolución histórica de los repertorios de acción colectiva

Tilly consideraba la acción colectiva como un fenómeno vinculado al desarrollo del capitalismo y del Estado modernos. Los procesos de larga duración que están en la base de la acción colectiva son eminentemente históricos: urbanización, industrialización, construcción del Estado, aparición de asociaciones u organizaciones políticas a gran escala y desarrollo del capitalismo, con la consiguiente proletarianización de la fuerza de trabajo. En todas sus obras trata de establecer hipótesis sobre el modo en que se producen los cambios históricos y sus consecuencias, y diseñar los modelos generales de esa acción colectiva.

Las condiciones históricas hacen que un grupo social despliegue una conducta muy diversa, pero siempre dentro de un elenco definido y disponible de acciones. Sin embargo, la acción puede cambiar de fisonomía en función de interacciones continuas (lucha, colaboración, concu-

rrenia, o una mezcla de las tres) con los otros grupos —incluido, claro está, el gobierno—, y está sujeta a contagios espontáneos. Por ejemplo, si una particular forma de protesta se difunde rápidamente en otras latitudes puede ser porque la relación entre costes y beneficios (en concreto, la permisividad de las autoridades) ha cambiado a su favor. Así sucedió, por ejemplo, con las huelgas y las manifestaciones en el tránsito del siglo XIX al XX, o con la desobediencia civil a partir de la segunda posguerra mundial.

La clasificación convencional que Tilly hizo de los modos de la protesta nos pone en relación con los repertorios de acción colectiva, es decir, con las modalidades de actuación en común urdidas sobre la base de intereses compartidos, que se van redefiniendo y cambiando en el transcurso de la acción en respuesta a nuevos intereses y oportunidades, y que son interiorizadas por los grupos sociales tras un largo proceso de aprendizaje.²³ Para Tilly, un repertorio de acción colectiva es...

“... el conjunto de medios alternativos de acción colectiva en la consecución de unos intereses comunes [...] que incorpora un sentido de regularidad, orden y opción deliberada [...] estableciendo un modelo en el cual la experiencia acumulada —directa y vicaria— de los contendientes interactúa con la estrategia de las autoridades para hacer un número limitado de acciones más eficaces, atractivas y frecuentes que otras que, en principio, servirían los mismos intereses”.²⁴

23 Charles Tilly, *La France conteste de 1600 à nos jours*, París, Fayard, 1986, p. 541.

24 Charles Tilly, “Speaking your Mind without Elections, Surveys, or Social Movements”, *Public Opinion* (Oxford), nº 47, 1983, p. 463 y “European Violence and Collective Action in Europe since 1700”, *Social Research* (Nueva York), vol. 53, nº 1, 1986, p. 176.

Tilly señala que el concepto de repertorio es puramente explicativo, y que en su versión más “débil” es una metáfora usada para recordar que determinadas acciones colectivas son recurrentes, son reconocibles por los participantes o por los observadores, y tienen una historia autónoma. En su versión más “fuerte”, el concepto de repertorio equivale a una hipótesis de elección deliberada entre modos de actuación alternativos y bien definidos, donde tanto las opciones disponibles como la elección que realizan los que luchan cambian continuamente, en función de los resultados de las acciones precedentes. En su versión “intermedia”, la noción de repertorio explica un modelo en el que la experiencia acumulada de forma directa e indirecta interacciona con las estrategias de la autoridad, formando un número limitado de formas de acción más practicables y frecuentes de lo que pueden serlo otras formas que, en teoría, sirven para los mismos fines.²⁵ Estas modalidades de acción colectiva presentan varios niveles de complejidad: acciones individuales y puntuales, actuaciones (acciones múltiples en secuencias recurrentes), campañas (organización de múltiples actuaciones) y repertorios en sentido estricto (formación de actuaciones que pueden componer diversos tipos de campañas, pero que permanece muy limitada respecto a las acciones, actuaciones o campañas que los mismos actores tendrían la capacidad técnica de

producir).²⁶ Los repertorios cambian en función de las alteraciones en la estructura de oportunidades políticas, las identidades de los contendientes organizados y la historia acumulativa de las luchas colectivas. En cualquier momento de la Historia, los hombres sólo aprenden un número limitado de vías alternativas para actuar de forma colectiva. La acción colectiva se manifiesta a través de formas de protesta limitadas, definidas, eficaces y familiares para los participantes. Estos repertorios de protesta dependen, entre otros factores, de las costumbres y rutinas diarias de la gente, de la organización interna de la población, de su concepción del derecho y de la justicia, de la experiencia previa acumulada en anteriores acciones colectivas y de las prácticas de represión más habituales.²⁷ Normalmente, los contendientes innovan continuamente, pero en el marco restringido del repertorio existente. Muchas innovaciones fracasan y desaparecen, y sólo unas pocas se convierten a largo plazo en un repertorio independiente de acción. Ello, junto con las limitaciones de colaboradores o antagonistas, limitan las opciones disponibles de interacción colectiva, junto con un número de condiciones sociales (prácticas, leyes, rutinas símbolos...) que la canalizan en cierto grado. De modo que no se producen rupturas tajantes entre repertorios, sino que hay un período de invención, otro de consolidación y otro de expansión.

25 Charles Tilly, “Violencia e azione collettiva in Europa. Riflessioni storico-comparate”, en Donatella Della Porta y Gianfranco Pasquino (eds.), *Terrorismo e violenza politica*, Bolonia, Il Mulino, 1983, p. 69.

26 Tilly, *Popular Contention in Great Britain*, p. 43.

27 Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 156 y *La France conteste de 1600 à nos jours*, pp. 57-58.

La presencia prolongada de modos específicos de protesta es una fuerza importante en la innovación de la estrategia de la acción colectiva: lo que empezó como una táctica ilegal tiende a convertirse en una forma legítima e institucionalizada de acción política. La huelga o la manifestación como modalidades de protesta impuestas por el movimiento obrero son un buen ejemplo de ello: los trabajadores conocen cómo desarrollar un paro porque generaciones de obreros organizados lo han ensayado antes que ellos. En definitiva, el orden de la protesta es creado por el enraizamiento de la acción colectiva en las prácticas y en la organización de la vida cotidiana, y por su implicación en un proceso continuo de signos, negociaciones y luchas con otros rivales.²⁸

Por lo tanto, un repertorio de acción es un concepto a la vez estructural, cultural e histórico. Las razones que aduce Tilly para los cambios de repertorio son eminentemente históricas, y están vinculadas a la fluctuación de intereses, oportunidades y organización en relación con los cambios en las funciones y estructura del Estado moderno y el desarrollo del capitalismo a escala mundial. La forma, localización y ritmo de las luchas populares estuvo siempre en estrecha correspondencia con las características específicas de la formación estatal y el desarrollo capitalista en ese Estado nacional. En regiones eminentemente urbanas, el desarme de la población civil, así como el de los grupos rivales al poder estatal, se llevó a cabo a

través de negociaciones entre la autoridad central y la municipal, y se solventó organizando una fuerza distinta a la militar, y más preventiva que punitiva: la policía. Mientras tanto, en las regiones con escasa penetración del capital, el Estado hubo de afrontar la resistencia de los poderes tradicionales (nobles locales, clero, terratenientes, oligarquías urbanas), que fueron anulados mediante la cooptación, el soborno, la negociación o la violencia. En este último caso, también se produjeron cruentas guerras civiles. Además, en las regiones rurales, donde el comercio internacional era también escaso y el capital no se concentraba ni se acumulaba tan rápidamente, el Estado no precisaba de la negociación con capitalistas, y la lógica de la coerción dominó sobre la del capital.²⁹ Con el paso al dominio directo por parte del Estado, cuando controla todo el territorio que reclama para sí a través de una burocracia civil separada de la militar, en la que está incluida la fuerza policial, el resto de la población está desarmada, y se ha llegado a un grado de negociación susceptible de acción colectiva no violenta.

Tilly divide la historia de las sociedades europeas y de sus peculiares formas de acción colectiva en cuatro fases de formación del Estado: *patrimonialista* (cuando ni el Estado ni el capitalismo habían adquirido aún carta de naturaleza, y las formas de acción eran la guerra entre banderías locales, alborotos gremiales, batallas intercomunales o agresiones entre grupos religiosos), *de mecenazgo*

28 Tilly, *La France conteste de 1600 à nos jours*, p. 14.

29 Gloria Martínez Dorado, "Introducción: Temas y problemas de la sociología histórica", *Política y Sociedad* (Madrid), nº 18, enero-abril 1995, pp. 7 y 11.

(cuando la emergencia del Estado nación y del capitalismo en los siglos XV-XVIII condujo a una expansión física y competencial que provocó acciones reactivas por parte del pueblo y las antiguas autoridades o élites), *nacionalista* (cuando la consolidación de los Estados nacionales y el capitalismo entre 1700 y 1850 incrementó su capacidad expansiva e hizo aumentar su eficacia en la extracción de recursos,) y *de especialización* (de 1850 hasta nuestros días), caracterizada por la extensión de los servicios sociales y derechos políticos, así como por la exportación forzada del modelo político-económico europeo al resto del mundo. En esta última etapa aparecen nuevas formas de acción, con preeminencia de las luchas capital-trabajo y las tendentes a arrebatar al estado parcelas o espacios de poder.³⁰

Para Tilly, las rutinas de conflicto y de acción colectiva experimentaron una profunda transformación del siglo XVIII al XIX. Esta transformación ocurrió como resultado de una gran concentración de capital, un aumento sustancial y una alteración en el poder de los Estados nacionales y una serie de luchas que brotaron como respuesta a estos cambios.³¹ Desde 1600 hasta, aproximadamente, 1850, los agentes de los mercados internacionales y de los Estados ejercitaron cada vez con mayor eficacia su acción proactiva sobre los recursos bajo el control de innumerables organizaciones de pequeña escala (familias, comunidades, hermandades, gremios, etcétera), las cuales reaccionaron violentamente contra los impuestos,

el reclutamiento, la consolidación de la propiedad capitalista y otras amenazas para su supervivencia con el despliegue de un *repertorio tradicional de acción colectiva*. Hasta el siglo XVIII prevalecieron formas defensivas de desacuerdo, apoyadas en las anticuadas redes de la comunidad rural y en las organizaciones de artesanos, y que se basaban en teorías sobre derechos corporativos heredados y las responsabilidades de su justificación. Estas formas antiguas de protesta, caracterizadas por su carácter reactivo y violento, eran desplegadas por personas y organizaciones que habían perdido sus posiciones colectivas dentro del sistema de poder, y trataban de poner en cuestión las premisas básicas de un Estado y de un mercado nacionales. Los actores comunitarios se comportaban como “radicales instintivos”, hostiles a toda intrusión, y adoptaron un repertorio de acción relativamente fijo, prestado de las estructuras de autoridad existentes. Este viejo repertorio era rígido, parroquial (los intereses y la interacción se concentraban en una comunidad simple), localista (la acción se orientaba hacia objetivos y salidas locales antes que a preocupaciones nacionales), particular (las rutinas de acción variaban enormemente de formato en función de cada grupo, alternativa, localidad, etcétera), patronizado (sus demandas se dirigían a un líder o autoridad local, que podría representar sus intereses, reducir sus agravios, cumplir sus propias obligaciones, o autorizar a actuar), bifurcado (amplia separación entre la acción

30 Charles Tilly, *Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990*, Madrid, Alianza 1992.

31 Tilly, *Popular Contention in Great Britain*, p. 16.

dirigida a objetivos locales y las peticiones para la intervención de las autoridades establecidas cuando se tratan cuestiones nacionales) y directo, esto es, sin intermediarios.

La emergencia del capitalismo industrialista transformó las identidades e intereses de los principales contendientes por el poder, al igual que la forma de su acción colectiva. Uno de los grandes cambios de la historia europea durante los siglos XIX y XX fue el traslado masivo de estructuras de solidaridad hacia gobiernos, empresas, uniones o asociaciones especializadas que empleaban la coerción y las recompensas o incentivos materiales como acicates de actividades de alto riesgo, de fuerte implicación emocional y a largo plazo. Pero la tipificación de repertorios antiguos o modernos no presupone una mayor o menor eficacia de los mismos en su peculiar contexto histórico. Las herramientas sirven para más de un objetivo, y la eficacia relativa depende de la coordinación entre herramientas, tareas y usuarios. En todo caso, un nuevo repertorio fue apareciendo en el siglo XIX porque nuevos usuarios abordaron nuevas tareas y encontraron obsoletas las herramientas disponibles para resolver sus problemas en ese momento histórico. Pero ambos repertorios coexistieron por largo tiempo.

A medida que el grupo comunitario tradicional dio paso a la moderna asociación burocrática, los objetivos y las formas de acción experimentaron un significativo cambio. La dinámica de la industrialización desde el siglo XVIII

condujo a la radicalización de las formas tradicionales de protesta que subyacen a los estallidos revolucionarios de 1776-1848. Gradualmente fueron apareciendo nuevos tipos de acción colectiva, especialmente las huelgas y la actividad política masiva (electoral), basadas respectivamente en organizaciones sociales renovadoras, como el sindicato y el partido político. Los cambios fundamentales de repertorio implican un cambio en la lógica de los movimientos sociales, que derivan hacia desafíos más sostenidos y espectaculares contra la autoridad en nombre de poblaciones agraviadas o amenazadas. Los factores determinantes de esa metamorfosis hacia un *repertorio moderno de acción colectiva* fueron las fluctuaciones en la formación del moderno Estado nacional y en el avance del capitalismo industrial, junto a cambios no menos trascendentes, como el desarrollo de las organizaciones de gran escala, el auge del comercio, la mejora de las comunicaciones, el crecimiento del proletariado, etcétera.³² Esta mutación se produjo por la acción conjugada de los cambios en el aprendizaje, innovación y negociación en el curso de la propia acción colectiva, y por las alteraciones producidas en el entorno institucional (por ejemplo la supresión de las milicias por ejércitos acabaron con siglos de acción colectiva popular armada). Un ejemplo claro de esta interacción fue la legalización de las huelgas.

La aceleración de la urbanización y de la industrialización afectó profunda, pero indirectamente, al carácter e inci-

32 Tilly, *La France conteste de 1600 à nos jours*, p. 19.

dencia de la acción colectiva, ya que facilitó la implantación, gracias a superiores medios de comunicación y control, de los agentes del poder central, al tiempo que la gente se implicaba de manera más intensa en el mercado y en la política nacionales. En este complejo proceso, asociaciones especialmente cualificadas, como los partidos y los sindicatos, se transformaron en los más importantes instrumentos de lucha por el poder, ya fuera por medios violentos como no violentos.³³ A lo largo de los dos últimos siglos, estos fenómenos, junto a otros como el crecimiento de los medios de comunicación de masas, la centralización del poder político o la institucionalización de la democracia liberal, redujeron los costes de la movilización y de la acción colectiva a gran escala, haciendo a las estructuras burocráticas más vulnerables frente a los movimientos que pudieran concitar un amplio volumen de apoyos, y estuvieran dispuestos a actuar en el escenario político nacional para contender por el control y la organización del Estado y de la economía.³⁴ Tilly considera que, al menos en Gran Bretaña, este cambio de repertorio se debió a cuatro procesos convergentes: 1) la nacionalización y la parlamentarización de la actitud contenciosa; 2) los cambios en el sistema capitalista que debilitaron los lazos de patronazgo y las organizaciones corporativas tradicionales; 3) la dinámica de la población (migración, urbaniza-

ción, creación de amplias organizaciones productivas) que generó ventajas políticas para crear, manipular o influir a asociaciones y asambleas más eficaces para la coordinación de actividades, y 4) como consecuencia de los anteriores, se produjo la acumulación de una serie de creencias compartidas, memorias, modelos, precedentes y lazos sociales que reforzó el uso de asambleas, marchas, peticiones, asociaciones especializadas, etcétera.³⁵

Cuando triunfaron las grandes estructuras estatales, las formas de protesta reactiva, basadas en los pequeños grupos de solidaridad, entraron en declive, y los recursos quedaron bajo control de los gobiernos. La consolidación de un Estado nacional, que contaba con importantes medios de coerción, implicó una gestión creciente de los recursos de un territorio por parte de una organización burocrática, centralizada y coordinada, que procedía a su redistribución bajo la presión de nuevas reclamaciones.³⁶ El desarrollo de un Estado con estas características generó tres conflictos esenciales: litigios sobre la apropiación de los recursos de la población dominada por parte de los Estados y otras organizaciones (hogares, municipios, empresas, comunidades); concurrencia con otros gobiernos o aspirantes a gobierno para disponer de la población, la tierra o los bienes, y disputas entre las organizaciones vinculadas al Estado para disponer

33 Tilly, "Collective Violence in European Perspective", 1969, p. 107.

34 Tilly, "Collective Violence in European Perspective", 1972, p. 350.

35 Tilly, *Popular Contention in Great Britain*, pp. 365-367.

36 Tilly, *La France conteste de 1600 à nos jours*, p. 18. Sobre esta cuestión, vid. también TILLY, *Coerción, capital y los Estados europeos*.

de los recursos bajo su control. Por su parte el desarrollo del capitalismo provocó tres modos básicos de contestación: la oposición del trabajo y el capital (huelgas); la rivalidad entre los capitalistas y los aspirantes a controlar los bienes y factores de producción (revoluciones), y la competencia en el interior de los mismos mercados (guerras y luchas políticas).³⁷ El moderno repertorio de acción se fue difundiendo desde fines del siglo XVIII a través de la expansión de la comunicación impresa, el desarrollo de las asociaciones privadas y la construcción del Estado nacional, con su cortejo de destrucción de los cuerpos intermedios y de reducción de la autonomía local. Era un repertorio general en vez de específico, flexible y modular (usaba las mismas formas de acción sobre un amplio abanico de casos), cosmopolita (cubría un amplio elenco de objetivos y procedimientos de orden nacional, no local), de ámbito nacional, autónomo respecto de los poderosos (los participantes desarrollaban los objetos de su protesta en su propio nombre por vía de interlocutores salidos de sus propias filas, y no por la intercesión de patronos), homogéneo e indirecto. El nuevo repertorio aparecía estrechamente relacionado con los procesos electorales y la actividad política general, y no era dirigido por grupos forjados en el fragor del combate, sino por asociaciones más formalizadas (partidos o sindicatos) y moderadas, que perseguían objetivos concretos con arreglo a un programa preciso, y que trataban de maximizar las

ganancias en un marco político concreto, a través de estrategias de acción menos rígidas. La flexibilidad del nuevo repertorio venía marcada por su carácter modular: los diversos tipos de lucha (mítnes, reuniones, manifestaciones, huelgas, barricadas, insurrecciones urbanas planificadas por grupos revolucionarios, etcétera) se centraban en unas pocas rutinas clave de confrontación, podían ser esgrimidos por una gran variedad de actores en muy diversas circunstancias, y sus elementos podían combinarse en grandes campañas de acción colectiva y ser aplicados a una gran variedad de objetivos en solitario o en combinación con otras formas de acción colectiva. Este repertorio, que comenzó a generalizarse durante el siglo XIX, tiende a producir menos violencia que sus predecesores. Las luchas por el derecho de asociación, por la creación de organizaciones y partidos, por el derecho al voto, para hacer huelgas y asambleas legales hablaban en general en favor de la resolución no violenta de los conflictos.

Crítica y conclusión

Los trabajos de Tilly son los que, hasta la fecha, ofrecen la mejor síntesis interpretativa de las estructuras y los procesos sociales que desembocan en una acción colectiva de protesta, y los que han integrado con más fortuna la agencia humana dentro de un marco de análisis estructural. Las conclusiones básicas de sus investigaciones empíricas se pueden resumir de la siguiente manera:

37 Tilly, *La France conteste de 1600 à nos jours*, pp. 20-21 y 550.

1. Los cambios que denominamos modernización no tienen efectos uniformes en el nivel, foco, forma y ritmo del conflicto político.
2. A corto plazo, la urbanización y la industrialización suelen deprimir el nivel de conflicto.
3. La urbanización y la industrialización pueden, sin embargo, estimular el conflicto cuando absorben recursos de grupos establecidos (artesanos, por ejemplo) que conservan su organización interna.
4. La emergencia del capitalismo industrial transforma las identidades y los intereses de los principales contendientes por el poder, al igual que la forma de su acción colectiva.
5. La frecuencia y resultado del conflicto depende en gran parte de la actitud que adopte el Estado.³⁸

La propuesta de conflicto político presentada por Tilly resulta de gran interés por la atención especial que dispensa al proceso dinámico (interacciones entre grupos), y por su explicación lógica de la acción colectiva como un fenómeno condicionado por la movilización de recursos, la organización y los fines políticos que persiguen los grupos y organizaciones sociales. Tanto la movilización de recursos como las perspectivas del proceso político sitúan a los movimientos sociales directamente en el dominio de la acción política. Los cambios

estratégicos en la lucha por el poder explican las tendencias de la acción colectiva mejor que las hipótesis de la crisis social o económica. Esta atención por lo organizativo, lo estratégico, por la acción del Estado y por la influencia del cambio histórico aleja al paradigma de la acción colectiva de los modelos estructural funcionalistas, que prestaban escasa atención a los medios y fines políticos de la violencia, y consideraban el Estado como un mero instrumento del consenso social. En contraste, le aproxima tenuemente a los argumentos del marxismo, que siempre ha otorgado suma importancia a la articulación política del descontento social, y ha considerado al Estado como coacción organizada.³⁹ Para Tilly, en efecto, el Estado es un instrumento de coerción controlado por los grupos afines, pero parece olvidar que hay tipos muy diversos de formaciones estatales que pueden influir de forma muy diferente sobre la acción colectiva. Las críticas más agudas que se pueden formular a sus hipótesis sobre la contienda política y la violencia procedieron del campo de análisis funcionalista: autores como Piven y Cloward pusieron en duda que la protesta y la violencia fueran actividades políticas tan «normales» como las campañas o las reuniones electorales. En su opinión, eran acciones que ocurrían en diferentes contextos institucionales y a las que debían aplicarse diferentes normas de actuación.⁴⁰ Lynn Hunt reprochó

38 Tilly, Tilly y Tilly, *The Rebellious Century (1830-1930)*, pp. 83-86.

39 David Snyder, "Collective Violence. A Research Agenda and some Strategic Considerations", *Journal of Conflict Resolution* (Beverly Hills-Londres), vol. XXII, nº 3, septiembre 1978, p. 502 y Theda Skocpol, *Los estados y las revoluciones sociales*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 38 y 55.

40 Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, "Collective Protest: A Critique of Resource Mobilization Theory", *International Journal of Politics, Culture and Society* (Nueva York), vol. IV, nº 4, 1991, pp. 435-458.

a Tilly que sus hipótesis a veces no se derivasen correctamente de la literatura teórica, y que las implicaciones de sus investigaciones empíricas a veces no se especificasen correctamente, como por ejemplo la relación entre la capacidad de coerción y el tamaño de una organización. De hecho, Tilly siempre pareció minusvalorar la acción procedente de los ámbitos local e internacional sobre el nacional, que aparece como el entorno casi exclusivo del nacimiento, el desarrollo y el declive de las protestas multitudinarias. Hunt concluía que las hipótesis nuevas o reformuladas por nuestro autor a veces no eran mejores que las que pretendía reemplazar.⁴¹ Theda Skocpol criticó a Tilly que convirtiera las teorías socioestructurales en sociopsicológicas, al centrarse en analizar a los actores, frente a su propia propuesta de investigar las condiciones estructurales que permitían que esa acción fuera posible, y que consideraba al Estado como un actor más, no como el factor determinante por su fortaleza o debilidad.⁴² En Tilly, el Estado aparece exclusivamente como un instrumento de coerción controlado por los grupos afines, y parece obviar que hay tipos muy diversos de formaciones estatales que pueden influir de forma muy diferente sobre la acción colectiva.

A la altura de 1984, Tilly creía que ninguna teoría de la solidaridad-movilización poseía el apoyo empírico necesario para resultar decisiva, y llegó a

afirmar que “aún es posible que un sofisticado argumento sobre la contingencia que implique a unos actores concedores de sus derechos e intereses, pero acosados por unas circunstancias extraordinarias, sea capaz de ofrecer una explicación de la violencia colectiva y de otras formas de conflicto mejor que cualquier argumento que considere la violencia y el conflicto como subproductos rutinarios de la vida política”.⁴³ Al final de su vida, seguía haciendo un balance muy autocrítico de su trabajo personal:

“En verdad, nunca desarrollé una “teoría” de las movilizaciones colectivas, pero he trabajado en su explicación a lo largo de toda mi carrera. No describiría mis ideas recientes como resultantes de la incorporación de dimensiones culturales. Diría más bien que he prestado más atención a las dinámicas relacionales en sus múltiples escalas”.⁴⁴

Con todo, los trabajos de Tilly han tenido y tienen un enorme influjo entre los científicos sociales preocupados por el cambio no pautado, al ofrecer la síntesis interpretativa más completa de las estructuras y los procesos sociales que desembocan en una acción colectiva de protesta, integrando con fortuna la agencia humana dentro de un marco de análisis preferentemente estructural. Su propuesta de análisis del conflicto político resulta de gran interés por la aten-

41 Hunt, “Charles Tilly’s Collective Action”, pp. 257-258.

42 Skocpol, *Los estados y las revoluciones sociales*, pp. 31-33.

43 Tilly, *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*, p. 73.

44 Ángela Alonso y Nadya Araujo Guimarães, “Entrevista con Charles Tilly”, *Tempo Social* (São Paulo), vol. 16, nº 2, noviembre 2004 [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt].

ción que dispensa al proceso dinámico (interacciones entre grupos), y por su explicación lógica de la acción colectiva como un fenómeno condicionado por

la movilización de recursos, la organización y los fines políticos que persiguen los grupos y las organizaciones sociales.

Sectores medios y ciclo de protesta antineoliberal ecuatoriano: El caso de la Unión Nacional de Educadores*

David Suárez, Lama Alibrahim, Miguel Ruiz¹

La Unión Nacional de Educadores (UNE) es una organización gremial que representa a los maestros de la educación primaria y secundaria. En las diversas fases del período neoliberal mantuvo la cohesión gremial y desplegó sus repertorios de protesta, principalizando la huelga como mecanismo de movilización su capacidad de mantener una amplia base de afiliados se debe a una extensa red organizativa que ha sabido promover las demandas del magisterio junto a un vínculo político con el Movimiento Popular Democrático.

Introducción

En el presente artículo describimos un aspecto importante del ciclo de protesta antineoliberal desatado a mediados de los noventa en el Ecuador: la acción colectiva de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Ya que uno de los principales planteamientos del trabajo es que el grueso de esos sujetos (y en particular su dirección política) está compuesto por miembros de la vulgarmente llamada “clase media”,² el primer apartado reco-

ge de forma breve el debate teórico sobre dicha categoría, también expone la suerte que han corrido los sectores medios bajo el patrón de reproducción de capital de tipo neoliberal que se desarrolló durante los ochenta y noventa en el Ecuador. Más adelante, en el cuerpo central del artículo, presentamos algunas de las principales características de dichos actores de acuerdo con la propuesta de Sydney Tarrow (2004): sus repertorios de acción (segundo apartado); sus estructuras de movilización (tercer apartado) y sus marcos culturales (cuarto apartado),

* Este artículo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación colaborativo entre el Instituto de Estudios Ecuatorianos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, con el apoyo de Ayuda Popular Noruega, Intermon Oxfam y el Ministerio de Cultura del Ecuador.

1 Originalmente este trabajo formó parte de un artículo más extenso sobre sindicalismo y clases medias que los autores escribieron en el marco del Proyecto *Políticas de la Memoria y Descolonización en el Ecuador Bicentenario (1809-2009)*, Ministerio de Cultura-FLACSO Ecuador, durante 2009.

2 Utilizaremos los conceptos de “clases medias” y de capas o sectores medios indistintamente; aunque nos parece más adecuado este último, por lo que explicaremos a continuación.

durante el período que consideramos fue un *ciclo de protesta antineoliberal*. Finalmente, se presentan unas breves reflexiones a modo de conclusión.

1. Sectores medios y patrón de reproducción neoliberal

Es importante aclarar desde el comienzo que, cuando hablemos de “clases medias” nos referiremos no a clases sociales propiamente dichas, sino a capas de la población que son parte o fracciones de una de las dos clases fundamentales de la sociedad moderna: la burguesía y el proletariado (Osorio, 2001).³ Siguiendo a Meza, podemos afirmar que las capas medias están compuestas de tres grandes tipos de grupos sociales:

a) A su más alto nivel está la pequeña burguesía (pequeños propietarios de medios de producción, profesionales independientes), que tiende a absorber al conjunto de las viejas profesiones liberales (médicos, abogados, ingenieros). A su lado, se hallan los llamados “tecnócratas”, es decir los administradores del capital (funcionarios públicos encumbrados, asesores políticos de estos funcionarios, gerentes, administradores de empresas públicas o privadas).

b) A su nivel más bajo, los trabajadores asalariados manuales del llamado sector de servicios: la mayoría de los empleados, y los egresados de los centros

de capacitación técnica, etcétera.

c) Entre uno y otro extremo se hallan las capas medias de la población propiamente dichas. Forman parte de esta otra capa de la población los egresados de las escuelas de enseñanza media y superior. Se sitúa aquí a los técnicos, a los profesores, a una considerable cantidad de profesionales, a los cuadros medios de la administración y del comercio, a los encargados de las oficinas de estudios y planeación, a los agentes de ventas, a todos los “expertos” que, de alguna manera, navegan entre las aguas de los organismos internacionales y las secretarías de Estado.

Es decir, las “clases medias” están compuestas por algunas capas o fracciones tanto de la pequeña burguesía, como del proletariado, fundamentalmente. En este artículo nos referiremos principalmente a un subgrupo particular de los sectores medios: aquél que está conformado por los trabajadores públicos. Al interior de este conglomerado también hay diferencias importantes. Siguiendo la clasificación de Osorio (2001), un pequeño grupo de éstos pertenece (por sus calificaciones profesionales, su papel estratégico en el proceso de trabajo, y por la parte de la riqueza social que devengan bajo la forma de salario) a la pequeña burguesía no propietaria.

Por otro lado se encuentra la gran mayoría de los empleados públicos que -

3 Fundamentales (que no únicas) en el sentido que le daba Marx: aquellas clases hacia las que tiende a agruparse la humanidad con el desarrollo del capitalismo a escala planetaria. Para una aproximación metodológica contemporánea desde el marxismo latinoamericano al tema de las clases sociales puede consultarse Osorio (2001: 100 y ss.), quien distingue cinco clases principales, una de ellas con dos subtipos: a) proletariado; b) pequeña burguesía (propietaria y no propietaria); c) campesinado; d) burguesía; e) terratenientes. Para una visión global sobre el proceso de proletarianización de la humanidad a escala planetaria, cfr. el sugerente ensayo de Harman (2002).

nes, por las tres características arriba señaladas, pertenecen al proletariado propiamente dicho; pero un proletariado con condiciones de vida relativamente mejores que el grueso de los trabajadores manuales tanto públicos como privados. Es decir, con seguridad social, salarios medios, y cierto nivel de instrucción escolar.⁴

Cuando hablemos de sectores o “clases” medias a lo largo del artículo, tendremos como referente principal no a una clase social como tal; ni siquiera a la totalidad heterogénea y contradictoria de esas capas, sino a un grupo especial de las mismas, el cual también está diferenciado social y políticamente a su interior. Pues, como bien señala Meza, la heterogeneidad de las capas medias es tal que “en el interior de cada una de las fracciones que la constituyen, jerarquías, privilegios, carencias o deseos lo dividen todavía más.” (Meza, 1975: s.p.)

Como señala Hernán Ibarra (2008) sobre los sectores medios, “*Exceptuando escasas referencias ocasionales, las clases medias han sido ignoradas en las ciencias sociales ecuatorianas*”. Salvo un estudio pionero de Oswaldo Díaz de tipo cuantitativo de comienzo de los sesenta (como se cita en Ibarra, 2008), la literatura académica sobre los sectores medios ecuatorianos es prácticamente inexistente.

Por esta razón, en este apartado nos limitaremos a retomar algunas de las principales tesis del artículo de Ibarra. El acento de este autor está puesto en la situación de *ambivalencia y contradicción*

en que se encuentran ubicados los sectores medios respecto a las clases dominantes y su ideología, y a los sectores populares y sus demandas y luchas. Así, los sectores medios, “Pueden incidir en la modificación de las reglas del juego con intervenciones que pueden llevar conquistas políticas y sociales (...) En otras circunstancias, podían defender el orden establecido cuando se percibían amenazas a la estabilidad” (2008: 37). O, como asevera más adelante “Para las clases medias procedentes de las clases populares está tanto la necesidad de encontrar un sitio cerca a los dominantes, pero también una solidaridad hacia su antiguo lugar de origen” (2008: 39). En síntesis, su situación estructural las ubica en un “juego contradictorio entre la disidencia y el acomodo al sistema” (2008: 39).

Otra de las consideraciones de Ibarra se refiere a la “herencia” social o extracción de clase de las actuales capas medias; es decir, cuál era la clase a la que pertenecían sus padres y el contexto bajo el cual crecieron. En particular, Ibarra sostiene la tesis de que fracciones importantes de las nacientes clases medias de la década de los sesenta crearon o se articularán, de modo más o menos orgánico, a organizaciones políticas que expresaba las demandas de las clases subalternas, particularmente los partidos de izquierda. La característica principal que encuentra Ibarra en esta actitud de acercamiento con “los de abajo” fue su permanente intento por *representarlos, proveerlos de discurso y liderar su organización*. Sin embargo, al hacerlo, no pa-

4 En la clasificación que hacen Portes y Hoffman, este grupo pertenece al “proletariado formal no manual” (Portes y Hoffman, 2003: 14–15).

recían renunciar a sus privilegios de clase. Por el contrario, “mientras promovían las demandas populares, también mejoraban de paso sus propias condiciones de vida mediante la intervención del Estado” (2008: 46).

La expresión de la ambivalencia típica de estos sectores se manifestó, durante buena parte de los sesenta y setenta, en la articulación compleja de un modo de *reproducción material* anclado en su participación en el aparato estatal (como en el caso de los médicos, profesores, abogados, etcétera) y un acercamiento *político-ideológico* de algunas de sus fracciones a las demandas y luchas de las clases populares.

Sin embargo, el proceso de ensanchamiento de las clases medias ecuatorianas no duraría por mucho tiempo. Algunos estudios estadísticos, como *Transformación ocupacional y crisis social en América Latina* de la CEPAL, y citado por Ibarra, nos muestran que esa situación de expansión y movilidad ascendente de las clases medias latinoamericanas de los 60 y 70, “entró en una fase crítica en las décadas de 1980 y 1990 sobre todo por el impacto de las políticas de estabilización y los parciales ajustes que deterioraron la capacidad de intervención del Estado, afectando el crecimiento del empleo público” (Ibarra, 2008: 56). A las decrecientes remuneraciones y menores puestos de trabajo en las instituciones públicas le acompañó un incremento de los sectores medios dependientes del mercado y la empresa

privada: “El segmento asalariado de las clases medias, conformado por maestros, empleados públicos y militares, creció notablemente en la época petrolera, pero se deterioraron sus condiciones de vida con los ajustes de los años noventa” (Ibarra, 2008: 58).⁵ En este mismo sentido, Ibarra sostiene que la era de los ajustes estructurales arrojó una creciente heterogeneidad de las clases medias: unas más ligadas a los intereses y estilos de vida de las clases dominantes (clases medias altas); otras con mayores vínculos con los sectores populares (clases medias bajas). De estas últimas, sostiene: “Estas capas medias constituidas por trabajadores asalariados del sector público, empleados de oficina, transportistas, profesionales y cargos intermedios en la esfera productiva y los servicios mantienen lazos con los sectores populares de los cuales parcialmente provienen” (2008: 59). Este caso es claramente el cual se inscribe buena parte de la base de la Unión Nacional de Educadores, como veremos más adelante.

Esta nueva situación estructural de los sectores medios, enmarcada en la crisis de horizonte utópico de la izquierda mundial, y acompañada por la emergencia de un nuevo discurso y agenda transnacional que privilegió las demandas de la “sociedad civil” por sobre las antiguas agrupaciones de la clase trabajadora (sindicatos y partidos), se tradujo en la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones de derechos humanos que se convirtieron en los

5 Según datos de la OIT, entre 1990 y el 2005 los trabajadores del sector público pasaron de 17.8% a 10% respecto del total del empleo formal, mientras que los trabajadores de las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas pasaron de 26.9% a 32.2%. (OIT citada en Viteri, 2008).

nuevos espacios de vinculación de las fracciones de los sectores medios históricamente ligados a la izquierda, con un nuevo marco de enfoque y gestión de las demandas populares. Este proceso no fue ajeno a la propia crisis que atravesaron tanto en el ámbito estructural como en el político-organizativo los sectores subalternos, particularmente los urbanos.

Finalmente, queremos rescatar una tesis sugerente de Pablo Ospina sobre el papel de los sectores medios en el despliegue de las protestas recientes:

Estos sectores fueron siempre una fuerza pequeña pero decisiva a la hora de gestar procesos organizativos duraderos y generar liderazgos estables. Pero, además, cumplen otro papel crucial: “universalizan” las demandas populares. Es decir, operan como mediadores entre las demandas particulares e inmediatas que suelen formular los sectores populares y los requerimientos del Estado y de la “opinión pública” (es decir, del escenario político), en cuyo doble territorio, esas demandas debían ser convertidas en fórmulas políticas universales si

esperaban convertirse en propuestas de transformación más duraderas y estructurales (Ospina, 2009: s.p.).

Para dicho historiador, “estos sectores medios antes radicalizados lograron afirmar en la última década un protagonismo político autónomo cada vez más importante. Lo tuvieron ante todo en la caída de Abdalá Bucaram (febrero de 1997), y de modo aún más decisivo, en la de Lucio Gutiérrez (abril de 2005).”⁶ Sin embargo, creemos que es importante precisar que solo ciertas fracciones de tales capas medias fueron las que lograron, en ciertas coyunturas específicas, elevar algunas demandas que Gramsci identificaba como de tipo “económico-corporativo” (“particulares e inmediatas”, en palabras de Ospina) en demandas que pusieron en cuestión la dirección del proyecto estatal.⁷ Justamente lo que intentaremos mostrar es cómo la experiencia de la UNE articuló en diferentes momentos y grados luchas por sus intereses “económico-corporativos” con luchas de carácter más amplio

6 Ospina recomienda algunos textos de consulta sobre la “rebelión de los forajidos” y el protagonismo de las clases medias en esa coyuntura: el Dossier de la revista *Iconos* No. 23, Quito: FLACSO. Septiembre de 2005, pp. 19–108; P. Ospina. El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento. *Ecuador Debate*. No. 65. Quito: CAAP. Agosto de 2005; Franklin Ramírez (2005) *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*, Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD–Terranueva–AbyaYala.

7 Recordemos que, para Gramsci, el espacio de la disputa propiamente política de una sociedad tiene tres momentos principales, de acuerdo al grado de conciencia y organicidad que los subalternos logran en el desarrollo de sus luchas: el primero es el momento económico-corporativo: necesidad de organización del grupo profesional al que se pertenece.

El segundo es aquel en el que se alcanza la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros de un grupo social, pero todavía en el campo económico. En este momento se plantea el problema del Estado, pero sólo en tanto búsqueda por alcanzar igualdad jurídico-política con los grupos dominantes: derecho a participar en la legislación, la administración; a lo mucho de reformarlas, pero dentro de los marcos existentes.

El tercer momento es aquel en el que se alcanza conciencia de que los intereses propios superan el círculo económico-corporativo y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados (Gramsci, 1999: 36–37).

en donde se disputaba el sentido del Estado-Nacional.

2. La experiencia de acción colectiva de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en el ciclo de protesta antineoliberal

Siguiendo a Tarrow, entendemos a las *oportunidades políticas* como las “dimensiones consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales– del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente.” (2004: 25). Tarrow pone el énfasis en las circunstancias y recursos *exteriores* al grupo, que le sirven de marco para el desarrollo de sus *repertorios de acción*. Éstos últimos son el conjunto de formas particulares que los movimientos emplean durante las protestas, y que pueden ser “heredadas o infrecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o parte de campañas concertadas. Pueden estar vinculadas a temas que o bien están inscritos en la cultura o se inventan sobre la marcha, o –más frecuentemente– fusionan elementos convencionales con nuevos marcos de significado” (2004: 47). Así, oportunidades políticas y repertorios de acción no son dos dimensiones aisladas de la protesta social, sino que forman un tejido complejo donde unas (las oportunidades) sirven de marco a las otras (estrategias); y estas últimas suelen abrir nuevas oportunidades para continuar las luchas o ampliar los horizontes de la acción política.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) constituye la expresión gremial de los docentes ecuatorianos. Ha sido catalogado como uno de los sindicatos más poderosos del país en virtud de su capacidad de movilización y la magnitud de

su base gremial que representa el sindicato más grande de la nación. De acuerdo a los datos del 2009, 120.000 maestros de educación básica y media se encontraban afiliados a la UNE tras ratificar su consentimiento expreso de pertenencia a la organización.

Los orígenes de la UNE están ligados a la inusitada emergencia de organizaciones de masas gestadas al calor de los efectos de la rebelión de la Gloriosa, acaecida a mediados de la década del cuarenta del siglo anterior, cuyo impulso logró tornar constituyente la movilización popular en rechazo al régimen de Arroyo del Río. La UNE comparte su acta bautismal conjuntamente con la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE). Empero, no es sino hasta la década del setenta que la UNE registra procesos de movilización social que rebasan el marco de acción puramente gremial y suponen la toma de postura en la arena política nacional. Dicho proceso, sucede ante todo durante los últimos años de la dictadura militar, cuando los sectores populares movilizados intentan disputar el sentido de la contienda política generada en torno al “retorno democrático” cuyos contornos parecían estar limitados a la restitución de un régimen constitucional y la modernización del viejo sistema de partidos. El sentido político al que aspiraban las fuerzas de izquierda radical y los sectores populares apuntalaba a desarrollar un contenido “radical” alrededor del programa democrático que asociara a este último con mayores niveles de redistribución de la riqueza y justicia social.

La investigación que sirve como base del presente documento efectuó una

revisión del accionar de la UNE a lo largo de las dos últimas décadas (1992 - 2009, para ser exactos) y halló que la capacidad de acción colectiva – entendida como proceso de movilización social - de la UNE registra una curva ascendente desde finales de los años ochenta hasta el año 2003 en donde se produce un gradual decrecimiento de la capacidad de acción colectiva acompañada por una menor gravitación del sindicato en temas de incidencia política directa.

La onda ascendente está relacionada a los impactos que acarreó la política de ajuste estructural sobre las condiciones de reproducción y niveles de percepción del ingreso nacional de los docentes ecuatorianos y más generalmente de los sectores “medios” de la población. En términos cualitativos, las políticas de corte neoliberal supusieron un franco declive de los procesos de movilidad y ascenso social que lograron las capas medias en el marco del modelo de acumulación previo, vinculado a una tibia redistribución de la renta petrolera sobre todo entre los sectores medios, enmarcada en las políticas de aliento al mercado interno para dinamizar la fallida política de industrialización por sustitución de importaciones. Dichos mecanismos de promoción social efectivos, dentro del proceso que Ibarra – citando a Díaz – denomina como *ascenso de las clases bajas a las clases medias* (Ibarra, 2008: 54), sufrieron un grave revés expresado tanto en la crisis de la educación pública como en el descenso de la participación de los asalariados en el ingreso nacional. No es extraño, por tanto, que las acciones desplegadas por la UNE durante el período en estudio se hayan concentrado de ma-

nera profusa en reivindicaciones de corte salarial en tanto estas reivindicaciones constituyen mecanismos de defensa básicos frente al auge de las políticas de austeridad propulsadas como parte del ajuste estructural.

En este sentido, cabe enunciar tres períodos sustanciales del proceso de movilización y acción colectiva de la UNE en estos años: a) el período comprendido entre 1992 -1997 en el que podemos observar un redoble de la acción colectiva en torno a la puja salarial, la aprobación de leyes que institucionalicen la carrera docente y la oposición a los proyectos de privatización de la educación pública contemplados en los programas gubernamentales en consonancia con las políticas del Banco Mundial; b) el período comprendido entre 1997 – 2003 en donde se registra un ascenso de la movilización social correlativa a las crisis del bloque dominante que permite desarrollar una combinación de luchas gremiales con las luchas políticas mucho más evidente; c) el período 2003-2005 registra un gradual descenso de la acción colectiva – la misma que perduraría en su forma más recurrente de paro nacional de maestros hasta el 2003 – y da cuenta de un escenario político caracterizado por la fragmentación y dispersión del bloque social compuesto por indígenas, sindicatos, estudiantes y maestros que, desde distintos preceptos organizativos y políticos, convergió en la resistencia contra el neoliberalismo.

La Acción Colectiva durante el período 1992 -1997

Tras una intensa activación de la conflictividad docente durante la administra -

ción de Rodrigo Borja,⁸ el régimen conservador de Sixto Durán Ballén - de la mano de un discurso que enfatizaba en la modernización liberal, la austeridad y el principio de autoridad del Estado - impulsó las llamadas reformas estructurales de segunda generación cuyos objetivos apuntaban entre otros a la adecuación del sistema público - estatal al contexto de economía libre de mercado.

En este sentido, la administración de Durán Ballén desarrolló una propuesta de reforma al sistema educativo inspirada en las políticas al uso del Banco Mundial. La intención fue descentralizar el sistema educativo nacional y otorgar la responsabilidad de la "prestación de servicios educativos" a la débil y empobrecida estructura de municipalidades local, la misma que por las severas restricciones presupuestarias no habría tenido otra opción que delegar dicha "prestación de servicios" al sector privado. La medida fue resistida con fuerza por los educadores, los mismos que mostraron una rotunda oposición a la propuesta a la que catalogaron de privatizadora y constituyó un eje de su plataforma de movilización, aunque siempre combinada con reivindicaciones de corte salarial. La segunda propuesta de la reforma educativa contemplada fue el rediseño del currículo educativo el mismo que se desarrolló con menores obstáculos debido en gran medida a la escasa incidencia política que alcanzó la UNE en este tema. Al parecer, de acuerdo al testimonio de algunos dirigentes gremiales, la necesidad de

elaborar una propuesta para la educación por parte de los docentes, recién comienza a sentirse tras este período.

En este período, la acción colectiva del sindicato tuvo tres momentos importantes; en primer lugar, la participación de la UNE en el Paro Cívico Nacional convocado para mayo de 1993 por parte del "Comité Unitario Indígena Sindical", el mismo que representaba la instancia de coordinación de acciones por parte de sindicatos públicos, FUT, estudiantes, campesinos y el movimiento indígena. El paro fue en rechazo a las políticas económicas del régimen y logró paralizar las urbes y ciertas zonas de la Sierra Centro Sur y Norte.

El segundo momento, en el que el protagonismo de la Unión es mayor, se desarrolla en torno a la ratificación de la Ley de Carrera Docente acordada con el gobierno anterior y que la administración de Durán Ballén puso en duda por suponer un obstáculo al esquema de descentralización de la educación. En octubre de 1993, la Unión sostuvo una de las huelgas nacionales más prolongadas de la historia nacional, cerca de 100 días de paralización de las actividades educativas en procura de la ratificación de la Ley de Carrera Docente y el incremento de hasta un 50% en la estructura de salarios. (Guerrero-Blum, 2005: 82)

Ante la inédita prolongación de la huelga el Gobierno Nacional optó por una salida represiva al combinar la cancelación de maestros con la firma de un inverosímil Decreto de Movilización que

8 Se llegaron a contabilizar 14 huelgas de maestros a nivel nacional durante el período de Rodrigo Borja.

ordenaba a las fuerzas armadas tomar a su cargo los planteles educativos y reemplazar a los maestros con soldados.⁹

La respuesta de la UNE fue radicalizar la protesta mediante el despliegue de una huelga de hambre a nivel nacional que impactó profundamente en la opinión pública sobre todo cuando parte del repertorio de acciones para visibilizar la protesta estuvo constituido por acciones de corte dramático como la decisión de algunos docentes de “coserse la boca” en rechazo al citado Decreto de Movilización y la cancelación de maestros. Finalmente, el paro se zanjó con una negociación en la que el Gobierno Nacional aceptó revisar los salarios conforme a la propuesta de la UNE y dar marcha atrás en la cancelación de maestros.

Un nuevo momento del conflicto estalló a mediados de 1995, cuando el Gobierno de Durán Ballén presentó una propuesta de ley para impartir, de manera oficial, clases de religión en los colegios. La UNE declaró su oposición con movilizaciones en las calles. Paralelamente, tendió alianzas con padres de familia, partidos de izquierda, estudiantes y sindicatos, que confluyeron en la formación del Frente Nacional de Defensa del Laicismo. El nivel de movilización, y la polémica que generó en la opinión pública este Frente, forzó al Gobierno a retirar dicha propuesta de Ley del Congreso Nacional. Otras acciones relevantes generadas en este proceso tienen que ver con la participación de la UNE en el campo de la defensa de la educación pú-

blica. La oposición a la municipalización de la educación cobró fuerza desde finales de 1995 y principios de 1996, cuando el Frente de Defensa del Laicismo amplió la discusión sobre el carácter privatizador del proyecto. En ese mismo período, las movilizaciones de los maestros conquistaron alzas de 15% al salario mínimo vital y de 28% por un máximo de tres cargas familiares, al tiempo que se logró bloquear la propuesta de municipalización de la educación.

Acción Colectiva del Período 1997-2003

El período de ascenso de la acción colectiva de la UNE está caracterizado por el estallido de una crisis al interior del bloque dominante y el creciente protagonismo que muestra el movimiento indígena en alianza con el sindicalismo público y pequeños movimientos de sectores urbano-populares.

En este marco, la acción de la UNE tiende a combinar de manera más directa las demandas reivindicativas propias del gremio con la impugnación política a los diferentes gobiernos (cinco en total) que se sucedieron a lo largo de este lapso. Del mismo modo, la coordinación con actores sociales afines, los sectores ligados al denominado “Frente Popular” que agrupaba a maestros, estudiantes, pequeños comerciantes, estructuras barriales y en menor medida campesinos y sindicatos,¹⁰ creció en intensidad y amplitud dado que se presentan con mayor

9 El surrealismo profundo de este episodio constituyó una inestimable veta de humor para los caricaturistas de humor político de los principales diarios de la época.

10 El Frente Popular puede ser considerado un espacio de convergencia de las organizaciones sociales afines a la tendencia del Movimiento Popular Democrático.

frecuencia convergencias de carácter unitario con otros sectores sociales, fundamentalmente con el movimiento indígena y su *ratio* de influencia social y política. Sin embargo, dicha coordinación no pudo superar su carácter episódico y tuvo que enfrentarse a las fuertes disputas de corte ideológico – político con los sectores afines a la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS). Cierzo sectarismo y un clima de ofuscación ideológica pueden ser rastreados en algunas discusiones menores, al interior de estas complejas alianzas.

Durante el breve gobierno de Abdalá Bucaram (agosto de 1996-febrero de 1997) quien fuera destituido mediante una combinación de movilización de sectores sociales y acciones parlamentarias de los grupos de poder, la UNE se articuló al Frente Popular para rechazar las políticas bucaramistas. Desde ese espacio la Unión abrió fuego contra Bucaram con la promoción del juicio político a la Ministra Correa por el escándalo de malversación de fondos. El llamado a juicio político por parte del pequeño bloque del MPD estuvo acompañado de un conjunto de recursos de corte simbólico que incluyeron un juicio popular a la Ministra Sandra Correa y una serie de recursos propagandísticos en los que se ironizaba respecto a la solvencia intelectual de la Ministra involucrada en un escándalo de plagio en su tesis de grado. La Unión convocó a movilizaciones que desembocarían en el llamado conjunto del Frente Popular a la Marcha del 5 de febrero de 1997 cuyo resultado derivó en la destitución de Bucaram.

Durante el Gobierno interino de Fabián Alarcón, la UNE desplegó como plataforma de lucha la reformatoria de la Ley de Carrera Docente a fin de lograr el mejoramiento de la escala salarial y robustecer la presencia de la UNE en tanto instancia de representación del conjunto de los docentes. Durante el período de la Asamblea Constituyente, la UNE presentó al bloque del MPD una propuesta general para la aprobación de artículos constitucionales relativos a la educación en los que se buscaba garantizar, entre otras cosas, el presupuesto para educación y la ratificación del estatuto público y gratuito de la misma. Conjuntamente con la FEUE y la FESE¹¹ desarrollaron sendas marchas a la Asamblea Constituyente en donde se declararon en “vigilia constitucional” para observar el trabajo de aprobación de los articulados de educación. La capacidad de incidencia política de cara a la Asamblea fue mínima, aunque la movilización permitió que la agenda de la derecha tuviera que ser matizada respecto a la propuesta de derogación de la autonomía universitaria y la elevación a texto constitucional de la propuesta de municipalización de la educación.

Una vez que Jamil Mahuad asumió el poder y la crisis de hegemonía registró una escalada motivada por el estallido de la peor crisis económica desde la historia republicana, el clima político se empañó con la violencia propia de los regímenes asediados y condenados a desaparecer. Uno de los resultados más funestos de este clima de represión y violencia política fueron los asesinatos

11 Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador.

de Jaime Hurtado González, líder histórico y a la sazón diputado del MPD, y de Saúl Cañar sindicalista de origen socialista quien se encontraba desarrollando labores de organización entre los trabajadores bananeros del cantón La Maná.

Frente a estos acontecimientos la UNE desplegó acciones de rechazo a la política del régimen agrupados en tres períodos. Un primer momento, que va desde octubre de 1998 a febrero de 1999, está caracterizado por una serie de jornadas de movilización: la Huelga General convocada por el FUT y el Frente Popular, en rechazo a las medidas de ajuste que elevaron las tarifas de servicios públicos. El rol que mantuvo la UNE en esta primera etapa del despliegue de fuerzas puede ser asimilada al de una fuerza secundaria que apoya a otros actores movilizados (trabajadores y estudiantes principalmente).

En un segundo momento, que va de febrero hasta julio de 1999, la intensidad de las movilizaciones subió de tono, y la convergencia de los actores sociales apuntó a desarrollar mayores niveles de coordinación política. En este sentido, se reeditó el desaparecido Frente Patriótico. La UNE procuró articular la lucha por sus demandas gremiales con las luchas políticas generales contra el régimen de Mahuad. De este modo, el 4 de febrero se desató una nueva paralización nacional de maestros para rechazar el contenido de la propuesta de Ley de Educación Media –en la que se consagraba nuevamente el espíritu de las reformas del Banco Mundial para la educación– y solicitar una revisión salarial. El llamado a paro nacional de maestros abrió las jornadas de movilización

del Frente Patriótico programadas para el 5 de febrero. Dicho paro se prolongó hasta finales de marzo y concluyó con una victoria de las demandas gremiales, entre otras, la suspensión del debate de la Ley de Educación y un acuerdo de revisión salarial.

Hacia julio de 1999 la UNE anunció un nuevo paro de actividades debido a la demora de más de tres meses en el pago de salarios a los docentes. Si bien la paralización no se concretó por la promesa hecha por el Ministerio de Educación para transferir los sueldos de abril y marzo, los maestros participaron activamente en las jornadas de movilización programadas por el Frente Patriótico y los choferes de taxis, que mantuvieron cerca de una semana bloqueadas completamente las principales ciudades del país. Este el momento de mayor coordinación entre las fuerzas sociales opuestas al régimen de Mahuad.

Un tercer momento de confrontación con el gobierno de Mahuad se constituyó a partir del ascenso de las protestas indígenas y los preparativos para el levantamiento de enero del 2000. La característica principal de este período reside en el cambio de eje de dirección política de las mencionadas protestas; del liderazgo agrupado alrededor del Frente Patriótico (representado por los sindicatos petroleros, Frente Popular y marginalmente por la CONAIE) al liderazgo que se concentró en torno a la alianza CONAIE-CMS. En esta etapa las discrepancias políticas sobre la conducción del proceso y el carácter de las protestas entre los sectores afines al MPD –entre ellos la UNE– y los sectores afines al movimiento indígena, disgregan a las

fuerzas sociales en torno a dos bloques que, en general, tuvieron poca coordinación durante el levantamiento de enero del 2000.

Tras la salida de Mahuad, la UNE sostuvo una pugna de cerca de dos meses con el Gobierno de Gustavo Noboa (julio-agosto del 2000), demandando una revisión salarial que recuperase en algo la mermada capacidad de los salarios docentes que ocasionó la dolarización. Se inició un paro nacional de maestros que atravesó momentos de tensión, como el encarcelamiento de dirigentes de la UNE, ante las cuales la Unión respondió con estrategias similares a las empleadas durante el Gobierno de Durán Ballén: huelgas de hambre y vigiliadas. Finalmente, la negociación implicó una cesión mutua de aspiraciones entre el Gobierno y la UNE.

A partir de esos momentos el repertorio de acción del sindicato de maestros sufre una modificación motivada probablemente por la desfavorable correlación de fuerzas, pero también por la necesidad de encontrar nuevos canales de diálogo con la sociedad. Así, la UNE acompañó sus protestas con marchas simbólicas, plantones frente a instituciones públicas, y un mayor acompañamiento entre estudiantes y maestros. Sin embargo, la distancia con los movimientos sociales no afines al MPD crece a tal punto de romperse la convergencia "táctica" que implícitamente había llevado a las organizaciones populares y movimientos sociales a converger al menos tácticamente en torno a las movilizaciones sociales. A mediados del período de Gutiérrez esta distancia devendría en ruptura definitiva cuya traducción puede ser vista en lecturas divergentes sobre el

proceso político y la coyuntura que en última instancia darían lugar a la emergencia de una protesta social protagonizada por sectores inorgánicos de las capas medias de la capital en el movimiento de los autodenominados forajidos.

Acción Colectiva en el Período 2003-2005

Los hechos del 21 de enero del 2000 arrojaron al escenario político a un nuevo actor quien investido con el blasón de ser un "outsider" del sistema de partidos, se emplazó en las fuerzas sociales que habían sostenido la resistencia al neoliberalismo en Ecuador. Bajo este panorama, el Coronel Lucio Gutiérrez ascendía a la presidencia acompañado de un programa que parecía un difícil ejercicio de equilibrio político entre la izquierda y la derecha. Finalmente, el hilo del equilibrio se rompió por el lado más débil: una inequívoca conducción económica apegada a las políticas de corte monetarista y un alineamiento geopolítico con los intereses norteamericanos, provocaron una temprana deserción de las pequeñas fuerzas de izquierda que se movían alrededor del camaleónico coronel. Sin embargo, es necesario advertir que el propio desempeño económico del Gobierno y la agudización de la crisis de hegemonía en el bloque dominante - con una soterrada secuela de las guerras interbancarias que parecen marcar fuertemente los destinos del país - sugiere la evidencia de grietas en la solidez del modelo de acumulación. Este elemento, acompañado de un crecimiento de la renta petrolera, permite avizorar una ligera recuperación de la capacidad de inversión del Estado en rubros sociales. Es

probable que estos signos de mutación hayan permitido una menor disponibilidad a la movilización de organizaciones como la UNE pese a las evidentes tendencias autoritarias y el alineamiento absoluto de Gutiérrez con el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio.

El primer período de Gobierno de Gutiérrez, registra el final de la curva ascendente del ciclo de protesta protagonizado por los maestros de la UNE. Si bien, persiste una movilización social destinada a presionar directamente al Ejecutivo para reorientar el gasto hacia la educación, mejorar las condiciones salariales de los docentes y desechar los planes de privatización de la educación, es cierto también que a finales del 2003 se registra un Acuerdo Nacional por la Educación que zanjaría cerca de 15 años de conflictos laborales en torno a la pugna salarial, y desde entonces no se registraron movilizaciones colectivas por parte de la UNE, mucho menos durante el abril que derrocó al Coronel. Es necesario acotar que para la época, el Frente Popular y el bloque parlamentario del MPD resistían la lectura política que promovía la movilización quiteña en torno a la renuncia del Presidente.¹²

El primer momento de movilización mencionado, se expresó en los dos grandes paros docentes, el de mayo-junio del 2003 y el de noviembre 2003-enero del 2004. La primera paralización culmina con la firma de un Acuerdo Nacional por

la Educación mediante el cual el Gobierno se compromete a una inversión sostenida en educación y a implementar una serie de mejoras de las condiciones salariales y prestaciones sociales de los maestros. La segunda paralización da cuenta de los incumplimientos del Gobierno a los compromisos de mejoras salariales adquiridos. En esta medida, se amplió el repertorio de acciones de la UNE, adoptando repertorios simbólicos propios de otros movimientos sociales como “la toma de Quito”, campañas de solidaridad con los maestros en huelga de hambre, entre otros. Este momento también se caracterizó por un incremento de la capacidad de propuesta y debate en torno al problema de la educación pública. Para ello, la UNE desarrolló en el 2003, el I Congreso Nacional de la Educación Pública, evento que culminó con la presentación al Ministerio de Educación de un documento con la “Propuesta para Transformar la Educación” (Entrevista a J.P.)

Las acciones desplegadas por la UNE durante el Gobierno interino de Alfredo Palacio, se limitaron a marchas y tomas simbólicas de instituciones para mostrar su desacuerdo con algunas decisiones de carácter administrativo de la Ministra Consuelo Yáñez. El fenómeno se explica en gran medida por la desactivación que han hecho los gobiernos de la conflictividad generada por los salarios. No deja de ser sugerente que el Gobierno

12 Se ha atribuido este hecho a los intereses del Movimiento Popular Democrático en la consolidación de la nueva mayoría legislativa que logró nombrar una nueva Corte de Justicia (que pasaría a conocerse como la “Pichi-Corte” debido al apelativo de su rocambolesco presidente) nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional y nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, la anterior Corte de Justicia fue cesada con una moción del diputado empedista Luis Villacís.

que soportó cerca de 19 paralizaciones de diversos actores en apenas año y medio de gestión, haya logrado desactivar la conflictividad con la UNE en torno a los salarios, con la simple implementación de los acuerdos alcanzados en el 2003.

Breves apuntes para el nuevo período

Hacia mediados de la primera década del nuevo siglo, la profundización de la crisis orgánica de la sociedad ecuatoriana y la imposibilidad de las clases dominantes de sostener políticamente a sus representantes directos en el aparato de Estado, posibilitó el ascenso de una candidatura presidencial encabezada por un académico que no pertenecía a la élite política ecuatoriana, pero tampoco a un partido u organización social: Rafael Correa. Su principal bandera de campaña fue la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, como punta de lanza de una Revolución Ciudadana que superara dos de los que consideraba los pilares del viejo orden: la *partidocracia* y el modelo neoliberal.

Esta candidatura con discurso antineoliberal representó nuevamente un dilema para los movimientos sociales ecuatorianos. Los maestros afiliados a la UNE apoyaron el respaldo que el MPD decidió dar a la candidatura de Correa.

Una vez electo Correa, la UNE se enfrentó al hecho de que la administración de Correa efectivizó su oferta de revertir la tendencia neoliberal de reducción en la inversión en salud y educación. Esto fue reconocido por la dirigencia de la UNE como una buena señal para su gremio y para la población en general. No obstante, la UNE mantiene líneas de ten-

sión con el Gobierno, muchas de las cuales han sido deliberadamente empujadas por el Ejecutivo. Correa ha sostenido que el sindicato de maestros no representa las aspiraciones legítimas de los docentes y que es un lastre para la transformación de la educación. Correa desconfía de cualquier protagonismo social estructurado de manera gremial. En su visión de país, hay que prescindir de las estructuras sindicales para llevar adelante la reforma educativa, borrar cualquier rastro de *corporativismo*. La UNE mantiene enfrentamientos con Correa en varios frentes: sobre el proyecto gubernamental de evaluación docente; respecto al proyecto de Ley de Educación Superior, etcétera. Frente a ello, la UNE intenta manejar un complejo juego de despliegue de conflicto gremial, con un apoyo crítico al Gobierno que ha ido variando a lo largo del tiempo según las circunstancias reinantes. La frontera a la que ha llegado el sindicato de maestros, en el actual momento político se refiere a la dificultad de mantener la beligerancia con un gobierno que invierte los términos del conflicto y que, sin abandonar por completo ciertos enfoques de corte liberal, se presenta como una fuerza de transformación frente a una supuesta raíz conservadora de los maestros.

3. Estructuras de movilización

Como sostiene Tarrow, la acción colectiva "casi siempre es activada y mantenida por sus grupos de contacto directo, sus redes sociales y sus instituciones" (2004: 49). Para dicho autor, estas últimas son entornos particularmente adecuados para que germinen los movimientos.

De acuerdo a los estatutos de la UNE, el sindicato está conformado por a) los maestros fiscales de los establecimientos educativos de educación inicial, básica, bachillerato en todas sus modalidades, por los técnicos docentes y supervisores que laboran en el Ministerio de Educación, los educadores comunitarios y los profesores del sistema intercultural bilingüe, b) los profesores de los establecimientos universitarios y politécnicos, los profesores de los establecimientos particulares, municipales y otros que por escrito manifiesten su voluntad de afiliación; y c) los maestros jubilados.

En la práctica, el grueso de sus afiliados corresponde a los maestros fiscales de educación básica y media (Entrevista a S.V.). Este hecho se remite a la pronunciada diferenciación de ingresos y régimen laboral que existe entre los maestros de educación básica y media, y los profesores dependientes de universidades y escuelas politécnicas. Generalmente la afiliación de estos últimos responde más a criterios de afinidad ideológica que a la expectativa por la incidencia del sindicato en el mejoramiento de sus condiciones laborales y de desempeño profesional.

Por otra parte, la estructura organizativa de la UNE se fundamenta en la afiliación voluntaria de los maestros secundarios, quienes deben expresar, mediante solicitud escrita al Ministerio, su decisión de afiliarse y cumplir con los pagos mensuales a la UNE, los que son descontados de los roles de pago.

Conforme a sus estatutos, la UNE se

estructura en orden jerárquico a través de los siguientes organismos.¹³

1. El Congreso Nacional de la UNE
2. El Comité Ejecutivo Nacional
3. Las Asambleas Provinciales de Maestros
4. Los Consejos Provinciales de Educación
5. Los Comités Ejecutivos Cantonales
6. Las Juntas de delegados/as a nivel provincial y cantonal.

El Congreso es considerado la máxima instancia de decisión de la UNE y se reúne ordinariamente cada tres años, en una fecha determinada por el Comité Ejecutivo Nacional. El Congreso Nacional se integra con base en organismos permanentes (Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Provinciales, Representantes de los Comités cantonales y 1% de las bases designadas en Asamblea, de acuerdo al número de afiliados de la UNE en cada provincia. El Congreso aprueba los lineamientos político generales de la UNE y designa su plataforma de acción para dicho período. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional constituye la instancia ejecutiva de la UNE durante el tiempo señalado por el Congreso Nacional. Es una especie de secretariado que integra al Presidente, Vicepresidentes, Secretarios y Secretarios funcionales (de acuerdo a cada sección: Magisterio Rural, Educación Parvularia, Magisterio Intercultural Bilingüe, etcétera). La elección del Comité Ejecutivo Nacional se hace por elección

13 Salvo cuando se indique lo contrario, toda la información consignada en este apartado proviene del documento oficial de *Estatutos de la UNE* (2009).

universal mediante la presentación de listas por parte de los distintos movimientos que conforman la UNE.

De este modo, la UNE asegura la existencia de mecanismos que permiten estar en permanente contacto con la base social, e incluso pasar a procesos de consulta cuando se va a iniciar una movilización, con estructuras organizativas definidas que conservan las facultades ejecutivas y funcionan como la instancia de orientación política decisiva en ausencia del Congreso. Hablamos por supuesto, del Comité Ejecutivo Nacional.

Luis Altuna, militante del Frente de Trabajadores de la Educación, corriente sindical que participa actualmente dentro de la UNE, pero que se encuentra tramitando su reconocimiento como sindicato alterno apunta:

Hemos intentado por todos los medios democratizar a la UNE. Nuestra tesis es que se debería representar a las minorías dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, a pesar de que los mismos estatutos señalan esto (sic), a pesar de las reformas, no se ha hecho nada para que las minorías podamos estar representados dentro del Comité. Por ello, buscamos nuestro reconocimiento como sindicato. (Entrevista a L.A.).

Sin embargo, no hay que desestimar el hecho de que, entre las instancias orgánicas de la UNE con mayor peso político (Comités Ejecutivos Nacionales, Provinciales, etcétera) y las instancias de participación de base, media una franja de militantes orgánicos a la UNE que funcionan como una especie de “maquinaria militante” que se mantiene en permanente contacto con los delegados de las escuelas y colegios, visitando al me-

nos una vez al mes a las escuelas de su jurisdicción (Entrevista a J.P.).

Esta “maquinaria” formada por dirigentes medios y auxiliares, sostiene los procesos de formación en la *conciencia unionista*, socializa los logros, avances y problemáticas del gremio con los maestros, recoge las expectativas y conflictos que expresa la base, al tiempo que desarrolla labores de propaganda entre sus afiliados.

Evidentemente, el grueso de la maquinaria militante pertenece a Vanguardia del Magisterio, pero lo que intentamos señalar es que la estructura funcional de la UNE, reconocida por el estatuto no sería suficiente para conservar la hegemonía o movilizar a los maestros, si no existiese esta franja de militantes organizados.

Un potente estímulo para esta maquinaria es la capacidad de autofinanciación de la UNE. Las cuotas que aportan los afiliados permiten mantener activa a la “maquinaria militante” y dotar a la misma de los recursos necesarios para desarrollar la labor organizativa como tarea casi exclusiva. Los dirigentes de la UNE, son desde este punto de vista *militantes profesionalizados*.

Por último, conviene señalar que la privilegiada situación de la UNE, como sindicato único, se mantiene a partir de la separación formal entre el ámbito político – susceptible de tratarse en el Congreso de la UNE y en el contraste de tesis durante los periodos de elección de las directivas nacionales y provinciales – y el ámbito gremial. En todo caso, podríamos reconocer a los miembros de Vanguardia del Magisterio la capacidad de articular ambos niveles sin provocar divisiones significativas en el gremio, aunque el precio que han tenido que pagar

es la subordinación de su acción política efectiva a los imperativos gremiales.

4. Marcos culturales e identidad

Siguiendo a Tarrow (2004), para quien la coordinación de la acción colectiva depende de la confianza y cooperación que se genera entre los miembros de un movimiento, debido a las identidades compartidas, entendemos como *marcos culturales* al conjunto compartido de significados (ideas, valores, aspiraciones) que justifican y animan la acción colectiva. En efecto, la existencia de un *universo cultural común* es uno de los factores que permite mantener elevados niveles de cohesión interna de las organizaciones. La propia plataforma política de la UNE se puede comprender desde la aspiración para la construcción de un *proyecto nacional-popular*, que animó a la mayoría de movimientos de liberación nacional durante el siglo pasado. La matriz *nacional-popular* que cobija a la UNE contiene una fuerte dosis de antiimperialismo y supone una frontera con los sectores oligárquicos que constituyen el enemigo más inmediato a derrotar, según su discurso.

Pese a que no aparece de manera explícita en las finalidades del sindicato consignadas en el estatuto, la corriente hegemónica de la UNE promueve una identificación de los maestros en alianza con la clase obrera, en el marco de la lucha por el socialismo, entendido este último bajo su adscripción marxista-leninista.

Sin embargo, bajo la división formal entre lo propiamente político y lo gremial dentro de la UNE, corresponde a la estructura gremial fomentar una identi-

dad *unionista*, es decir, promover al interior de la organización ciertos niveles de conciencia respecto a la adscripción a un sindicato, así como los deberes y derechos que este hecho genera en el conjunto de los afiliados. La conciencia *unionista* puede ser definida como el primer nivel de formulación de la identidad colectiva de la UNE. El *unionismo* promueve la actuación del magisterio como un cuerpo social combativo y reivindicador de sus derechos, al tiempo que formula los primeros elementos de identidad política entre los maestros. Esto último se estructura con base en la socialización del rol que los dirigentes y militantes de la UNE otorgan al maestro. En palabras de Teresa Bolaños:

[Propulsamos] que el magisterio sea un líder social, un líder comunitario. Que reconociendo su extracción social se identifique con ella. El maestro tiene tres caminos: ser indolente, ser sufridor y pasivo, o ser crítico e impugnador del sistema. Poco a poco podemos ir construyendo grandes transformaciones. Que cuando haya un cambio social estemos dispuestos desde nuestro sitio para combatir. (Entrevista a T.B.)

La tendencia a identificar al maestro como un agente de cambio social es la clave que permite a la UNE desarrollar una identificación política más concreta, es decir, una adscripción a un programa de corte nacional-popular orientado al socialismo y a la "patria nueva". Sin embargo, esta operación se produce en el terreno propiamente político, en donde Vanguardia del Magisterio se adscribe al Movimiento Popular Democrático.

En cuanto a la identidad construida hacia la sociedad, la UNE procura des-

virtuar la imagen de ser un sindicato corporativo, preocupado únicamente por la elevación salarial.

La identidad que se intenta afirmar frente a los sectores populares define a la UNE, como defensora irrestricta de la educación pública, laica y gratuita. A medida que la capacidad propositiva de la UNE ha ido en ascenso, se ha propulsado la visión de un sindicato que desarrolla ingentes esfuerzos para oponer a la educación neoliberal una alternativa. En palabras de Edgar Isch:

La preocupación de la UNE durante este período ha girado en torno a la pregunta de cómo lograr desarrollar una educación democrática y enfrentar al neoliberalismo. Eso tiene expresiones en las condiciones laborales –que no se reduce únicamente al salario– es otra expresión en torno a las propuestas pedagógicas educativas y una tercera tiene que ver con lo administrativo y logístico en el aspecto educativo. (Entrevista a E.I.).

A modo de conclusión

La observación del comportamiento de la acción colectiva de la Unión Nacional de Educadores durante el ciclo de protesta anti-neoliberal arroja, al menos de manera provisional, algunas hipótesis que convendría desarrollar en posteriores investigaciones.

Un primer elemento problemático que salta a la vista es la propia persistencia de un relativo protagonismo social que ninguno de sus pares sindicales y gremiales ha logrado en la vida política de estas dos últimas décadas. Llama la atención no solamente que una estructura sindical que contaba en 2009 con

120.000 afiliados haya sido capaz de sobrevivir la vorágine neoliberal antisindical de las últimas décadas, especialmente en el sector público. Lo realmente interesante es que esta estructura haya logrado tan altos niveles de protagonismo social y haya conservado su capacidad de movilización al menos hasta la primera mitad de la primera década del siglo que transcurre. ¿Qué factores han permitido que la UNE mantenga una capacidad de movilización que no han logrado otros sindicatos o gremios a lo largo del mismo período?

Nos atrevemos a sugerir que la relativa fortaleza de la UNE en este sentido hundiría sus raíces en la propia puesta en crisis del sistema político –su sistema de partidos, la articulación y canalización de demandas frente al Estado, etcétera– a cargo de la violenta reestructuración que supone el neoliberalismo y la *sociedad de mercado* en lo tocante a la relación entre el Estado y la demanda social.

El diseño del viejo sistema político suponía una integración vertical y comunicada entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. El sistema de partidos era la principal correa de transmisión entre las demandas de las organizaciones de la sociedad civil (cámaras empresariales, sindicatos, gremios, etcétera) y el Estado, por lo que las organizaciones agregaban de manera centralizada a sus bases y se estructurarán preferencialmente de manera corporativa, para que sus intereses y demandas se tornaran más fácilmente representables para el sistema político.

Las políticas de ajuste estructural suponían no solamente un determinado repertorio de política macro-económica,

sino también un cambio de enfoque respecto al rol estatal y las herramientas diseñadas para ello. El neoliberalismo privilegió un Estado restringido a su papel de aliento a la inversión extranjera, renunciando tanto a los controles sobre el juego de capitales como al ensayo de políticas redistributivas. En este contexto, la capacidad de respuesta del aparato estatal frente a las demandas sociales se erosiona y las mediaciones que se habían supuesto para el sistema político desaparecen sin que en su lugar se estructuren otras. Estamos por tanto frente a la explosión de las mediaciones que canalizaban las demandas sociales; la demanda social estalla directamente y se convierte en conflicto, protesta. Las organizaciones “supervivientes” del viejo esquema de mediaciones sociedad civil-partidos, se enfrentan directamente al Estado.

Desde esta perspectiva, la mayor fortaleza de la UNE constituye al mismo tiempo su límite; la UNE se refiere centralmente al Estado para canalizar sus demandas y lucha por provocar una respuesta en esta estructura. Por debilidad, el Estado neoliberal se ve forzado a acceder a sus demandas. Sin embargo, existe un pacto tácito entre ambas instancias, que funciona otorgando al Estado la potestad de resolver el conflicto y a la UNE el límite de no poder “radicalizar” la protesta para requerir demandas más allá de lo inmediatamente “posible”. De hecho todos los entrevistados coincidieron que la UNE debe su relativo éxito al hecho de que establece un cálculo estricto de las posibilidades de que el Estado acceda a sus demandas para conducir las medidas de hecho.

Otro elemento a señalar, es el hecho de que la UNE ha sido capaz de avanzar

en sus demandas “más allá” cuando coinciden dos variables en un momento concreto de lucha; en primer término, cuando la cohesión de las élites se resquebraja al punto de abrir grietas en el edificio social que permiten la irrupción de consignas antisistémicas como la “destitución” de los presidentes o la agregación de demandas extra-gremiales a la plataforma de lucha. Un segundo factor que fortalece a la UNE, es la convergencia de otras fuerzas sociales – no sólo las históricamente afines que convergen en el Frente Popular – en el terreno de las luchas. Cuando la UNE ha registrado una mayor capacidad de comunicación de sus luchas es cuando éstas han logrado articularse a coaliciones de movimientos sociales como el Frente Patriótico en la coyuntura de Bucaram. Por el contrario, su actuación se debilita, pierde capacidad expansiva y margen de radicalización de demandas, cuando se actúa en una coyuntura en solitario – caso de la huelga con Noboa – o cuando se fragmenta del conjunto de movimientos, es evidente el eclipsamiento de la UNE, durante los últimos días del régimen de Mahuad.

Otro factor para considerar, es la relación de la UNE con su representación parlamentaria el MPD. Sin lugar a dudas, la UNE se encuentra en ventaja frente al resto de sindicatos que carecen de una instancia orgánico partidista para manejar las complejas relaciones y eventualmente negociaciones políticas que supone la lucha social. La relación con el MPD le da elasticidad a la UNE para mantener incidencia al interior del sistema político, justo en donde el límite del movimiento social se expresa como bloqueo de las posibilidades de expansión

política. La relación es valiosa, porque también puede ser recorrida en el camino inverso, es decir, ahí donde el partido fracasa en la negociación, está la potencia de lo social, aunque en el caso de la UNE es una potencia – enorme a no dudarlo – presa en la jaula de hierro del “pacto estatal”.

Finalmente, no sería conveniente cerrar esta breve y provisoria incursión en torno a la UNE, sin señalar que más allá de las oportunidades políticas de contexto, la particular configuración interna de la UNE aporta significativamente a la capacidad de acción desplegada por este sindicato. Señalaremos, las principales características:

- a) Un discurso y una identidad política claramente visible y con mecanismos de reproducción al interior del sindicato. La UNE ha logrado cohesionar al movimiento magisterial en torno a una combinación de la identidad y demanda gremial – el *unionismo*, como expresión de la capacidad de conquista de demandas basada en la unidad gremial – y lo político. En cierta medida, la estructura casi partidaria de la UNE ha sido clave para la configuración de un referente ideológico común, aun cuando no exista una militancia política compartida.
- b) Una estructura organizativa que combina una rígida centralización con mecanismos “democráticos” de socialización y discusión en las bases. Sin la capacidad de sostener al mismo tiempo una estructura de debate y socialización de propuestas por un lado (las juntas de delegados de escuelas, las asambleas de delegados, las asambleas cantonales, et-

cétera) y una “maquinaria” militante permanente – los dirigentes actúan a tiempo completo y controlan la relación con el sistema político, la “militancia” de la UNE realiza labores de educación y propaganda en las bases etcétera – la UNE no tendría tal capacidad de acción como la demostrada a lo largo de estas dos décadas.

- c) Ninguno de los dos puntos anteriores se explica, si no somos capaces de comprender que la acción de la UNE también es efectiva porque su “sujeto” – sus bases sociales – mantienen una homogeneidad estructural que permite que los procesos de identificación de los maestros con las demandas, acciones, métodos de lucha y repertorios de acción de la UNE sean exitosos.

Aun la oposición política al Movimiento Vanguardia del Magisterio, el brazo político del MPD, dentro de la UNE, no puede soslayar esta evidente necesidad de autoidentificación con las demandas y formas de luchas generadas, cuya raíz se encuentra en la “equitativa” distribución de los procesos de empobrecimiento gestados a raíz de la restrictiva política salarial de los gobiernos neoliberales y a las especificidades propias de la reproducción neoliberal.

Bibliografía consultada

- Gramsci, Antonio
1999 *Cuadernos de la Cárcel* (Edición crítica del Instituto Gramsci, vol. 5, México: ERA.
- Guerrero-Blum, Edwing
2005 “El proceso histórico de organización gremial del maestro ecuatoriano”. *Cuadernos El Educador*. Quito: UNE.

- Guerrero, Fernando y Pablo Ospina
 2003 *El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. Bs.As.: CLACSO.
- Harman, Chris
 2002 "Los trabajadores del mundo", en *International Socialism*, No. 96-Otoño, Londres. <http://www.isj.org.uk/index.php4?s=translations> (visitada en enero 2009).
- Ibarra, Hernán
 2008 "Notas sobre las clases medias ecuatorianas". *Ecuador Debate*, No. 74, agosto.
- Isch, Edgar
 2000 *Educación democrática para enfrentar a la Educación Neoliberal*, Serie Educar para la Libertad, Ibarra, Ecuador.
- Meza, Julián
 1975 "Sobre las 'clases medias'". *Cuadernos Políticos*. <http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.5/CP5.6> Julián Meza.pdf (visitada en enero 2009)
- Osorio, Jaime
 2001 *Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento*, México: UAM-Xochimilco-Fondo de Cultura Económica.
- Ospina, Pablo
 2009 "La deriva de una promesa. Movimientos sociales, democracia y neoliberalismo", texto a publicarse en Enrique Ayala (ed.), *Nueva Historia del Ecuador*. Vol. 16. Quito: Corporación Editora Nacional-Universidad Andina Simón Bolívar.
- Portes, Alejandro, y Kelly Hoffman
 2003 *Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios durante la época neoliberal*, Santiago de Chile: CEPAL.
- Tarrow, Sydney
 2004 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (segunda edición). Madrid: Alianza.
- UNE
 2008 *Propuesta de Educación para la Emancipación*. Quito.
- UNE
 2009 *Estatuto de la Unión Nacional de Educadores*. Quito.
- Viteri, Galo
 2007 "Empleo, Salarios, Pobreza y Desigualdad en el Ecuador" en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Número 87. Recuperado de: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm> (visitada en abril de 2009)
- Otros materiales consultados*
- Ecuador Debate*. Varios números, Quito, CAAP.
- Revista de la OSAL*, Varios Números, <http://osal.clacso.org/espanol/html/revista.html>, CLACSO.
- Cuadernos del Educador*, Números 1-13, Quito, Unión Nacional de Educadores.
- Periódicos *Hoy* y *El Comercio*, varios años.
- Entrevistas*
- E.I. 02-09
 J.P. 03-09
 L.A. 04-09
 S.V. 03-09
 T.B. 04-09

Del altermundialismo a la protesta de los indignados: ¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?*

Julie E. Massal**

El surgimiento de las movilizaciones de los indignados obliga a entender sus dinámicas, procurando situar las problemáticas relaciones entre lo local y lo global. También se torna necesario analizar los rasgos sobresalientes de las movilizaciones altermundistas con la finalidad de encontrar los aspectos comunes y las diferencias con las protestas de los indignados precisando los marcos locales y globales de estas movilizaciones que deben ser evaluadas con mayor atención.

Introducción

El pasado 15 de octubre de 2011 fue el día mundial de los indignados; esta jornada era la primera organizada a nombre de los llamados indignados, cuyo nombre empezó a surgir en medio de las protestas de España en mayo de 2011, y a ser reapropiado o adjudicado a los actores sociales que se movilizaron durante el agitado año de 2011; tan agitado de hecho que muy simbólicamente, el personaje del año escogido por la revista *Times* fue “*el manifestante*”¹. El “15 de octubre” pretendía dejar ver una movilización difundida

mundialmente en una multiplicidad de países (82 países al menos). Pero; ¿qué hay detrás de este proceso de expresión y visibilización? ¿Quiénes son los llamados indignados, y de donde proceden? ¿Qué pretenden, reivindican o denuncian?

Para entenderlo se debe examinar cómo se constituye un movimiento fundamentado en la “solidaridad transnacional”. Para empezar, se debe dilucidar: ¿En qué se diferencia de otros actores que han afirmado una identidad “global”, como los llamados “anti” o “alterglobalización” (o altermundialistas), que se hicieron famosos en la década del no-

* Trabajo preparado para su presentación en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALA - CIP). Junio 2012, Quito.

** Profesora del IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

1 Andersen Kurt, “The protester”, *Times*, 14-12-11. http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2101745_2102132,00.html

venta, bien sea a través de la movilización zapatista² - que surgió en oposición al NAFTA o TCLAN (1994) - o a través de la protesta en contra de la cumbre de la OMC en Seattle (1999)? ¿Cuál es la relación, si la hay, entre altermundialistas e indignados?

Estas son algunas preguntas que surgen al examinar “de qué hablamos” cuando examinamos el llamado movimiento de los indignados; de hecho incluso se puede cuestionar el término de “movimiento” en singular pues la extrema diversidad de sus expresiones plantea de entrada una dificultad: ¿a quién incluir o no en este “label” de indignado? Esta pregunta plantea no solo un problema terminológico sino un reto teórico: *¿qué es un movimiento global o transnacional?*

El objetivo de esta ponencia³ es doble: en primer lugar se pretende retomar **una perspectiva de análisis temporal a mediano plazo**, al lanzar algunas refle-

xiones en torno a la llamada movilización “altermundialista” y su relación⁴ con “los indignados”, que en América Latina han tenido sus principales manifestaciones en Chile, México, y en menor grado en los Andes (especialmente Colombia a través del movimiento estudiantil de fines del 2011). En efecto, se puede advertir, a través de los discursos de los indignados, similitudes pero también diferencias con los altermundialistas, como se señala en la segunda parte. Así se examinan estos dos procesos de movilización a la luz el uno del otro, para entender mejor las dinámicas actuales, que no surgen de la nada.⁵

En segundo lugar, ya al nivel teórico y metodológico, se propone analizar críticamente algunas de las dificultades que se presentan para **entender quienes son los actores “globales” o “transnacionales” y su relación con movimientos sociales localmente anclados**. Los ejemplos que se presentarán ilustrarán algunas de

-
- 2 Que dio lugar a los primeros encuentros “galácticos” en los siguientes años y ha sido vista como la máxima expresión de la dinámica alterglobalista en América Latina, debido a su rechazo a las dinámicas de integración regional y binacionales que se multiplicaron en la década de 1990.
 - 3 Se trata de una propuesta preliminar, parcial, que refleja las inquietudes durante el proceso de elaboración de la investigación, no de una investigación completada. Por ende, es más bien una reflexión metodológica y teórica sobre como “agarrar” estos actores llamados globales. La investigación se basa en análisis de discursos vía prensa y en la literatura existente sobre actores transnacionales. Además, tratándose de un conjunto de actores tan amplio que es necesario acotar, y tan recientemente “surgido” en la esfera pública, se necesita antes de un trabajo de campo como tal delimitarlo y cuestionarlo en tanto “objeto de investigación”.
 - 4 Sobre esta relación, existe aun muy poca reflexión, pues en la producción hasta ahora disponible no se examina este tema, aunque sí se hace referencia a los “antecedentes” de otros movimientos sociales. Por ende esta relación está planteada a modo de hipótesis y debe ser comprobada.
 - 5 Aquí nos ubicamos en contraposición de las reflexiones más que todo expresadas en prensa que postulan una originalidad total de los indignados pero no la demuestran, y se ubican en un marco de análisis limitado al año 2011, sin profundizar en las raíces de los diferentes actores. Esto contradice uno de los planteamientos básicos de la teoría de la movilización, según la cual los movimientos sociales son una mezcla compleja de tradiciones e innovaciones (Tarrow 1992). Esto no significa minimizar lo novedoso pero sí enmarcarlo en un contexto de análisis temporal determinado.

las propuestas formuladas aquí, aunque se deberán tomar más como punto de partida que como un resultado definitivo.

Al nivel teórico, se quiere examinar una pregunta bastante antigua en la literatura sobre la movilización transnacional: *¿Cómo la militancia internacional/global/transnacional (según los diferentes términos usados) puede reforzar la movilización local?* ¿Qué aportes hacen los actores globales a los actores locales? ¿Cómo se realiza la circulación de discursos y valores entre los actores de un nivel a otro? Este tipo de interrogante ha recibido diversos tipos de respuestas que se pueden clasificar de la siguiente manera, grosso modo:

- a) Analizar la forma como los actores locales utilizan la movilización transnacional para captar recursos de diferente índole (de lo más logístico y concreto, a lo más simbólico) (Tarrow 2000).
- b) Analizar como los actores externos aportan al nivel local, recursos, experiencias, vivencias que son reapropiadas e reinterpretadas localmente (Lelandais 2008, Cheynis 2005, 2008).
- c) Analizar cómo, en caso de dificultad para movilizarse localmente el actor transnacional externo aporta protección y legitimidad contra un estado “represor”, y presiona para un cambio de normas internas usando la legitimidad del Derecho internacional (Keck & Silkkink 2000).
- d) Analizar las “redes” sociales como vector y transmisor de ideas, discursos, valores y paradigmas (Colonomos 1995).

En esta ponencia, proponemos una perspectiva teórica y metodológica que

cruza la sociología de las relaciones internacionales con el campo temático de la movilización social transnacional, lo cual implica analizar dos aspectos principalmente:

- ¿Cómo los actores transnacionales (altermundialistas, indignados) proponen discursos sobre la forma de hacer política a los actores locales y como estos discursos están reinterpretados? (esto implica hacer una sociología de los militantes).
- ¿Cómo se realiza la circulación de ideas, discursos etcétera? Aquí se ha hecho mucho énfasis en el uso de las NTIC y de los medios alternativos como fuente de intercambio, pero también en los encuentros internacionales como fuente de debate y transmisión.

La hipótesis central que se quiere comprobar es que existe una *transmisión de los altermundialistas a los indignados*, pero que estos últimos le hacen cambios a la propuesta altermundialista de “pensar global, actuar local”. ¿Será que los indignados están más bien proponiendo “pensar local, actuar global”?

I. Los aportes y límites de la literatura sobre movilización transnacional

El tema de la *movilización social transnacional* ha tenido un desarrollo reciente en América Latina, especialmente en los países andinos. Esto se observa tanto en perspectivas “nacionales” en el análisis de los procesos de movilización, donde no se desarrolla teóricamente esta perspectiva como eje central sino a lo sumo como aspecto secundario, como también en el campo de refle-

xión de las relaciones internacionales en la región (aunque se resalta el interés por procesos de transnacionalización en otras temáticas como *migraciones* por ejemplo). La pertinencia de los análisis enfocados en la categoría de lo transnacional para entender las dinámicas del cambio político social y cultural en la región latinoamericana, ha sido principalmente advertida por los analistas interesados en los **movimientos indígenas**. En efecto, en esta área de interés, se enfocan los intercambios de discursos, valores y paradigmas así como los procesos de movilización de organizaciones indígenas que han conocido un desarrollo transnacional desde 1970.⁶

Fue en la década del 2000 cuando se amplió el interés por el recurso de lo transnacional en la movilización de actores organizados, por ejemplo a favor de la valoración de conocimientos propios de los pueblos indígenas y afro descendientes (Escobar & Pardo 2004), o en contra del desarrollo de la minería en los últimos años; de allí una atención a los actores llamados “étnicos” y a los ambientalistas. Se ha enfocado especialmente cómo la Amazonia se ha convertido en blanco de muchas expectativas geoestratégicas en torno a la apropiación de conocimiento mediante patentes sobre hierbas medicinales y otros productos ecológicos fundamentales. Pero el énfasis sigue puesto mayoritariamente en algunos actores y procesos de organización particularmente llama-

tivos al nivel local o nacional (como el de los U’wa de Colombia, contra la empresa Occidental) (Arenas 2004), cuyo uso de la dimensión transnacional es un objeto de atención a menudo secundario, aunque estratégicamente novedoso y determinante. Por ende se examinan aquí algunos aportes de la literatura sobre actores transnacionales, pero también las dificultades que persisten desde la perspectiva metodológica.

1. Actores transnacionales

La primera precisión necesaria es definir qué entendemos por actores transnacionales. Primero porque en la literatura se observa una profusión de términos insuficientemente delimitados (global/internacional/transnacional), en segundo lugar por qué empíricamente se necesita delimitar el objeto de investigación.

En el nivel más básico de la definición (Smith, Pagnucco & Chattfield 1997), se entiende por transnacional un *actor que se moviliza en dos o más países simultáneamente*. Esta definición de partida indica que el actor tiene un radio de acción que va más allá de lo local y nacional, pero *que nació en un ámbito local para luego extenderse y ampliarse*. Los actores no nacen transnacionales, se convierten en tales. Esto plantea entonces el interrogante del “por qué” recurrir a lo transnacional como ámbito de movilización. La respuesta obedece a la opción teórica escogida. La primera

6 Se han presentado procesos de internacionalización, especialmente en las Declaraciones de Barbados I y II (1971 y 1977); en algunos procesos regionales como la COICA, desarrollada desde 1983 en los países andinos con una fuerte presencia de pueblos amazónicos. La otra dimensión internacional de la movilización indígena ha sido la búsqueda de apoyo en las Naciones Unidas.

respuesta, ejemplificada por Smith, Pagnucco & Chattfield, se fundamenta en la literatura anglosajona marcada por un resurgir de la Corriente de la Movilización de los Recursos (CMR)⁷; según esta corriente teórica, “lo transnacional” se vuelve un ámbito oportuno de movilización, esto es un ámbito donde se pueden conseguir apoyos y alianzas además de recursos financieros y logísticos. La segunda respuesta, más bien europea⁸, es que se escoge estratégicamente a *qué interlocutores el movimiento debe dirigirse* para lograr la respuesta más eficaz y adecuada a la movilización; en algunos casos son interlocutores supra o internacionales, en otros son actores nacionales: en función de esto se decide movilizarse en un ámbito local, nacional y/o transnacional o combinar los diferentes niveles. Así, definiciones más elaboradas apuntan a cuestionar la perspectiva centrada en lo organizacional y los recursos, muestran que no es nada fácil, automático ni “obvio” este paso a lo

transnacional (Amiraux 1999, Lelandais 2008), pues implica de hecho ya tener un nivel de organización y de recursos bastante consolidado: **no todo actor se transnacionaliza**. El proceso de transnacionalización tiene sus costos y riesgos.

Además se debe especificar que significa “*actuar en dos o más países*” pues es demasiado amplio el espectro de la acción. Della Porta & Tarrow (2005) proponen entonces concebir la transnacionalización⁹ como el proceso mediante el cual los actores realizan un proceso paulatino de aprendizaje de organización simultánea y conjunta de algunas actividades (sin perder de vista la movilización local o nacional, de la que proceden).¹⁰ En síntesis, los actores transnacionales deben tener un nivel de organización, de discursos y de procesos de movilización conjuntos. Pero lo transnacional no reemplaza ni sustituye otros niveles de movilización.

Esta definición evidencia el peso creciente de la sociología de las relaciones

-
- 7 Esta corriente de análisis (CMR), enfocada en un marco nacional de movilización, presentó sus primeros desarrollos en la década de 1970 en EE.UU. Su afirmación central es que los actores sociales exitosos son los que más recursos pueden movilizar; se entiende por recursos: aportes financieros, apoyos y alianzas, figuras mediáticas que sean a favor, experiencias de movilización puestas a disposición del movimiento por líderes y militantes (especialmente los “empresarios morales”).
 - 8 Es decir fundamentada en perspectivas predominantes en Europa, como el énfasis en los procesos de construcción de discursos, valores e identidades, e inspirados en la llamada corriente de los “Nuevos movimientos sociales” (o “Paradigma identitario”), desarrollada en los 1970 y 1980, y representada por A. Touraine, C. Offe, y A. Melucci. Hoy en día, sin embargo, existen cruces entre investigadores europeos y norteamericanos que acogen esta perspectiva de análisis como S. Tarrow junto con D. Della Porta (Della Porta y Tarrow 2005; Della Porta, Klandermans & al. 1999).
 - 9 Que se debe diferenciar de otros fenómenos con los cuales se confunde a menudo: la « **difusión** » de ideas de un contexto a otro, y la « **internalización** » de un conflicto surgido en un contexto dado, transportado en otro contexto.
 - 10 Un ejemplo de ello son las manifestaciones contra la Guerra en Irak, organizadas el 15 de febrero de 2003 en muchos países del mundo. Otro ejemplo más reciente, ya mencionado: el “*día mundial de los indignados*” del 15 de octubre de 2011; Al respecto ver: <http://15october.net/fr/> (página web de la convocatoria de esta jornada mundial de movilización; se mencionan 951 ciudades y 82 países). Volvemos más adelante sobre el último ejemplo.

internacionales, pero también el interés de analistas originalmente enfocados en procesos de movilización estrictamente nacionales, que luego se han interesado en el tema de los actores transnacionales. Como lo afirmaba hace una década Sidney Tarrow (2000), *“el estudio de la política transnacional, originalmente una disciplina fuertemente influenciada por las relaciones económicas transnacionales y reducida a un debate algo estéril con los partidarios del Realismo norteamericano, empezó a cruzarse de manera creciente con el de la política de la contestación”*.¹¹

Esta perspectiva de análisis es la que nos parece más pertinente para el tema de esta ponencia. En efecto, en la perspectiva “europea”, se cuestionan dos premisas que a nuestro entender, constituyen una dificultad de fondo en la perspectiva anglosajona orientada por la corriente de la movilización de los recursos (aunque esta dimensión es pertinente de analizar sin duda, no debería ser exclusiva).

Una primera premisa es que los actores se transnacionalizan *para* buscar recursos y apoyos. A nuestro entender lo hacen *también* por otros motivos, más complejos de dilucidar¹², especialmente en torno al **intercambio de experiencias,**

vivencias y discursos, puesto que las *identidades que se constituyen a través de estos intercambios producen en sí mismos uno de los cambios anhelados*. Adicionalmente, como lo señalan algunos autores críticos de la perspectiva norteamericana, lo transnacional es un recurso mas, no siempre el más determinante, y el **marco nacional de movilización sigue siendo fundamental** (Tarrow 2000). No obstante, se debe concebir de manera mucho más clara la movilización como de carácter *“multinivel”*: es decir que los distintos ámbitos de movilización se completan y entrelazan en vez de oponerse (Diani 2002).

Una segunda premisa que se cuestiona es el énfasis en el *“compartir discursos comunes”* visto a menudo como un reflejo del proceso de transnacionalización¹³; sin embargo a menudo es simplemente un proceso de *“difusión”* y aprendizaje de modelos (según la definición planteada por Della Porta y Tarrow). Esta observación ayuda a acotar metodológicamente el objeto de investigación. La *transmisión de discursos* es parte de la transnacionalización sin duda, a condición de que se acompañe de procesos de organización y de movilización. No todo es *“transnacionalización”*, podría decirse de manera muy simplificada.

11 Tarrow Sidney, « La contestation transnationale », *Cultures & Conflicts*, Paris, 2000, n° 38-39, p.8: <http://www.conflicts.org/index276.html> (traducción y negritas son mías).

12 Esa complejidad tan solo puede percibirse en estudios empíricos. Detallados estudios de caso muestran los objetivos y el desempeño de actores que mezclan niveles de movilización local, nacional y transnacional y reflejan cierta “división de tareas” entre los militantes en función de sus recursos pero también en función de sus trayectorias de lucha.

13 Se tiende muchas veces a dar énfasis al hecho que los actores en distintos lugares usen los mismos conceptos y discursos, pero no se examina la procedencia y circulación de estos discursos como tal. Al contrario, Della Porta & Tarrow (2005) insisten en las “identidades colectivas” producidas y manejadas por los actores transnacionales, lo que implica algo más que compartir discursos.

Esto nos permite interrogarnos sobre la dimensión transnacional de los llamados “altermundialistas” e “indignados”. En ambos casos, se suele designarlos como “actores globales o transnacionales”, pero ¿cómo entender de que se trata realmente? ¿Son actores transnacionales o son luchas locales simplemente comunicadas entre sí por discursos comunes? ¿Qué implicaciones tiene determinar esto, más allá de lo teórico?

2. Altermundialistas

Los llamados actores altermundialistas han sido descritos a menudo como “una nebulosa”, heterogénea y atravesada por corrientes ideológicas de muy distinta índole. En efecto se trata de todo menos de UN actor uniforme, sino más bien de un “label” (etiqueta, marca de fábrica) que se apropian *distintos actores con fines diversos*: adquirir visibilidad, legitimidad, expresar solidaridad con otros y recibir la misma solidaridad, manifestar algunos puntos de vista comunes, etcétera. Esto no quita la *diversidad*, la misma que es reivindicada como un valor en sí por los actores.

El símbolo de este lábel altermundialista lo constituye el “**foro social**”, desde su primera realización en 2001 en Porto Alegre (Brasil). Esta modalidad de acción, sin duda la más estudiada (Fisher & Ponniah 2003, Smith 2008, Canet 2008, Pleyers 2010) es considerada bajo distintos ángulos:

a) es la representación misma de la diversidad alabada dentro de la nebulosa, donde se expresan sus antagonismos internos.

b) es la evidencia de la conformación de un espacio político alternativo para el debate político, que cuenta con sus propias reglas de juego, especialmente en rechazo fuerte y tajante a los partidos políticos y sindicatos “tradicionales”, excesivamente jerárquicos y centralizados.

c) a la vez es percibido como una expresión emblemática de la identidad común de los actores y sus valores.¹⁴

¿Son los altermundialistas actores transnacionales o meros actores locales con proyección internacional y que comparten discursos y reivindicaciones comunes, pero que no pueden esconder su extrema heterogeneidad? Dada **su diversidad interna a nivel organizativo** (ONG, asociaciones, movimientos sociales, organizaciones de toda índole), la pregunta parece poco pertinente: en efecto no hay una sola modalidad de relación entre lo local y lo transnacional sino varias modalidades según los actores que se reclaman de este lábel (Pleyers 2010). En otros términos, no se trata de un proceso organizativo unificado sino más que todo de una puesta en común de plataforma de luchas locales o regionales, que buscan **articularse** globalmente. Y este **proceso de articulación**, que se refleja a la vez en los **procesos organizativos** y los **procesos de identificación**, es el verdadero tema de fondo a analizar. Por ende, la pregunta

14 Estas tres dimensiones aparecen en un mismo análisis o en los diferentes estudios de caso. En todo caso, esta síntesis evidencia una serie de interrogantes en torno a la conformación de la identidad colectiva “altermundialista” pese a la reivindicación de la diversidad y el rechazo a designar un portavoz que represente a todos los actores (Carta de junio de 2001 del FSM).

transversal que nos hacemos en esta ponencia, en **torno al aporte que hacen los actores transnacionales a los actores locales**, debe partir de esta preocupación metodológica: ¿cómo vincular el análisis de los procesos organizativos y los procesos de identificación que se construyen? Estos distintos procesos han sido analizados a menudo de manera desvinculada, lo que no permite entender a cabalidad la *complejidad de la movilización en torno a este "label altermundialista"*, lo que genera una serie de críticas que a nuestro juicio son poco pertinentes, analíticamente hablando.¹⁵

3. Indignados

Ahora bien, la discusión en torno al recientemente nacido "movimiento de los indignados", plantea interrogantes bastante similares: existe la misma diversidad de actores, de procesos organizativos y la misma preocupación por articular luchas locales. Sin embargo se debe dejar claro que:

a) no son los mismos actores que los que se movilizaron en tanto altermundialistas, salvo unas cuantas figuras mediáti-

cas (académicos e intelectuales) - cuyo papel en la transmisión de discursos entre uno y otro movimiento deberá ser tomado en cuenta;¹⁶

b) no son los mismos procesos organizativos, pues las modalidades de acción difieren: los indignados hasta ahora *no se han caracterizado por la organización de "foros sociales"* sino por la ocupación de **espacios públicos mediante campamentos, manifestaciones, marchas, asambleas ciudadanas y por el enfoque en el espacio local de debate político**. Algunas de estas formas de acción son también usadas por los "Alter" (y muchos otros actores), sin embargo no es el mismo "repertorio de acción" que el de los altermundialistas, como se evidenciará en la segunda parte.

Adicionalmente, al revisar los reportes de prensa, se plantean una serie de interrogantes empíricas pero también teóricas;

a) confirmar si es comprobada la poca movilización "indignada" en América Latina especialmente en ciertos países que tienen trayectorias de lucha fuertes, y de ser así, buscar explicaciones de esta "ausencia de los indignados".¹⁷

15 Esas críticas son las siguientes: los Altermundialistas no han logrado construir « un movimiento social consolidado » ; no han sabido aprovechar el contexto favorable al nivel mundial (contexto "favorable" generado a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, que parecía otorgarles gran pertinencia a muchas ideas altermundialistas, en torno a la crítica a la globalización financiera y el debilitamiento del papel del estado en la economía); han perdido legitimidad porque se han estancado en el debate y no han podido construir una propuesta alternativa. En términos políticos, sin duda, las falencias de los altermundialistas son muchas y merecen un examen crítico y constructivo.

16 Entre estas figuras mencionemos a N. Chomsky y N. Klein, en Estados Unidos; en A. Latina, A. Pérez Esquivel, E. Galeano, o B. de Sousa Santos habían sido algunos de los que han dedicado atención (y apoyo en ocasiones) a los altermundialistas y lo hacen hoy con los Indignados. Sin embargo la circulación de discursos no pasa exclusivamente ni, tal vez, principalmente, por estas "figuras de apoyo" que pueden aportar recursos y otorgar cierta visibilidad mediática, pero que no han sido "portavoces" de los Indignados.

17 En una nota de prensa un observador considera que se trata más que todo de un desfase de tiempos y ritmos pues América Latina ya pasó por las crisis financieras y ya tuvo sus propias respuestas locales y

b) entender el vínculo entre actores movilizados transnacionalmente y luchas locales que no obedecen ni a los mismos ritmos ni a las mismas cronologías e historias de luchas. En efecto si se retoma la observación analítica de Tarrow (2000) según la cual el marco nacional de movilización sigue siendo el referente principal, **dicho marco nacional se acompaña de temporalidades, ritmos, objetivos y modalidades de acción propias** por lo que la articulación de luchas se enfrenta a esas divergencias en los procesos organizativos.

Esa postura teórico-metodológica obligaría entonces a incluir los estudios de casos nacionales en una *perspectiva comparada* de las distintas variables que influyen sobre dicho proceso articulador. En la tabla 1, presentamos por ende una *matriz indicativa* que sintetiza nuestra propuesta analítica en torno a los distintos elementos mencionados en esta primera parte. Sin embargo en la segunda parte, nos enfocaremos solo en dos dimensiones, los discursos y las estrategias de acción.

Tabla 1
Matriz analítica de los procesos de articulación de luchas a nivel transnacional

	Proceso organizativo	Proceso de identificación	Proceso de articulación
Temporalidad (ciclos protesta)	Ritmos, etapas fechas simbólicas	Construcción Identidad colectiva y su evolución	Confrontar divergencias y definir lo común.
Trayectorias	Actores, vivencias, aprendizajes	Evolución de los actores en su autodefinición, encuentros, reorientación I.C	Tomar en cuenta especificidades locales de contexto, obstáculos y oportunidades.
Objetivos	Debate interno y entre aliados	Análisis de la realidad y estrategias escogidas	Construir espacios de debate y encuentro
Discursos	Elaboración en distintos niveles	Valores, ideologías, estilos de vida, formas de lucha	Confrontar lo común y lo propio en cada nivel (local/nacional/regional/global)
Modalidades (Repertorio de Acción)	Especificidad de cada actor, modelos, difusión, aprendizajes	Combinar discurso, trayectorias, y RA para definición IC	¿Qué opciones estratégicas en función del nivel de lucha?
Recursos (Alianzas, Apoyos)	Fuentes, proceso de canalización, creación de nuevas estrategias	¿Qué figuras públicas? ¿Qué valores del movimiento evidenciar?	Recursos en distintos niveles, división de tareas entre distintos tipos de militantes y líderes en función de los recursos que tienen, de sus experiencias.

Elaboración: de la autora (con base en la revisión teórica propuesta).

nacionales, especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia: *“América Latina: ¿Por qué no hubo indignados en Bolivia?”*, Publicado el diciembre 8, 2011 da caposud - por Fortunato Esquivel: <http://caposud.wordpress.com/2011/12/08/america-latina-por-que-no-hubo-indignados-en-bolivia/>

II. Discursos y repertorios de acción en contextos disímiles

En esta segunda parte enfocamos específicamente dos aspectos de la tabla 1: **los discursos y el repertorio de acción**, en aras de identificar las peculiaridades de ambos actores, “altermundialista” e “indignado”, compararlos y ver que influencias existen entre ellos. Para ambos aspectos, discursos y repertorio de acción, vamos a proponer un análisis (bajo la forma de tablas) de algunas de las temáticas de movilización en distintos eventos y momentos, para luego sintetizar cada postura. Pero antes de entrar en dicho análisis es indispensable recordar brevemente algunos elementos contextuales a tomar en cuenta.

1. Contextos de movilización

Es preciso recordar el hecho de que los distintos actores se ubican en contextos de acción disímiles pero que también presentan algunas tendencias comunes. Los contextos de movilización son usualmente entendidos como una variable que influencia tanto los discursos como el repertorio de acciones.

Aunque la crisis del 2007-2008 tuvo impactos mundiales, éstos no han sido homogéneos, ni al nivel de un mismo continente ni entre los continentes. Tampoco han sido uniformes las respuestas gubernamentales, y éstas se toman a menudo como una explicación del mayor o

menor impacto de la crisis; por ejemplo en Europa, entre Europa del sur (Italia, España, Grecia, Portugal) y Europa del Norte. Aunque no es el caso aquí detallar este aspecto, sí es importante recordar que en diversos grados todos los países europeos han sido afectados por el nivel de endeudamiento y déficit público, lo que presiona hacia la adopción de políticas de rigor por los gobiernos y las instituciones europeas, como en el caso emblemático de Grecia donde la ayuda financiera se condiciona a la adopción de una sucesión de planes de austeridad. En la mayoría de países, el principal impacto socioeconómico ha sido el incremento del desempleo, así como de la precariedad, del empleo informal y de la pobreza. Los sistemas de protección social y de jubilación han sido muy afectados. En Estados Unidos, por su parte, la situación no es de mejor augurio (aunque se han implementado bajo el mandato de Obama reformas del sistema de cobertura médica), y se denuncia la insuficiencia de apoyo a las víctimas de la crisis de los “subprimes”, especialmente los que perdieron su vivienda, mientras que la sanción a los responsables de la deriva financiera ha sido mínima. En América Latina, en conjunto menos afectada por la crisis global y que mantiene niveles de crecimiento medianos¹⁸, también existen situaciones muy dispares, pero no se han presentado los mismos efectos que en Europa, y las consecuencias no han sido tan drásticas co-

18 OCDE-UN-CEPAL. *Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para el Desarrollo*: “Mientras que se espera que el crecimiento en las economías avanzadas continúe siendo lento, se estima que América Latina crecerá 4,4% en 2011 y 4,1% en 2012” (p. 9). Disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/39/15/48966240.pdf> (consultado el 24 de abril de 2012).

mo los impactos de las crisis de 1998 y 2001 (Brasil y Argentina) o de 1999 (Ecuador). Esto no significa que las desigualdades existentes de antemano hayan retrocedido, o que no se haya percibido efectos en el desempleo a raíz del retroceso de la actividad comercial con Estados Unidos y el mundo, ni que los pueblos no hayan vivido las consecuencias, especialmente los migrantes de regreso de España donde el desempleo ha explotado.

En el aspecto de las dinámicas comunes, y sin olvidar las evoluciones propias de cada país, se observan una serie de tendencias generales y compartidas, con diferentes aristas:

Al nivel político

- La denuncia de los altos grados de corrupción tanto en el sector público como privado, de despilfarro de recursos y de mal uso o desvío de fondos, así como de insuficientes ingresos mediante los impuestos (por evasión fiscal), y de reformas fiscales injustas para los más pobres y demasiado benevolentes para los más ricos. Todo aquello alimenta una percepción de la inutilidad de pagar impuestos al nivel central pero también de contar con el Estado y puede derivar en resignación, desconfianza o ira, buscando expresarse en un “rechazo anti-sistema” que en Europa ha favorecido en gran parte el voto hacia la extrema derecha.
- La radical desconfianza hacia los actores partidistas y el sistema electoral, la denuncia de varios vicios (insuficiencia de: oferta política, alternancia, renovación de cuadros) debido a

la “constatación” cada vez más difundida que los cambios de gobiernos no se acompañan de reales cambios de políticas públicas ni de efectos sociales, aunque ésta no sea comprobada necesariamente por los hechos. Esta percepción de la “inutilidad de la vía electoral” para lograr cambios ha estimulado el uso de vías alternativas, entre éstas la protesta y la contestación, y/o el recurrir a las asambleas constituyentes (especialmente en los países andinos).

- Al nivel ideológico, una desconfianza hacia las “promesas” y una tendencia al pragmatismo, aunque eso no signifique que las ideologías hayan desaparecido pero se evidencian menos en expresiones políticas organizadas (especialmente en la izquierda). Aunque esta observación es más válida para Europa que para América Latina (andina), es de destacar que también en la región latinoamericana, se desconfía de las pocas expresiones alternativas que pierden rápidamente su potencial renovador cuando se institucionalizan, y se rompen las alianzas entre actores sociales y gobiernos de izquierda.

Al nivel económico-social

Además de enfatizar los efectos de la crisis del 2007-2008 en términos de empleo, debido a la reforma del mercado laboral y a los impactos negativos de políticas migratorias endurecidas, se orienta la crítica hacia los responsables globales: se denuncia cada vez más la dependencia de las políticas económicas nacionales a los mercados financieros, la vulnerabilidad de las economías a los

movimientos especulativos, y la poca o nula sanción a los bancos cuyas prácticas derivaron en la crisis del 2007-2008 (o incluso el hecho de que ya hayan vuelto a usar productos financieros derivados), como lo evidencian los Acuerdos de Bâle III (16 de diciembre de 2010) alcanzados por el G20 y el "Financial Stability Board" que pretenden implementar una nueva reglamentación bancaria (esos acuerdos debían ser adoptados a más tardar en diciembre de 2011 por todos los países).¹⁹

Por otro lado, a nivel nacional se denuncian políticas económicas y fiscales que afectan básicamente los grupos de menores ingresos, y que no han surtido siempre efectos en términos fiscales. También se denuncian políticas sociales en franca regresión (en Europa por ejemplo, se limita el acceso a ciertas subvenciones sociales estatales para cada vez más categorías, especialmente los inmigrantes, los de la tercera edad o los discapacitados) y se enfatiza la falta de solidaridad social expresada por esta orientación. Así mismo, las reformas en pos de la flexibilidad laboral afectan en primer lugar a las mujeres que son más numerosas en ocupar puestos a mitad de tiempo, trabajo nocturno, o en situación de precariedad. Al desempleo se suman las deslocalizaciones de empresas beneficiarias, por motivos financieros que no tienen que ver con la economía real sino con la preocupación por la rentabilidad financiera de los accionarios.

En semejante panorama, es más fácil entender la transmisión de discursos co-

munes, pero también de formas de acción. Las NTIC y redes sociales han sido la herramienta por excelencia de los intercambios entre los distintos movimientos de protesta, desde Túnez y Egipto hasta España y Grecia, y luego a Rusia y Estados Unidos. En contextos tan disímiles (pues unos países se caracterizan por fuertes dictaduras, otros por regímenes autoritarios y otros por regímenes formalmente democráticos), se ha evidenciado un énfasis en esperanzas comunes.²⁰ Si bien para el analista es fundamental tomar en cuenta los contextos de acción, es también imprescindible analizar los discursos y las acciones que revierten ciertos presupuestos teóricos. Se ha insistido mucho en las "estructuras de oportunidad" desde las teorías de la movilización; y sin duda hay condiciones más o menos propicias para ciertos tipos de movilización y no para otros. Pero las protestas de 2011 nos incitan a mirar dichas estructuras de oportunidad con mucho más fluidez. Especialmente porque las estrategias de los actores evolucionan al usar nuevos métodos de transmisión e intercambio de información. Volvemos, ahora sí, a los discursos y repertorios de acción.

2. Discursos y repertorios de acción

No podemos pasar por alto una acotación metodológica: el "discurso global" de los altermundialistas y de los indignados es difícil de analizar como una "unidad homogénea", debido a que en el caso altermundialista, la principal

19 Jean-Michel Lamy, *Régulation bancaire - Bâle 3: une victoire en trompe-l'œil du G20*, Le nouvel Economiste, n° 1542, du 11 au 17 novembre 2010, p 2.

20 Ver Andersen Kurt, « The protester », *Times Magazine*, 14-12-11.

fuentes – esto es: los debates de los foros sociales - *no ha sido sistematizada bajo la forma de memorias escritas*, por lo que hay una fuerte dispersión. Las principales fuentes usadas son por ende la prensa (en los foros es cuando hay el mayor despliegue periodístico) y los “sitios web” alternativos que usan los actores y los intelectuales para expresar sus puntos de vista. Dicha dispersión impide sin embargo evidenciar claramente “quien” habla (sobre todo cuando se usa la modalidad “foro virtual” bastante frecuente). En el caso de los Indignados, es aun más evidente la dispersión pues la prensa ha sido sin duda una fuente importante pero pocas veces ofrece análisis

más allá de lo coyuntural. Por tanto sintetizar los discursos es una primera – pero insuficiente - etapa en la comprensión de los mismos, luego en posteriores trabajos será necesario volver a un análisis pormenorizado, con un examen crítico de las fuentes.²¹

2.1. *Los discursos de los altermundialistas e indignados*

Como base para la reflexión, presentamos dos tablas que sintetizan los discursos y modalidades de acción de los Altermundialistas e Indignados, antes de entrar a detallar algunos aspectos discursivos y organizativos para cada caso.

Tabla 2
Altermundialistas: discursos y modalidades de acción predominantes

Acciones y fechas	Discursos	Repertorio de acción
<p>Cumbres Mundiales (G8, OMC, G20): los actores organizan una “cumbre paralela” en el lugar o cerca a la “cumbre oficial”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rechazar la falta de transparencia de los debates a nivel global • Rechazar el “déficit de legitimidad/ democracia” de las Instituciones multilaterales • Reivindicar mayor participación en debates y proceso decisorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Campamento (visto como el lugar adecuado para mostrar y expresar los valores pregonados, en su estructura; logística y en los estilos de vida que se implementan: por ejemplo expresar la solidaridad, la democracia local, el gusto y sabor de la vida, el tema de la fiesta). • Marcha (expresar las diferentes sensibilidades presentes)
<p>Foro Social Mundial (en Porto Alegre, salvo en 2004 cuando se realizó en Mumbai, India y en 2006 cuando se realizaron foros descentralizados, o en 2009, realizado en Belem, Brasil). El foro social mundial de 2011 fue realizado en Dakar (Senegal).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definir quienes somos • Propuestas para construir alternativas de todos los sectores • Debatir y participar: dos valores esenciales en la IC. • Proponer distintas concepciones de la democracia, y diferentes maneras de poner el énfasis en la relación entre representación/ participación. 	<ul style="list-style-type: none"> • asambleas, debates (sin portavoces ni un leader que se auto adjudica la representación; no se hacen memorias finales, ni declaración uniforme) • Campamento (cf arriba).

21 Será necesario por ejemplo usar técnicas de investigación que permiten monitorear sitios web y sus cambios, a través de programas informáticos específicos.

Acciones y fechas	Discursos	Repertorio de acción
	<ul style="list-style-type: none"> • Expresar y manifestar su diversidad política cultural e ideológica • Incorporar nuevos actores poco contemplados (ex 2004 los Intocables en el foro mundial de Mumbai). • Relación con gobiernos de izquierda, con partidos y sindicatos (diversas posturas, del no tajante a la aceptación). • Problema de la autonomía financiera (2011). 	
Foro continental descentralizado Realizados en 2006 en cada continente.	<ul style="list-style-type: none"> • Privilegiar una articulación para cada continente antes que mundial, para evidenciar las prioridades de cada zona • Facilitar el acceso a los que no pueden viajar lejos. Resolver problemas financieros y logísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Debates en distintas asambleas • Campamentos
Cumbres de pueblos indígenas	<ul style="list-style-type: none"> • Plataformas comunes con el Foro social de las Américas (Quito 2004) • Plataformas propias (más desarrolladas por actores indígenas pero aceptadas por otros actores, como defensa de los conocimientos ancestrales) • Tema del medio ambiente y de la protección y defensa naturaleza (desde 2009 está reforzado). 	<ul style="list-style-type: none"> • Marchas, • Campamentos • Rituales sagrados (homenajes a la Tierra-Madre).

Elaboración de la autora (con base en revisión de estudios de caso: Fisher & Ponniah 2003, Smith 2008, Canet 2008, Pommerolle & Simeant 2008, Pleyers 2010; y en revisión de prensa para algunos de los acontecimientos: Foro social de Porto Alegre, en varios años; Foro social y Cumbre de los pueblos en Quito 2004, Foro social de Belem 2009, Foros sociales de Mumbai 2004 y Dakar 2011).

Tabla 3
Indignados: discursos y modalidades de acción predominantes²²

Acciones y fechas	Discursos	Repertorio de acción
Puerta del sol, Madrid "15 de mayo"	<ul style="list-style-type: none"> • Rechazo al sistema electoral y al sistema de partidos • Reivindicar debates sobre democracia local, otras modalidades (no solo la representativa) • Creatividad e innovación de modelos políticos • Rechazo al manejo gubernamental y global (europeo) de la crisis económica y social desde 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asambleas locales (barrio) • Campamento en espacios públicos (plazas, parques)

22 No incluimos en esta lista actores y procesos de movilización de todos los países pues no concordamos *a priori* con incluir en la categoría *a todas* las movilizaciones del 2011, como se puede observar a menudo en la prensa. Por ejemplo, consideramos que las *protestas en el mundo árabe* obedecen a otras lógicas y a procesos de movilización distintos en sus discursos y objetivos (Massal 2011). Sin embargo es importante **observar como los discursos de los indignados se inspiran en los actores de los países árabes**: principalmente se recoge el símbolo de la ocupación de la *plaza Tahrir* en Egipto (enero-febrero 2011), plaza que, desde entonces es el símbolo de la contestación egipcia, y que por su nombre se convierte en un símbolo reapropiado (Tahrir significa "liberación"). Se ha querido también incluir en la lista distintos tipos de acontecimientos como algunas protestas en Israel en torno al costo de vida y la

Acciones y fechas	Discursos	Repertorio de acción
<p>Occupy (Ocupación de parques, espacios públicos, plazas en Nueva York y varias ciudades norteamericanas) - otoño 2011; modelo retomado en otras ciudades del mundo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denunciar el sistema bancario y las reglas del juego de los mercados financieros. • Denunciar las desigualdades sociales crecientes • Denunciar la no representatividad de actores políticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Campamentos en plazas y parques • Marchas, algunas con enfrentamientos con la policía.
<p>Jornada mundial (Día de los indignados) - 15 de octubre de 2011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denunciar la creciente pobreza y desigualdades sociales entre países y dentro de un país entre distintas categorías sociales. • Abogar por solidaridad entre pueblos como un valor fundamental • Reivindicar, extender y proteger derechos de 2ª y 3ª generación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asambleas y foros de preparación vía las NTIC (espacios virtuales). • Marchas, foros en espacios públicos.

Elaboración: de la autora (con base en revisión de prensa de los diferentes acontecimientos en prensa nacional de Estados Unidos, España, Francia, y en sitios internet de los actores involucrados, especialmente <http://15october.net/> ; **Global Voices**, <http://globalvoicesonline.org> así como varios boletines en línea).²³

Similitudes y diferencias de ambos discursos y repertorios de acción

Si comparamos las tablas saltan a la vista las similitudes y divergencias, tanto en los discursos como en el repertorio de acción de los dos actores. Entre **las similitudes** están en especial: una denuncia de la falta de representatividad política de los gobiernos y actores electos, una insuficiente profundización de la democracia en distintos ámbitos; una denuncia del manejo de los asuntos globales que no toma suficientemente en cuenta los pueblos y finalmente, al nivel estratégico, el énfasis en espacios de debate local, el uso de las marchas y de los foros de debate.

En **las divergencias** observamos particularmente las siguientes (pero éstas deben ser profundizadas mediante sendos análisis empíricos):

no se usa el “*foro social mundial*” en el caso de los indignados sino mas bien foros al nivel del barrio, de la plaza o el parque, en el ámbito urbano y a menudo en lugares estratégicos y muy visibles; por ende el uso de los espacios públicos es percibido como mas transgresor pues se realiza sin previo aviso y en momentos no tan ritualizados, contrario a lo ocurrido con el foro social (dotado con fechas y lugares bastante similares de 2001 a 2004 antes de una búsqueda de renovación en 2006).

situación social, las revueltas en Londres (agosto 2011) o los movimientos estudiantiles en Inglaterra, Italia, pero también Chile y Colombia. Considero que se debería realizar mayores investigaciones al respecto para identificar qué aspectos pueden relacionarse con la dinámica de los indignados, con base en un trabajo empírico. Justamente porque es necesario ir mas allá del análisis de la difusión de discursos.

23 Esa revisión de prensa es una aproximación preliminar y no obedece aun a una categorización definitiva. Se ha buscado mediante palabras claves y temáticas y se ha encontrado una producción abundante pero muy dispersa en calidad y profundización. Así mismo, se deberá complementar luego con trabajos académicos más elaborados y sistematizados.

Adicionalmente, los espacios ocupados son a menudo los símbolos por excelencia de la “globalización neoliberal”, como la ocupación de un parque en la zona de Wall Street por “Occupy Wall Street” en Norteamérica, o en el caso francés con la ocupación del barrio de “La Defensa” (diciembre de 2011) en París, barrio que es el símbolo de la modernidad arquitectónica y de la tecnocracia financiera, y visto como reservado a la “elite”.

A continuación profundizamos en dos aspectos de las acciones: las principales modalidades escogidas y el uso de las redes sociales.

Foros, marchas y ocupación de parques

Los indignados han recurrido de manera amplia a dos modalidades de acción, la marcha y el campamento, siendo el segundo el que acaparó más la atención mediática. En el caso español, fue la movilización del 15 de mayo de 2011 que simbolizó el movimiento de los autodenominados “Indignados”, cuya principal preocupación era denunciar la insuficiencia de la democracia representativa; así se organizó una amplia coordinación de centenares de organizaciones, entre ellas algunas del movimiento altermundialista (como ATTAC España) en torno a la llamada plataforma “Democracia Real Ya”, recientemente nacida. El campamento en las diferentes ciudades y especialmente Madrid, Valencia o Barcelona, fue la acción que permitió instalar en el

tiempo y asegurarle visibilidad a la protesta al ocupar la Plaza del Sol en la capital. Los organizadores recrearon una sociedad, en el campamento, con sus diferentes servicios (enfermería por ejemplo) y sus rituales asambleas para deliberar sobre el futuro de la acción y las opciones estratégicas. Se lanzaron eslóganes como “*tomarse las calles*” y otros que apuntaban a denunciar los responsables de la crisis: “*no somos mercancías en manos de políticos y banqueros*” o “*no pagaremos esta crisis ahora*”.²⁴

Los ocupantes del *Zuccotti Park* en Nueva York, en medio de los principales edificios de Wall Street, se han inspirado directamente en varios ejemplos, tanto egipcios como españoles. A finales de septiembre de 2011, luego de dos meses de preparación y de intercambios y encuentros reales y virtuales con actores egipcios y españoles, empezaron a diseminarse las acciones en varias ciudades de Estados Unidos bajo el lema “Occupy” seguido del nombre del lugar emblemático o de la ciudad. Los campamentos también fueron la modalidad de acción privilegiada, y se lanzaron los eslóganes, como “somos los 99%” (Andersen 2011).

Los entes locales han respondido con cierto nivel de fuerza (y de represión en algunos casos) y se han generado enfrentamientos con la policía. En el caso de los altermundialistas los enfrentamientos ocurrieron generalmente en el momento de las cumbres, y fueron más frecuentes en ciertos países que en otros y para cier-

24 *Le Monde*, 14-10-11: “Les “indignés” espagnols se félicitent du succès mondial de leur mouvement” (artículo en el que los españoles evalúan la difusión de su protesta y sus reivindicaciones, con ocasión del día mundial de los indignados el 15 de octubre). Ver también el dossier especial en el periódico *L’Express*, 14-10-2011; *El Espectador* (Bogotá), 18-10-11: “Indignados del mundo”.

tos grupos (como los “Ocupas” en Italia y España). En el caso de los indignados, la respuesta ha sido fuerte: se puede interpretar la respuesta bastante radical de las fuerzas públicas justamente por lo que simbolizan las protestas; en el caso de los “indignados”, la ocupación de ciertos espacios fue menos “ritualizada”, menos canalizada; se realizó mediante la modalidad de campamentos en *espacios no autorizados* por los entes locales. En suma la protesta fue contestataria, desafiante y transgresora, aunque por lo general totalmente pacífica. Pero los “ocupantes” han tenido que resistir el desalojo de los sitios ocupados por parte de la policía, y sortear varias estrategias para desanimarlos, desde la estigmatización hasta estrategias de “evitamiento”: la primera (estigmatización) se presentó por ejemplo en Nueva York cuando se desató una polémica sobre la “suciedad” del parque Zuccotti y la amenaza de desalojar para “limpiar el parque” (por lo que el aplazamiento acordado el 14 de octubre fue interpretado como una victoria para los *Occupy*²⁵), mientras la segunda se evidenció cuando el alcalde local prohibió el uso de paraguas que servían como “carpas”.²⁶

El uso de las NTIC y redes sociales

El artículo de González & al. (2012), sobre los indignados en España, es un es-

tudio enfocado en el rol de las redes sociales (Twitter), vistas como una herramienta de comunicación, sobre todo previamente a la movilización en las calles. Se evidencia el “*crecimiento de las protestas ‘digitalmente-nacidas’ que dependen del despliegue de redes preexistentes*”, retomando los aportes de la teoría enfocada en los “análisis de redes” (Diani 2002) y analizando como estos nuevos medios permiten *bajar los costos de la movilización* (pues el marco teórico está principalmente orientado a una discusión de las teorías de la racionalidad, que enfocan los costos/beneficios de la acción colectiva). Así mismo, esas herramientas favorecen y dependen a la vez de “*la habilidad de capitalizar la visibilidad de los actores mejor conectados*”. De esta manera los autores quieren demostrar que “*los mecanismos de este proceso coinciden con principios más generales de difusión y acción colectiva*” pero las herramientas modernas facilitan un cambio de escala mucho más acelerado al exponer más personas a la información, y permiten una mejor y más pronta adaptación a las circunstancias cambiantes.²⁷

Así mismo, en un análisis periodístico publicado en el *Times* en diciembre de 2011 cuando la revista decidió elegir al “Manifestante” como personaje del año 2011, y titulado “*The protester*”, K. Andersen proporciona varios ejemplos

25 *Le Monde*, 14-10-11.

26 *Le Monde*, 11-10-11.

27 González-Bailón Sandra, Javier Borge-Holthoefer and Yamir Moreno, “Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion”, marzo 2012 (consultado 23 de abril de 2012) <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1203/1203.1868.pdf> [citas en página 5]. Ver también el estudio de Vicari Stefania, “Twitter and Public Reasoning Around Social Contention: The Case of #15ott in Italy”, Universidad de Leicester (GB) <https://ira.le.ac.uk/bitstream/2381/10265/4/Twitter%20and%20public%20reasoning.pdf>

concretos de los intercambios de información, entre manifestantes de las “primaveras árabes” (de Túnez a Egipto), entre estos y los españoles, entre españoles y griegos, y de varios de ellos con el movimiento de “Occupy Wall Street”, cuyos líderes y militantes reivindican para Norte-América “la necesidad de tener su propio Tahrir” y por eso el parque Zuccotti fue re-bautizado “plaza de la libertad”.²⁸ Este reportaje evidencia también la circulación de ideas y esperanzas, en los militantes que usan y se apropian, de estas herramientas.

Sin embargo no se deben descartar los medios de comunicación “tradicionales” que también participan en la distribución de información y en la visibilidad de las protestas callejeras, al menos cuando éstas adquieren una dimensión crítica en términos cuantitativos, como ocurrió el 15 de mayo en Madrid o desde el 17 de septiembre en Nueva York.²⁹

En síntesis, esas acciones innovaron en varios aspectos: aprovecharon las NTIC y redes sociales para transmisión de ideas y de modelos (y consejos muy prácticos: como enfrenar un tanque, como ocupar una plaza); mantuvieron el énfasis pacífico de las protestas incluso ante la represión o la estigmatización, y tuvieron mucho cuidado de no dejar líderes y portavoces hablar en nombre de todos, de no permitir la emergencia de cabezas visibles salvo unos pocos, especialmente los Bloggers y algunas figuras mediáticas que aportaron visibilidad y

apoyo moral o recursos. En los países árabes esa preocupación por no dejar “personalizar” la protesta en una persona única pretendía evadir su arresto o el de su familia, mientras en Europa y Estados Unidos, se pretendió evitar una “jerarquización” de la representación de los actores; aunque como señala González y otros, sí existe una fuerte jerarquización en medio de las redes sociales usadas para lograr mayor eficacia en la transmisión de ideas. Asimismo se compartía la desconfianza y el desprecio hacia la política tradicional y los partidos políticos.

Pero no se debe, a nuestro entender, exagerar el carácter totalmente “novedoso” de estos actores, que también se inspiraron en modalidades de acción más consolidadas: el uso de la marcha no es precisamente una novedad, puesto que éste es un recurso bastante utilizado en varias partes del mundo, sobre todo en América Latina (por parte de los indígenas especialmente). No se trata de denegarle importancia a los aportes de los indignados, vistos como un “resurgir” de la protesta (en Europa y Estados Unidos al menos) después de un largo período de “letargo”; pero sí se debe retomar una escala de análisis temporal a mediano plazo para entender las fuentes de inspiración y los aportes de movilizaciones anteriores, pues como bien lo señalaba Tarrow (1992) los actores sociales y las protestas siempre son una compleja mezcla de tradiciones e innovaciones.

28 *Le Monde*, 03-10-11.

29 Y consideramos que el énfasis a veces excesivo puesto en las redes sociales por los analistas, ha ocultado procesos de movilización y antecedentes mucho más antiguos, especialmente en el caso de las revueltas árabes (Massal 2011).

Para profundizar en el análisis de las similitudes y divergencias, volvamos ahora a algunos aspectos específicos del discurso y de la caracterización sociológica de los actores.

2.2 ¿Qué concepción de la representación, la participación y la democracia?

Los altermundialistas se han caracterizado, como ya se mencionó, por una extrema diversidad ideológica y temática³⁰, dada la heterogeneidad sociológica que los caracteriza; se evidencian posturas de total rechazo a las instituciones democráticas liberales representativas pero también se multiplican las opciones que conjugan con distintos matices a la vez representación y participación, especialmente en ámbitos locales, nacionales y en menor grado internacionales.

Respecto del último nivel, por ejemplo, cuando la mirada se centra en las instituciones multilaterales, ha sido recurrente la crítica por su “**déficit democrático**” interno, dada la opacidad de los procesos de decisión; una crítica que apunta especialmente a la OMC (Cum-

bres de 1999, 2001 y 2003 en Seattle, Doha y Cancún). También se ha insistido mucho en la necesidad de revalorizar el papel de contrapoder, frente a la potencia norteamericana, de las organizaciones internacionales multilaterales, especialmente la ONU: por ende, se busca reformarla para darle mayor representatividad en sus órganos de decisión (Consejo de seguridad) y en sus modalidades de toma de decisiones, al criticar el poder de veto de los cinco permanentes: se argumenta que su predominancia, asentada en los equilibrios de fuerzas post Segunda Guerra Mundial, ya no se justifica, pues se han modificado las relaciones de fuerza actuales, a raíz de las nuevas potencias emergentes (los llamados BRIC).

Pero más allá de este ejemplo, a través de la crítica a los procesos decisivos de las instituciones multilaterales, el tema de fondo en juego es el de la llamada “*gobernanza mundial*” o incluso de “*un gobierno mundial*”, y de la manera de organizar nuevos poderes de manera democrática en el ámbito internacional. Esta temática sin embargo es relativamente minoritaria y es desarrollada en ámbitos universitarios

30 Recordemos que se los caracterizaba inicialmente como “**antiglobalización**”: el término “**alter**” apareció luego de unos años, con el objetivo de mostrar que no se trataba solo de criticar sino también de proponer; de allí el énfasis en el lema “*otro mundo es posible*”. Sin embargo la diversidad interna sigue siendo muy alta y solo los estudios empíricos permiten un análisis de discursos suficientemente preciso para alcanzar una comprensión de esta diversidad. Así, según Pleyers (2010) es indispensable contrastar dinámicas nacionales, continentales y locales, pero también tomar en cuenta la naturaleza de los actores (ONGs, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones), pues un mismo actor se expresa de manera distinta en función del contexto y distintos actores lo hacen diferentemente en un mismo contexto. Por ende identificar discursos propiamente “altermundialistas” es una tarea compleja. La definición de los temas más significativos en los discursos es distinta según el contexto. En Europa se ha hecho más que todo énfasis en la construcción europea, en el rol de partidos y sindicatos en la democracia, y en el tema de las desigualdades socioeconómicas, del abandono de la agricultura. En América Latina, el énfasis está mucho más relacionado con el rol predominante de los actores campesinos e indígenas en las luchas locales (especialmente en México, Brasil y los Andes) así como actores obreros y desempleados (Argentina, Chile, Brasil); en las crisis financieras de 1998-2001, y en la imposición de políticas neoliberales así como el debate sobre la deuda exterior y los procesos de integración regional (ALCA, TLC).

y académicos que apoyan los altermundialistas, particularmente en Canadá.³¹

Dentro del abanico de posiciones, se ha dado sobre todo énfasis a las posturas que pregonan una democracia local participativa, ilustrada en los **"presupuestos participativos"** implementados en Porto Alegre, cuyo balance, si bien es positivo (no sin fuertes críticas) en Brasil, es mucho más frágil en otros países de América Latina donde no se reúnen las condiciones peculiares que facilitan su éxito en Brasil; o bien se señala como los Presupuestos Participativos (y otros dispositivos participativos) se han convertido en instrumentos de legitimación política de gobiernos ya no de izquierda, sino de derecha "populista" (Goldfrank 2006, Vargas 2006). Por ende es de destacar la difícil reproducción de este "modelo político" en contextos disímiles y su alto nivel de vulnerabilidad a la instrumentalización política. Así mismo, en los países andinos y latinoamericanos, el tema de la democracia participativa ha tenido un auge desde mediados de los noventa, y ha evidenciado los ensayos y la búsqueda de nuevas rutas mediante las alianzas entre actores sociales, gobiernos locales y a veces gobiernos nacionales. Pero también se han vuelto manifiestas las ambigüedades de la reivindicación de participación que puede ser usada por actores de índole distinta, y que esconde tras discursos

convergentes proyectos políticos muy disímiles (Dagnino et. al. 2006).

Finalmente, el debate dado por los altermundialistas y sus aliados locales se ha concentrado en muchos casos en *re-formar el sistema político y electoral al nivel nacional*, mediante reformas electorales en pos de la descentralización del poder, de su redistribución, o de su reequilibramiento, con efectos divergentes y complejos de sintetizar, en los Andes por ejemplo (Carrión F., 2003; Carrión A. 2004, Perales 2004, Restrepo 2001), en cuanto a la reorganización y transferencia de competencias y recursos, y por ende los impactos no son tan positivos como se esperaba, cuando no francamente adversos (como en el caso de Colombia). La tendencia reciente (desde mediados de los 2000) en varios gobiernos de la región parece haber sido retomar la idea de una centralización estatal y revalorizar el papel del Estado en la economía y el tema de la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos. Esto ha generado malestar y confusión entre los actores sociales cuando se enfrentan a gobiernos "izquierdistas" que rompen las alianzas con gobiernos locales que los sustentaron.

En síntesis, el amplio tema de la democracia, representación y participación, objeto de sendos debates en las últimas décadas en América Latina y también en Europa³², ha dejado más dudas que cer-

31 Los actores movilizados en 1999 (alrededor de 50.000 personas) en la cumbre de Seattle eran principalmente procedentes de Estados Unidos y Canadá (Della Porta 2008: 13).

32 Recordemos que a finales de 1970 ya existían una serie de críticas al sistema de partidos y se hablaba en 1980 de una crisis de los partidos que permitiría el auge de movimientos sociales y de la sociedad civil (Cohen & Arato 1992). En América Latina, estos temas han surgido en el debate a principios o mediados de la década del noventa. Han sido registrados en los múltiples tipos de medición de la democracia (Latino-barómetros). Ver también el reciente **informe de IDD-LAT** [índice de desarrollo democrático de América Latina] publicado por la fundación K. Adenauer & Pollilat (México & Buenos Aires), de 2011, disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_28993-1522-4-30.pdf?111011191132

tezas sobre los modelos óptimos. En la región latinoamericana, se ha perdido el encanto por lo local que había caracterizado las dos décadas anteriores (1980s y 1990s), pero aún no se han elaborado alternativas claras y consensuadas (Massal 2010, Hevia 2007, Dagnino et. al. 2006). Presenciamos al contrario nuevas recomposiciones sociopolíticas que no obedecen a las dicotomías usualmente aceptadas: por ejemplo, entre los actores locales, nacionales e internacionales (instituciones financieras internacionales) se tejen alianzas fluctuantes, complejas, y se construyen nuevos discursos y modelos que generan un abigarrado panorama. Por ende, si bien la democracia como tema de reflexión es central, no se puede reducirlo a una alternativa “democracia representativa/participativa”, por cuanto cada actor propone diferentes concepciones de lo que significa “representación, participación, o democracia” en distintos grupos involucrados (López et. al. 2008, Massal 2005).

Los indignados, por su parte, no parecen haberse dotado de un “discurso” uniforme como tal, pues pese a algunos famosos eslóganes, existe aun poca sistematización. Entonces, si se analiza la información disponible, se enfatizan varias observaciones más o menos intuitivas que surgen al tratar de entender qué son y quiénes son los indignados:

- Una **extrema dispersión** de los actores en países múltiples; dispersión evidenciada en la movilización del 15 de octubre de 2011 como primera “jornada” común, llamada el “día mundial de los indignados”, y que apuntaba a movilizar “**951 ciudades en 82 países**”. Esta dispersión es vista como una **señal positiva de su capacidad de “enjamburar” o diseminarse**, tal como lo hacen las abejas. En efecto dicha dispersión geográfica debe entenderse o más bien dar a entender la difusión de las ideas y la fuerza del movimiento. Para esta diseminación es fundamental el uso de las NTIC y redes sociales como espacios de comunicación y debate virtuales.³³
- Son actores que surgen en contextos diversos pero marcados por una **fuerte crisis social, económica y política**; es el caso en Europa (Grecia, Portugal, España entre otros), Estados Unidos, Israel, y en América Latina, en países como Chile (el más mencionado en la prensa, a raíz del movimiento estudiantil de 2011), y Colombia (también por el movimiento estudiantil de 2011), mientras *Ecuador, Bolivia y Venezuela* son vistos por algunos observadores como parentescos de movimientos de indignados.³⁴

33 Sobre el papel de las NTIC y redes sociales como vectores de transmisión: González-Bailón Sandra, Javier Borge-Holthoefter and Yamir Moreno, op.cit.

34 Esos países (así como Argentina), que se han caracterizado en la década del 1990 y 2000 por fuertes movimientos sociales, no serían el teatro de actores « indignados », o en proporción muy limitada. Sin embargo son apreciaciones bastante subjetivas recogidas en prensa y no fundamentadas en registro estadístico ni análisis detallados. El límite de la prensa como fuente de análisis es obviamente un cubrimiento parcial y parcializado, una insuficiente cobertura en algunos países según la coyuntura, o el poco interés de los medios. También se puede relacionar con una tendencia de medios masivos de comunicación en apartar temas de debate “internacional” juzgados poco propicios para lograr audiencia.

- Un fenómeno marcado por el **ámbito urbano** como espacio de movilización, y más especialmente caracterizado por la participación de clases medias/altas pero también de grupos más heterogéneos, en particular las “juventudes”, y entre ellas, los estudiantes universitarios y los jóvenes diplomados desempleados, pero también los “excluidos” y “marginados” (desempleados, precarios, informales), vistos como “víctimas” de la globalización.³⁵
- Una poca claridad (a falta de estudios de campo hasta ahora) sobre la sociología de los actores, más allá de algunas características muy generales. Pero además, desde un punto de vista estratégico tampoco parece ser un objetivo identificarse en términos sociales de manera muy detallada pues al contrario, de lo que se trata es evidenciar la *magnitud de la clase media y del desequilibrio social*, lo que se plasma con el eslogan **“somos el 99%”** que pretende justamente enfatizar la fusión, la unidad, la solidaridad de todo el pueblo y todos los pueblos, contra una minoría ínfima (el 1%) de detentores del poder financiero, económico, apoyados por actores políticos que “olvidan” el pueblo y favorecen las elites financieras.
- Al nivel discursivo el elemento más recurrente y visible es el énfasis en el tema de la *solidaridad de los pueblos* entre sí; el resurgir del uso de la ca-

tegoría de “pueblo” en los principales lemas esgrimidos es bastante notorio (después del predominio otorgado desde los 1990 al término de “sociedad civil”).

Comparado con los altermundialistas que presentaban un abanico amplio de discursos, los indignados parecen, por ahora, haberse concentrado sobre todo en denunciar *la débil representatividad a nivel nacional de los actores electos*, por ejemplo cuando denuncian la “complicidad” entre los actores políticos y los mercados financieros o el sistema bancario, critican el manejo político de la crisis económica financiera, y la timidez de las políticas nacionales para reorganizar al nivel internacional y nacional los mercados y los bancos, o para sancionar a los culpables de la crisis del 2007-2008.

A la luz de los debates latinoamericanos de las últimas dos décadas, la postura indignada consistente en denunciar *la poca representatividad de los actores partidistas y gobiernos nacionales*, no pareciera presentar mayor originalidad ni reviste un carácter muy novedoso. Los altermundialistas pero también los actores locales (especialmente los indígenas) han hecho mucho énfasis en cuestionar la democracia representativa y en promover alternativas, generalmente bajo los rótulos de “democracia participativa/local/comunitaria”.

Pero si reflexionamos sobre los eslóganes, sí se percibe una novedad en la forma como se ve y se percibe el mundo,

35 Esto podría constituir, a modo de hipótesis a examinar, una diferencia con la movilización altermundialista, en la que según algunas encuestas cuantitativas, los actores jóvenes movilizados no eran desprovistos de capital social económico y cultural (Gobille 2005, Smith 2008). La mixidad social parece mucho mayor en el caso de los indignados.

incluso respecto a los llamados altermundialistas, que seguían orientados e inspirados en marcos de análisis “nacionales” y que consideraban el estado como un interlocutor más oportuno y más propenso a ofrecer las respuestas esperadas.

Como se ha insistido muchas veces en la teoría de la movilización, es fundamental para un actor movilizado que pretende conquistar nuevas bases, identificar un “problema” delimitado y caracterizado en términos políticos, y designar de manera contundente el “responsable” de este problema. Pero cuando se trata de analizar la crisis financiera del 2007-2008, por la misma magnitud y complejidad del problema, identificar un responsable se convierte en una tarea ardua. Entonces, desde este punto de vista, el hecho de relacionar la “débil representatividad” de actores electos y gobiernos, con una “complicidad” con los actores económicos, bancarios y financieros es llamativo. En efecto, la designación de los gobiernos nacionales y demás actores políticos electos dentro del sistema representativo como un blanco de la lucha, muestra que se considera los actores políticos como “sometidos” a los actores económicos, en otros términos ya no son percibidos como una “protección”; mientras anteriormente³⁶ se tendía a considerar que un Estado fuerte y un gobierno nacional enfocado en la defensa de la so-

beranía nacional, constituían una suerte de protección contra los actores financieros y económicos, especialmente frente a las empresas transnacionales, cuya fuente de legitimidad no es electoral y no se relaciona con una base nacional, debido al proceso de internacionalización de la producción.

Pero el sistema bancario o el mercado financiero no son “actores” en sí, y por tanto no son tan fácilmente identificables como una multinacional que, a pesar de todo, tiene un equipo directivo encarnado en personas. Entonces, las estrategias para enfrentarlos son distintas. Por tanto, asociar el responsable político como “cómplice” constituye una tentativa de personalizar, encarnar o identificar un “responsable”, en ausencia de representantes visibles del sector bancario y financiero. Adicionalmente, si se busca establecer las distintas responsabilidades de los actores políticos, económicos y financieros en el desencadenamiento de la crisis, es mucho más fácil identificar (y caracterizar) la del actor político (gobierno nacional) que la de los dirigentes financieros que incentivaron una multitud de leyes y sobre todo permitieron que se expandieran muchas prácticas ambivalentes del sistema bancario y financiero, muy reticente al autocontrol y la regulación de sus reglas de funcionamiento interno (de allí la multiplicación de los

36 Especialmente hasta la mitad de la década del 2000, en los discursos altermundialistas, sobre todo europeos, pero también latinoamericanos, se planteaba como alternativa *reforzar y relegitimar un “estado soberano”* para resistir los embates de la globalización neoliberal, y promover una soberanía nacional fuerte como “muro de contención” frente a la intromisión de multinacionales y a la imposición de políticas promulgadas por las IFI; estratégica de resistencia que se adoptó especialmente en Argentina en 2001, en Bolivia (2004) y Ecuador (2005-2006) con el tema de la defensa del control del Estado sobre los hidrocarburos. (Esas son posturas de gobiernos nacionales que coincidían con las de actores sociales locales e internacionales movilizados en su momento).

productos financieros derivados). No se observan muchas otras figuras (sino bajo lemas simbólicos) como “los responsables”, aunque está clara la denuncia de un sistema financiero en conjunto. Los interlocutores siguen siendo poco claros en los lemas de los indignados como por ejemplo: “*nuestras vidas valen más que sus ganancias*”. El interlocutor es identificado como “el 1%”, que simboliza una ínfima minoría de detentores del poder y la riqueza.

Además, el gobierno nacional sigue siendo el interlocutor más fácil de interpelar, criticar, presionar y denunciar, por cuanto su respuesta, aunque sea por estrictos motivos electoralistas, es más probable y más “abierto” que la de figuras desencarnadas de un sistema financiero global. Aun así, la respuesta política ha sido la de presentar los gobiernos como una protección contra los poderes financieros, mientras los indignados reivindican al contrario estar más claramente involucrados en el diálogo tanto con políticos como con los responsables financieros y ya no creen en el carácter protector del poder estatal.³⁷

De allí también el énfasis en el tema de la “democracia directa” o la necesidad de difundir la democracia en más espacios sociales y políticos; idea relacionada no solo con la denuncia del sistema partidista y electoral, que son blancos de ira y de cuestionamiento desde hace mucho

tiempo, sino también con la necesidad de dotar al pueblo de armas para defenderse a sí mismo contra el sistema financiero, dada la incapacidad de los gobernantes para representar y proteger sus pueblos.

Se pretende rehabilitar el debate y la deliberación a nivel local mediante “asambleas ciudadanas” y promover la consulta abierta sobre todas las decisiones estratégicas que se asuman (seguir con la ocupación del sitio o no, bajo qué modalidad, etcétera). Pero aun es evidente que las protestas expresan una heterogeneidad de percepciones y visiones del mundo, puesto que comulgan personas poco relacionadas previamente entre sí y que, contrario a los que postulan que las protestas se asientan en “*vínculos primarios*”, no necesariamente todos los manifestantes comparten una interpretación común de la realidad, más allá de los lemas generales, sino que aprenden a construir dicha visión común en el transcurso de la acción. Obviamente faltan más estudios de caso para profundizar en esta dimensión.

Conclusión

A través del recorrido de los discursos y formas de acción en los que se ha centrado el análisis, podemos concluir que los indignados son actores que han surgido en un contexto de movilización bastante propicio, donde sin duda los

37 *Le Monde*, 03-11-11, “Les indignés entendus” (por M. Feher, Filósofo). En el artículo, se resalta que a pesar de la simpatía en la población y ciertas respuestas amenazadas de los gobiernos (como el de Obama que habló del “malestar” de los manifestantes), no se han recibido respuestas concretas, y que esto se debe menos a la imprecisión de las reivindicaciones que a la postura equivocada de los gobiernos que se presentan como “protectores” lo que no responde a las expectativas. Así mismo se observa que por ende la solución no es el regreso de “un estado fuerte” sino una expansión de la democracia.

modelos circulan con mayor velocidad, la información se transmite en múltiples canales y alcanza potencialmente franjas amplias de la población no solo de un país sino de varios países a la vez. En este sentido, la difusión de ideas, discursos y el aprendizaje de los modelos, así como las influencias mutuas entre los manifestantes sobre las estrategias y tácticas más oportunas y eficientes, puede ser comprobada por el estudio de los factores de movilización: entre éstos el contexto de fuerte denuncia a los actores políticos y económicos, la denuncia de la injusticia y las desigualdades sociales que se ha esparcido en países con regímenes políticos muy variados, así como las herramientas disponibles y las experiencias intercambiadas que se han constituido en un multiplicador y un catalizador de protestas con una base transnacional.

Sin embargo, también existen factores que inhiben o restringen la movilización y la difusión de discursos, que deberán ser puestos en el análisis a través de las protestas fallidas o por lo menos que no han logrado sus cometidos del todo - sea este el de tumbar el gobierno dictatorial o el de lograr mediante la vía electoral cambios reivindicados en la calle. El caso de Siria, Argelia y varios países del Golfo donde la protesta fue aplacada, inhibida o reprimida, ilustra el hecho que, aunque estén disponibles las herramientas de comunicación, el uso de las mismas puede constituir un acto de alto riesgo, y nos recuerda que el "medio" de transmisión no es suficiente en sí, ni es un factor explicativo tan determinante como a veces se postula.

Así mismo, en contextos como los europeos, las protestas callejeras no han

logrado mayores respuestas concretas en políticas públicas respecto al sistema financiero y bancario, ni han podido traducir sus anhelos en voto, sea en España en mayo de 2011 o en Francia en 2012. Los partidos de derecha se mantienen con bastante fuerza (en Francia, el gobierno Sarkozy ha logrado en la primera vuelta un nivel de votación del 27%, ciertamente menor que en 2007 pero no se ha derrumbado; el candidato socialista no tiene mucho margen de maniobra frente a una derecha y una extrema derecha que reúnen el 45% de la votación, y gana con un escaso 51%). Eso ocurre pese al alto nivel de deslegitimación de las políticas socioeconómicas de derecha. El poco crédito del que se benefician los partidos de izquierda no ha permitido construir oposición partidista suficientemente creíble como fuerza de cambio o capaz de revertir la expansión de los partidos de extrema derecha.

De esta manera, la protesta como medio de acción política para lograr cambios, si bien ha recobrado una legitimidad que se creía se había perdido en algunas partes del mundo, desde los contextos más hostiles hasta los más benevolentes (al menos hasta cierto punto), puede agotarse o desviarse hacia formas menos canalizadas y organizadas de expresión.

Bibliografía consultada

Amiriaux, Valérie

2009 "Les limites du transnational comme espace de mobilisation", *Cultures & Conflits*, 33-34, printemps-été 1999 (Consultado el 16 de febrero) : <http://www.conflits.org/index167.html>

120 JULIE E. MASSAL / Del altermundialismo a la protesta de los indignados: ¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?

- Andersen, Kurt
2011 "The protester", *The Time* (14 de diciembre) http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2101745_2102132,00.html
- Arenas, Luis Carlos
2004 "La Lucha contra la explotación petrolera en territorio U'wa: estudio de caso de una lucha local que se globalizó", in Santos Boaventura de Sousa y García Villegas Mauricio (eds), *Emancipación social y violencia en Colombia*, Bogotá, Ed. Norma, pp. 323-376.
- Biskupovic, Consuelo
2012 "Acción colectiva en espacios cerrados", *Polis*, 28 | 2011 (Puesto en línea el 13 abril, consultado el 24 abril 2012). <http://polis.revues.org/1133> ; DOI: 10.4000/polis.1133.
- Canet, Raphaël
2009 "L'intelligence en essaim. Stratégie d'internationalisation des forums sociaux et régionalisation de la contestation mondiale", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008 (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflicts.org/index12423.html>
- Carrión, Francisco (comp.)
2003 *Procesos de descentralización en la comunidad andina*, Quito, FLACSO-OEA-Parlamento Andino.
- Carrión, Ana
2008 "Participación ciudadana y descentralización en el Perú", Latin American Network Information Center, 2004 (consultado el 20 de febrero). http://lanic.utexas.edu/project/etext/search.html?cx=009303113233185091933%3A5js_2xv9nv4&q=democracia+participativa&sa=Search&cof=FORID%3A11#1214
- Cheyneis, Eric
2009 "Trajectoires du Maroc à Porto Alegre. Conditions et logiques de la participation marocaine au Forum social mondial", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008 (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflicts.org/index13193.html>
- Cheyneis, Eric
2005 "L'altermondialisme au prisme marocain" in *Critique Internationale*, Paris, CERIFNSP, 27, pp. 177-191.
- Colonomos, Ariel
1995 *Sociologie des réseaux transnationaux*, Paris, L'Harmattan.
- Coradini, Odaci Luiz
2009 "Les participants et les organisateurs du Forum social mondial : la diversité du militantisme", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008 (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflicts.org/index12673.html>.
- Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto J.; Panfichi, Aldo
2006 *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, México, CIESAS-IHHS.
- Della Porta, Donatella; Kriesi Hanspeter (& al.)
1999 *Social movements in a globalizing world*, London, MacMillan Press Ltd.
- Della Porta, Donatella
2009 "L'altermondialisme et la recherche sur les mouvements sociaux. Quelques réflexions", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008 (consultado el 12 de febrero). <http://www.conflicts.org/index12293.html>
- Della Porta, Donatella & Sidney Tarrow (eds.)
2005 *Transnational Protest and Global Activism*, Lenham, Rowman & Littlefield.
- Escobar, Arturo & Mauricio Pardo
"Movimientos sociales y biodiversidad en el Pacífico colombiano", in Santos Boaventura de Sousa y García Villegas Mauricio (eds), *Emancipación social y violencia en Colombia*, Bogotá, Ed. Norma, pp. 219-283.
- Fisher, William & Thomas Ponniah
2003 *Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum*, New York, Zed Books.
- Goldfrank, Benjamin
2006 "Los procesos de "presupuesto participativo en América Latina : éxito fracaso y cambio", in *Revista de Ciencia Política*, México, volumen 26, n° 2, pp. 03-28.
- González-Bailón, Sandra; Javier Borge-Holthoefer and Yamir Moreno
2012 "Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion", (marzo 2012, consultado el 23 de abril) <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1203/1203.1868.pdf>
- Gobille, Boris
2005 "Les altermondialistes: des activistes transnationaux ?", in *Critique Internationale*, Paris, CERIFNSP, 27, pp. 131-145.
- Hevia, Felipe
2007 "Participación ciudadana institucionalizada y despolitización: análisis crítico de los marcos legales de la participación en América Latina", Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e

- Planejamento (CEM/BRBRAP). (Disponible en OPALC: [http://www.opalc.org/web/consultado:septiembre de 2009](http://www.opalc.org/web/consultado:septiembre%20de%202009)).
- Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink
2000 *Activistas sin Fronteras: redes de defensa en la política internacional*, México, Siglo XXI.
- Diani, Mario
2002 "Network Analysis", in Klandermans Bert and Suzanne Staggenborg (eds), *Methods of Social Movement Research*, Minnesota, The Univ. Minnesota Press, pp. 173-200.
- Lelandais Gülçin, Erdi
2009 "Editorial. Altermondialisme(s) oublié(s)", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008, (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflits.org/index12213.html>
- López, Margarita; Nicolás Iñigo; Pilar Calveiro (eds)
2008 *Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
- Massal, Julie
2011 "Los sublevamientos en el mundo árabe: ¿hacia una democratización? (el caso de Túnez y Egipto)", *Análisis Político*, Bogotá, IEPRI-UN, sept.-dic., n°73, pp. 97-117.
- Massal, Julie
2010 "Democracia participativa, desafíos y desencantos en el siglo XXI", *Análisis Político*, Bogotá, IEPRI-UN, mayo-agosto, n°69, pp. 79-91.
- Massal, Julie
2009 "Mutations et déclin du Mouvement Pachakutik en Equateur (1996-2008)", in: *Problèmes d'Amérique Latine*, Paris, Ed. Choiseul, n°72, pp.93-107.
- Massal, Julie
2005 *Les mouvements indiens en Equateur. Mouvements contestataires et démocratie*, Aix-en-Provence, Karthala-CSPC-IEP.
- Masse, Jean-Pierre & Nathalie Bayon
2009 "Petites impressions génoises. Chroniques quotidiennes d'une mobilisation anti-mondialisation", *Cultures & Conflits*, 46, été 2002 (Consultado el 15 de febrero) <http://www.conflits.org/index809.html>
- Masse, Jean-Pierre & Nathalie Bayon
2009 "L'altermondialisme au prisme de l'exceptionnalisme : les effets du 11 septembre 2001 sur le mouvement social européen", *Cultures & Conflits* (Consultado el 15 de febrero) <http://www.conflits.org/index1069.html>
- Perales, Iosu
2004 *Poder local y democracia participativa en América Latina*, Bogotá, Fica.
- Pleyers, Geoffrey
2010 *Alterglobalization, becoming actors in a global age*, Cambridge, Polity.
- Pommerolle, Marie-Emmanuelle & Johanna Siméant
2009 "Voix africaines au Forum social mondial de Nairobi. Les chemins transnationaux des militantismes africains", *Cultures & Conflits*, 70, été 2008 (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflits.org/index13423.html>
- Restrepo, Dario
2001 "Eslabones y precipicios entre participación y democracia", *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 63, No. 3, Jul. - Sep., pp. 167-191. <http://www.jstor.org/stable/3541245>
- Risse-Kappen, Thomas
1995 *Bringing Transnational Relations Back In, Non-state Actors, Domestic Structures and International Institutions*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Santos, Boaventura de Sousa & Mauricio García Villagas
2004 *Emancipación social y violencia en Colombia*, Bogotá, Editorial Norma.
- Smith, Jackie, Pagnucco Ron & Charles Chatfield
1997 *Transnational movements and global politics; solidarity beyond the state*, Syracuse U. Press.
- Smith, Jackie & al.
2008 *Global democracy and the world social forums*, Boulder & London, Paradigm Publishers.
- Tarrow, Sidney
2009 "La contestation transnationale", *Cultures & Conflits*, 38-39, 2000 (Consultado el 12 de febrero) <http://www.conflits.org/index276.html>
- Tarrow, Sidney
1992 "Mentalities, political cultures and collective action frames", in Morris Aldon D. & Mac Clurg Mueller Carol (eds), *Frontiers in social movement theory*, New Haven & Londres, Yale University Press, pp. 174-198.
- Tortosa, José Mari
2012 "Sobre los movimientos alternativos en la actual coyuntura", *Polis (Chile)*, 30 | 2012 (Puesto en línea el 04 abril 2012, consulta - do el 24 abril) <http://polis.revues.org/2306> DOI: 10.4000/polis.2306

122 JULIE E. MASSAL / Del altermundialismo a la protesta de los indignados: ¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?

Vargas, Soraya M.

2006 "Foros Participativos y gobernabilidad. Una sistematización de las contribuciones de la lectura", en *Diseño institucional y participación política. Experiencias en el Brasil contemporáneo*: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/disenocortes.pdf>

Vicari, Stefania

"Twitter and Public Reasoning around Social Contention: The Case of #15ott in Italy", Universidad de Leicester (GB): <https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/10265/4/Twitter%20and%20public%20reasoning.pdf>

El movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador¹

Sara Latorre Tomás

Las movilizaciones de sectores populares rurales opuestos a la minería tienen una trayectoria iniciada en la década del noventa del pasado siglo. Antes y durante el gobierno de Correa se han producido movilizaciones antimineras en el marco de una amplia variedad organizativa a escala local. En tanto que la estrategia gubernamental ha procurado deslegitimar y debilitar esas acciones. Es una confrontación que también implica el modelo de desarrollo.

Introducción

La literatura temática sobre el movimiento ecologista² en América Latina señala principalmente tres actores en función de sus ejes programáticos e identidad de la base social que los conforman: las *organizaciones ambientalistas* cuya razón de ser y el elemento central de su actividad lo constituye el tema del ambiente y los recursos naturales; las *organizaciones locales* que reivindican el acceso, uso y/o conservación de los recursos naturales; y las *organizaciones sociales “enverdecidas”* en el sentido de que a pesar de que tienen como finalidad primordial otras temáticas, han

incorporado diversas reivindicaciones ambientales adicionales a sus ejes temáticos rectores.

Estos dos últimos actores han sido tradicionalmente conceptualizados bajo la teoría del *ecologismo de los pobres o popular*, formulada por el historiador Ramachandra Guha y el economista Joan Martínez Alier. Ésta sostiene que este tipo de ecologismo nace de los conflictos ambientales a nivel local, regional, nacional y global, causados por el crecimiento económico y la desigualdad social (conflictos ecológicos distributivos). Señala que el crecimiento económico implica mayores impactos en el medio ambiente, y llama la atención al

1 El presente artículo corresponde a una versión reducida y adaptada de un estudio más amplio sobre el movimiento ecologista popular en el Ecuador, titulado “El ecologismo popular en el Ecuador: pasado y presente” y fue preparado en el marco del Proyecto de Investigación Colaborativo entre el Instituto de Estudios Ecuatorianos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, que contó con el soporte de Ayuda Popular Noruega Intermon Oxfam y el Ministerio de Cultura del Ecuador.

2 Ver: Hurtado y Lungo, 2007; Fontaine, 2007; Bebbington y Humphreys, 2009; Tobasura, 2002.

desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y de sumideros de residuos. Los actores de tales conflictos muchas veces no usan un lenguaje ambiental, razón que explica por qué esta corriente no se identificó hasta la década de los ochenta (Martínez Alier, 2004). Su lucha responde a un interés material por el medio ambiente como fuente y condición de sustento y por una demanda de justicia social. Por tanto, el origen de estos conflictos es por una disputa por recursos, conllevando a la defensa del medio ambiente como efecto secundario de su acción, y no por una conciencia ambiental explícita (Folchi, 2001:91).

No obstante, estos actores locales han establecido alianzas estratégicas con otros de carácter global como resultado de los procesos contemporáneos de globalización que han incorporado nuevos actores nacionales y transnacionales como ONG, agencias internacionales y redes globales de activistas (Keck y Sikkink, 1998). Este fenómeno, a pesar de sus límites dado que las partes no siempre comparten las mismas agendas políticas o preocupaciones materiales (Bebbington, 2007:122), en algunos casos ha contribuido a "ecologizar" este tipo de conflictos. Es decir, como resultado de esta interacción, estos actores locales crean nuevos discursos en torno al significado político del ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar el movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador. Concretamente se examina su proceso de surgimiento y evolución a partir de sus interacciones con el gobierno de Rafael Correa hasta el año 2009. Asimismo, se explora la relación entre las ONG ambientalistas y las

organizaciones locales a fin de estudiar cuál es el rol de las primeras en la configuración y consolidación del movimiento anti-minero ecuatoriano. Se hace especial énfasis en la zona de la Cordillera del Cóndor, sureste del país, debido a su importancia ecológica, el alto nivel de conflictividad existente, y la existencia de pocos estudios sobre la conflictividad minera en esta región.

El interés principal es indagar sobre los efectos que ha tenido el proceso político actual, de giro a la izquierda, sobre las organizaciones populares y movimientos sociales. Se arguye que el modelo neodesarrollista adoptado por el actual gobierno ha generado un escenario de conflictividad social especialmente fuerte para el movimiento ecologista popular anti-minero. A pesar de ello, este actor no ha sido capaz hasta el momento (a pesar de su intento) de consolidarse a escala nacional y modificar la correlación de fuerzas existentes.

A nivel metodológico, la investigación se llevó a término durante el período noviembre (2008)- abril (2009). Tiene un enfoque cualitativo que combina tanto el análisis teórico con el práctico. Concretamente, se realizó una revisión bibliográfica de la literatura temática y teórica en relación al "ecologismo popular", "el movimiento ecologista ecuatoriano", y la "problemática minera" del país. Se contó con material escrito, sobre todo boletines, realizados por varios de los actores clave. Asimismo, se puso especial énfasis en los comunicados de prensa, manifiestos, declaraciones, etcétera publicados por éstos. Por no ser documentos académicos en estricto sentido, vienen citados a lo largo del documento como nota al pie de página. El

mismo criterio se ha usado para las noticias de prensa. Para complementar el análisis se efectuaron un total de 42 entrevistas en profundidad (estructuradas o semi-estructuradas) con representantes de las principales ONG ecologistas ecuatorianas y de los principales líderes de las organizaciones anti-mineras. Adicionalmente, se utilizó las intervenciones discursivas realizadas en una serie de Foros que tuvieron lugar a lo largo de diciembre del 2008.

La minería metálica a gran escala en el Ecuador

Hasta el gobierno de Rafael Correa (2007), la minería metálica a gran escala en el Ecuador no fue vista como una actividad estratégica para el modelo económico del país. Lo que se desarrolló hasta ese entonces en el campo de la minería metálica, fue una actividad minera basada en unidades de pequeña escala³ y artesanal⁴ en la región sur del país. Ésta se inicia a finales de la década de los 70 en la zona de Portobello-Zaruma (provincia de El Oro), y se consolida en los años 80 con la emergencia de dos nuevos distritos mineros: Nambija (provincia de Zamora Chinchipe) y Ponce Enríquez (provincia de Azuay). En térmi-

nos generales, el desarrollo de este tipo de minería ocasionó problemas graves de contaminación y de violación de los derechos laborales y sociales (Sandoval, 2002:13).

Los años 1990 fueron caracterizados por constantes modificaciones en el sistema institucional y legislativo minero. Coincidiendo con los altos precios de los metales en el mercado internacional y el interés de las empresas transnacionales en ampliar su área de prospección, el Ecuador empezó a ver la minería privada industrial como una potencial alternativa para aumentar los ingresos del gobierno (Babelon y Dahan, 2003:4). Con esta finalidad, a lo largo de esta década y a inicios de la siguiente, se producirán varias modificaciones al marco institucional y legal del país⁵ caracterizadas por la liberalización de los controles estatales y la simplificación de mecanismos y procedimientos para atraer a la inversión extranjera (Sandoval, 2002:460). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, a partir de 1996 las inversiones en exploración y producción empezaron a disminuir, con una inversión extranjera directa mínima y el retiro de las empresas transnacionales del país (Babelon y Dahan, 2003:5). Entre las explicaciones que se dan se destacan: la abrupta disminución

-
- 3 La pequeña minería, se caracteriza por desarrollar formas asociativas de trabajo (las sociedades de pequeños mineros) o grupos de empresarios, que incorporan instrumentos mecanizados para la extracción, procesamiento y transporte de materiales (Sandoval, 2002:446).
 - 4 La minería de subsistencia y artesanal tiene una profunda raíz en la tradición productiva de los pueblos indígenas de Ecuador. Se la define como aquella que utiliza principalmente instrumentos manuales, se asienta en el trabajo familiar y extrae volúmenes bajos de mineral, que le sirven para sostener la economía familiar, de manera directa o complementaria (Sandoval, 2002:446).
 - 5 En 1991 se aprueba una nueva Ley de Minería (Nº 126) y sus reglamentaciones con el objetivo de atraer la inversión del sector privado. Posteriormente, en el año 2000 se aprueba la "Ley para las inversiones y la participación ciudadana "conocida como "Trole II".

en las inversiones de exploración en todo el mundo después de 1997, siguiendo a la caída en los precios internacionales de los metales y los minerales y la quiebra de muchas empresas auxiliares que eran las más activamente involucradas en la exploración (*Ibídem*). Adicionalmente, también se citan como factores explicativos, la inestabilidad política del país, el sistema judicial poco seguro, la crisis económica de 1999, la oposición generalizada a las actividades extractivas por las ONG y las comunidades rurales e indígenas, y la falta de procedimientos de consulta formal y de reglas de compensación claras (*Ibídem*).

Este escenario comenzó a cambiar a inicios del año 2000, cuando se empezó a dar una reconcentración de los títulos mineros en pocas manos, acompañada por el incremento de las actividades de exploración por parte de empresas transnacionales (MEM, 2007:23). Estas concesiones se concentran en determinadas provincias, como son Zamora Chinchipe, Morona Santiago, El Oro, y Azuay (Sandoval, 2002:450). Esta tendencia estuvo favorecida por el incremento de los precios de los metales a nivel internacional y por las facilidades que el marco legal ecuatoriano proporcionaba a los capitales extranjeros (MEM, 2007: 64).

No obstante, como ya se ha mencionado, solo desde el gobierno de Rafael Correa comienza una apuesta clara por la minería como eje del modelo de desarrollo. Para ello, el gobierno de Correa impulsó una nueva política nacional minera, iniciando de este modo, lo que denominó como el Diálogo Minero Nacional (abril-junio 2007). Se realizaron diferentes mesas de trabajo multilate-

rales a nivel nacional, regional y local con todos los actores interesados en la actividad, con la finalidad de apoyar la generación de una nueva política minera, socializar la información sobre la situación actual y las perspectivas de la actividad minera en el Ecuador, y fomentar la participación de toda la ciudadanía en torno a la toma de decisiones claves del Estado (*op.cit*: 61). Posteriormente, se le encargará a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) establecer los principios de un nuevo orden legal para la minería, y a la Comisión Legislativa y de Fiscalización la redacción de la nueva Ley Minera. Ésta fue aprobada el 12 de enero del 2009 en medio de fuertes críticas provenientes de organizaciones sociales y ambientalistas.

La valoración final de dicha ley varía enormemente entre partidarios y opositores a la minería a gran escala. Sin embargo, ambos coincidieron en que su espíritu es el de favorecer la explotación minera industrial. El gobierno y las cámaras de minería destacaron su eficiencia en el establecimiento de controles ambientales y sociales, así como el incremento de participación en la renta minera por parte del Estado (Estevez, 2009:16). Este último aspecto fue visto negativamente por el sector minero al reducir la competitividad del país para atraer inversión extranjera frente a países con leyes más aperturistas como Perú, Colombia o Chile. En este sentido, es cierto que la presente Ley restaura el 5% mínimo de regalías sobre las ventas y el 70% de los impuestos a los ingresos extraordinarios (art.93), además de crear la Empresa Nacional Minera (arts.5 y 12). En materia socio-ambiental, la Ley esta-

blece nuevos mecanismos de prevención de impactos⁶ (art.78), da la posibilidad de cancelar las concesiones en caso de violaciones al medio ambiente o de los derechos humanos (art.115), e introduce la obligatoriedad para el Estado de realizar un proceso de participación ciudadana y consulta en todas las fases de la actividad minera (arts.87-90).

Todas estas medidas fueron vistas, por los opositores, como insuficientes y/o contradictorias con otras normas de mayor grado aduciendo las siguientes argumentaciones⁷: *en relación al incremento de la participación del Estado*, alegaron que en el art. 40 se exime de regalías y del pago de impuestos a las empresas cuando se celebran contratos de prestación de servicios; se sigue dando un trato nacional a las empresas transnacionales (art.19); además de no poner límites a la obtención de concesiones (arts. 33 y 35), y de permitir su transferencia (arts. 30 y 31) por lo que se deja abierta la posibilidad de monopolio y de especulación. Por otro lado, al ser declarada la minería de utilidad pública (art.15) y otorgarle toda clase de servidumbres (arts.100-105), se le está dando un trato privilegiado a una actividad de lucro privado (dominada por las empresas transnacionales) a la vez que subordinando derechos fundamentales como los Derechos Humanos, el Derecho al Agua, los Derechos de la Naturaleza y otros Derechos Colectivos

recogidos en la vigente Constitución. *En materia socioambiental*, criticaron la falta de exigencia de rigurosidad e independencia de los estudios de impacto ambiental (EIA) (art.78); la ausencia de aplicación del principio de precaución en una actividad con potenciales impactos ambientales inherentes (art. 91), cuando además está recogido en la Constitución; la poca apertura (consulta previa sin derecho a veto) que se da a la participación de las comunidades para precautelar los derechos ambientales y sociales; la permisión de minería en áreas protegidas o en fuentes hídricas bajo decisión del Presidente (arts. 24, 25, 60 y 61); y finalmente denunciaron el sesgo de las consultas a la población potencialmente afectada por esta actividad por estar únicamente encaminada a incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental del proyecto (arts. 87 y 89), por lo que no se les da ningún derecho a veto.

Además, adujeron el carácter institucional y arbitrario de la Disposición Final Segunda donde se establece que las normas de la Ley de Minería “prevalerán sobre las leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa de otra Ley destinada específicamente a tales fines”. Esto hace referencia a otro aspecto de la Ley que es el hecho de otorgarle al ejecutivo gran poder discrecional, lo cual resulta potencialmente peligroso al posibilitar que mediante

6 Se establece que los titulares de las concesiones deberán efectuar previo a la actividad de exploración y en todas sus fases un EIA y planes de manejo ambiental. Asimismo, deben presentar anualmente una auditoría ambiental (art.78). Por otro lado, es obligatorio la obtención de la Licencia Ambiental para iniciar la actividad.

7 Las argumentaciones que se describen a continuación están extraídas de diversos documentos internos y boletines públicos de la CONAIE-EUARUNARI, de ONG como PACHAMAMA, Acción Ecológica, y de organizaciones sociales como la DECOIN, FRESMIGE y de la CNDVS.

decretos y sin participación se decidan aspectos fundamentales.

Finalmente, resaltaron su efecto potenciador de la conflictividad a nivel local por disputas en torno a los recursos económicos. El art. 93 establece que el 60% de los ingresos por regalías quedarán en manos de gobiernos municipales y juntas parroquiales, por lo que debido al reducido presupuesto que manejan estas instituciones, pronosticaron que habría un posicionamiento a favor de dicha actividad por parte de las autoridades locales independientemente de la voluntad de sus habitantes (Informantes 40 y 45). Estas previsiones se constatan actualmente para diversas localidades con proyectos mineros proyectados como es el caso de la región de Íntag.

Acciones colectivas anti-mineras en la década de 1990

Durante esta década, el Ecuador, bajo las directrices de las Instituciones Financieras Internacionales, intentó atraer

la inversión privada extranjera para el desarrollo de la actividad minera. Aunque los resultados no fueron los esperados para los gobiernos, algunas empresas iniciaron sus actividades de exploración en el Ecuador, y con ellas, los primeros conflictos con las poblaciones locales. Todos ellos se caracterizaron por enfrentar a empresas transnacionales con poblaciones campesinas y/o indígenas que defendían sus espacios y formas de vida.⁸

Fueron conflictos puntuales, de aproximadamente un año de duración, que contaron con el aporte de la ONG Acción Ecológica (AE) en tareas como la difusión de información, denuncia de los casos, y apoyo al proceso organizativo. En algunos casos se dio una transnacionalización del conflicto con la intervención de ONGs activistas y campañas de boicot a nivel internacional como fueron los casos de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) contra la compañía Bishimetals y el caso de la comunidad de Shumiral, en

8 Entre 1992-1993 en la comuna Matiaví, en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, se dio un conflicto entre varias comunidades indígenas y la empresa inglesa Río Tinto Zinc (RTZ) que había obtenido cerca de 8.000 Ha. para explotación minera. Entre 1991-1993 se da un conflicto en la comunidad de Jima, provincia de Azuay, entre la empresa estadounidense Newmont y la comunidad de Jima. Entre 1998-1999 se da un conflicto entre la comunidad de Shumiral en la costa ecuatoriana y la empresa noruega Ecuator por el establecimiento de la empresa sobre la única fuente local de agua limpia, el río Gala que abastece a 17 poblados de la zona. Se realizó una campaña nacional e internacional muy exitosa. En el valle de Íntag, provincia de Imbabura, se produce entre 1995-1999 un conflicto entre las comunidades de la zona y la compañía japonesa Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi Corporation (Acción Ecológica, 2003:10-11). Entre 1994-1995 hubo un conflicto en la comunidad de Achupillas, provincia del Cañar, con la empresa RTZ; y finalmente, en 1995, en la zona de Molleturo, provincia del Azuay, se produce otro conflicto con la RTZ y los pobladores locales (Acción Ecológica, 1998: 5). Otro conflicto con la misma empresa RTZ pero en este caso enfrentó a la ONG local Arcoiris, se produjo entre 1990-1991 en el Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre las provincias de Zamora Chinchipe y Loja. Previamente, en 1987 el Estado le había otorgado 16.875 Ha. ubicadas en el corazón del parque (San Luis), a la empresa Ecuator, conocida en el Ecuador como CUMBINAMASA (*ídem*).

la costa ecuatoriana, contra la empresa noruega Ecuano.⁹

Uno de los aspectos importantes del papel que desempeñó AE fue que permitió establecer una red entre las comunidades afectadas por la minería mediante la cual se produjo un intercambio de información y de apoyo a los diferentes procesos. Especial fuerza tomaron estos intercambios entre los pobladores de la zona de Íntag, Molleturo y Salinas de Guaranda. Del mismo modo, se inició un vínculo a nivel internacional sobre todo a partir del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Estas redes tendrán gran importancia para los procesos de resistencia actuales como se verá más adelante. Únicamente señalar, que sólo en la zona de Íntag (Imbabura) y en Molleturo (Azuay) se dan en la actualidad, procesos de conflictividad minera.

Por otro lado, todos los conflictos que se produjeron en esta década tuvieron un balance positivo para las comunidades locales ya que en todos los casos las compañías mineras abandonaron las concesiones y se retiraron. Sin embargo, no se puede inferir de forma automática que para todos los casos fuese el proceso organizativo y de resistencia de las comunidades, la principal causa de dicho resultado. No se puede olvidar, otros factores anteriormente anunciados como los bajos precios de los metales a nivel

internacional, la quiebra de muchas empresas auxiliares que eran las más activamente involucradas en la exploración, la inestabilidad política del país, y/o la crisis financiera de 1999.

Conflictos mineros vigentes

Debido a la extensa conflictividad existente por actividades mineras en la actualidad, este apartado únicamente describe los conflictos generados por las concesiones de minería metálica a gran escala que el gobierno está defendiendo con más intensidad, es decir, aquellos denominados como “proyectos estratégicos”. La intención de este apartado es presentar brevemente los conflictos existentes y sus actores, muchos de ellos con un proceso organizativo autónomo, para poder analizar en el apartado siguiente cómo éstos se irán articulando a partir de diferentes instancias de coordinación a partir del año 2007.

a) Proyecto Quimsacocha (Azuay): se sitúa en las parroquias de Victoria del Portete, San Gerardo y San Fernando. Concesionado a la empresa transnacional Iam Gold Ecuador S.A., se estima la existencia de unas 4,500.000 onzas de oro (Au) (Walter Spurrier y MEM; *apud* Estévez, 2009:15). Se han dado procesos de resistencia local liderados principalmente por las siguientes organizaciones sociales: la *Comisión de Defensa Ambiental*, creada

9 En el caso de Íntag, a partir de 1997-1998 se conforma la organización local DECOIN que logra articular alianzas con ONGs alemanas y australianas. Asimismo, empiezan a trabajar con universidades de Japón, y empresarios del mismo país. Para el caso de la comunidad Shumiral, se realizaron diferentes medidas como la ocupación de los consulados de Suecia y Noruega para denunciar que el mismo cónsul de estos dos países, estaba utilizando este cargo para favorecer sus intereses, ya que también era el gerente general de la empresa minera (Acción Ecológica, 2003:12).

con el objetivo de disputarle a la compañía la conciencia de la gente para evitar la actividad. Su objeción fundamental a la minería es que ésta es incompatible con las actividades agropecuarias de los moradores de la zona así como con la preservación de las fuentes hídricas de las que depende toda la provincia (Informante 30). Posteriormente, cuando las resistencias locales se vayan articulando en organizaciones de mayor escala (ver apartado siguiente) entrará a formar parte de la *Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía* (CNDVS); la *Junta Cívica*, su razón de existencia responde a la necesidad de disputarle el poder a la Junta Parroquial San Gerardo favorable a la actividad minera. Mantiene una colaboración estrecha con la anterior organización (Informante 30); y la *Unión de Sistemas Comunitarios de Agua Azuay* (UNAGUA), que a diferencia de las anteriores, tienen un origen independiente del conflicto minero, únicamente se oponen a la actividad minera porque el proyecto y la legislación permiten que se realice en fuentes hídricas, y se articulan alrededor de la ECUARUNARI (Informante 31). Los principales repertorios de acción de todas ellas han sido las medidas de hecho como los paros, y manifestaciones. Actualmente el proyecto se encuentra en exploración avanzada.

b) Proyecto Río Blanco (Azuay): concesionado a la compañía San Luis Minerales S.A. o Internacional Minerals Corporation (IMC), se sitúa en las parroquias de Molleturo y Chaucha-Molletu-

ro. Se estiman unas reservas de 65.000 onzas de oro (Au), y 4,200.000 onzas de plata (Ag) (Walter Spurrier y MEM; *apud* Estévez, 2009:15). Ocupa una extensión de 5,700 Ha. integradas por cuatro concesiones contiguas.¹⁰ Actualmente el proceso se encuentra en una fase de exploración avanzada. Los procesos de resistencia están liderados por la *Comuna San Felipe de Molleturo*, que como se ha relatado anteriormente, vienen ya desde la década de los 90. Su oposición se sustenta porque afirman que la minería a gran escala atenta a sus formas de vida (Informante 30). En esta zona se han producido fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden con el resultado de un gran número de heridos y detenidos.¹¹ Se adherirán a la CNDVS.

c) Proyecto Mirador (Zamora Chichipe): ubicado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui. Está concesionado a las compañías ECUACORRIENTE S.A. (ECSA) y MIDASMINE. S.A. con una extensión de 11.675 Ha. (MEM, 2007:36) y 10.900 millones de libras de cobre (Cu) estimadas (Walter Spurrier y MEM; *apud* Estévez, 2009:15). En mayo del 2007 el MEM rechazó el estudio de impacto ambiental ampliatorio que ECSA había presentado para poder realizar cambios en sus actividades respecto al que presentó en mayo del 2006, que sí fue aprobado (Corrientes Resources INC, 2008). Es el primer proyecto que pasa a fase de explotación al haber firmado el gobierno el primer contrato minero con la empresa (2012). Las primeras voces de alerta irán

10 San Luis A2 (270 Ha.), Miguir (2130 Ha.), Canoas (2940 Ha.), y Canoas 1 (459 Ha.) (IMC, 2006:17).

11 Ver: CEDHU. 18 febrero 2009. En:http://cedhu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=582&Itemid=38.

confluyendo para dar lugar en octubre 2006 a la creación del *Comité Interprovincial en defensa de la Vida de Morona Santiago y Zamora Chinchipe*, integrado por alcaldes, juntas parroquiales, la *Coordinadora Campesina Popular (CCP)* y organizaciones Shuar. Contó con el apoyo externo de ONGs como Arcoiris, CARE, Espacios, AE, y UV Televisión (Informantes 33 y 36). Su principal objetivo fue iniciar un proceso de información y difusión sobre la minería a gran escala. Para ello, realizaron acciones como foros sobre minería y talleres de difusión. Al mismo tiempo también recurrieron a las medidas de hecho contra la compañía. Se desintegró durante el proceso de resistencia para dar lugar a nuevas organizaciones más localizadas como se relatará más adelante. En El Pangui se conformó *El Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida de El Pangui*, cuyo objetivo fue articular la oposición a la actividad de ECSA porque atenta contra sus formas de vida (Informantes 35 y 36). Su repertorio de acción comprende tanto acciones de difusión como talleres de información sobre minería, foros con participación nacional e internacional, e intercambios nacionales de experiencias entre comunidades en resistencia a la minería, como medidas de hecho. En un inicio formará parte de la CNDVS, pero posteriormente se dis-

tanciará para confluir en *el Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala (FRESMIGE)* y la Asamblea de los Pueblos.

d) Proyecto Cóndor (Fruta del Norte, Zamora Chinchipe): ubicado en la parroquia Los Encuentros, en el cantón Yanzatza, está concesionado a la compañía Aurelian Ecuador S.A-Kinross.¹² Se estiman unas reservas de 13,7 millones de onzas de oro (Au) y 23,000.000 onzas de plata (Ag) (Aurelian Ecuador. S.A, 2009). El proyecto fue paralizado cuando se encontraba en actividades de prospección y exploración avanzada por resolución del mandato Minero. No obstante, en marzo del 2009 el viceministro de Energía y Minas anunció la reanudación de la actividad minera luego de 11 meses de suspensión. Actualmente, el proyecto se encuentra en exploración avanzada y a la espera de la firma del contrato. Como se ha mencionado previamente, tanto en esta parroquia como a lo largo de toda la provincia de Zamora Chinchipe, la actividad minera (pequeña y mediana escala) está fuertemente arraigada.¹³ En general en la provincia existe un malestar y conflictividad latente que periódicamente ha desembocado en conflictos puntuales. Principalmente se dan conflictos entre pobladores locales que se oponen a la minería demandando que se restrinjan ciertas zonas sensibles

12 La compañía Aurelian Resources Inc., se fusionó en setiembre del 2008 con su homónima Kinross Gold Corporation con el objetivo de desarrollar el proyecto minero que tienen en el Ecuador. Ver: www.aurelianecuador.com.

13 Para el año 2003 la superficie concesionada a actividades mineras en Zamora Chinchipe era de 442.346.41 Ha. (42% de la superficie total provincial). El resto (52%), comprende el área del Parque Nacional Podocarpus, los centros poblados y cuencas hídricas. Esa superficie concesionada representa 272 concesiones, de las cuales 216 eran metálicas, exclusivamente oro (Moreno y Montalvo, 2003 en Torres Dávila, 2005).

para esta actividad, conflictos entre mineros artesanales y empresarios mineros con mayor capacidad económica y tecnológica, y conflictos derivados de las grandes concesiones otorgadas a empresas mineras y/o naturales. Un conflicto destacable por las repercusiones que tuvo en visibilizar la problemática minera en la provincia y el involucramiento de las autoridades seccionales, fue el que se produjo en el año 2001 entre los moradores de la parroquia de los Encuentros con un empresario minero que estaba extrayendo oro del río Zamora (concesión Los Llanos I). El malestar creado fue tan grande que se ha dado una oposición rotunda de la población local a cualquier tipo de actividad minera en la zona (incluido el proyecto Cóndor). Ese mismo año, la ONG Arcoiris conjuntamente con el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja intervinieron en la gestión del conflicto, los mismos que promovieron la creación de espacios de diálogo y concertación entre todos los actores (Torres Dávila, 2005). Como consecuencia de ello en el año 2003 se celebró un Foro a nivel provincial que contó con la participación tanto del sector minero, autoridades y sociedad civil. Se establecen una serie de consensos para el control y manejo de los impactos ambientales causados por la actividad minera y se conformó el *Comité de Consensos Minero-Ambientales de la zona de Zamora Chinchipe* para darle seguimiento a las resoluciones acordadas. No obstante, a partir del 2005, con el cambio de autoridades seccionales este comité se desintegra (*Idem*). Sin embargo, este proceso sirvió para la organización y el empoderamiento de los habitantes

de la zona que mejoraron su conocimiento sobre la normativa ambiental vigente en ese entonces, lo que a su vez, mejoró su capacidad de control social sobre la actividad minera.

e) Proyectos Panantza y San Carlos (Morona Santiago): el proyecto Panantza se encuentra ubicado en la parroquia San Miguel de Conchay, en el cantón Limón Indanza. Y el segundo, se sitúa en la parroquia San Carlos de Limón, en el cantón San Juan Bosco. Ambos están concesionados a la compañía Explorcobres S.A. filial de la compañía canadiense Corrientes Resources. Se estiman en conjunto unos 15,400 millones de libras de cobre (Cu) (Walter Spurrier y MEM; *apud* Estévez, 2009:15). La compañía Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. también era posesionaria de concesiones en esta zona, no obstante, el Mandato Minero las archivó. Actualmente hay poco conocimiento del estado de las mismas. Por ello, muchas de las denuncias contra la actividad minera en esta zona también están dirigidas a esta gran transnacional.

En la provincia de Morona Santiago, una vez que se disuelve el *Comité Interprovincial en defensa de la Vida de Morona Santiago y Zamora Chinchipe*, las organizaciones parte de esta zona siguen con el proceso de organización y difusión de la problemática minera. En especial destaca el trabajo de la CCP, formada por moradores de Gualaquiza y Limón Indanza. Esta organización jugará un rol muy importante en la visibilización de la problemática hidroeléctrica-minera de la zona. Para ello iniciará un trabajo con las comunidades de la zona consistente en difundir, en primer lugar el vínculo existente entre el proyecto Hidroabánico y

las actividades de exploración minera que se estaban realizando, para posteriormente centrarse en las amenazas de la minería a gran escala. Entre las acciones que lleva a cabo destacan los video-foros, talleres en las comunidades, y medidas de hecho (Informantes 30, 33, 34, y 39). Será, además, una de las organizaciones que liderará el proceso de formación de la CNDVS. Otra organización que tuvo un papel importante en las primeras etapas del conflicto hidroeléctrico-minero es *El Movimiento Al Socialismo (MAS)*. De tendencia política trotsquista, está formada por moradores de Limón Indanza. A pesar de no tener como eje principal de su lucha las reivindicaciones ambientales, participa activamente en este conflicto, enfatizando sobre todo su carácter colonizador (Informante 34). Como resultado del trabajo de estas dos organizaciones, en el transcurso del conflicto se conformarán dos organizaciones adicionales: la primera, es *el Comité de Defensa de la Vida de Gualaquiza*, que como su nombre bien indica se conforma en esta ciudad. Está integrado por la CCP, el alcalde, diversas organizaciones shuar y miembros de la iglesia. Se constituye con el objetivo de luchar contra la actividad minera de ECSA y la hidroeléctrica Hidroabanico. Para ello realizará diversos foros, asambleas y medidas de hecho a nivel local. A lo largo del conflicto se dividirá en dos: un sector quedará bajo las directrices de la CNDVS, y el otro se articulará bajo el FRESMIGE y la Asamblea de los Pueblos (Informante 37). Y la segunda, es la *Coordinadora Cantonal Limón Indanza*, impulsada sobre todo por el MAS, la integran juntas parroquiales, organizaciones shuar y moradores de la zona. Se for-

ma en medio de las acciones contra la empresa Hidroabanico, con el objetivo de oponerse contra el tendido eléctrico que ésta estaba construyendo desde Jimbitono a Tundayme (Informante 34). Por otro lado, también hay que resaltar el proceso de resistencia anti-minero del Pueblo Shuar. Serán las Asociaciones Shuar Limón, Arutam, Nunkui y Sinip, las que llevarán a cabo la toma de los diferentes campamentos mineros (ver apartado siguiente). Además de estas medidas de hecho, el Pueblo Shuar ha mantenido un diálogo con el gobierno acerca de sus derechos como la Circunscripción Territorial y su negatividad a la actividad minera (Kingman, 2008).

f) Proyecto Junín (Imbabura): situado en el cantón Cotacachi, comprende una superficie de 9.504,5 Ha. (MEM, 2007:38). Estaba concesionado a la compañía minera Cía. Minera ASCENDANT COOPER pero a raíz del Mandato Minero quedó archivada. Actualmente la concesión ha pasado a denominarse Llurimagua y está a cargo la Empresa Nacional Minera (ENAMI) conjuntamente con su homónima chilena CODELCO. Han reiniciado los trabajos de exploración avanzada. La conflictividad en la zona se remonta a finales de los 90, cuando la compañía japonesa Bishimetals era la posesionaria de estas concesiones. Desde entonces la oposición de la población local ha conseguido frenar la actividad, organizándose alrededor de la organización DECOIN, formada por moradores del valle de Íntag. Sus principales demandas han sido la negación a la actividad minera a gran escala, y la búsqueda de formas económicas alternativas que permitan la preservación ecológica del valle. Entre sus acciones

destacan las charlas, foros, medidas de hecho, acciones legales, compra de terrenos para conservación, y el apoyo a actividades productivas alternativas a la minería. Parte de su éxito se debe al haber establecido alianzas con grupos de activistas internacionales que han ayudado a internacionalizar el conflicto, y a establecer redes de resistencia y económicas sobre todo con Japón, Australia y Alemania. Asimismo, aprovecharon muy eficientemente la ayuda de la cooperación destinada a fortalecer el modelo de “democracia participativa y desarrollo local con identidad” que estaba realizando el municipio de Cotacachi. En este sentido, aprovechó todos estos recursos para capacitarse, socializar la problemática y fortalecer la organización interna (Informante 40). Forman parte de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA).

El proceso de articulación de la resistencia anti-minera

Entre los años 2002 y 2006 fue creciendo la conflictividad en torno a la actividad minera. En general se produjeron luchas aisladas, de carácter defensivo, y sin mucha visibilidad a nivel de opinión pública. Sin embargo, esta conflictividad latente empezó a evidenciarse para fina-

les del 2005, en la zona de Íntag, con la quema de las oficinas de desarrollo comunitario de la Ascendant Cooper, y para inicios del 2006 a lo largo de la Cordillera del Cóndor, a partir de toda una serie de movilizaciones en torno a las empresas hidroeléctricas y las transnacionales mineras.

En esta última región, la presencia de empresas mineras transnacionales se sitúa en la década de los noventa con el ingreso de compañías a territorio Shuar. Con el trabajo de prospección de éstas, se descubre todo un cinturón de mineralización de cobre porfírico (3200km²), ubicando los puntos clave de éste en las localidades de Mirador, San Carlos, Panantza, San Miguel de Cochay y Waritz. Durante esos años las transnacionales mineras entraron a la zona con grandes promesas para las comunidades Shuar, las cuales firmaron sin mucho conocimiento sobre las implicaciones de sus actos.¹⁴ A pesar de que la dirigencia de la FISCH¹⁵, los miembros de la Asociación Sinip, y más de la mitad de los centros de la Asociación Nunkui se han opuesto tradicionalmente a la actividad minera, a partir del 2003 se empiezan a ver dirigentes trabajando para las empresas¹⁶ sin que haya cesado la conflictividad.¹⁷ Durante estos años, el padre

14 En abril 1999 la compañía BHP Billiton firma un convenio con la comunidad shuar de Waritz por un año, sin previo estudio y comprensión del mismo. En enero 2001 ECSA logra un convenio de 5 años de duración con la misma comunidad. En: Equipo de Reflexión Pastoral Limón-Nunkui-CENEP. 2004. *Cuando los cerros lloran! Desastre en el alto Cenepa por la explotación minera*. Cuaderno de trabajo N° 1. Ver además: Resoluciones de la Asamblea General de la FISCH, del 23 enero 2005. En: <http://www.llacta.org>.

15 Federación Interprovincial de Centros Shuar.

16 En enero 2003 el nuevo dirigente de la Asociación Nunkui es el principal relacionador comunitario de la empresa ECSA, al igual que con el dirigente del centro Waritz que tiene toda una propuesta pro-minera.

17 En: Equipo de Reflexión Pastoral Nimon-Nunkui-CENEP. 2004. *Cuando los cerros lloran! Desastre en el Alto Cenepa por la explotación minera*. Cuaderno de Trabajo N° 1.

salesiano Juan de la Cruz condujo todo un proceso de educación popular con el pueblo Shuar donde introdujo la problemática minera. Posteriormente, la ONG AE empieza a trabajar en la zona donde realiza varias charlas sobre los impactos de la minería a gran escala (Informante 30, 33, y 39). En el año 2005 se produce un conflicto entre el centro Shuar de Yunganza (cantón Limón Indanza) y una pequeña empresa minera denominada Dayanara que estaba extrayendo oro en la ribera de un río.¹⁸ Este conflicto servirá como precedente en la articulación de organizaciones mestizas con organizaciones Shuar¹⁹ para luchar en contra de la actividad minera, y para la articulación de la CCP a la Red de Defensa de la Dignidad, Vida y Naturaleza (REDIVINA) que estaba fortaleciendo AE²⁰ en ese entonces (Informante 30 y 39).

Por otro lado, un precedente importante es la instalación en Jimbitono²¹, en septiembre del 2004, de la empresa Hidroabanico S.A. para construir una central hidroeléctrica en el río Abanico, que durante casi dos años trabajara sin oposición alguna²² hasta el 13 de agosto del 2006. Fecha en que se revienta una válvula, produciéndose un chorro de agua de 30 metros de altura que visibilizará el potencial riesgo del proyecto para sus habitantes (Informante 30).²³ De este modo, el 29 de agosto empezó un paro en Jimbitono que duró 75 días, y cuyas principales demandas fueron “respeto, tranquilidad, y vida”, el cumplimiento de las promesas hechas por la empresa y nunca ejecutadas, y sobre todo, “no a la segunda fase de Hidroabanico”.²⁴ De forma paralela, se inicia un proceso organizativo en la zona de influencia del

-
- 18 En: Equipo de Reflexión Pastoral Ñimon-Nunkui-CENEP. 2007. *Jimbitono no se rinde. Hoy menos que nunca*. Cuaderno de Trabajo N° 21.
- 19 En este conflicto, los shuar tuvieron el apoyo de la CCP, del MAS sobre todo en la difusión y discusión sobre las repercusiones de la minería (Informante 34).
- 20 En el marco de esta Red se realizan varios intercambios nacionales e internacionales donde sus integrantes tienen la oportunidad de conocer otros procesos de resistencia minera y los impactos de la minería a gran escala. De este modo, las organizaciones sociales anti-mineras de Molleturo, Íntag, y la CCP se conocen y establecen alianzas. Asimismo, algunos dirigentes tienen la oportunidad de viajar a Chile y Perú y conocer la realidad de zonas mineras.
- 21 Es un pueblo situado a 12 km de Macas (Informante 39).
- 22 Durante la primera fase del proyecto (construcción de la central hidroeléctrica) se empiezan a dar pequeños conflictos con la población local debido a promesas incumplidas como la construcción del alcantarillado o una cancha deportiva. Sin embargo, lo que más descontento conlleva entre los moradores son los destrozos en potreros y sembríos, ocasionados por el crecimiento del arroyo Balaquepe que pasa a recibir las aguas turbinadas de la hidroeléctrica. En: Equipo de Reflexión Pastoral Limón-Nunkui-CENEP. 2006. *Hidroabanico y Sipetrol=muerte. Jimbitono es vida*. Cuaderno de trabajo N° 19.
- 23 Íbid.
- 24 El 31 de agosto del 2006 sale a la luz pública la carta de intención entre Hidroabanico y la minera EC-SA sobre la línea de transmisión que la empresa Sipetrol debería construir para llevar energía eléctrica a la zona de Tundyme (Zamora Chinchipe), donde está su campamento. La construcción del tendido eléctrico es lo que se entiende como segunda fase del proyecto. Una vez se sabe esta noticia, la comunidad saca 11 resoluciones entre las que destacan: no a la segunda fase; indemnización a los propietarios de los terrenos afectados; asegurar los puestos de trabajo de los obreros de Hidroabanico/Sipetrol (moradores de Jimbitono); revertir los 5m³ de agua turbinada al cauce original; que la energía eléctrica de la pri-

proyecto Mirador, a partir de las primeras socializaciones de los estudios de impacto ambiental de la empresa ECSA y del intercambio de experiencias con el proceso de resistencia de Íntag²⁵ (Informantes 33, 35 y 36). De este modo, el 1 de octubre del 2006 una Asamblea Biprovincial de Zamora Chinchipe y Morona Santiago en El Pangui, declaró la oposición a la minería a gran escala por ser atentatoria contra la integralidad ambiental y social de la región, y se decidió conformar el *Comité Interprovincial en Defensa de la Vida* (Informantes 33 y 36). Su finalidad fue organizarse para buscar más información sobre la minería a gran escala y difundirla entre las comunidades, y en el cual se aglutinaron juntas parroquiales, la FISCH, Asociación Shuar el Pangui, y moradores de la zona. Asimismo, estuvo apoyada por ONGs como Arcoiris, CARE, Espacios, AE, y la UV televisión (ciudad de Loja) (*Ibidem*). Con este objetivo convocaron para el 21 de octubre a un Encuentro Bicantonal en El Pangui donde se contó con la participación de delegados internacionales afectados por la actividad mi-

nera a gran escala²⁶ (Informantes 33, 36 y 39). Estos eventos sirvieron para ir articulando las diferentes luchas a lo largo de la región, muestra de ello es la decisión del Comité Cívico de El Pangui de sumarse a la marcha organizada por la CCP el 23 de octubre y que finalizaría el 30 del mismo mes en Jimbitono, después de recorrer 260 km. a pie.²⁷ Una vez que se llegó a Jimbitono se realizó una asamblea donde se decidió ir al paro indefinido a partir del 6 de noviembre si no se cumplían sus demandas.

La movilización social fue tan fuerte y extensa que el 9 de noviembre, los moradores de El Pangui decidieron sumarse al paro indefinido de Morona Santiago y realizaron una marcha pacífica en el sector de Santiago Paty donde fueron atacados con armas de fuego por miembros de la FESCH²⁸ y gente asalariada de la empresa (Kigman, 2005: 2). La fuerte presión social y violencia desencadenada obligó al Gobierno de Alfredo Palacio a intervenir en el conflicto. De este modo, el 12 de noviembre se firma un acta en el que el gobierno se compromete a suspender la ejecución de la segunda fase

mera fase sirva a Morona Santiago; no iniciar acción legal contra los dirigentes o miembros de la comunidad; y la realización de estudios de impacto ambiental independientes y avalados por la comunidad. En: Equipo de Reflexión Pastoral Ñimon-Nunkui-CENEP. 2006. *Hidroabánico y Sipetrol=muerte. Jimbitono es vida*. Cuaderno de Trabajo Nº 19.

- 25 Los dirigentes de El Pangui son invitados a varios eventos convocados por la DECOIN, así como una delegación de ésta visita la zona de Zamora Chinchipe.
- 26 Destaca la presencia de Marco Arana, líder reconocido de la lucha anti-minera en Cajamarca, Perú. En: Equipo de Reflexión Pastoral Ñimon-Nunkui-CENEP. 2007. *La vida no se vende. La vida se defiende. Paz y justicia para todos*. Cuaderno de Trabajo Nº 22.
- 27 La marcha se inicia en El Pangui ya que es en esta región (Tundayme) donde se quiere transportar la energía eléctrica producida en Morona Santiago. En: Equipo de Reflexión Pastoral Ñimon-Nunkui-CENEP. 2007. *Jimbitono no se rinde. Hoy menos que nunca*. Cuaderno de Trabajo Nº 21.
- 28 Federación Shuar de Zamora Chinchipe, cuyo principal dirigente es Rubén Naychiap, el cual sostiene una postura pro-minera. Como consecuencia de estos actos, se inician procesos legales contra él.

de Hidroabánico y la actividad minera en la región.²⁹ Sin embargo, esta resolución no sería acatada por las empresas que continuarán sus operaciones.

La conflictividad estaba tan extendida en la región que el mes de noviembre se recuerda por lo que los Shuar denominaron “la limpieza minera de nuestros territorios” (Informante 33). Se inicia el 1 de noviembre con la expulsión de la compañía Lowell Mineral Exploitation de la comunidad de Warintz, con el precedente que en septiembre la comunidad en asamblea resolvió finalizar la relación con la empresa³⁰ y le da 45 días para que abandone su territorio.³¹ A continuación, el 6 de noviembre se toma el campamento de ECSA en Juan Don Bosco, y el 7 de noviembre el de Rosa de Oro en Panantza perteneciente a la empresa Curigem. Estas tomas fueron planeadas por el pueblo Shuar con el apoyo de mestizos de la zona (Informantes 34 y 38). El éxito de las acciones, contagió a los moradores de El Pangui que después de una asamblea en el coliseo (1 diciembre) tras el desacato de la empresa ECSA de paralizar las operaciones, deciden irse hasta Tundayme para hacer cumplir con las resoluciones (Informante 36). En el camino se encontraron la zona res-

guardada, sin embargo, decidieron mantenerse y pasar la noche allí. Al día siguiente las fuerzas militares y trabajadores de la empresa inician un fuerte ataque a los moradores con el resultado de 17 detenidos, entre ellos el diputado Salvador Quishpe.³² La represión fue tan fuerte que el 5 de diciembre intercede el gobierno y suspende la actividad de ECSA por considerar que está en riesgo la seguridad de la población y los trabajadores de la compañía. En este mismo mes, también se produjeron enfrentamientos violentos en la zona de Íntag entre los pobladores en contra de las actividades mineras, pobladores a favor de las actividades mineras y guardias de seguridad empleados por la compañía Ascendant Copper.³³ De igual manera que en el caso anterior, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) notificó a la empresa el cese de sus actividades en pos de precautelar la seguridad ciudadana (MEM, 2007: 38). En este clímax de violencia, ya a escala nacional, se realizó en Quito un evento organizado por la ANA donde se empezó a hablar sobre la posibilidad de crear una organización a nivel nacional que aglutinase las diferentes luchas anti-mineras (Informante 40). Poco después, Alberto Acosta es nom-

-
- 29 Volante: Cuando el Pueblo Manda. Acta de compromiso del gobierno nacional con las fuerzas vivas de la provincia de Morona Santiago.
- 30 Ver: OLCA. Comité de prensa de Morona Santiago. *Pueblo originario del Ecuador deporta a minera estadounidense de su territorio*. En: <http://www.olca.cl/oca/ecuador/mineras10.htm>.
- 31 Durante el tiempo que la compañía estuvo en la comunidad de Warintz hubo varios conflictos por promesas incumplidas por parte de la empresa. Ya en febrero del 2006 ocurrió la oposición de los profesores por el incumplimiento del compromiso de darles el vuelo de avioneta estipulado. En: Equipo de Reflexión Pastoral Ñimon-Nunkui-CENEP. 2007. *La vida no se vende. La vida se defiende. Paz y justicia para todos*. Cuaderno de Trabajo N° 22.
- 32 Ver prensa: Nadal, L. Conflicto: proyecto Mirador e Hidroabánico. Bangui, Gualaquiza, Limón Indanza, Tundayme, Ecuacorriente, 20 de septiembre 2007. En: <http://www.llacta.org/notic/2007/not0920c.htm>.
- 33 Se llega a capturar a 56 paramilitares y más de medio centenar de armas ilegales.

brado Ministro de Energía y Minas, con el que se abre un nuevo escenario de oportunidades. Debido a su posición favorable a declarar al Ecuador un país libre de minería a gran escala, y a su cercanía con los movimientos sociales, el nivel de conflictividad disminuyó. A partir de abril 2007 se inició el Diálogo Minero Nacional. Este proceso será uno de los quiebres del reciente movimiento anti-minero.

Evolución de la conflictividad minera

El año 2006 se cerró con niveles de violencia y conflictividad crecientes a escala nacional, que despertó la necesidad de ir articulando toda esa resistencia. De este modo, en el sur del país, alrededor del Movimiento de la Salud de los Pueblos³⁴ surge la iniciativa de organizar un evento que se denominó “Encuentro de los Pueblos por la Vida” con la idea de fortalecer la lucha anti-minera y crear vínculos entre las diferentes luchas (Informe 30). El evento fue impulsado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, el Frente Nacional

para la Salud de los Pueblos del Ecuador, la CCP, AE, la Comisión en Defensa del Medio Ambiente de la Victoria del Portete y el Comité de Defensa de la Vida y en Contra de la Minería de Sigsig que convocaron a todas las organizaciones afectadas por algún tipo de minería (CCP, 2007).

Se realizó entre el 24 y 27 de enero en tres sitios: Sigsig, Cuenca y Gualaquiza. Al final del evento, en la declaración las organizaciones participantes se autoconstituyen en una coalición que denominan CNDVS.³⁵ Ésta es un reflejo de la necesidad de las comunidades de articularse e iniciar una lucha conjunta, en un contexto de alta conflictividad y represión (Informantes 30 y 42). Sin embargo, no se le dio ninguna estructura interna lo que irá ocasionando fricciones al interior de sus integrantes al producirse ciertos protagonismos en su dirección (Informantes 5, 30, 33, 34 y 40). La necesidad de actuar de la CNDVS, combinada con la dificultad de comunicación con todas las organizaciones, provoca que se vayan fraccionando internamente. Poco a poco, la CNDVS se va volviendo más ex-

34 Es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil, ONG, activistas sociales, profesionales de la salud, académicos e investigadores, que trabaja para la promoción del derecho universal a la salud.

35 En esta coalición se encuentran: la Comisión en Defensa del Medio Ambiente de Victoria del Portete y Tarqui, el Consorcio de Juntas Parroquiales del cantón Chordeleg, CONFEMEC (Azuay), el Cabildo de Mujeres de Cuenca, la Coordinadora Política de Mujeres, la Comunidad El Lirio – Racar Bajo, la Junta Parroquial de Delegsol, el Comité en Defensa del Agua (parroquia Octavio Cordero Palacios), la Comuna San Felipe de Molleturo, la Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago, el Comité en Defensa de la Vida de Gualaquiza, el Centro Shuar Kupiamais, la Asociación Shuar de Bomboiza, el Comité en Defensa de la Vida de El Pangui (Zamora Chinchipe), el Frente de Mujeres en Defensa de la Vida de El Pangui, la Asociación Shuar de El Pangui, la Resistencia Sur, la Federación de Barrios de Quito, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE, la Red de Ecologistas Populares del Ecuador, la Asamblea de La Floresta, Acción Ecológica, el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, la Junta Parroquial de Pacto (Pichincha), la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) y Ecoturismo Junín (Íntag) (CCP, 2007:131)

cluyente y tomando forma bajo el proyecto político de la CCP (Informantes 33 y 34). Es decir, se conforma a partir de una estructura vertical, y con una línea política fundamentada en los principios anticapitalista, anti-imperialista, de autonomía, y de clase (Informante 42). Ello la llevará a adoptar una estrategia política de no negociar con el Gobierno, y por tanto no aceptar el Diálogo Nacional Minero, ni establecer alianzas con ONGs y partidos políticos (Informante 42). No obstante, cabe señalar que entre sus miembros existen personas afiliadas a los partidos políticos del MPD y Pachakutik³⁶ (Informante 5). Esta postura política dividirá aún más a la organización, al haber bases favorables a aceptar el Diálogo Nacional Minero, y/o apoyar el nuevo proyecto político de AP (Informante 30 y 40). En contraposición a los diálogos impulsados por el gobierno, la CNDVS inicia los “Diálogos por la Vida” que consistieron en la realización de asambleas en las zonas de conflicto para recoger las demandas de las organizaciones. Se realizaron varios a lo largo del país, y finalizaron en enero del 2008 cuando presentan ante la ANC un compendio de todas las demandas recogidas. Otras acciones realizadas por este actor son los diversos levantamientos, cierres de vías, y marchas exigiendo en un inicio la prohibición de la minería a gran escala, y posteriormente el cumplimiento del

mandato minero, la inconstitucionalidad de la Ley Minera, o el fin de la represión a los luchadores.

Las disputas internas al interior de la organización incidieron que para septiembre de 2007 se formó el FRESMIGE con el objetivo de reunificar a todas aquellas organizaciones que poco a poco fueron desligándose de la CNDVS y conformar una estructura más horizontal (Informantes 32, 34 y 36). Estuvo liderado por el dirigente indígena saraguro Salvador Quishpe, pero aglutinó a representantes de Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, y Morona Santiago. Su principal logro fue establecer una alianza con el movimiento indígena ecuatoriano (MIE) y obligarlo a posicionarse sobre el tema minero. Por otro lado, Quishpe ha sido la persona que más ha visibilizado el conflicto existente dentro del movimiento anti-minero en relación a la heterogeneidad de sus demandas como consecuencia de representar una parte del sector de los pequeños mineros. Desde un inicio existía la necesidad de buscar la unidad, lo cual se consiguió sin reflexionar sobre hacia dónde conducir esa unidad (Informante 32). Existen organizaciones sobre todo en el Azuay, movilizadas únicamente porque la actividad minera se realizaría en fuentes hídricas; otras opuestas a la minería a pequeña escala como en la zona de Tenguel³⁷ o Santa Isabel; existen pequeños mineros movilizados para que exista sólo

36 Sin embargo, no son los partidos políticos los que dirigen la organización. Más bien, sus dirigentes responden a luchadores populares.

37 En esta localidad del Guayas surge la Asamblea Pro-Defensa de Nuestros Ríos Gala, Chico, Tenguel y Siete como respuesta a la creciente preocupación que albergan las comunidades sobre la posibilidad de que las operaciones mineras que se llevan a cabo en la provincia del Azuay contaminen los ríos de los que dependen la población de la zona. Son parte de la CNDVS. Como parte de esta organización existe el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (Amnistía Internacional, 2008).

minería a pequeña escala (Zamora Chinchipe); y organizaciones que apuestan por la prohibición de cualquier tipo de minería y buscar otro tipo de modelo de desarrollo.

Ya con el movimiento anti-minero fragmentado se da inicio a la ANC sobre la cual incidirán, un sector, alrededor de la ANA, otros a través del FRESMIGE y el resto a través de la CNDVS. Gracias a la presencia de Alberto Acosta como presidente de la ANC se realiza todo un trabajo entre las organizaciones sociales y su persona para redactar y aprobar lo que sería el Mandato Minero (Informante 40). Éste se aprueba el 18 abril del 2008, y fue visto como un éxito por casi todas las organizaciones al declarar la extinción o caducidad de las concesiones que no hubiesen realizado inversión en el proyecto, presentado el EIA, realizado los procesos de consulta previa, cancelado las patentes de conservación, y aquellas otorgadas al interior de áreas protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguamiento y las que afecten nacimientos y fuentes de agua (Mandato Minero, 2008) (Informante 34). Con esta resolución prácticamente quedaban sin efecto la mayoría de las concesiones mineras, sobre todo las otorgadas a las empresas transnacionales y principal foco de conflictividad. El Mandato fue el resultado del nivel de presión, fuerza e incidencia política de las organizaciones sociales, y consumado gracias a ciertas personas en la ANC con puestos clave. Por otro lado,

el Mandato establecía la moratoria a nuevas concesiones hasta no entró en vigencia el nuevo marco constitucional y legal, el cual debería expedirse en los siguientes 180 días. Plazo sumamente breve para un proceso de tal magnitud e importancia donde se decidiría el futuro modelo de desarrollo del país. A partir de entonces se inaugura una nueva etapa al conformarse la Comisión de Legislación y Fiscalización. Este nuevo escenario se inicia con una apuesta explícita y firme por parte del Gobierno hacia profundizar el modelo extractivista vigente, donde no se hace efectivo el Mandato Minero³⁸, y donde la participación social y acceso al gobierno se reducen fuertemente.

Ante esta situación el movimiento anti-minero reacciona con diversos actos públicos y medidas de hecho, pero sobre todo realiza varios intentos de buscar su reunificación y nuevas alianzas. De este modo, desde abril del 2008 se conforma lo que se denominaría La Asamblea de Los Pueblos cuya finalidad inicial era aumentar la fuerza del Movimiento para lo que buscaría la adhesión de la CNDVS y del FRESMIGE. Posteriormente, va estableciendo alianzas con otros sectores sociales³⁹ (Informante 32) y se va perfilando un discurso, ya no tan sectorial sino en torno a concepciones sobre el modelo de desarrollo. En torno a sus acciones, se acercaron candidatos políticos, sobre todo de la RED⁴⁰, lo cual no fue bien visto por todas las organiza-

38 Sobre todo las concesiones mineras en posesión de las grandes empresas transnacionales.

39 Como el movimiento anti-hidroeléctricas, en Defensa del Ecosistema Manglar, los sindicatos, el MIE, et cetera.

40 Red Ética y Democracia.

ciones que sentían que se está utilizando la lucha anti-minera para fines electorales. Esta nueva organización tuvo sus momentos álgidos de movilización y presencia pública durante el período de redacción de la Ley Minera, pero al no tener una propuesta de largo alcance ni una estructura interna definida, una vez aprobada la Ley con pocos resultados positivos para las organizaciones sociales, pierde protagonismo.

La confrontación explícita por parte del gobierno hacia el sector indígena y ambiental en esta última etapa, posibilitó el acercamiento de actores antes enfrentados por sus posturas en relación al gobierno de Correa (Informantes 30 y 32). De esta forma, en las movilizaciones del 5 y 20 de enero en contra de la Ley Minera, se observan acciones conjuntas entre organizaciones anti-mineras enemistadas, pero sobre todo, el liderazgo del MIE⁴¹ asumiendo la problemática minera como reivindicación propia, y liderando toda la oposición al gobierno. En este punto, es importante resaltar el vínculo que realiza el MIE entre el tema minería y agua, para buscar una demanda aglutinadora y movilizadora.⁴² A pesar de las fuertes movilizaciones que se realizaron sobre todo en las zonas direc-

tamente afectadas por concesiones mineras, el gobierno minimizó su acogida señalando que el “sector indígena debe someterse a los deseos de la mayoría”.⁴³ Asimismo, lo interpeló a evaluar sus acciones y buscar vías para insertarse en el proceso democrático. Estos acontecimientos denotan, en un contexto de debilidad y crisis de las organizaciones sociales, que la disputa de lo político se está reconcentrando en la esfera pública estatal, estatizando la participación social. A esto se suma la concepción que tiene el gobierno sobre el Estado, respecto a su descorporativización. Innumerables veces el presidente ha declarado que en el país existen mafias que han usufructuado del Estado para sus intereses privados. Sin embargo, el gobierno no ha hecho distinción entre los actores sociales y políticos, y considera que el Estado no debe acoger los derechos y demandas particulares de las organizaciones populares porque sería un acto de “privilegio e injusticia”.⁴⁴ Bajo este esquema, el movimiento ecologista popular sería parte de los sectores históricamente privilegiados y por tanto, sus propuestas y demandas se desestiman por no venir de una esfera pública únicamente estatal.

41 Concretamente de la CONAIE y de la ECUARUNARI.

42 Las principales concesiones mineras están en la Cordillera del Cóndor, cuyas fuentes hídricas no repercuten directamente a la población de la Sierra. En este sentido, la mayor parte de las bases de la ECUARUNARI no sienten que el tema minero sea una problemática suya que les convoque. En cambio, el tema agua sí lo es. Ambas Leyes estaban siendo discutidas por la Comisión Legislativa y de Fiscalización con muchos puntos de interrelación.

43 Declaraciones realizadas por el ministro de Gobierno de ese entonces, Fernando Bustamante, en una entrevista en Sonorama. Ver: noticia, 20 enero. Protestas contra Ley Minera se cumplen con poca acogida. En: http://www.eltelegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/01/20/Ind_ED00_genas-cierran-v_ED00_as-para-protestar-por-Ley-Minera-.aspx.

44 Ecuador Inmediato.com “Gobierno no se va a someter al poder de ninguna ONG”. 12 marzo 2009.

Por otro lado, la campaña de desprestigio por parte del Gobierno hacia el movimiento ecologista ha logrado mermar el potencial radical y aglutinador que podría tener el componente ecológico para avanzar hacia otros modelos de desarrollo. En esta dirección, se necesita visibilizar más las implicaciones socio-ambientales y económicas que significa adoptar modelos económicos basados en la extracción de materias primas. Finalmente, con la Ley Minera aprobada se da un proceso de regionalización de los procesos de lucha, donde las organizaciones sociales locales se centran en disputar las estrategias de desarrollo territorial local dentro del proceso de planificación impulsado por el gobierno a través de la Secretaría de Planificación Territorial (SENPLADES). Muchos de los principales líderes del movimiento se presentaron como candidatos, principalmente para las alcaldías⁴⁵ de sus respectivos municipios en un intento de disputar el poder local a los candidatos pro-mineros que no siempre son del partido de gobierno. Sin embargo, este nuevo contexto político y acciones de contienda escapan del alcance de este artículo.

Conclusión

El texto ha analizado cómo el proceso de articulación de la lucha anti-minera se empieza a fraguar antes de la toma del poder de Rafael Correa, coincidiendo su momento álgido con el inicio de mandato del gobierno de Alianza País a ini-

cios del 2007. Ese mismo año el nivel de conflictividad y represión por parte del gobierno empieza a ser tan fuerte que las propias organizaciones se plantean la conformación de una organización a nivel nacional como fue la CNDVS. En vez de articular la lucha alrededor del MIE, la plataforma organizativa que lideró las luchas populares desde la década de los noventa, se apostó por seguir una estrategia organizativa similar a la seguida por la CONACAMI en el Perú.

A la vez que el movimiento anti-minero empezaba a mostrar cierta incapacidad de establecer alianzas con otros sectores, éste empieza a estructurarse con dinámicas poco horizontales y bajo el liderazgo y proyecto político de la CCP. Esta organización planteó una oposición directa al entrante partido de gobierno, lo que causó el inicio de su división interna. En este sentido se puede decir que el movimiento anti-minero que iba en proceso de articulación y consolidación tuvo como principales limitantes tanto su propia organización interna como su posición ideológica ante el proyecto político del gobierno de Correa. Éste último fue muy hábil en manejar su relación con los movimientos sociales en sentido amplio y no únicamente con el sector anti-minero. No se puede olvidar que Rafael Correa ganó la presidencia en la segunda vuelta al candidato del PRIAN, Álvaro Noboa, con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil organizada y con una campaña política que recogía ampliamente las principales demandas

45 El principal líder en el sector del Panguí se presenta a la alcaldía por el partido Pachakutik, y en Limón Indanza, uno de los líderes fue candidato a la alcaldía por el Movimiento Al Socialismo.

de los movimientos sociales. Su apuesta abiertamente anti-neoliberal vino acompañada de voluntades manifiestas por cambiar las tradicionales estrategias de desarrollo ecuatorianas por estar basadas en el uso intensivo de recursos naturales. Estas ideas, condensadas en el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), y defendidas al mismo tiempo por una serie de miembros del gobierno con una marcada trayectoria de compromiso con las organizaciones sociales, sirvieron para que algunos sectores del movimiento anti-minero disminuyeran su abierta confrontación y entraran en diálogo con el gobierno a través de los espacios abiertos por este último. Primero, durante el Diálogo Minero Nacional y posteriormente durante la ANC. Una vez que la correlación de fuerzas favoreció al presidente Correa, cuya popularidad se vio fuertemente consolidada durante los meses de la ANC a la vez que se concentraba el poder en el ejecutivo, su relación con los movimientos sociales se vuelve explícitamente confrontadora y deslegitimadora. Ya para este período los espacios de diálogo y deliberación se cierran para los sectores sociales organizados y especialmente el movimiento anti-minero que cuestiona directamente su apuesta por la profundización del modelo extractivista. En este sentido, el gobierno posicionó un discurso donde supedita el bienestar de una “mayoría o ciudadanía universal” a sus políticas sociales basadas en la extracción de los recursos naturales. Con ello buscaría ganarse el apoyo principalmente de los sectores medios urbanos y legitimar al mismo tiempo las prácticas autoritarias, represivas, y deslegitimadoras de las organizaciones sociales.

Hasta el momento esta estrategia económica (primario-exportadora y redistributiva) le está resultando exitosa en un contexto internacional donde los precios de las materias primas se han mantenido a niveles altos. No obstante plantea serios limitantes para profundizar la democracia y la equidad. Es decir, al localizar los costos en ciertos sectores sociales y regiones y nacionalizar las ganancias, profundiza las existentes inequidades territoriales y sociales al mismo tiempo que suplanta la deliberación democrática por mecanismos centralizados y autoritarios basados en su popularidad. Es posible afirmar que mientras el actual contexto político es poco favorable para el ecologismo popular, queda por ver cuál será el resultado de esta estrategia económica a largo plazo cuando tenga que afrontar los peligros de la dependencia extractivista como son una mayor degradación ambiental y concentración de la economía en pocos productos primarios y con poco valor agregado. Quizá estas debilidades inherentes al modelo impulsado pueden abrir nuevas estructuras de oportunidad para este movimiento social en un futuro.

Bibliografía

Amnistía Internacional

2008 “Defensa del medio ambiente en Ecuador. La asamblea pro-defensa de nuestros ríos Gala, Chico, Tenguel y río Siete”. Amnistía Internacional. En:<http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR28/002/2008/en/1e2b6c8a-abdc-11dd-82c3-e1668308520f/amr280022008spa.pdf>.

ANC

2008 “MandatoMinero” En:http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/documentos-/mandato_minero_definitivo.pdf.

- Babelon, D y C, Dahan
 2003 "Evaluación de las actividades del Banco Mundial en las industrias extractivas. Documentos de antecedentes. Ecuador: estudio de caso". OED.BM. En:[http://www.ifc.org/ifcext/oeg.nsf/AttachmentsByTitle/oed_ccs_ecuador_spanish/\\$FILE/oed_ccs_ecuador_spanish.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/oeg.nsf/AttachmentsByTitle/oed_ccs_ecuador_spanish/$FILE/oed_ccs_ecuador_spanish.pdf).
- Bebbington, A.
 2007 "La globalización de la gobernanza ambiental: relaciones de escala en los movimientos socio-ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en dos zonas de influencia minera en el Perú y el Ecuador". Universidad de Manchester. En:<http://www.rimisp.cl/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/0537-005265-bebbingtonetalseminario.pdf>.
- Bebbington, A y D, Humphreys
 2009 Actores y ambientalismos: continuidades y cambios en los conflictos socio-ambientales en Perú. *ICONOS Vol. 35*. Reprinted in J. de Echave, R. Hoetmer and M. Palacios (eds), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*, CONACAMI, Programa Democracia y Transformación Global, and Cooperación. En: http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/papers/Bebbington_Bebbington_ActoresyAmbientalismos.pdf.
- CCP
 2007 "El Encuentro de los pueblos por la vida celebrado en Ecuador fue un éxito". *Medicina Social. Salud para todos*. Volumen 2, Nº 2, p.130-132.
- Corriente Resources INC.
 2008 "Mirador cooper-gold project. Feasibility study". En: www.cooriente.com.
- Estévez
 2009 "Algunas características de la minería y su marco legal en el Ecuador". *Actuar en mundos plurales*. Boletín del Programa de Políticas Públicas. FLACSO.
- Folchi, Maurichi
 2001 "Conflictos de contenido ambiental y el ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas". *Revista Ecológica Política* Nº 22, pp.79-100.
- Fontaine, Guillaume
 2007 "Verde y negro: ecologismo y conflictos por petróleo en el Ecuador". En: Fontaine, Vliet y Pasquis (coord.). *Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina*, FLACSO.
- Hurtado y Lungo (comp.)
 2007 *Aproximaciones, caracterización y tendencias del movimiento ambientalista en Centroamérica*. FLACSO-Guatemala.
- IMC
 2006 "Technical report on the Alejandra north vein. Rio Blanco gold and silver project. Feasibility study. Ecuador". En: www.intminerals.com/pdf/2009-04-17%20Rio%20Blanco%20temporary%20suspended.pdf.
- Kingman, S.
 2005 *Tierras y territorios en la Cordillera del Cóndor*. Ponencia presentada en el primer Encuentro Ecuatoriano de Investigación sobre la Sociedad Rural. En: <http://www.alasru.org/enceq/Kingman.pdf>.
- _____ (2008). "Minería en territorio shuar. El nuevo conflicto del Cóndor". *Revista Tierra Incógnita*. Nº 54.
- Keck, M. y K, Sikkink
 1998 *Activists beyond borders. Advocacy networks in international politics*. Ithaca. Cornell University Press.
- Martínez Alier, Joan
 2004 *El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración*, Icaria.
- MEM
 2007 *El ABC de la minería en el Ecuador*. En:<http://www.infomineria.org/fileadmin/download/ABCdelaMineria.pdf>.
- Sandoval, F.
 2002 "Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en el Ecuador, cap. 7" en: *Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en América del Sur*. En www.wbcsd.org/includdes/getTarget.asp?type=d&id=ODMxNA.
- Tobasura, I
 2002 *Ambientalismos y ambientalistas. El ambientalismo criollo a finales del siglo XX*. Colombia: U. de Caldas, Colección Cuadernos de Investigación, Nº 21.
- _____ (Coord.). (1997). *Ecologismo Ecuatorial, conflictos socioambientales y movimiento ecologista en el Ecuador. Libro 1*, CEDEP-Abya-Yala.
- Torres Dávila, Víctor Hugo
 2005 *Aprendiendo de los conflictos. Experiencias metodológicas de manejo de conflictos socioambientales en Ecuador*. Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA).

Foros, asambleas, etcétera

Asamblea Machianantza alto. 09/12/08.

Asamblea en el sindicato eléctrico. Intervienen: Marlon Santi (CONAIE), Diego Cano (sector trabajadores), Carlos Pérez (juntas de agua Azuay), Salvador Quishpe (FRESMIGE), José Cueva (Intag), Cecilia Chérrez (Acción Ecológica), Jócles Zambraño, Martha Roldós (RED), Luis Robalino (Intag). 15/02/08.

Foro Minería y Agua. Intervienen: Irina Cabezas, Alberto Acosta, Jorge Jurado, Marlon Santi, Santiago Cordobés, y Alcides Sánchez. ILDIS. 16/12/08.

Foro Minería. Casa Rosa. Interviene: Lina Solano (CNDVS), Frente Urbano Antiminero (FUA), Víctor Bueno (comité pro-defensa de nuestros ríos zona Tenguel, Rocío Pérez (Frente Defensa Pachamama, Victoria Portete). 02/12/08.

Taller-charla en Casa Árbol. Alianza Campesinidad. Interviene: Carlos Zorrilla y José Cueva. 04/02/09.

DEBATE AGRARIO-RURAL

Organización Comunitaria por el Agua: caso de la comunidad del 'río trenzado'¹

Andrea Ponce García²

Desde hace algunos años, se advierte el incremento de conflictos en torno al agua de riego. El caso de las comunidades de la Chimba (Olmedo, Cayambe) evidencia tensiones relativas a la distribución y los derechos consuetudinarios que regulan el acceso al agua. Son expresiones de una conflictividad entre las comunidades y otra externa con las empresas florícolas. El agua se ha convertido en el elemento central que articula tanto rivalidades como alianzas comunitarias.

Los conflictos por el agua se han tornado cada vez más frecuentes y prolongados; por ello, no resulta errado suponer que el apareamiento progresivo y de amplio trasfondo histórico de los llamados 'aguatenientes', es un punto referencial que permite dar cuenta del ejercicio constante del poder, de la pugna dialéctica entre 'dominados' y 'dominantes'. A lo largo y ancho del país se multiplican los conflictos en torno al agua, en donde se perciben distintas discursividades y percepciones que se yuxtaponen, se complementan o se contraponen.

Con la finalidad de realizar un acercamiento a esta conflictividad se realizó un estudio de caso en la comunidad

campesina de 'La Chimba', ubicada en las faldas del nevado Cayambe, perteneciente al cantón que lleva el mismo nombre y que forma parte de las comunidades de la parroquia rural de Olmedo. Este espacio resulta interesante puesto que es un eje donde se han articulado varias problemáticas, tanto internas como externas en torno al agua, pese a que irónicamente se encuentre localizado en 'las puertas de entrada' al páramo, donde existen varias fuentes y vertientes en abundancia (incluidos los ojos de agua).

Debido a que la intención principal de este artículo es reflexionar sobre las distintas variables presentes en la organización comunitaria por el agua en este

1 Este artículo recoge varias ideas plasmadas en mi tesis de Licenciatura en Antropología titulada: "Connotaciones Simbólicas y valoraciones de poder en la lucha por el agua. Estudio de caso: comunidad campesina 'La Chimba', Cayambe- Ecuador" PUCE, Quito, 2011.

2 Antropóloga Sociocultural PUCE/ andrea_ponceg@yahoo.com

espacio y tiempo particular es importante señalar que 'La Chimba' es una comunidad indígena con cerca de 360 familias, que se encuentra situada en un valle fértil al noreste de la ciudad de Cayambe y su nombre parte de la palabra kichwa *yakuchimba*, que significa "río trenzado". Las principales actividades productivas que se desenvuelven en la comunidad son la agricultura y la ganadería³, que vinculan a la comunidad con el mercado local de Cayambe, insertándola en una dinámica distinta. Su economía se había fundamentado prioritariamente en lógicas de autoconsumo, mas, a partir de las últimas décadas se ha visto una proliferación de actividades económicas que permiten a esta zona campesina-indígena del país, sostenerse frente a las disposiciones de las demandas mundiales del liberalismo económico; entre estas principales actividades adaptativas se encuentran: la migración y el trabajo asalariado en empresas florícolas.

La presente investigación focalizó su interés en los acontecimientos suscitados en la dinámica de la coyuntura actual, pero se remite sustancialmente a hechos pasados-hitos que demarcaron en gran medida la direccionalidad de la temática, razón por la cual se asumen procesos sociales vividos en la zona que transitan desde la época del predominio de la ha-

cienda pasando por la inserción de las empresas florícolas, hasta llegar a la actualidad donde el Estado y las Juntas de Regantes consolidadas en el sector, otorgan otro matiz a la realidad circunscrita.

Los cinco sectores que constituyen la comunidad han tenido que rearticularse y delinear pautas organizativas dirigidas a enfrentar las 'amenazas' externas que han puesto en entredicho el acceso al agua de forma natural. El control externo de las fuentes hídricas se dio inicialmente en el tiempo de las haciendas, donde los caudales eran exclusivos para estos espacios productivos, luego, a partir del año de 1986 con el apareamiento de empresas agroexportadoras de flores en la zona, la pugna se batía con estos nuevos actores en escena.

Posteriormente, la "historia hidráulica" de la comunidad revela que las conflictividades se desataron entre comunas de Cayambe y Tabacundo con la creación del canal de riego 'Cayambe-Tabacundo' que estaba dispuesto para regar a ambas zonas, por lo que el elemento hídrico debía ser una vez más compartido. Y después con la construcción de un nuevo canal a cargo de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez que disponía de mayor cantidad de caudales para su proyecto, pero el cual no fue concluido en su totalidad, resultando

3 Al respecto, me parece pertinente señalar que dentro de la Chimba existe un 'Centro de Acopio' de leche, el cual se constituye en un verdadero eje de concentración comunal. Alrededor del mismo se suscitan asambleas organizativas, se organizan cuestiones económicas y productivas. Visto desde una perspectiva de geopolítica simbólica, este lugar es un espacio que concentra multiplicidad de poderes. "Cada día, 175 familias traen leche al Acopio, el cual es un lechero moderno. Por término medio, se traen 9.000 litros de leche cada día. Las familias reciben 26 centavos por litro y la compañía la vende en el mercado de Cayambe. Aunque la leche es la mayor actividad económica en La Chimba, hay esfuerzos también para aumentar el cultivo de verduras para vender en los mercados regionales" (www.kayambi.org/chimba.html).

para la comunidad en una especie de 'elefante blanco' olvidado y que significó también una serie de disputas y confrontaciones.

También es de gran importancia las luchas que la comunidad, como parte de la organización de segundo grado de la cual forma parte (COINOA)* ha librado frente a nuevas disposiciones estatales provenientes de la Secretaría Nacional del Agua. El movimiento indígena de la zona norte del país principalmente se ha aliado para reclamar sobre amenazas y posibles intentos de privatización del agua e intervenir en torno al proyecto de Ley de Aguas. Es decir, que los 'bandos' externos ante los cuales se ha posicionado la comunidad históricamente han contemplado estructuras hacendatarias, empresariales, comunitarias y estatales.

Como fue brevemente reseñado, el conflicto por el agua en la zona de estudio se originó cuando existían las haciendas con sus respectivas lógicas y estructuras, dado que los actores que detentaban el poder oficial en aquellos espacios, disponían de mano de obra local para la construcción de la acequia 'Cayambe Tabacundo', que sigue aún siendo utilizada en el presente. Los caudales en el 'tiempo de hacienda' fueron exclusivamente direccionados para regar las extensiones de tierra que formaban parte de las grandes haciendas de la zona de Pesillo.

Posteriormente, en la década del ochenta, se dio un giro fundamental en cuanto al acceso al agua, ya que las empresas florícolas que comenzaron a instalarse en la zona, requerían de cantidades

considerables de agua para poder llevar adelante su proyecto económico, lo que conllevó a que varias comunidades se vieran cada vez más restringidas del elemento hídrico. A este contexto, se suma que las autoridades cantonales de aquel entonces, mostraron evidentes preferencias y apoyo a las empresas agroexportadoras de flores, en detrimento de los campesinos de las zonas aledañas.

En varios testimonios y documentos están plasmadas a modo de evidencia, los montos que la gente debía pagar si es que deseaban acceder a un número limitado de caudales, situación que no sucedía con las florícolas, dado que las autoridades del Municipio de Pedro Moncayo de aquel entonces habían decidido apoyar a las empresas en cuestión.

Posteriormente, los conflictos por el agua se agudizaron cuando a las comunidades bajas (respecto a la acequia 'Cayambe Tabacundo') les empezó a llegar menor cantidad de agua para riego, dado que desde la parte alta, ya se bloqueaban ciertos tramos del canal antiguo para impedir el flujo del agua. Esta situación sin lugar a dudas provocó malestar generalizado y compartido entre los habitantes de los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. Frente a ello, se impulsó el mega proyecto de riego, a cargo de la empresa 'Andrade Gutiérrez', que pretendía regar a zonas de ambos cantones, sin embargo, por problemas políticos y económicos, esta obra de gran envergadura quedó paralizada e incompleta, causando mayores repercusiones y tensiones sociales.

* Comunidades Indígenas de Olmedo y Ayora.

Enmarcando todo este tipo de conflictividades externas que se han sumado a lo largo de la historia hídrica de la comunidad de la Chimba, vale reconocer el papel estatal durante todo este proceso, que ha dado pie a la manifestación abierta del poder desde sus diversas aristas.

Pobladores de la comunidad del 'río trenzado', así como miles de campesinos e indígenas de todo el país, manifestaron su descontento frente a posibles intentos de privatización del agua. En el año 2010, se vio paralizado el debate sobre la Ley de Aguas en la Asamblea Nacional, situación que causó descontento y desconfianza en el sector rural del país.

Varios son los lineamientos e hilos que es necesario ir entretejiendo para lograr analizar de manera amplia el tema de la Ley de Aguas y la reciente institucionalidad que se ha creado en torno al agua en nuestro país con sus debidas consecuencias e impactos. En el presente artículo, nos limitamos a especificar que indudablemente los aspectos legales e institucionales son un marco general de la realidad que ha sido analizada en una comunidad particular y que otorga matices a la problemática de poder que se presenta en las distintas conflictividades por el agua.

Ejes de organización interna por el agua

Frente a toda esta serie de matices que conforman esta problemática particular, los comuneros de la Chimba con-

tinúan captando el agua de la acequia local 'El Calvario', la misma que provee principalmente a las comunidades 'de abajo'. Por otro lado, el río la Chimba es una vertiente (cada vez más escasa) de la cual los chimbeños se benefician para regar sus tierras.

Basándonos en varios encuentros, talleres y entrevistas colectivas, fue posible establecer que dentro de la comunidad se han organizado para acceder al agua por turnos y así "no coger de una sola".⁴ Su forma específica de gestionar colectivamente el agua responde a estos turnos que van cambiando cada 15 ó 30 días (dependiendo si es invierno o verano) entre los grupos consolidados de regantes que se han organizado en cada sector.

Por lo general, los comuneros de la Chimba se han aliado conforme al reservorio que más cercano esté de sus terrenos. Sin embargo, a excepción de las familias, a las cuales casi no les llega el agua, debido a su localización, los demás habitantes pueden acceder al elemento hídrico casi todos los días.

Otro aspecto importante de señalar, es que la comunidad en asamblea ha resuelto organizarse mediante óvalos, es decir, captaciones a partir del canal principal que permiten regar mediante acequias secundarias a la mayoría de las parcelas. Un asistente del taller realizado en la comunidad con la intención de diagnosticar la realidad hídrica de la zona, enfatizó que en base a cálculos se logra que cada óvalo abastezca en promedio a 120 ó 150 hectáreas y "de

4 Taller de diagnóstico realizado en la comunidad de la Chimba, el día 8 de septiembre del 2010, bajo el apoyo de IEDECA.

acuerdo a la capacidad de la tubería se está tratando de distribuir".⁵

Es decir, que como paso primero se han consolidado grupos en cada sector de la Chimba en base a los reservorios existentes, para luego, mediante turnos distribuir el agua entre estas agrupaciones, la mayoría de las veces, vinculadas por redes de parentesco o compadrazgo.

Con la finalidad de redistribuir de mejor manera el agua, al interior de la comunidad se está trabajando para llevar a cabo la construcción de nuevos reservorios, entubar los distintos canales secundarios y liderar procesos, entre los que se destaca el proyecto 'Chuquiracuco'⁶, mediante el cual, las parcelas altas podrían tener más posibilidades de tener agua de riego para sus cultivos.

Se podría decir que con esta información se responde a la pregunta del cómo se organizan en esta comunidad particular para acceder al agua, trasladándonos ahora a intentar configurar el argumento más apropiado y acorde a la interrogación de ¿por qué han tenido que hacerlo? Se puede afirmar que esta manera propia de organización responde a la necesidad de los pobladores de administrar su recurso hídrico de forma más eficiente, contrarrestando así los fenómenos a los que se han visto expuestos, tales como la escasez progresiva del agua y la reduc-

ción de caudales, junto al desatamiento de conflictos internos entre los cinco sectores que conforman la comunidad de la Chimba y pugnas externas.

Por otro lado, cabe puntualizar que los pobladores de la Chimba no se hallan organizados bajo una Junta de regantes, sin embargo, dentro de la directiva central existen representantes específicos para la distribución, circulación, defensa y gestión del agua. Sobre ello, la presidenta de la comunidad añadió: "Aquí no hay juntas, en la Chimba hay comisión de aguas".⁷ Además, existe una persona exclusivamente encargada del cuidado del canal, al cual se le conoce como 'aguatero'.

Se debe mencionar que paralelamente a lo antes mencionado sobre la organización de los comuneros de la Chimba por el agua, los pobladores de los cinco sectores se reúnen continuamente para darle mantenimiento a su canal local y para cuidar el páramo. Cada cierto tiempo se llevan a cabo mingas comunitarias para lograr estos objetivos.

Todos los sectores han trabajado conjuntamente, excepto Pulisa, el mismo que –al parecer de los comuneros de la Chimba– actúa de manera independiente tanto en sus proyectos de educación, salud, transporte, fiestas. Más, se ha visto que en estos últimos años, en contraste a

5 Íbid.

6 El titular de la COINOA, establece que en el período 2004-2005 surgió la propuesta del proyecto 'Chuquiracuco' para regar las zonas altas que no se ven beneficiados por el canal nuevo inacabado. Específicamente, las comunidades de Cariacu, la Chimba, San Pablo Urco, Cachi Alto y Moyurco serían los favorecidos directos de este proyecto, que aproximadamente abarcaría a unas 800 familias y unas 3.000 hectáreas. Además cabe recalcar que el 'proyecto Chuquiracuco' parece ser el eje que mantiene aún la unión entre las comunidades altas con la organización del CODEMIA.

7 Entrevista a la Sra. Elena Alba, presidenta de la comunidad en el año cuando se realizaba el trabajo de campo (2008). El día 11 de octubre del año mencionado.

esta situación de aparente desunión, el único eje que los ha agrupado ha sido la necesidad y lucha por el agua. Respecto a esta situación, un joven enfatiza:

Aquí la comunidad es unida y se llevan bien todos...la Chimba se compone por varios sectores aquí: Contadero, Hierba Buena, Pulisa, Chilcajucho, entonces todos ellos son la Chimba, una sola masa. Sino que ellos (los habitantes de Pulisa) por el mismo inconveniente del agua, habían sacado una jurisdicción para defender el agua con otra comunidad, entonces por eso es que se quedaron como casi una comunidad, pero ya son la misma. Ahora trabajan igual, en las mingas, en las buenas y en las malas, ahí tienen que estar juntos.⁸

En conclusión, lo que es posible analizar una vez que se han expuesto las apreciaciones correspondientes a la disposición que a nivel interno se lleva en la Chimba a causa del agua, es que las modalidades de reparto señaladas se encuentran totalmente entretnejadas con la dinámica organizativa comunitaria y específicamente, entre las personas y su medio ambiente. Según Levine y Coward (1989), entre los patrones de asignación de agua menos equitativos se encuentran aquellos que dan prioridad a fenómenos como el tiempo (donde el primer regante tendría los derechos primeros), la superficie de la tierra, el nivel de contribuciones (económicas), por la productividad o por el volumen "de las acciones en el sentido que cada uno 'gana' una acción de agua de la cual el valor, expresado en

tiempo de turno, es proporcional a la inversión en el sistema de riego hecho por el dueño de la acción" (Gutiérrez y Gerbrandy en: Boelens, 1998: 261).

Sin embargo, lo que se ha visto en la Chimba son intentos y esfuerzos colectivos por lograr que el agua sea administrada colectivamente y que se halle disponible en todos los sectores, para lo que han creado y recreado disposiciones y normas, revalorizado la validación de los derechos, han llevado a cabo un manejo particular del paisaje y han recurrido a tecnologías que más allá de ser empíricas, son altamente simbólicas, al estar "las habilidades y reproducción de conocimientos dependiendo del entorno y tomando lugar en las actividades que se ejecutan comunalmente" (Íbid: 263).

Entonces, la distribución dinámica del agua, viene a significar el manejo que se hace de esta infraestructura (en este caso, previamente realizada), para así operar un sistema de riego. Mas, la organización por el agua implica también revalorizar todas y cada una de las actividades sociales que son lideradas por los usuarios, así como, dotar de legitimidad a los criterios de uso y circulación, reglas, obligaciones y normas, asumidas en consenso, bajo el formato de los llamados derechos consuetudinarios. Otorgando sentido al diálogo que se ha construido entre los regantes y sus aguas y a la autonomía que se pretende hallar expresada en las decisiones que se tomen al interior de la comunidad para con su sistema de riego y la crianza del agua.

8 Entrevista a un joven de la comunidad, 13 de noviembre del 2008.

‘Los de arriba y los de abajo’

Ahora bien, intentando crear un puente de unión entre lo que se suscita al interior de la Chimba con las dimensiones de tiempo y espacio, que dan cuenta de la cosmovisión andina, se ha arribado al concepto de la dualidad. Aquella concepción que plantea la posibilidad de que partes de una misma esencia, los dos polos complementarios formen una unidad constituida y compleja; situación que por su parte evoca una estructuración binaria del pensamiento, y por ende, de una catalogación del universo específica. Se propone la reflexión de la dualidad, ya que como veremos, dentro del conflicto interno por el agua en la Chimba, las concepciones de ‘arriba’ y ‘abajo’ adquieren una connotación importante.

Siguiendo con este modelo dual y complementario, el agua también ha pasado a dividirse según el esquema bipartito de hanan y urin. Dicha fragmentación entre dos mitades de la comunidad y los pisos ecológicos que sus integrantes controlan y representan, corresponde a una oposición entre lo alto y lo bajo en la cual el agua juega un papel de elemento unificador. A decir de Paul Gelles, “el sistema hanan/urin de organización dual le da una forma general al modelo local de manejo hídrico y está semánticamente relacionado con un grupo mayor de dualismos que son parte fundamental de la cosmovisión [andina]” (Gelles, en: Boelens, 1998: 277). Es importante señalar que esta división trasciende parámetros netamente geográficos, llegando a abordar, fuertes concepciones simbólicas, que permiten crear un andamiaje cultural entre aquellos que resultan ‘de arriba’, en relación a ‘los de abajo’.

La línea divisoria que ocasiona tal suerte de fragmentación está representada por el canal de riego abierto. A partir del mismo, unas son las comunidades que quedan arriba y otras abajo del mismo. Como se verá a continuación, siguiendo este modelo dual, en la comunidad de la Chimba se han desenvuelto pugnas entre estos dos puntos (geográficos y simbólicos) opuestos y a la vez complementarios. El poder como tal se halla en este juego que tiene raíces históricas en el esquema de dualidad aludido.

Entonces, como se percibe, es indiscutible el hecho de que hoy en día existe una amplia pugna en torno al agua, lo que se explicaría por el hecho de que el manejo y control sobre las fuentes del recurso hídrico significa poder, lo que además respondería al interjuego de saberes e intereses contrarios que se desenvuelven alrededor de demandas dominantes o de resistencia comunitaria, que en conjunto predispondrían a una disputa por el recurso agua.

Geográficamente, el ‘arriba’ es beneficiado, por su cercanía a las fuentes y a las zonas de páramo, su acceso resulta aparentemente menos problemático; mientras que los que habitan ‘abajo’ deben esperar que la cantidad de agua sea la suficiente para que logren regar sus sembríos, agregándole a ello, la predisposición y la organización que se lleve dentro de la comunidad, para tener herramientas suficientes para poder reclamar por sus turnos de agua.

En la dinámica de las asambleas comunitarias, varias son las apreciaciones que retratan el conflicto de ‘arriba’ y ‘abajo’ vivido en la comunidad, cuyos principales factores podrían ser los siguientes: 1. La falta de cooperación de

algunos pobladores en los trabajos de mingas realizados con intención de reconstruir tramos importantes de la acequia local, 2. Deficiencias en cuanto al acceso de agua para ciertos sectores, principalmente de los que están ubicados en las partes bajas, 3. Existencia de fallas durante los turnos en que los pobladores se han dividido para cuidar del páramo y sus fuentes, con el fin de restringir el paso antes de tener conocimiento completo de los intereses que llevaron a las personas a realizar la expedición por aquellas tierras, y 4. El conflicto latente entre los cuatro sectores de la Chimba con Pulisa.⁹

Por lo tanto, es claro que una de las causas más recurrentes para que surjan conflictos internos en la comunidad por el agua, es el relativo irrespeto a los turnos de distribución entre los cinco sectores que conforman la Chimba y cierto desinterés por participar en las mingas programadas para re-establecer las acequias. Se considera que en parte esta lucha entre los 'de arriba' y los 'de abajo' se debe también al desacuerdo y alejamiento que manifiestan los cuatro sectores con Pulisa, al haberse este último independizado (simbólicamente) de los demás.

Los pobladores de la comunidad de la 'Chimba' han visto pasar durante decenios el agua que resulta de los deshielos del nevado Cayambe y la han utilizado primordialmente para regar sus tierras; sin embargo, han tenido que posicionarse frente a los numerosos intentos de apropiación de los caudales ejercidos por actores que de una u otra

forma han marcado su trascendencia histórica la hacienda y luego las empresas florícolas).

Sin embargo, frente a todos los conflictos desatados por el agua entre las zonas altas y bajas de la comunidad, durante la realización del trabajo de campo, fue posible develar que esta situación de disputa dual, está entrelazada con pequeñas alianzas que reducen parcialmente el nivel de conflicto. Estas asociaciones están insertas dentro de una dinámica familiar, al formarse redes de parentesco y compadrazgos entre los pobladores de la comunidad, que habitan en las zonas bajas y altas.

Guiándonos entonces por la idea de que "el conflicto tiene una naturaleza muy concreta dentro de la sociedad: ser un mecanismo de ajuste" (Gluckman, en: Fábregas, 1976: 199), el dinamismo que adquieren las relaciones de compadrazgo al interior de la entramada problemática de la lucha por el agua es relevante. Para complementar esta apreciación, se cita:

"...El poder tiene por tanto como función la de defender a la sociedad contra sus propias debilidades, de mantenerla en 'estado', pudiéramos decir; y, si es preciso, de promover las adaptaciones que no contradicen sus principios fundamentales...Al recurrir a una fórmula sintética, definiremos el poder como el resultado, para toda la sociedad, de la necesidad de luchar contra la entropía que la amenaza con el desorden... los rituales, las ceremonias o los procedimientos que aseguran la renovación periódica u ocasional de la sociedad

9 Este sector se halla más 'abajo' que todos los demás sectores. Colinda con Cariacu.

son instrumentos de una acción política así entendida... El poder, necesario por las razones de un orden interno, cobra forma y se refuerza bajo la presión de los peligros exteriores- reales y/o supuestos (Balandier, 1976:43- 44).

Podría suponerse que este relacionamiento social que denota una red de parentesco simbólico, pasa a constituirse en una estrategia de poder, recurrida para controlar y pausar dentro de lo posible al conflicto desencadenado entre dos cantones, por el tema del agua. Al menos, este mecanismo de trasfondo simbólico podría permitir que la tensión causada por la conflictividad y disputa de sentidos en torno al recurso hídrico cese paulatinamente entre dos entes que responden a similitudes culturales, es decir, entre comunidades campesinas que reproducen varias actividades parecidas y que luchan por una necesidad en común. En este contexto, los llamados 'conflictos cruzados' –siguiendo a Gluckman-, poseen espacio de acción, al identificar a ciertos agentes sociales actuar a modo de aliados en un frente y como enemigos simbólicos en otro contexto dado.

En este sentido, el conocimiento, acceso y necesidad del agua es algo que universalmente se comparte entre todos los seres vivos, sin embargo; son las diferentes percepciones lo que otorga particularidades y especificidades dentro de cada grupo social para ver, entender y tener un acercamiento al agua. En algunas culturas, este elemento vital no pasa de ser un recurso imprescindible para la vida en cuanto permite la sobrevivencia, pero esto no exime que existan otras agrupaciones humanas, donde el agua haya adquirido también fuertes connota-

ciones simbólicas, estando presente durante varias generaciones en la mayor parte de sus rituales (de vida, de paso o de muerte), en sus bebidas especiales y en sus festejos colectivos (sean estos rogativos o de agradecimiento).

Percepciones y valoraciones simbólicas como herramientas de defensa

Como lo explica Cáceres, para el runa andino, el agua es un elemento que cuenta con vida propia y que se expresa por lo general simbólicamente bajo la forma de una culebra (amaru), siendo ésta la que llega a determinar las rutas de los caminos de agua y los canales se "secan o cambian de rumbo cuando matan o agreden a estos miembros de la ecología andina" (Cáceres, 2002: 105). La visión cíclica del tiempo dentro del mundo andino es percibida también en la ruta cultural que recorre el agua: desde las entrañas de la tierra, pasando luego a la superficie y llegar hasta el mundo de arriba. La percepción de los hombres y mujeres andinas se ve marcada por movimientos espirales que expresan –como el agua- dinanismos y vida constante.

Entre las principales "ideas semiformalizadas" (en contraposición a doctrinas explícitas) que los comuneros de la Chimba han consolidado para definir y conceptualizar al agua dentro de su vida, sus prácticas cotidianas y su paisaje se encuentran las que siguen a continuación. Las mismas que se hallan divididas en categorías de género y edad, proponiendo de tal forma, un ejercicio comparativo.

Por ejemplo, para un informante adulto:

El agua tiene que tener derecho, las plantas tienen que tener derecho, la tierra tiene que tener derecho, los animales desde las formas de vida de micro a la macro tienen que tener derechos, hasta las piedras tienen que tener derecho...el agua total al final estaría dentro de lo que es el Pachamama...Por lo tanto, el agua para nosotros es un hermano. En ese sentido, si al hermano le maltratamos entonces pues se muere ella y uno no puede vivir porque ya por la cuestión nata el ser humano necesita de otros elementos, sin él uno no vivimos; y sin nosotros el agua tampoco podría vivir, sin el agua nosotros tampoco podemos vivir...Bueno, desde la concepción de nosotros o no sé cómo podremos entenderlo, porque nosotros somos los que también, o sea, establecemos o conversamos con el agua. El agua habla también, el agua llora también, si es que nosotros somos compañeros, somos hermanos de ella, si es que nosotros desaparecemos ya no va a tener ese diálogo con nosotros. Claro que no podría vivir, pero también sufriríamos, entonces eso sería para nosotros.¹⁰

Esta es una apreciación de gran importancia, puesto que desde tal perspectiva, el agua en realidad dejaría de ser un motivo estratégico de conflicto, para convertirse en un eje que unifica intereses humanos, antes que mercantiles. Desde dicho sentido, el agua sí es entendida como un elemento vital y no simplemente como un recurso de necesidad básica. La equiparación vida-agua le otorga un fuerte e interesante valor simbólico a este tipo de lucha colectiva, donde ya no puede desligarse más lo humano de lo

natural- externo; pues son esencialmente principios retro-alimentativos.

Como era de esperarse, las concepciones que surgen y las prácticas rituales que son realizadas por los infantes y jóvenes respecto al agua, se encuentran entremezclados con la influencia de la globalización y en algunos casos están dejando de ser practicados. Pese a que este esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, a modo de un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas se ha dado en la comunidad, la forma de percibir al agua y la manera especial de acercarse y tratarla está cada vez en un mayor peligro de desaparición, a causa de la falta de empoderamiento y de identificación de los niños y jóvenes con estos símbolos.

Se podría concluir que dentro de la 'visión del mundo', en un contexto panandino, aún se sigue conservando la idea de que al agua no hay que tratarla, conservarla o preservarla; sino más bien: criarla. Es un concepto de gran importancia y que se ve relacionado con los testimonios emitidos, donde principalmente se rescató el 'parentesco simbólico' que los hombres crean con el agua, al ser ésta (o éste) un hermano o una madre. La principal relación implícita que los pobladores de la zona manifiestan se da entre la vida y el agua; que tal parece ser un sinónimo inextricable dentro del entendimiento de los pobladores de la Chimba, sin con ello decir que esta apreciación sea absolutamente generalizada, dando así la idea totalmente ro-

10 Entrevista del 3 de septiembre del 2008 al dirigente de la COINOA y vicepresidente del CODEMIA.

mántica de lo que se suscita en esta comunidad de Cayambe.

Y justamente con la intención de no caer en idealizaciones o fetichismos puristas que no nos permiten avanzar a nuevos análisis de lo que en realidad está pasando en esta comunidad, nos parece importante mencionar un argumento de Geertz, el cual propone que entre el estilo de vida que ha sido aprobado ('ethos') y la supuesta estructura de la realidad ('visión del mundo') existe una congruencia fundamental, donde ambos se otorgan sentido mutuamente; siendo simbólica y representativa también esta posible asunción por parte de los pobladores de discursos identitarios, donde el agua sea vista como un elemento fundamental de la Pachamama y exento de procesos de venta, comercialización, contaminación, desperdicio: algo que conocemos, por desgracia no acontece siempre al interior de ningún espacio, sea éste rural o urbano.

Estableciendo que, los rituales son necesarios para mantener el equilibrio, en esta parte se analizarán las principales acciones simbólicas que los pobladores de la Chimba realizan en torno al agua, así como, las dimensiones culturales y comunitarias que adquieren los llamados ojos de agua y poklios. Siendo así que en palabras de Víctor Turner, el agua pasará a ser vista como el símbolo dominante, "al ser considerado no sólo como un medio para el cumplimiento de los fines declarados de un rito determinado, sino también y principalmente, por referirse a valores que son considerados

como fines en sí mismos, es decir, a valores axiomáticos" (Turner, 1973:16- 17).

Por lo tanto, el llamado 'poder simbólico' del agua, se consolida a causa del movimiento y dinamismo que ocasiona en las personas que lo reproducen. El agua otorga a los comuneros que la defienden ciertas herramientas, traducidas en metadisursos simbólicos, para ejercer su lucha y enfrentar la inmediatez de sus condiciones de vida. El concepto de Bourdieu adquiere relevancia entonces, al suponer que dicha toma simbólica reconstruida generacionalmente, es un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico del sentido inmediato del mundo (Bourdieu,¹¹en texto virtual, s/f).

El poder del agua se concentra en tal sentido, en la capacidad innata de mutación y de adaptación a los cambios históricos y sociales. En la coyuntura actual el agua es percibida de cierta manera particular por los comuneros. Presumiblemente, este símbolo irá adoptando diferentes características conforme vayan avanzando en el tiempo las generaciones que actualmente son los niños y jóvenes de la comunidad.

El agua en tal contexto trasciende de ser un 'recurso' de naturaleza apropiable y negociable, para convertirse en un elemento que fusiona a un sector específico para resistir a otro. El enfrentamiento de concepciones pasa a ser el motor que otorga movimiento y cambios en la estructura social, donde existe un foco de conflicto, en este caso: el agua. Las construcciones tradicionales simbólicas crea-

11 En internet: <http://sociologiac.net/biblio/BourdieuSobrePoderSimbolico.pdf>

das pueden actuar a modo de herramientas, que otorgan poder al grupo social que se encuentra resistiendo. Lo que se quiere decir con ello, es que tanto el Poder legítimo (Weber), institucionalizado y filial de propuestas estatales-mercantilistas, como el Poder reposado en el símbolo construido comunitariamente, ocupan posiciones antagónicas, que por momentos, se entrecruzan, negocian y ceden.

A modo de conclusión

En base a los datos obtenidos, se alude a que el paisaje hídrico cantonal se consolida en una situación irónica, dada la gran disponibilidad física y predisposición que tiene la ecología local para verse abastecida de agua a causa de la presencia del nevado Cayambe y los caudales que de él se desprenden; mas, en la cotidianidad se observa que existen conflictos latentes por el acceso al recurso hídrico. Bien sea el sector campesino, empresarial, hacendatario (reminiscencias del pasado), todos sin excepción, han elaborado esquemas y tácticas propias para asegurarse la accesibilidad al recurso.

Los datos analizados sobre este tema bien nos invitan a pensar la problemática del agua dentro de parámetros de distribución y conceptos sobre equidad o desigualdad, inaccesibilidad y marginalidad. Lo que ha resultado evidente es que la escasez general sentida por el recurso hídrico, ha provocado el apareamiento de luchas y conflictos entre y dentro de las comunidades por la obtención o retención de los derechos del agua. Lo que se ha deducido es que los pobladores de las distintas comunidades de Cayambe han tenido que librar bata-

llas simbólicas (y reales), primero, con estructuras hacendatarias, después con las empresas de flores y por último, con el Estado.

Se puede concluir también, que pese a la inequidad de acceso al agua en la que se halla subsumida gran parte de la población, los actuales sistemas de riego y acequias en la zona andina indican que la antigua capacidad de repartir agua entre las comunidades y las chacras no se ha perdido del todo. Las diferentes formas en que las comunidades distribuyen el agua demuestran una riqueza en capacidad organizativa, que si bien es cierto, presenta aún ciertas falencias, develan formas tradicionales de acceder al recurso hídrico.

Paralelamente a las situaciones de disputa, se ha visto que los habitantes de la comunidad de la Chimba han asumido distintas estrategias para defender sus caudales hídricos y la fuente de la cual se originan: el páramo. Sobre ello, se concluye que al interior de la comunidad se han evidenciado prácticas y ejercicios de consenso y participación para redistribuir el recurso, impulsos a la conformación y fortalecimiento de OSG, que otorguen mayor representatividad a los 'usuarios' de las acequias de riego comunitarias. Dentro de este mismo esquema, se puede determinar que existe a modo de reivindicación, un apoyo a proyectos hídricos, pensados justamente para las comunidades altas, entre las que sobresale el caso de la Chimba.

Se añade además que las disputas internas a causa del elemento vital participan de una dinámica dual; que por un lado, dibuja una línea invisible donde unos pasan a constituirse en los 'de arriba' y otros 'en los de abajo', y por

otro lado, dando cuenta de una cierta vigencia de la cosmovisión de tradición panandina.

El agua, pasa así a convertirse en el elemento central que articula rivalidades y conflictos, más también, uniones y alianzas comunitarias, indispensables para afirmar una identidad propia y para acceder al poder político. El campesinado actual enfrenta nuevos retos y se resuelve y re-conforma frente a recientes estructuras monopolizantes, la acumulación de la tierra se ve acompañada de procesos de acaparamiento del agua, dando paso al apareamiento de los llamados 'aguatenientes'. Frente a estas situaciones, la variable simbólica, ha aportado desde el interior de los nuevos modelos de riego, asumidos por los usuarios directos y protectores de las fuentes de agua, proporcionando nuevas redes que unifiquen a la familia campesina en renovadas relaciones sociales a nivel local alrededor del riego.

Pese a que los jóvenes no tengan conocimientos muy amplios sobre las prácticas particulares que dibujan una manera propia de acercamiento e interrelación con el agua –y en extensión con toda la ecología– se percibe en la Chimba, esta insistencia por reconocer los atributos simbólicos del elemento de vida, aunque éstos pasen algunas veces desapercibidos o no formen parte de discursos abiertos y reconocidos colectivamente.

Este tipo de valoración alrededor del agua, bien puede incidir también para que los comuneros que cohabitan con las fuentes hídricas, sigan construyendo constantemente, una nueva noción de 'valor' y de imaginario para el agua, que se diferencie de netos otorgamientos

mercantiles, para desembocar en nuevos sentidos, donde la naturaleza no sea pensada como recurso de compra y venta; dándose paso al surgimiento de un giro hermenéutico que repose sobre esta distinta valoración del agua (Gara-galza, 1990).

Para finalizar se concluye, que el poder simbólico del agua se ve encarnado en el potencial que tiene para cohesionar fuerzas y para formular líneas de defensa entre los diferentes actores sociales que forman parte de esta problemática. Es innegable entonces, que, dentro de todos estos conflictos planteados entre comunidades, familias, cantones y que muchas veces responden a un auténtico "diálogo de sordos", lo que se halla atravesando transversalmente a esta compleja realidad, es el reconocimiento del agua como símbolo dominante o como eje de un poder simbólico que provoca el movimiento permanente de las personas que prescinden de ella, sea bien para articularse, enfrentarse o resistir.

Bibliografía

- Balandier Georges
1976 *Antropología Política*, Barcelona: Península.
- Boelens Rutgerd, Hendriks Jan (Edit.)
2004 "Gestión local, derechos colectivos y legislación de recursos hídricos", Vol. 4, [s/c]: WageningenUniversity, WALIR Studies, IWE, CEPAL (pp. 3- 62).
- Boelens Rutgerd
1998 "Economía campesina y riego andino" En: Rutgerd Boelens, Gloria Dávila (Coord.), *Buscando la equidad: concepciones sobre justicia y equidad en el riego campesino*, Países Bajos: Van Gorcum (pp. 247- 258).
- Cáceres Efraín
2002 El juicio del agua- "Unuhuishu": simbolismo y significado ecológico del agua en mitos andinos "el milagro de la Laguna Sa-

lada" de MusuqLlaqta, Quito: Centro de investigación de la cultura y la tecnología andina, Abya-Yala (colección Hombre y ambiente 65- 66) (pp. 78- 113).

Fábregas Andrés

1976a "El estudio de la vida política en Antropología: una evaluación". En: *Revista Comu-*

nidad de la Universidad Iberoamericana, No. 56, México: Universidad Iberoamericana (pp. 198- 225).

Turner Víctor

1973 *Simbolismo y ritual*, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANÁLISIS

Pueblos indígenas en Canadá: libre determinación a la tierra¹

Shin Imai*

Las relaciones entre el Estado canadiense y las naciones indígenas originarias revelan una trama de conflictos derivados de los derechos y la jurisdicción de los territorios indígenas. Esto ha sido particularmente evidente en torno a la implantación de minería en esos territorios. Tanto la consulta previa como la posibilidad de veto a las actividades mineras involucra la intervención del Poder Judicial que en determinados casos puede parar y terminar proyectos de explotación.

I. Introducción

A mediados de los años 1980, uno de mis clientes era una comunidad indígena del norte de Canadá. Para llegar a la reserva tuve que hacer un viaje de dos horas en avión desde Toronto hasta una pequeña ciudad en la que pernocté, y abordar a la mañana siguiente otro aparato, esta vez de sólo ocho plazas. La comunidad se encontraba en una apartada isla, sin conexión por carretera o ferrocarril. Cuando el avión aterrizó, sólo pude ver extensos matorrales, interrumpidos únicamente por la ru-

dimentaria pista de aterrizaje y por un polvoriento camino que conducía hasta la aldea. Una línea invisible separaba las tierras públicas pertenecientes a la provincia, en las que se ubicaba la pista, de las tierras públicas federales donde se situaba la reserva.

Los patriarcas de la comunidad manifestaban su preocupación por el creciente consumo de alcohol entre la juventud. Su inquietud se hizo mayor cuando apareció en los bosques el cadáver congelado de un joven que evidentemente había bebido en exceso. Tras escuchar a los ancianos, el jefe y el consejo de la reserva dictaron una dis-

1 Parte del presente artículo está basado en un capítulo del libro *Indigenous People and the Law: Comparative and Critical Perspectives*, eds. Ben Richardson, Shin Imai and Kent McNeil (2009: Hart Publishing). Agradezco a Valerie Crystal y Alejandro Campos por su revisión y sugerencias a este artículo, y al Lic. Francisco Gómez por la traducción. Esta obra es una iniciativa del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de Osgoode Hall Law School, Toronto, Canadá.

* Profesor en la Facultad de Derecho Osgoode Hall, Universidad de York, Canadá.

posición que prohibía el consumo de bebidas espirituosas en su territorio. Existía una forma expedita para hacer cumplir la prohibición e impedir la entrada de alcohol: la única manera de llegar al lugar era por avión, así que resultaba fácil registrar el equipaje de los pasajeros tras el aterrizaje. La nación originaria pidió al oficial de policía destinado allí que lo hiciera, y que confiscara todo el licor.

Pero esta idea planteaba un problema legal. Debido a que el avión aterrizaba en tierras pertenecientes a la provincia, sólo era aplicable la legislación provincial. El oficial, que era nombrado por el jefe de policía de la provincia de Ontario, recibió instrucciones de sus superiores de que sólo podía registrar las pertenencias de los pasajeros si había sospechas razonables de que se estaba cometiendo un delito. La posesión de alcohol era lícita en tierras provinciales, así que no había conducta delictiva alguna en bajar con él del avión, y por ello no había motivo para el registro. Esto significaba que el cateo sólo podía realizarse una vez que el individuo pusiera pie en el territorio de la reserva federal, donde la posesión de alcohol era ilícita. Pero existía una dificultad práctica para llevar a cabo esta idea: no existía una cerca que marcara la frontera, y a la policía no le resultaba fácil identificar la línea invisible entre la tierra de la provincia y la tierra federal.

El jefe comunitario, molesto ante tal dificultad, decidió crear una "fuerza de pacificación" integrada por miembros de la propia nación originaria, a fin de registrar a los pasajeros al bajar éstos sus equipajes del avión. Muchos pasajeros

cooperaban con los "guardias", pero durante una de esas búsquedas un miembro de la comunidad se opuso al registro. Se suscitó una riña, y se encontró en la maleta del individuo una botella de licor, que fue confiscada y destruida. Ninguna otra acción se tomó contra el sujeto. Éste, sin embargo, se sintió ultrajado y sometió su queja a una clínica de ayuda legal establecida en la población más cercana, a hora y media de viaje en avión. El abogado de la clínica consideró que el registro era ilegal, y que se había producido en tierras provinciales. Ante la ley, los "guardias" no eran más que ciudadanos privados que no tenían derecho alguno a revisar las pertenencias de otros ciudadanos. El abogado ayudó a este miembro de la comunidad a presentar una demanda legal contra los dos "guardias", que fueron entonces procesados por agresión.

Se manejó una gran diversidad de opciones "legales" para tratar este caso. La solución más obvia era que la pista de aterrizaje se reubicase en el territorio de la reserva federal. Sin embargo, la provincia se negó a traspasar la pista al gobierno federal, y éste no tenía en mente invertir en la construcción de una nueva en sus propias tierras. Otra propuesta era que la comunidad indígena levantara una gran cerca en torno a la pista de aterrizaje, y que obligase a las personas a pasar por una puerta. Poetas y caricaturistas pronto descubrieron el filón cómico del hecho de construir tal cerca en medio de un territorio inhabitado, con el propósito de resolver el problema que creaba una frontera invisible y sin sentido. Y ocurrió, sin embargo, que algunos abogados del gobierno,

con poca comprensión del humor, opinaron que en verdad la cerca era la solución más adecuada. Pero –infortunada o afortunadamente– ni el gobierno federal ni el provincial tenían la intención de pagar esa construcción. Finalmente el asunto nunca se resolvió. Los cargos contra los “guardias” fueron calladamente desestimados, la frontera federal-provincial no se cambió, y sigue en pie el problema de aplicar la prohibición del alcohol.

Todas las comunidades aborígenes en Canadá tienen historias similares, con leyes que resultan apropiadas para las áreas urbanas del sur, pero que se imponen de manera ridícula en el norte remoto. Por ejemplo, Susan Drummond cuenta la anécdota de un joven inuk que fue procesado por un tribunal en una ciudad del sur por un crimen violento. La solución del juez fue sentenciar al joven a regresar a su aislada comunidad norteña. Pero esta comunidad estaba también inquieta en cuanto a la conducta del sujeto, y lo encarceló a su regreso. Sin embargo, el juez sureño ordenó su liberación y amenazó a los miembros de la comunidad con juzgarlos por secuestro.²

En las dos historias referidas arriba, el Código Penal funcionó de manera contraproducente para la protección de la comunidad. En la primera, ayudó a proteger a los contrabandistas al hacer

muy difícil su detección y procesamiento. En la segunda, el sistema judicial resolvió el caso de un joven problemático en una comunidad sureña haciéndolo regresar a su aislada comunidad del norte. Para proteger a la comunidad del sur, expuso a la norteña a potenciales problemas. Más serio resulta aún, sin embargo, el hecho de que en ambos casos la aplicación del Código Penal despojó de poder a los líderes comunitarios y puso en manos de personas no aborígenes del sur la autoridad y la responsabilidad de tratar asuntos internos de una nación originaria.

Recordé sobre estas historias al leer el libro *Citizens Plus: Aboriginal People and the Canadian State*, del politólogo canadiense Alan Cairns.³ En esta obra el autor critica a la Real Comisión para los Pueblos Aborígenes,⁴ que recomendó que los gobiernos iniciaran negociaciones con las naciones originarias a fin de incrementar sus bases territoriales y reconocerles facultades decisorias sobre la tierra en sus propias comunidades. Dice Cairns que estos acuerdos hacen énfasis en las relaciones “nación a nación”, en los tratados y en un tercer orden de gobierno para las naciones aborígenes, a expensas de fomentar un “común sentido de pertenencia” mediante instituciones compartidas con otros canadienses. Con respecto a las dos comunidades descritas anteriormente, me

2 S. Drummond, *Incorporating the Familiar: Investigating Legal Sensibilities in Nunavik* (Queen's University Press, 1997).

3 A. Cairns, *Citizens Plus: Aboriginal People and the Canadian State* (University of British Columbia Press, 2000), pp. 51-52.

4 Informe de la Royal Commission on Aboriginal People (Supply and Services, Canada, 1996). Uno de los señalamientos de Cairns es que la mayoría de los siete comisionados era de procedencia aborígen.

pregunto cómo podría decirse que la aplicación del “compartido” Código Penal fomentó su “sentido de pertenencia” a Canadá. Desde el punto de vista de la sociedad dominante, no aborígen, aplicar el mismo Código Penal dentro y fuera de las reservas pudo parecer que fortaleciera la conexión con Canadá; pero desde el punto de vista aborígen, el “sentido de pertenencia” puede no haberse visto como una experiencia particularmente positiva, y probablemente haya contribuido a incrementar su distanciamiento con respecto a Canadá.

La problemática del “sentido de pertenencia” es aún más pertinente cuando se involucra el uso del territorio de una comunidad indígena, porque la tierra está relacionada al entorno político, cultural, social, económico y religioso de dicha comunidad. Un uso del territorio para labores mineras, por ejemplo, puede introducir cambios en los valores éticos de la comunidad, conflictos interfamiliares, una modificación drástica en la organización del trabajo, cambios en la estructura de gobernanza de la comunidad y la destrucción de sitios de importancia espiritual. En este contexto, el “obvio” beneficio que se desprende del trabajo pagado, no compensa la destrucción del “sentido de la comunidad” que éste trae consigo. Es importante señalar que en lo absoluto las reservas con respecto a este tipo de proyectos sea

una reacción irracional. Imaginemos, por ejemplo, cómo reaccionarían los ciudadanos de las grandes urbes, si se les presentase una propuesta de convertir sus respectivas ciudades en espacios de producción agrícola, estilo hacienda, y que trabajasen cosechando maíz.

Un problema asociado a lo anterior es el hecho de que los “beneficios” prometidos han sido desproporcionalmente más ventajosos para los dueños de la mina que para los comuneros. Por ejemplo, en mi estudio de caso de una mina canadiense en Guatemala, descubrí que el CEO de la mina, Goldcorp, ganaba US\$23.000 000⁵ al año, mientras que el ingreso de los guatemaltecos quienes trabajan para producir esa riqueza ascendía a cifras entre US\$2.400 - US\$5.400.⁶ Vale resaltar que los problemas de falta de consulta con las comunidades fueron tan serios, que investigadores del Banco Mundial, institución que ofreció un préstamo para la mina, sugirieron que la empresa debía suspender la expansión de sus operaciones. En lugar de implementar esta sugerencia, la empresa devolvió el préstamo y se liberó del monitoreo del Banco Mundial. Por otra parte, aun reconociendo que en el corto plazo pueden haberse producido beneficios para las comunidades involucradas en las actividades mineras de Goldcorp, un estudio de Tufts University (EEUU) concluyó que, en términos generales, “los riesgos am-

5 *The Globe and Mail*, April 4, 2007. file:///C:/Users/admin/Desktop/A-Shin/ARTICLES/Glamis/Telfer-%20payday%20worth%20\$23-million%20in%20in%202006.htm

6 Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley, *Buscando Oro en el Altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlin* (octubre, 2011), p.24 http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research-marlinmine_spanish.html#prensa.

bientales superan significativamente a los beneficios económicos de la mina".⁷ Goldcorp, por su parte, ha negado las acusaciones recogidas en este informe. De acuerdo a los datos de Goldcorp, durante un período de 4 años, la contribución de la misma a la comunidad ascendió a un total de \$24.000.000. En una respuesta a este alegato de la empresa, los autores del estudio de Tufts University advierten que, durante el período comprendido entre 2006 y 2009, los ingresos que Goldcorp obtuvo gracias a la mina ascendieron a casi US\$1 billón (US\$ 1,000 millones).

II. La realidad de la libre determinación

Existe un creciente reconocimiento internacional del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. El ejemplo más reciente es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, que en su artículo 3 establece: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural."⁸

En Canadá, la constitución contiene un reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes.

s.35 (1) Por este medio se reconocen y afirman los derechos aborígenes existentes y recogidos en los tratados, de los pueblos aborígenes de Canadá.

(2) En esta Ley, "pueblos aborígenes de Canadá" incluye a los pueblos indios, inuit y métis de Canadá.

Casi todas las constituciones en América Latina contienen similares reconocimientos de los pueblos indígenas.

En parte, el reconocimiento de los pueblos indígenas tuvieron lugar en razón de que los gobiernos no indígenas se percataron de que ya no funcionaban las políticas de asimilación. Los pueblos indígenas habían sobrevivido a las masacres, a las enfermedades traídas por los europeos, a la separación forzosa de sus hijos y a la expulsión en masa de sus territorios, y con todo el "problema indio" no había desaparecido. Por lo contrario, las políticas de asimilación lo habían exacerbado, y los gobiernos enfrentaban la perspectiva de un desastre social y económico, así como conflictos permanentes con las comunidades aborígenes.

Las áreas de tierra reservadas para uso exclusivo de los pueblos indígenas no son a menudo lo suficientemente extensas como para que brinden el apoyo necesario a las ceremonias tradicionales y las actividades de subsistencia, sin contar los empeños de la vida diaria que van creando la base económica de las comunidades. Los pueblos indígenas necesitan el acceso a, y el control sobre, la tierra y las fuentes de recursos a las que tradicionalmente han accedido para sobrevivir. Reconociendo este hecho, el gobierno federal canadiense se ha comprometido a reconocer la existencia del derecho inherente al autogobierno.

⁷ *Ibid*, p.45.

⁸ Asamblea General de las Naciones Unidas, 61ra. Sesión, Res. A/RES/61/295, UNGA (13 de septiembre de 2007).

En base a la política federal al respecto, se han realizado negociaciones sobre reclamos territoriales y sobre el autogobierno, y desde mediados de los años 1970 se han producido más de una docena de importantes acuerdos, así como innumerables arreglos menores con relación a diferendos sobre la propiedad de las tierras. Las extensiones territoriales contempladas en estos acuerdos van desde las 352.238 km² incluyendo derechos minerales en aproximadamente 35,000 km² para los inuit del Ártico Oriental hasta solo 7 km² para los tsaw-wasen en la Columbia Británica. En el tratado con la nación niska'a la autoridad indígena tiene supremacía respecto a algunas materias internas, incluyendo su gobierno y su constitución, su ciudadanía, su cultura y su lengua, sus derechos patrimoniales, el uso de la tierra, la atención a la niñez y la familia, la educación y la propiedad cultural.

Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas en Canadá carecen de un acuerdo moderno o de demarcación de su territorio tradicional. Para ellos, resulta difícil calcular si a lo largo de los años ha habido o no "progreso" en el tema de las tierras. Ciertamente, en Canadá, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda la situación ha mejorado, por cuanto los gobiernos de estas jurisdicciones han manifestado su compromiso por resolver los problemas de la tierra y los recursos. Algunos estudios sobre la propiedad de la tierra demuestran que se han producido avances en cuanto al reconocimiento de las titula-

ciones de los grupos aborígenes, incluyendo la norma, tanto de derecho internacional como doméstico, de que los gobiernos deben consultar a los pueblos originarios antes de suprimir su acceso a las tierras y los recursos. Por otra parte, es este el ámbito en que los pueblos indígenas reciben la presión más fuerte para aceptar la asimilación. Minería, petróleo y gas, explotación forestal, agricultura, generación hidroeléctrica, urbanización: todas estas actividades se combinan para crear el fundamento de la satisfacción del "bien público", que resulta en la transferencia de la propiedad y el manejo de las tierras, de los habitantes indígenas a los gobiernos nacionales. Los enfrentamientos por este motivo continúan en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, con bloqueos de carreteras y ocupaciones de tierras.⁹

La problemática, entonces, no es sólo de índole legal. Algunas naciones originarias estaban mejor no teniendo ningún derecho reconocido por ley, pero disfrutando en la práctica del control y el uso de sus recursos. La llegada del reconocimiento legal ha venido acompañado por la invasión de sus tierras y la expropiación de sus recursos.

La obligación de "consultar y acomodar" a las comunidades indígenas constituye ciertamente un avance con respecto al pasado, cuando no existía tal consulta. Empero, los gobiernos colonizadores se muestran renuentes a reconocer la necesidad del "consentimiento" indígena. Esto significa que por

9 Un recuento pormenorizado de la muerte a balazos de un manifestante aborígen por la policía puede encontrarse en: Ontario Government, *Report of the Ipperwash Inquiry* (Publications Ontario, 2007).

más perfecto que sea el proceso de consulta, los tribunales y los gobiernos no reconocen el derecho de las comunidades a decir “no”. Recientemente, en Ontario, Canadá, los *Kitchenuhmaykoosib Inninuwug* se vieron envueltos en una disputa bosque adentro, a cientos de millas de distancia de cualquier camino asfaltado, en un área sólo accesible por avión y trineo a motor.¹⁰ La nación originaria se oponía a la exploración minera en un territorio sobre el cual conservaba aún su derecho a cazar y pescar. Un tribunal le ordenó participar en una “consulta” con la compañía, Platinex, y en el curso de ese proceso la comunidad insistió en que iba a seguir sus propios procedimientos antes de decidir si autorizaba o no la exploración. Al cabo de varios meses el juez decidió que se había cumplido el requisito de la consulta, y como la nación originaria continuó oponiéndose a la actividad exploratoria, el juez falló que el jefe y la mayoría de los miembros del consejo electo eran culpables de desobediencia de una decisión judicial, y los sentenció a seis meses de prisión.¹¹ Era la sentencia más larga de la que se tuviera me-

moría por desobediencia en el contexto de una acción de protesta.¹² No existen precedentes de una similar sentencia a prisión para un alcalde y un consejo municipal de una comunidad no aborigen en una disputa sobre el uso de la tierra. Y para empeorar las cosas, Platinex no era una inocente y bienintencionada compañía minera; aunque había recibido una carta de la nación originaria en la que ésta se oponía a la exploración, en sus declaraciones aseveró que la comunidad había autorizado verbalmente la actividad,¹³ y cuando la comunidad la impidió físicamente, Platinex presentó una demanda por \$10,000 millones de dólares, lo que era cerca de \$10 millones por cada hombre, mujer y niño de esta aislada reserva.

A la luz de todos estos conflictos sin resolución, el gobierno pagó CND \$5.000.000 a la empresa para retomar la licencia de exploración y suspendió la exploración minera en un predio mayor a 23.000 km², el cual corresponde a los territorios tradicionales. En términos económicos, todo lo anteriormente comentado habla de una situación de suma ineficiencia. El resultado de no per-

10 Esta comunidad es la misma que se menciona al inicio de este artículo en la historia sobre el control del alcohol.

11 *Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation*, [2008] 2 CNLR 301, 77 WCB (2d) 325 (Ont. Sup. Ct.).

12 Véase *Frontenac Ventures Corp. v. Ardoch Algonquin First Nation*, 2008 ONCA 534, 91 OR (3d) 1, párr. 63 (Frontenac). En ese caso, el juez había impuesto al jefe de entonces una sentencia de seis meses y una multa de \$25,000 dólares por bloquear una mina de uranio en tierras en disputa. La Corte de Apelaciones de Ontario determinó que la sentencia era demasiado fuerte, y la redujo a una multa de \$1,000 dólares.

13 *Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation*, [2006] 4 CNLR 152, 272 DLR (4th) 727 (Ont. Sup. Ct.), párrs. 23-28. La decisión final del juez fue revocada después de que los líderes de la nación originaria habían pasado ya dos meses en la cárcel: *Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation*, 2008 ONCA 533, 91 OR (3d) 18.

mitir la exploración sin el consentimiento, confirma la demanda que la comunidad articuló en primera instancia. En lugar de hacer una consulta apropiada y respetar el proceso comunitario, la empresa y el gobierno emprendieron un proceso probadamente conflictivo, que se extendió por un período mayor a un año e implicó altos gastos financieros y políticos.

III. Derechos a la Tierra

Debido a que la libre determinación es una elección, puede ejercerse en diferentes maneras. La opción de la “soberanía y el autogobierno” conduce a una mayor autonomía de la comunidad indígena para controlar su propio desarrollo social, económico y político. La opción de la “autoadministración y la autogestión” lleva a un mayor control sobre los asuntos locales y a la prestación de servicios dentro del más amplio marco legislativo del gobierno colonizador. El modelo de la “cogestión y la gestión compartida” institucionaliza la participación indígena en el manejo de las tierras y los recursos. Por último, la “participación en el gobierno público” brinda un medio para influir en las políticas de los gobiernos colonizadores mediante instituciones específicamente indígenas. Dentro de cada una de estas categorías se da una serie de variantes.

Estas opciones, por otra parte, no son mutuamente excluyentes, y en algunas jurisdicciones coexisten las cuatro.

Quisiera enfocar mi análisis en un mecanismo utilizado en Canadá para manejar conflictos sobre tierra y el medio ambiente: la cogestión y gestión compartida.

En lugar de generar un conflicto, una forma más refinada que tienen los gobiernos para acceder a las tierras indígenas es mediante los regímenes de cogestión. En un caso típico, se crea una comisión integrada por miembros indígenas y del gobierno. La idea es que este tipo de estructura facilita la colaboración entre las partes. Canadá emplea ampliamente los Consejos de Cogestión, que constituyen un factor importante en todos los acuerdos sobre reclamaciones de tierras.¹⁴ La jurisdicción y la composición de cada consejo dependen del acuerdo de que se trate.

Un ejemplo se encuentra en el acuerdo sobre las reclamaciones de tierras en Nunavut.¹⁵ Se han establecido órganos encargados de la atención a diversos asuntos: la flora y la fauna, la explotación de los recursos y la protección del medio ambiente, para investir formalmente a los inuit con la facultad de hacer recomendaciones a las instancias decisorias gubernamentales. Estos órganos incluyen la Comisión de Planificación de Nunavut, el Consejo de Aguas

14 Para un análisis general, véase el informe de la Royal Commission, nota 3, vol. 2 Pt 2, pp. 665-680. En cuanto a ejemplos en Estados Unidos, ver E. Goodman, “Protecting Habitat for Off-reservation Tribal Hunting and Fishing Rights: Tribal Comanagement as a Reserved Right”, *Environmental Law* n° 30 (2000), p. 279.

15 Agreement between the Inuit of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty the Queen in Right of Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development and Tunngavik, 1993). (“Nunavut Land Claims Agreement”).

de Nunavut, el Consejo de Administración de la Flora y la Fauna y el Tribunal de Derechos Territoriales, y están generalmente integrados por un número igual de representantes de la Federación Tunngavik de Nunavut y de los gobiernos federal y territorial. Y ya que los inuit controlan el gobierno del territorio, puede que la mayoría de los miembros de cada órgano sea inuit. Por lo general las decisiones de estos órganos colegiados son sólo sugerencias que se hacen a un ministro del gobierno, quien tomará la decisión final. Sin embargo, el acuerdo hace más difícil ignorar las recomendaciones. A este respecto resulta ilustrativo el proceso de toma de decisiones en el Consejo de Administración de la Flora y la Fauna. Este órgano constituye el principal instrumento regulador de la vida silvestre en el área de asentamiento de los inuit. Su objetivo es crear un sistema de derechos de uso, y establecer prioridades y privilegios que reflejen los métodos tradicionales y actuales de la nación inuit. Cuando el Consejo adopta una decisión, la hace llegar de manera privada al ministro, y si éste decide rechazar la sugerencia debe hacerlo constar por escrito en un término de 30 días y permitir al Consejo reconsiderar su decisión previa. Éste, entonces, reconsiderará el asunto y dará a conocer públicamente su parecer. En ese momento el ministro está en posición nuevamente de aceptar o rechazar la decisión del Consejo.¹⁶

No obstante, en ciertos casos los consejos de gestión están investidos de

una autoridad más significativa. El Consejo de Evaluación del Impacto Ambiental de Nunavut es la agencia a cargo de esta materia en el área de asentamiento de los inuit. Este Consejo examina las posibles afectaciones de los proyectos a la tierra, el agua y el aire, así como a la población inuit, y se basa en el conocimiento tradicional inuit, así como en reconocidos métodos científicos, para valorar y controlar los impactos medioambientales, culturales y socioeconómicos de dichos proyectos. El Consejo determina si éstos deben emprenderse, y si así fuere, bajo qué condiciones. Si decide que una determinada propuesta debe ser revisada, solicita al ministro remitir el asunto a un panel gubernamental de evaluación del impacto medioambiental, para su consideración.¹⁷

En Australia ha habido amplias negociaciones sobre los parques bajo gestión compartida. Los acuerdos particulares al respecto varían, pero todos contienen dos elementos comunes: la participación de los aborígenes en los consejos de administración de los parques, y un contrato de leasing con la correspondiente comunidad indígena. Un acuerdo típico es el del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. A los anangu se les otorgó el título de propiedad sobre el parque, y ellos le arriendan la tierra a la Administración Australiana de Parques por un término de 99 años. El acuerdo de leasing “asegura la preservación de las tradiciones de los anangu mediante la protección de sus sitios sagrados y otras áreas importantes”. Los anangu tienen

16 *Ibíd.*, art. 5.

17 *Ibíd.*, art. 12.

una participación mayoritaria en el consejo de administración, reciben pagos anuales de renta y se benefician de cursos de adiestramiento y de oportunidades de empleo.¹⁸ Una iniciativa similar existe en Aotearoa, Nueva Zelanda, donde se han realizado negociaciones acerca de tres montañas sagradas. A los maoríes se les ha conferido una asignación en el manejo de las montañas.¹⁹

IV. La responsabilidad del poder judicial

Un Estado de derecho y el imperio de la ley implican la existencia de un Poder Judicial independiente y consciente de la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que no tienen poder político o económico, todo ello tomando en cuenta la importancia de un derecho integral. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas no tienen el poder económico de las grandes empresas, ni el poder político de los gobiernos. Para ellos, el poder radica en ejercer el derecho a la libre expresión y la manifestación del disenso a través de protestas en las calles. Por supuesto esta forma de expresión puede parecer incompatible con las leyes de seguridad pública o los intereses económicos de las empresas. ¿En este contexto, cuál es entonces el rol apropiado del poder ju-

dicial? Creo que parte de la respuesta se encuentra en un fallo de la Corte de apelaciones de Ontario. El fallo en cuestión estuvo relacionado con la protesta anteriormente mencionada la cual trajo como consecuencia sentencias de encarcelación para seis líderes de la comunidad indígena. Al revocar la condena a estos líderes, la Corte expresó que el concepto del imperio de la ley involucra más que una aplicación mecánica de la ley y se relaciona con los principios del respeto a los derechos de grupos étnicos, reconciliación de los intereses de los pueblos indígenas con los intereses de los ciudadanos no indígenas y la aplicación del debido proceso.²⁰ La otra parte de la respuesta yace en la observación lógica de que no hay necesidad de un poder judicial si los jueces no hacen más que fortalecer los poderes de los gobiernos y las empresas, dado que los gobiernos y las empresas pueden ejercer sus poderes directamente. Debemos recordar que la “raison d’être” que se espera del poder judicial, en una democracia, es justamente para contrapesar los poderes políticos y económicos.

En mi estimación, tomando en cuenta las sentencias de las cortes en Canadá, los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, el poder judicial puede desem-

18 Véase Australian Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, en www.environment.gov.au/parks/national-parks.html. Para un análisis general, ver D. Craig, “Indigenous Joint Management of National Parks”, *Australian Indigenous Law Reporter* n° 46 (1999), www.austlii.edu.au/au/journals/AILR/1999/46.html.

19 J. Ruru, “Indigenous People’ Ownership and Management of Mountains: The Aotearoa/New Zealand Experience”, *Indigenous Law Journal* n° 3 (2004), p. 111. Para una débil modalidad de cogestión sobre otros recursos naturales, véase los planes de gestión de los iwi bajo la Ley de Administración de Recursos, de 1991, www.rmalink.org.nz/view-subprocess.php?id=21.

20 Frontenac, nota 9, párrs. 41-42.

pañar un papel importante para mediar los conflictos sobre los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y el medio ambiente. Hay cuatro medios o puntos de intervención disponibles a las cortes.

1. Garantizar un proceso justo y equitativo

Un proceso de consulta, negociación, diálogo, mediación o discusión es imprescindible para resolver diferencias en intereses y derechos fundamentales. Para promover resultados justos es necesario que la corte asegure que exista participación de buena fe y que exista un equilibrio en el acceso a los recursos necesarios para hacer decisiones informadas. Lo último implica, por ejemplo, que la comunidad indígena o campesina tenga acceso a la representación legal y a expertos independientes.

Resulta evidente que meros "talleres informativos" no cumplen con esta obligación. La diferencia entre un taller informativo y una consulta ha sido señalado por James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas:

Se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y

no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones.²¹

En Canadá es el gobierno, y no la compañía minera, el que tiene el deber de asegurar que se produzca un apropiado nivel de consulta y acuerdo, lo que no puede lograrse mediante los talleres informativos, que omiten incluir la posibilidad de tener en cuenta los intereses indígenas o arribar a un acuerdo. La Corte Federal de Canadá señaló lo siguiente en el caso *Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage)*:

Carece de sentido la consulta que excluya desde el inicio cualquier forma de acuerdo. El proceso que se contempla no es simplemente el de dar a los mikisew una oportunidad para desahogarse antes de que el ministro proceda a hacer lo que desde antes ya tenía planeado.²²

A cada circunstancia corresponderá dictar el tipo del proceso y no es necesario que éstos sean muy complejos. La Corte Suprema de Canadá falló, en el caso *Haida Nation v. British Columbia*²³, que debe existir una escala o banda fluctuante de complejidad. Por ejemplo, en casos de impactos no serios, informes y

21 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrafo 46; en internet: http://unsr.jamesanaya.org/docs/annual/2009_hrc_annual_report_sp.pdf.

22 *Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage)*, 2005 SCC 69, 3 SCR 388, párr. 54.

23 *Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)*, 2004 SCC 73, [2004] 3 SCR 511.

discusiones pueden ser apropiados. Para los casos en los cuales los impactos sean de mayor seriedad, debe haber un proceso elaborado que incorpore abogados y expertos independientes.

Un papel importante para el juez es indagar si los representantes de la comunidad tienen el apoyo de sus miembros. Globalmente hay casos en los cuales las empresas o los gobiernos hacen acuerdos con "líderes" corruptos. Aunque parece conveniente para el gobierno o la empresa en el corto plazo, como he comentado con anterioridad, en el largo plazo la ausencia de consentimiento por parte de la mayoría de la comunidad, suele convertirse en una fuente de conflicto. Por otra parte, desde el punto de vista del imperio de la ley, ninguna corte puede sancionar un proceso corrupto.

2. *Suspender actividades de exploración o explotación hasta el fin del proceso*

En muchos casos, los conflictos surgen con rapidez, y no hay tiempo para una sentencia final por una corte de apelación o un tribunal constitucional. Durante este período de incertidumbre, con relación a los derechos vigentes, ¿cuál es la responsabilidad del poder judicial?

El principio del *statu quo* dicta que pendiente un resultado final, la corte no debe cambiar lo que ya existe. En el pasado, en los casos de conflicto con pueblos indígenas, la mayor parte de los jueces canadienses consideraba que el *statu quo* se determinaba en referencia a las leyes vigentes o los intereses económi-

cos de las agrupaciones o empresas no indígenas. Este tipo de razonamiento trajo como consecuencia el que no hubiera incentivos para que el gobierno o las empresas trataran de alcanzar un acuerdo con las comunidades. Mientras "el diálogo" se extendía sin una conclusión, la empresa podía seguir con su explotación. El resultado es que los recursos pueden agotarse o destruirse la tierra, antes de que la corte emitiera una sentencia final. Cuando exista la posibilidad de que los intereses de los pueblos indígenas resulten afectados significativamente, la consulta no tendrá sentido si se realiza cuando ya el proyecto está en ejecución. En el caso Saramaka la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Surinam "delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo saramaka", y que hasta tanto no hiciera eso, el Estado "debe abstenerse de realizar actos [como otorgar concesiones] que podrían [...] afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo".²⁴

En el marco del sistema legal de Canadá no resulta infrecuente que una corte suspenda o retrase un proyecto para asegurar que se cumplan los requerimientos de consulta y que se tengan en cuenta los intereses aborígenes. En el caso de Haida Nation v. British Columbia²⁵ falló que debe haber consultas antes de la propuesta de exploración o ex-

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p.65. [Saramaka].

25 *Supra*, nota 22.

plotación y las cortes pueden suspender las actividades de las empresas hasta el fin del proceso de consulta o negociación. En el caso *Yellowknives Dene First Nation v. Canada (Attorney General)*, la Corte Federal anuló un permiso que permitía a una compañía realizar actividades extractivas en tierras que incluían territorios tradicionales de las Naciones originarias. La Corte falló que la compañía había omitido consultar a las Naciones Originarias, y que el gobierno federal había descuidado asegurar que la consulta se realizase.²⁶ En otras palabras, las cortes consideran que la determinación del *statu quo* debe incluir el interés indígena en la preservación de su territorio y el medio ambiente.

Similar a la escala de complejidad para negociaciones, hay una escala en la toma de decisiones en el caso de suspensión. En casos con impactos irreversibles o muy serios, una suspensión es justificada. En casos con impactos menos serios puede haber una suspensión por un plazo limitado para dejar a las partes presentar información a la corte.

3. *Evaluar los resultados de la consulta o la negociación*

La responsabilidad del gobierno con relación a la explotación de tierras indígenas no se remite a la mera consulta, sino también a la de tomar en cuenta las necesidades de la población. Sin esta última obligación, los procesos de consulta, negociación etcétera, corren el riesgo de caer en un formalismo vacío, sin contenido. Para evitarlo, las Cortes

deben indagar en las opciones sugeridas, las posibilidades consideradas y las decisiones tomadas. En casos en los cuales no se llega a un acuerdo, la Corte debe imponer una resolución. Las Cortes, en algunos casos, deciden, después del fin del proceso, que los propósitos del gobierno o la empresa son justificados. En otros casos, hay sentencias que demandan cambios en las propuestas de los defensores del proyecto.

Lo importante es que el Poder Judicial se involucre no meramente en el proceso de resolución del conflicto, sino también en la evaluación de los resultados del proceso.

4. *En casos apropiados, prohibir la actividad o terminar el proyecto*

Un tema de la prioridad en relación del acceso a las tierras de comunidades indígenas y campesinas es el del “veto”. ¿Quién tiene el derecho a decidir si va a haber explotación o no? Si no hay el derecho de “veto”, ¿implica que no existe el derecho del consentimiento?

Por supuesto, los gobiernos y las empresas niegan que exista un derecho general de veto y promueven el mero derecho de la consulta. Hasta el momento no hay un consenso entre los expertos, y quizás nunca va a haber un consenso sobre un derecho generalizado para el veto. A pesar de esto, es claro que habrá casos específicos en donde el consentimiento es necesario. En el caso de *Delgamuukw v. British Columbia*, la Corte Suprema de Canadá falló que el consentimiento es necesario si el

26 *Yellowknives Dene First Nation v. Canada (Attorney General)*, 2010 FC 1139, [2011] 1 CNLR 385.

proyecto de explotación trae como consecuencia la destrucción del medio ambiente, de una forma que afecta el desenvolvimiento de las actividades tradicionales de caza y pesca.²⁷

James Anaya, el Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la ONU explicó la relación entre el “veto” y el consentimiento:

Quando el Relator Especial afirma que los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto de los procesos de consulta, se refiere a aquel planteamiento, a su juicio insostenible, de un poder de decisión absoluto de vedar o impedir unilateralmente, con base en cualquier justificación o sin ninguna, toda propuesta o decisión hecha por el Estado que les pueda afectar.²⁸

No obstante, en algunos casos, el consentimiento de la comunidad es necesario para la exploración o la explotación:

... en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el

bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta.²⁹

La Corte Interamericana ha señalado que el Estado es responsable de asegurar que, previamente a la toma de una decisión, los miembros de la comunidad tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluyendo los medioambientales y de salud, que el proyecto minero pudiera implicar.³⁰ Las provisiones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, reflejan también estos principios.³¹

Por último, ya sea que los pueblos indígenas tengan o no el derecho del veto, no hay duda que las cortes tienen el derecho en casos apropiados de parar y terminar proyectos de explotación. En lo particular, las cortes de todos los países en mi estudio han seguido esta práctica.

27 Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 SCR 1010, 153 DLR (4th) 193, párr. 168.

28 Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010, punto 1.

29 *Ibid.*, punto 4.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka (Suriname), 2007, Serie C, n.º. 172, párr. 134.

31 2007, UNGAOR, 62 Ses., Annex, Agenda Ítem 68, UN Doc. A/61/L.67, p. 1.

La Declaración establece que la consulta para obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, antes de llevar a cabo cualquier proyecto afectando su tierra, particularmente en conexión con los recursos minerales, es el estándar mínimo para la sobrevivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas: *ibid.*, arts. 32(2), 43.

V. Conclusión

Hasta el momento la historia nos ha enseñado tres cosas. Primero, que los pueblos indígenas no van a desaparecer. Segundo, que las políticas de asimilación han resultado un fracaso total. Y tercero, que la explotación de los recursos naturales involucra una relación íntima con el tema de la libre determinación y derecho a la tierra de las comunidades indígenas. En ese sentido, debe tenerse en cuenta el importante rol que el poder judicial debe desempeñar en la promoción de soluciones justas, viables y de largo plazo.

Bibliografía

- Australian Government
2012 Australian Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, www.environment.gov.au/parks/national-parks.html.
- Asamblea General de las Naciones Unidas
2007 61ra. Sesión, Res. A/RES/61/295, UNGA (13 de septiembre).
- Cairns, A.
2000 *Citizens Plus: Aboriginal People and the Canadian State* (University of British Columbia Press).
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2004 Comunidades Indígenas Maya del Distrito Toledo (Belize), Informe nº 40, Caso 12.053.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2002 Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), Informe nº 75, Caso 11.140.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos
2007 Caso del Pueblo Saramaka (Suriname), 2007, Serie C, nº 172.
- Craig, D.
1999 "Indigenous Joint Management of National Parks", *Australian Indigenous Law Reporter* nº 46, www.austlii.edu.au/au/journals/AILR/1999/46.html.
- Drummond, S.
1997 *Incorporating the Familiar: Investigating Legal Sensibilities in Nunavik* (Queen's University Press).
- Goodman, E.
2000 "Protecting Habitat for Off-reservation Tribal Hunting and Fishing Rights: Tribal Comanagement as a Reserved Right", en *Environmental Law* nº 30.
- Kamphuis, Charis
2012 "Derecho y la Convergencia del Poder Público y el Poder Empresarial: La Desposesión Campesina y La Coerción Privatizada en el Perú", *Revista Latinoamericana de Derecho Social* nº 15: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, <http://ssrn.com/abstract=1879947>.
- Minister of Indian Affairs and Northern Development and Tunngavik
1993 Agreement between the Inuit of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty the Queen in Right of Canada.
- Ontario Government
2007 Report of the Ipperwash Inquiry (Publications Ontario).
- Real Comisión para los Pueblos Aborígenes
1996 Informe de la Real Comisión para los Pueblos Aborígenes (Supply and Services, Canada).
- Resource Management Act
1991 Iwi Management Plans, www.rmalin-k.org.nz/view-subprocess.php?id=21.
- Ruru, J.
2004 "Indigenous People' Ownership and Management of Mountains: The Aotearoa/New Zealand Experience", *Indigenous Law Journal* nº 3.
- UNGAOR
2007 62 Ses., Annex, Agenda Ítem 68, UN Doc. A/61/L.67.
- Zarsky, Lyuba y Stanley, Leonardo
2011 *Buscando Oro en el Altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlín* (octubre), http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research-/marlinmine_spanish.html#prensa.

Ecuador y Venezuela en la lupa: Entre el neodesarrollismo y el populismo

César Ulloa Tapia¹

Con la finalidad de identificar aspectos de carácter político y económico respecto de la relación neodesarrollismo y populismo, se analizan los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez. Cabe señalar que, si bien los dos gobiernos y sus líderes, guardan diferencias e irrumpen en la vida de los países en contextos particulares, sin embargo también se asemejan en estilos y estrategias para cautivar a sus electorados. Este ejercicio se inscribe en una lógica de comparación con el afán de contestar la siguiente pregunta: ¿estos gobiernos son neodesarrollistas, populistas o tienen de las dos esferas?

Es necesario explicar en qué contextos los presidentes de Ecuador (2006) y Venezuela (1992) irrumpen en la vida política, cuál es la explicación de su advenimiento, por qué se los puede considerar o no populistas y, finalmente, evidenciar, sobre la base del análisis de la literatura existente, si sus propuestas se ubican en lo que se conoce como neodesarrollismo. Este ensayo es una primera aproximación a una investigación más amplia.

Hay dos factores que permitieron la entrada de Rafael Correa y Hugo Chávez en la vida política de Ecuador y Venezuela. Uno de corte estrictamente político y otro de corte económico. El primero se refiere a grandes crisis de institucionalidad, en especial de los partidos políticos (Freidenberg: 2007; Lalander:

2002; Rivas Leone: 2002; Conaghan: 2003; Corrales: 2006), que dejaron de ser los grandes mediadores entre la sociedad y el Estado; mientras que en lo económico, la entrada de los dos presidentes obedece a la incapacidad del Estado para satisfacer de manera universal mínimas condiciones de vida en la población, debido a la puesta en marcha de un modelo rentista-clientelar que se agotó en Venezuela (Gómez, 2002) con la crisis de los precios de petróleo y con la aplicación de ajustes neoliberales en los dos países se agudizaron las crisis, lo cual fue también atribuido a los partidos que estaban en el poder y a los que gobernaron.

Como manifiesta Miriam Kornblith (1996: 2-3), "el quinquenio 1989-1993 fue uno de los más dramáticos de nues-

tra historia democrática (refiriéndose a Venezuela). Entre los eventos críticos o especiales ocurridos (...) destacan (...) el anuncio y puesta en marcha de un severo programa de ajuste económico en 1989. El estallido social del 27-28 febrero de 1989 [Caracazo]. La realización, por primera vez en el país, de elecciones directas para seleccionar gobernadores y alcaldes en 1989 y 1992 y el cambio en las reglas electorales". Los dos intentos de golpe de Estado de febrero y de noviembre de 1992. El fracasado empeño de promover una reforma general de la Constitución en 1992. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de mayo de 1993 de suspender de sus funciones al Presidente Pérez para dar curso a un juicio por peculado y malversación de fondos públicos. La presidencia provisional de Ramón José Velázquez. La ruptura de la dinámica bipartidista y los altos índices de abstención de las elecciones nacionales de diciembre de 1993.

Para el caso de Ecuador, hubo una manifiesta inestabilidad política desde "la renuncia de Alberto Dahik, cabeza del plan de ajuste y estabilización económica, a causa de denuncias de corrupción que fueron tramitadas en la Corte Suprema de Justicia —influenciada por el PSC, en especial, por su adversario el ex presidente Febres Cordero, líder de dicho partido—, que emitió una orden de prisión contra Dahik. Estos acontecimientos, se podría decir, fueron el preludio de la fase de desequilibrio que vendría en los siguientes años, inaugurada por Abdalá Bucaram", según Paredes (2001: 27). Después vendrían los golpes de Estado contra Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000, debi-

do a la mayor crisis económica que vivió Ecuador por el denominado feriado bancario, la quiebra de los bancos, la inflación se acercó al 100%. De manera posterior, la inestabilidad se volvió a presentar en el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez en el 2005 por varios factores como el descontento de un grupo de clase media en Quito denominado como "Forajidos", la violación a la Constitución y el nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia.

Diferencias entre Ecuador y Venezuela

Son imprescindibles de mencionar que entre Ecuador y Venezuela los procesos políticos guardan diferencias importantes, puesto que el país llanero fue considerado como uno de los ejemplos y baluarte de la democracia para América Latina, ya que gracias al Pacto de Punto Fijo (1958-1993), dos partidos políticos (AD y COPEI) se alternaron el poder, sobre la base de una aparente democracia que venía resguardada por la abundancia de la renta petrolera, lo que les permitía a los partidos en el poder satisfacer las demandas de la población (Alvarado, 2005: 308), además de generar redes clientelares (Lalander, 2002: 199-200) que aseguraban sus respectivas cuotas de poder.

No obstante, en Ecuador desde la "tercera ola" de democratización, término utilizado por Samuel Huntington, y que se refieren al retorno a la democracia al dejar atrás regímenes autoritarios y de dictaduras militares principalmente (1972-1979), la situación de los partidos políticos fue inestable. Por lo tanto, mientras en Venezuela hubo un aparente período de democracia estable, en

Ecuador nunca hubo tal situación. Esto se refleja por los Golpes de Estado casi sucesivos entre 1997 al 2003, donde caen tres Presidentes. De ahí, que Ecuador nunca haya consolidado una institucionalidad perdurable, pese a tres intentos macro de rediseño constitucional en los años 1978, 1998 y 2008.

En el caso ecuatoriano, Pachano (2008: 17) identifica el colapso del sistema de partidos en cuatro factores: a) por los propios componentes del sistema, especialmente por las características del sistema electoral que impulsaban la fragmentación, la polarización y que alentaban la constitución de partidos débiles, 2) generalización de prácticas particularistas, como el clientelismo y el corporativismo, que disminuyen la capacidad de agregación de intereses que deben tener los partidos y que instauran una dinámica de plazos extremadamente cortos, 3) reducción de los partidos a espacios relativamente restringidos, de una región o una provincia (...), 4) percepción generalizada de corrupción de los políticos y de la política en general, que se manifiesta en el rechazo creciente por parte de la ciudadanía y en el apoyo a outsiders y personajes antisistema.

En este contexto de rechazo a los partidos en los dos países surgen nuevos liderazgos con características similares que han sido catalogados de distintas maneras: antipolítica (Mayorga, 1995), postpolítica (Echeverría, 2010), outsiders (Rivas Leone, 2002; Mayorga, 1995; Mainwairing, 2008), nuevas izquierdas y neodesarrollistas (Ramírez, 2006; Poma, 2011), izquierdas populistas (Tovar, 2008, Castañeda, 2006), neopopulistas (Covarrubias, 2007; Freidenberg, 2007; Ugalde y González, 2007; Rivas Leone,

2002; Weyland, 2004), tele-presidentes (Rincón, 2008), autócratas competitivos (Corrales, 2006).

No hay consenso respecto de la catalogación de gobiernos como los de Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales, sin embargo, se puede advertir que estos líderes han sabido canalizar el sentir de la opinión pública sobre el rechazo a los partidos políticos tradicionales (partidocracia) que han dominado la escena en los dos países. De ahí que uno de los rasgos del discurso de Correa y Chávez es contra la partidocracia y, en general, contra toda la institucionalidad del pasado, sumando a ello el ataque a los medios de comunicación y las oligarquías.

Lo precedente se refleja en el descenso de votos de los partidos de mayor predominancia en Ecuador y Venezuela. En Ecuador, el año de 2002 es el de mayor quiebre en lo que se refiere al respaldo de los partidos tradicionales (Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular y Partido Roldosista Ecuatoriano) “el declive de la votación de las elecciones de 2002 con respecto a las de 1998 fue prácticamente de 20 puntos porcentuales, esto es, [en 1998 se obtiene] el 73.8% [y en el 2002] el 53.3%. En el 2006, la baja de 20 puntos porcentuales [en relación con el 2002] llegando al 32.7% (...) A partir de 1998, y hasta el 2006, el apoyo electoral hacia los partidos tradicionales sufrió un fuerte revés.

El rechazo hacia los actores políticos tradicionales se expresó claramente en las dos últimas elecciones legislativas (...) [el porcentaje de rechazo] ascendió de 6,2% en 1998 a 16,1% en 2002 y a 26,3% en 2006. Este último incremento también se explica por las

campañas realizadas a su favor, especialmente la efectuada por Rafael Correa, quien convocó al voto nulo como rechazo a la denominada “partidocracia”, según Paredes (2011: 65).

A manera de paráfrasis sobre lo que explica López Maya (2007), la ruptura con el tradicional sistema de partidos para el caso de Venezuela, devino en una suerte de multipartidismo o, mejor dicho, en la proliferación de organizaciones sociales, pero que tienen poco nivel de gestión y que, en muchos de los casos, son absorbidas por el partido mayor, es decir el del líder. Por lo tanto, a más de que el neopopulismo es posterior a la crisis institucional, también puede ser originario de una estructura nueva, pero fragmentada.²

En Venezuela la crisis del bipartidismo (AD –COPEI) se gesta en la mayor crisis económica del país (1983) por la caída de los precios del petróleo, la excesiva confianza hacia un modelo rentista y la incapacidad de la dirigencia política de los dos partidos para dar una salida adecuada (López Maya y Lander, 2001: 234). La crisis económica pudo más que los intentos de corrección política, pues desde 1989 el porcentaje de votos de las presidenciales va en picada. Por ejemplo, AD pasa de un 52,8% en 1988 a 23,2% en 1993 y 9,1% en 1998. Para el caso del COPEI, pasa en 1988 de 40,1% a 22,1% en 1993 a

2,2% en 1998. Los dos partidos colapsaron ante el Polo Patriótico conformado por Hugo Chávez.

Gobiernos que apuntan a lo social

En la administración de los gobiernos de Correa y Chávez se observan, más allá de las calificaciones que les atribuyen a los mandatarios, un incremento sustantivo en inversiones de corte social, acceso a servicios por parte de la población, ampliación de derechos y garantías según las dos Constituciones aprobadas, bonos y subsidios, transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas bajo la premisa que el ser humano, “ciudadano” es el eje central de todo, no obstante también se evidencia una disminución de la inversión extranjera directa (IED). Es decir, hay una inversión pública no vista en ningún otro gobierno, pero también hay un descenso histórico en la atracción a capitales foráneos.

Para el caso de Ecuador, la IED de creció de USD 271 millones de dólares en el 2006 a USD 164 millones en el 2010. Para el caso de Venezuela, la IED pasó de USD -508 millones de dólares a USD 1.404 millones de dólares. Pareciese que el Estado no solo pretende un rol regulador, asistencial, sino también como principal promotor de la economía.³

2 Para agosto de 2006, el CNE (Consejo Nacional Electoral) registraba 811 organizaciones políticas, 48 de las cuales son de carácter nacional, el resto consideradas de “nivel regional (...). Pese a esa proliferación de organizaciones políticas, en la AN (Asamblea Nacional) del actual (sic) período 2006-2010, están presentes sólo 15 partidos, y todos ellos son de la alianza de fuerzas que apoyan al gobierno. (López Maya, 2007: 278-279).

3 Las cifras de la IED fueron tomadas del Boletín Económico, Cámara de Comercio de Guayaquil, junio de 2011. Estos datos, según el boletín, se respaldan en la CEPAL.

Algunos analistas como Ramírez (2006: 43) denominan a este tipo de acciones como el retorno neodesarrollista de la acción estatal a través del relanzamiento de la inversión pública en sectores estratégicos de la economía y en infraestructura, el restablecimiento de su capacidad redistributiva y la voluntad de recuperar la propiedad –o la gestión– de los activos públicos privatizados.

Sin embargo, el modelo de Correa y Chávez estaría lejos de ser neodesarrollista por cuanto, la versión renovada del desarrollismo tiene varios matices. En primer lugar, es necesario recordar que el desarrollismo fue un modelo crítico contra la primarización de la economía y más bien buscaba la sustitución de importaciones, sobre la base de una eficiente industrialización. Dicho en otros términos, se pretendía cambiar las “banana republic” por países con la capacidad de impulsar la producción industrial sustentada en el mercado interno. Este proceso requería una fuerte inversión del Estado, sobre todo en ciencia y tecnología, y un papel protagónico en la coordinación de acciones con todos los sectores.

Como manifiesta Svampa (2011: 186) cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación, rasgos que históricamente fueron criticados tanto por el desarrollismo como por el marxismo. Esta demanda de materias primas o de bienes de consumo hacia los países dependientes ha conducido a un vertiginoso proceso de reprimarización de la economía latinoamericana que afecta no solo a países como Bolivia,

Ecuador o Perú, que cuentan con una fuerte tradición extractivista.

En este orden de ideas, habría una estrategia de retorno a la reprimarización de la economía, es decir lo contrario del desarrollismo. Y más bien, se observa en los dos gobiernos agendas de inversión social con afanes universalistas, pero con el riesgo de caer en medidas asistenciales (Coraggio, 2007), garantizando la pobreza y no combatiéndola como el caso de las Misiones en Venezuela y la entrega de bonos en Ecuador.

Por otra parte, en el caso brasileño, el “novo desenvolvimento” es todavía más moderado; postula un mayor papel del Estado, pero aclara que debe ser funcional al mercado, rechaza el neoliberalismo, pero también se aparta de lo que llama la “vieja izquierda populista”, y finalmente, con toda sinceridad, se declara liberal (Bresser Pereira, 2007 en Gudynas, 2011: 34).

Para los estudiosos brasileños, el neodesarrollismo es claramente diferente y combina el valor de la intervención estatal (desplazada casi totalmente del ámbito de la producción y relega la regulación de las actividades del mercado) con una mayor valoración de la estabilidad monetaria para la pretensión de desarrollo económico. Entre los factores de posibilidad de la agenda desarrollista en curso sobresalen la inversión en ciencia y tecnología, la extensión de la educación formal, la diversificación de las pautas de comercio, la integración al sistema internacional y, en el plano social, políticas sociales y de ampliación del consumo (Boschi y Gaitán, 2008: 3-4). Asimismo, y de acuerdo a lo que expresa O'Connor (2010), las políticas que

lleva a cabo Brasil son una expansión del desarrollismo, pero en este “Nuevo Desarrollismo, prolijo en la ortodoxia monetaria y fiscal, agresivo y heterodoxo en lo productivo y comercial, muy activo en la inserción internacional”.

De ahí, la dificultad de considerar a los gobiernos de Correa y Chávez como neodesarrollistas. Gudynas (2011: 37) habla más bien de agendas, encubiertas en populismo: si bien el extractivismo se aleja de la justicia social por sus altos impactos sociales y ambientales, los gobiernos de izquierda intentan regresar a ella a través de medidas de redistribución económica, y en especial por el pago de bonos. Pero esa es una justicia esencialmente económica, y muy instrumentalizada, y que se parece mucho a la caridad y la benevolencia.

Sobre la base de los elementos que integran y hacen posible el neodesarrollismo en Brasil que es desde donde se teoriza acerca de este modelo, se puede decir que Ecuador y Venezuela caminan por otra ruta, pese a que en los dos países se ha diseñado e instrumentalizado el Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir (Ecuador) y los distintos programas y Misiones (Venezuela). Por los discursos y las acciones de los dos gobiernos, más bien se puede colegir que en los dos países hay un manejo heretodoxo de la economía en la medida que poco o nada les interesa las formulaciones que van de la mano con la disciplina fiscal, el cuidadoso manejo de los ingresos del Estado y el ahorro. Al contrario, se han puesto en marcha amplios dispositivos de inversión social que nadie ha explicado cómo se pueden sostener con el tiempo.

Esta forma de gobernar también ha sido catalogada como populista, debido al uso “irresponsable de los ingresos económicos”, además que la toma de decisiones por parte de los líderes estaría supeditada a un objetivo electoral y de los ciudadanos a uno clientelar, como dice Osvaldo Hurtado respecto de lo último (2006: 153). En esta misma línea, incluso se ha dicho que los populistas económicos están cerrados al mercado, la globalización (Edwards, 2009) y que pretenden que el Estado haga las veces de una especie de semidiós, es decir que regule, sea benefactor y generador de riqueza.

Edwards (2009:224), argumenta que los objetivos de reducir la desigualdad y la pobreza son legítimos [en la región de América Latina] -hasta podría decirse que necesarios- para cualquier proyecto de desarrollo económico. El problema no es el énfasis en los objetivos y metas sociales. El problema es poner en marcha políticas insostenibles a largo plazo y que después de un corto período de euforia generan estancamiento, inflación, desempleo y salarios más bajos; políticas que en vez de mejorar la vida de los pobres hacen que ésta sea más dolorosa y frustrante.

Entonces, mientras para un sector de la opinión y analistas, los modelos que conducen Chávez y Correa son neodesarrollistas, para otro sector se estaría produciendo un fenómeno de corte populista en referencia a la estrategia política y la puesta en marcha de decisiones económicas.

Rentismo que no acaba

En Venezuela, el modelo rentista se inscribe en lo que Chávez ha denominado Misiones, programas de inversión social creadas a partir del 2003, en donde el Estado amplía la cobertura gratuita de servicios sociales a la población pobre y en extrema pobreza y entrega Transferencias Monetarias No Condicionadas. Alvarado (2009: 93), advierte que:

Así, a partir de la crisis política del año 2002 (después del golpe de Estado del 11 de abril), el gobierno anunció “nuevas” medidas económicas y sociales para hacerle frente a la crisis; en materia de política social éstas devinieron sólo en un fortalecimiento (financiero) de los programas sociales asistencialistas-focalizados en los grupos más pobres. Es lógico suponer que en ese momento postgolpe, muy delicado para la gobernabilidad, se procuró mantener la adhesión de los sectores populares mediante los programas compensatorios, de alta aceptación entre la población objetivo, según encuestas sociales realizadas durante los segundos mandatos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera (1994-1998), gobiernos abiertamente neoliberales.

Dentro de este mismo contexto, se puede advertir que el incremento y ampliación de la cobertura de la inversión social va de la mano con los ingresos del petróleo, situación que permite en lo político a los líderes de estos dos países afianzar su aceptación con acciones de corte asistencial que benefician a las

clases más pobres mediante los bonos de la pobreza y los subsidios.

Respecto de la búsqueda de apertura comercial a escala global, Ecuador y Venezuela han privilegiado acuerdos como el ALBA que en vez de expandir sus oportunidades de exportación y mejoramiento de ingresos han sido estrategias políticas con el afán de generar bloques anti-sistema, sobre la base del pensamiento del Socialismo del Siglo XXI, no muy desarrollado ni lo suficientemente explicitado.⁴

En los dos países se ha privilegiado un crecimiento y desarrollo endógenos, sin la misma velocidad que implica la búsqueda de mercados más grandes y amplios a escala global, dentro de una política de relaciones internacionales más cosmopolita como lo realizó Lula en Brasil y ahora Dilma.

En este aspecto, los gobiernos de Brasil se diferencian de manera sustantiva con Ecuador y Venezuela, puesto que la visión de las relaciones internacionales, el comercio y la integración son instrumentalizadas de otra manera. El liderazgo de Brasil se debe, además, de su fortaleza institucional, ya que “existen instituciones públicas que cumplen roles decisivos en la consolidación del Nuevo Desarrollismo en Brasil: Itamaraty, el Banco Do Brasil, el BNDES, el CDES” como expresa O’Connor (2010).

Brasil por otros senderos

Mientras en Ecuador se trata de consolidar una gestión gubernamental afir-

4 Los países que integran la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA) son Antigua y Barbuda, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

mada en la base del liderazgo del Presidente y en Venezuela las cosas se mueven en función del carisma y la capacidad de inversión social gracias al petróleo, en Brasil –no obstante- es el marco institucional y un plan a largo plazo los que determinan el éxito en los planos interno y externo. Por lo que en Brasil se superó, en cierta medida, el margen de las elecciones, ya que hay un camino trazado para mejorar la calidad de vida de las personas, situación diferente a Ecuador donde las elecciones y sus ganadores podrían determinar otro sentido en la conducción del Estado, cosa que podría suceder en Venezuela sin la presencia de Chávez en el poder.

En Venezuela, la fórmula del desarrollo en el gobierno de Chávez ha sido promovido por 1) Atención Materno Infantil; 2) Hábitat; 3) Desplazados; 4) Empleo productivo; y 5) Participación Social. Los lineamientos de esta Agenda Social se recogen en el Plan Económico y Social de la Nación 2001-2007 bajo el lineamiento general denominado “Equilibrio Social”, según el cual el objetivo general de dicho plan en materia social y, por tanto, responsabilidad principal de la política social en el mediano y largo plazo, es alcanzar la justicia social, lo cual significa: 1) garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa; 2) Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza; 3) Fortalecer la participación social y generar poder ciudadano en espacios públicos de decisión (MPD, 2001), según Alvarado (2005: 323).

Para el caso de Ecuador, la Constitución establece que las acciones del Estado estarán enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2009-2013). El Buen Vivir se entiende como “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos pero iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilite la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido (Ramírez, 2008: 387).⁵

El petróleo: principal fundamento

Como se puede ver, Ecuador y Venezuela apuestan por modelos de distribu-

5 Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013, p. 8.

ción más equitativa de los ingresos, la universalización de los servicios, una gran inversión en infraestructura, una suerte de crecimiento hacia dentro, destacan además “la revolución” como una reformulación de la soberanía y un discurso anti-sistema; sin embargo no profundizan en el sostenimiento del modelo, tampoco en la generación de ingresos que no sea por la vía principal del petróleo. Para el caso de Ecuador, incluso, el cambio de la matriz de ingresos podría girar hacia el extractivismo minero.

Por otra parte, respecto de la inserción al mundo global tampoco hay claridad, puesto que si bien priorizan un crecimiento y desarrollos internos, no se hace énfasis en el contexto internacional, pese a que se otorga prioridad a la región. En cuanto a cierta “liberación” de Occidente, se hace notoria la inversión en educación, ciencia y tecnología y proyectos para la generación de conocimientos y saberes, no obstante habría que reflexionar a futuro como empata esto con la necesidad de una institucionalidad fuerte que no solo invierta en laboratorios, departamentos de investigación, sino también que cree un marco de meritocracia y no de militancia exclusiva con los partidos que apoyan a Chávez y el movimiento que sirve de plataforma a Correa.

Otro aspecto que no permitiría decir que Ecuador y Venezuela son neodesarrollistas es por el hecho que los dos países tienen un marco institucional muy frágil. Eso se observa en cierto afán de controlar los poderes del Estado, sobre el criterio que la mayoría manda. Es decir, sin instituciones fuertes no hay posibilidades de generar una “revolu-

ción”, sino más bien que los dos proyectos dependan de los márgenes de aceptación de los líderes.

Respecto del afán de control del poder en Venezuela y el contexto en el cual se gestó, Gómez (2002: 110) advierte que “la dispersión y debilidad de los partidos de oposición le permitió al gobierno, en diciembre de 2000, negociar en condiciones ventajosas el control de cuatro instituciones fundamentales del Estado: la Fiscalía General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia. En ese cargo (Fiscal) se colocó a Isaías Rodríguez, quien hasta ese momento se desempeñaba como Vicepresidente de la República... en la Contraloría y la Defensoría del Pueblo se colocaron también figuras simpatizantes del gobierno”

De ahí, que no se pueda poner en el mismo espectro de comparación en institucionalidad a Brasil, Ecuador y Venezuela. Es evidente que mientras los líderes continúen con un discurso en que digan que todo lo pasado fue malo, junto a las instituciones, y que se requiere la creación de unas nuevas (como más ministerios, unidades, secretarías) sin mayor sustento que el político, las finalidades esperadas no llegará a buenos puertos.

Como dice Ramírez (2006: 41) para el caso de Venezuela, la expansión del gasto público y la reorientación de la riqueza social hacia los sectores marginales han sido posibles gracias a los altos precios internacionales del petróleo, a la creación de una institucionalidad asistencial paralela y al enorme grado de discrecionalidad del entorno presidencial en su manejo. Ello ratifica tra-

yectorias institucionales y decisiones políticas ya presentes en los gobiernos del antiguo régimen (el primer mandato de Carlos Andrés Pérez a inicios de los 70) y la reproducción de un tipo de sociedad rentista y dependiente de un solo producto de exportación.

Un sector de la izquierda critica a la izquierda

Intelectuales afines a una propuesta de izquierda y antisistema como Escobar (2009: 68) han criticado el Plan del Buen Vivir de Ecuador, pues considera que: el crecimiento se cuestiona como meta pero no como medio. El Plan habla de “áreas estratégicas para potenciar el crecimiento económico que sustenta el desarrollo humano (energía, petróleo, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, minería, agua y desarrollo rural), de especial atención por parte del estado el Plan enfatiza el crecimiento, así “no suscriba únicamente como objetivo la búsqueda del crecimiento económico. ¿acaso no hay otras “áreas estratégicas” que deban fortalecerse porque constituyen elementos fundamentales del Buen Vivir? Aquí vemos una profunda asimetría en el Plan, entre los elementos que contribuyen al “crecimiento económico” y aquellos que harían viable una política socioambiental para el Buen Vivir.

Una de las críticas de los regímenes populistas en general, es que suelen surgir a raíz de una profunda crisis de legitimidad del sistema democrático-representativo vigente. No obstante, las experiencias populistas latinoamericanas han mostrado una tendencia a copar las instituciones democrático-representativas y a fomentar organizaciones gre-

miales nuevas, en nombre de los requerimientos de unidad y orden implícitos en la búsqueda de objetos nacionales que responden a los anhelos de los sectores populares (Parker, 2000: 71).

Por lo expuesto, considero a manera de hipótesis que los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez son populistas con ciertos rasgos desarrollistas en materia de inversión social (infraestructura, educación, salud y vivienda) y ampliación de derechos políticos como consta en las Constituciones de los dos países, pero están atrapados en una matriz económica de reprimarización con estrategias extractivistas, lo que retorna a Venezuela al rentismo-clientelar del anterior bipartidismo (AD-COPEI) y al asistencialismo a gran escala en Ecuador, gracias a los altos precios del petróleo. Habría que responder a futuro, cómo estos factores inciden en el capital político de los líderes de la revolución ciudadana y bolivariana.

Los mandatarios, bajo estos antecedentes, serían populistas, si se recogen los aportes que realizan Kurt Weyland (2004), Israel Covarrubias (2007) y mis reflexiones, en el sentido de definir el concepto como una estrategia de corte proselitista que se manifiesta de manera sistemática. Surge, en la mayoría de los casos, cuando hay grandes crisis de institucionalidad, en especial de los partidos (Freidenberg: 2007; Lalander: 2002; Rivas Leone: 2002; Conaghan: 2003; Corrales: 2006) y hay un descrédito de la democracia liberal procedimental, sin embargo recurren a la creación de nuevas instituciones, a las que pone a su servicio con fines electorales. Dentro de la estrategia, se contemplan lenguajes y discursos simbólicos con un fuerte

sentido nacional-popular que pretenden captar la mayor adscripción de adeptos (policlasismo).

Ya en la administración del poder recurre a ciertos elementos del desarrollo como incrementos en inversión social, pero siguen siendo débiles para consolidar una institucionalidad fuerte, poderes del Estado independientes y sintonizar con un plan adecuado de relaciones internacionales que permitan a los países insertarse en el mundo sin renunciar a sus derechos soberanos.

Los resultados de los procesos electorales pueden significar otro escenario que marque la hoja de ruta de los dos países hacia radicalizar sus propuestas o revisar acciones, que para el caso de Ecuador a veces se presenta difuso, mientras que para Venezuela dependerá mucho de la continuidad del Comandante Chávez y de la estructura de base que ha creado en sus 13 años de administración.

Bibliografía

- Alvarado Chacín, Neritza
2009 "Las estrategias de inclusión social en Venezuela un acercamiento a la experiencia de las misiones" en *Convergencia.*, núm. 51.
- Alvarado Chacín, Neritza
2005 "Populismo, democracia y política social en Venezuela" en *Fermentum* AÑO 15 - Nº 44, Mérida septiembre - diciembre - 305-331.
- Cámara de Comercio de Guayaquil
2011 *Boletín Económico*, junio.
- Castañeda, Jorge
2006 "Latin America's Left Turn" in *Foreign Affairs*, May/June.
- Conaghan, Catherine
2003 "Políticos versus partidos" en *Democracia, gobernabilidad y cultura política*. Quito: FLACSO.
- Coraggio, José Luis
2007 Sobre el sentido de articular lo local con lo global desde una perspectiva de economía social. PEKEA 10.
- Corrales, Javier
2006 "Hugo Boss" in *Foreign Policy*. January 4. http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/01/04/hugo_boss?page=0,3
- Covarrubias, Israel
2007 "Breve historia del populismo en México" en *Neopopulismo y democracia*. Bogotá: Observatorio CELAM.
- Echeverría, Julio
2010 "Complejización del campo político en la construcción democrática en el Ecuador" en *Transiciones y rupturas El Ecuador en la segunda mitad del siglo XX Felipe Burbano de Lara (coord.)*. Quito: FLACSO.
- Edwards, Sebastián
2009 *Populismo o mercados*. Bogotá: Ed. Norma.
- Escobar, Arturo
2009 "Una minga para el postdesarrollo" en *Cuadernos de trabajo sobre el desarrollo*, Nº 4. Noviembre.
- Freidenberg, Flavia
2007 *La tentación populista*. Madrid: Síntesis.
- Gaitán, Flavio
2009 *Estrategias neodesarrollistas en tiempos post-neoliberales: análisis de los países del cono sur*, Prepared for delivery at the 2009 Congress of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brazil June 11-14".
- Gómez, Luis
2002 "Liderazgo político en transición: el caso de Venezuela" en *Dadme un balcón y el país es mío*, Hofmeister, Wilhel (comp): Konrad Adenauer.
- Gudynas, Eduardo
2011 "Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: una breve guía heterodoxa" en *Más allá del desarrollo*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.
- Hurtado, Osvaldo
2006 *Los costos del populismo*. Quito. Ed. CORDES.
- Kornblith, Miriam
1996 "Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego" en Alvarez, A. *El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones*, Caracas, IEP-UCV, pp. 1-31.

Lalander, Rickard

- 2002 "¿El suicidio de los elefantes? La descentralización venezolana" en *La transición en Venezuela Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada.

López Maya, Margarita

- 2007 "Partidos y sistema de partidos en Venezuela" en *La política por dentro*. Lima: Ágora Democrática.

Mainwaring, Scott et al.

- 2008 *La crisis de la representación democrática en los países andinos*. Colombia: Ed. Norma.

Mayorga, René

- 1995 *Antipolítica y neopopulismo*. Bolivia: CEBEM.

O'Connor, Ernesto

- 2010 "El Neodesarrollismo brasileño como propuesta para Argentina" en *Economic Studies of International Development* Vol. 10-2. pp. 55-76.

Pachano, Simón

- 2008 "Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en Ecuador". Ponencia presentada al seminario Partidos políticos y calidad de la democracia México, 26-28 noviembre.

Paredes, Lorena

- 2011 *Proceso de cambio político en Ecuador contemporáneo: un contrapunto con Venezuela*. Quito: Ed. FLACSO- Abya-Yala.

Parker, Dick

- 2000 "El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario" en *Revista de la Fa-*

cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas.

Poma, Valter

- 2011 "¿Progresistas? Partidos y movimientos en América Latina" en *Nueva Sociedad*, No. 234. Buenos Aires.

Ramírez Gallegos, Franklin

- 2006 "Mucho más que dos izquierdas" en *Nueva Sociedad* Buenos Aires, No. 205, septiembre-octubre 2006, pp. 30-45.

Rivas, José

- 2002 "Transformaciones y crisis de los partidos políticos. La nueva configuración del sistema de partidos en Venezuela". Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, No. 202, Barcelona.

Svampa, Maristella

- 2011 "Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas? en *Más allá del desarrollo*, Quito: Fundación Rosa Luxemburg.

Tovar Mendoza, Jesús

- 2008 "La Izquierda en el Poder en América Latina: Tres corrientes y un dilema" en *Metapolítica*, Núm. 57.

Ugalde, Luis, González, Raúl

- 2007 "El Neopopulismo en América Latina" en *Neopopulismo y democracia*. Bogotá: Observatorio CELAM.

Weyland, Kurt

- 2004 "Clarificando un concepto cuestionado: El populismo en el estudio de la política latinoamericana", en *Releer los populismos*. Quito: CAAP.

RESEÑAS

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Carolina Larco y León Espinosa (compiladores)
Ministerio de Coordinación de la Política y
Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Colección Pensamiento Político Ecuatoriano,
Quito, 2012, 289 pp.

Hernán Ibarra

Acerca de los movimientos sociales existen teorías sociales y estudios empíricos de naturaleza sociológica o política. En la tradición de izquierda a escala internacional fue muy relevante el estudio del sindicalismo, la historia obrera y los movimientos campesinos.

El uso del término movimiento social para referirse a trabajadores o campesinos, alude a acciones colectivas que tienen una cierta permanencia en el tiempo y cuentan con alguna forma de organización. Un movimiento social está necesariamente vinculado a movilizaciones, la formación de liderazgos y puede derivar en organizaciones estables. El concepto actual de movimiento social surgió de estudios contemporáneos referidos a acciones colectivas ocurridas en la

segunda mitad del siglo XX que cuestionaron los esquemas organizativos tradicionales y derivaron hacia la reivindicación de las identidades sociales y étnicas. Y también fueron impugnadas las formas tradicionales de acción política.

Desde 1960 se estudiaron inicialmente los movimientos de los derechos civiles, la oposición a la guerra de Vietnam y los movimientos estudiantiles en una perspectiva sociológica. Los estudios franceses ponían mucha atención a los estudiantes y el movimiento obrero.

Cabe recordar *Rebeldes primitivos*, un libro clásico de Eric Hobsbawm publicado en 1959 donde estudió a los bandoleros sociales, la mafia, los movimientos milenaristas y la violencia colombiana. El concepto de movimiento social utilizado tenía como rasgo inter-

pretativo las formas de organización, movilización y protesta de grupos sociales rurales, de una manera aproximada a lo que sería entender la acción colectiva histórica, aunque señalaba que existían históricamente movimientos pre políticos y políticos. Así, introdujo un modo novedoso de rescatar la acción colectiva en la historia. En esta línea aparecieron muchas contribuciones en Europa y Estados Unidos. Entre los años ochenta y noventa del siglo pasado ocurrió un auge del estudio de las movilizaciones populares en América Latina, lo que significó una importante renovación del conocimiento.

Entre los historiadores hay una corriente que interpreta los acontecimientos de movilización colectiva popular como un momento en el cual muchos aspectos de la sociedad salen a flote. Por eso, la movilización colectiva es una manera de conocer la sociedad. Mientras que las teorías sociales fueron construyendo modelos teóricos e interpretaciones de naturaleza general, los historiadores se hallaban más ocupados en renovar el conocimiento de la acción colectiva dentro de los contextos históricos donde ella ocurrió. Se produjo así una distancia entre lo que producían sociólogos y politólogos frente a lo que provenía de los historiadores.

Desde luego que algunos historiadores han usado el concepto para referirse a otras épocas históricas. Es cierto que se puede hablar de movimiento social de una manera general para referirse a movilizaciones que pueden haber ocurrido en distintas épocas.

Esta recopilación de documentos realizada por Carolina Larco y León

Espinosa, ofrece una ocasión para reflexionar sobre el significado de la acción colectiva en términos históricos y contemporáneos junto a un tema aún más complejo, la dimensión política de la acción colectiva. El estudio introductorio provee un marco interpretativo de la trayectoria histórica de los movimientos sociales en el Ecuador, pero queda pendiente una discusión sobre el alcance histórico del uso del concepto de movimiento social.

Los documentos reunidos evidencian los procesos organizativos y las demandas sociales que portaron trabajadores, campesinos, estudiantes e indígenas en un período que va de 1931 a 1998. El primer documento muestra las demandas del fallido Congreso campesino de 1931 y el último con el que se cierra la compilación se refiere a la propuesta de reformas constitucionales del movimiento indígena presentada a la Asamblea Constituyente de 1998.

Una mirada a los textos permite adentrarse en el tipo de demandas que fueron surgiendo en las luchas sociales desde los años treinta del siglo pasado, cuando se produjo una inicial transición del mutualismo al sindicalismo y una lenta implantación del sindicalismo rural. En este proceso, como se evidencia en la compilación, no solo estuvo involucrada la izquierda sino también la Iglesia católica y la derecha política. Se podría afirmar que hasta muy entrados los años setenta predominaron las demandas de tipo social. Surge una pregunta en torno a cómo fue concebida la ciudadanía en el mundo popular urbano y rural. Y también, como los sectores populares asumían la participación

política. Además está subyacente la cuestión de la sociedad civil.

Tal como sugiere esta recopilación, habría que entender el pensamiento político de los movimientos sociales como las demandas y su cristalización en formas organizativas, pero esto no implica dejar de lado la existencia de una esfera política específica constituida por los partidos y movimientos políticos junto a la acción del Estado. En algunas circunstancias históricas estas relaciones aparecieron, por ejemplo, en la Guerra de los cuatro días en 1932 y en la revolución de 1944. En el levantamiento indígena de 1990 se produjo en cambio una profunda mutación de las demandas étnicas y sociales en el contexto de crisis del Estado nación.

Como afirman Larco y Espinosa, existe una dimensión específica relativa al pensamiento político de los sectores

populares que debería ser trabajado con la historia oral o como se ha realizado en otras latitudes, con la elaboración de biografías y autobiografías.

Aunque se podría mencionar la ausencia de algunos documentos específicos, tales como la Plataforma de los 9 puntos del FUT que articuló la acción sindical en los años setenta, o del Programa constitutivo del Ecuarrunari en 1972, o las demandas feministas, la recopilación aporta a un conocimiento panorámico de organizaciones, luchas y demandas.

Como sabemos, los estudios y análisis sobre la acción colectiva en términos históricos y sociológicos en el Ecuador han carecido de continuidad y se requiere elaborar una agenda de investigación. Esta recopilación permite visualizar una problemática y sobre todo a hacernos nuevas preguntas.

TOACAZO. EN LOS ANDES EQUINOCCIALES TRAS LA REFORMA AGRARIA

Víctor Bretón Solo de Zaldívar
FLACSO-Abya Yala,
Quito, 2012, 415 pp.

Emilia Ferraro

A partir de un estudio de caso de la comunidad de Toacazo, en Cotopaxi, en su nuevo libro Víctor Bretón argumenta que las raíces del Movimiento Indígena Ecuatoriano se encuentran en las luchas indígenas alrededor de la tierra, luchas que han caracterizado los Andes desde el régimen de hacienda. El autor demuestra y desmenuza este argumento en seis capítulos, cada uno de los cuales provee el contexto socio-político y cronológico en el que se hace visible la manera cómo la organización indígena va desarrollándose alrededor de la tierra, y analiza las modalidades cambiantes en el tiempo de tales formas organizativas. Los seis capítulos están organizados en tres partes: la primera, en la cual el autor explicita sus bases conceptuales y teóricas; la segunda parte en la que se aborda el proceso de luchas agrarias y

de liquidación del régimen de hacienda; y finalmente, la tercera parte en la que se analiza el proceso organizativo de la población indígena de Toacazo y sus relaciones con las ONGs.

El punto de partida del libro, y lo que yo considero uno de sus aportes epistemológicos más importantes, es el explícito reconocimiento de que –en palabras del autor mismo– “para comprender la emergencia de la identidad étnica como plataforma canalizadora de la acción colectiva en el medio rural, es fundamental partir del significado de ese universo de dominación” (p 29). Esto significa que, contrariamente al acercamiento general que caracteriza a gran parte de la literatura reciente sobre movimientos y organizaciones étnicas en los Andes y en Ecuador, la investigación sobre Toacazo empieza desde el sentido que los propios campesinos

indígenas dan del mundo de la hacienda –su “tierra natal” como diría Andrés Guerrero– y de los cambios –tanto en la tenencia de tierra como de relaciones sociales– que se produjeron con su desarticulación. En otras palabras, el autor toma un verdadero acercamiento “*emic*” a la comprensión de un fenómeno social complejo y multifacético, acercamiento que supedita el análisis del autor al análisis que la gente hace de su propia vida, y que se deja guiar por esta comprensión de los actores sociales.

Este acercamiento produce datos novedosos y originales, que pueden ser comparados con la gran mayoría de la vasta literatura que sobre el tema se ha producido en las últimas dos décadas, y que toma el gran levantamiento indígena de 1990 como punto de partida para la comprensión de los procesos organizativos étnicos en Ecuador. En cambio, la investigación sobre Toacazo ubica las raíces del Movimiento Indígena Ecuatoriano mucho más antes de 1990, en la dinámica de los cambios sociales que a lo largo de mucho tiempo se han dado en la sierra ecuatoriana alrededor de la tenencia de la tierra. No solamente presenta un análisis muy rico y convincente, también revela el permanente carácter organizativo y político que ha caracterizado la relación de las poblaciones indígenas con la sociedad nacional (como quiera que se la defina) desde siempre. En este sentido, ofrece pautas para el análisis de “otros” “movimientos” sociales y étnicos en otros países Andinos.

Este libro encaja cómodamente en la tradición “clásica” de etnografía andina, caracterizada por estudios de

amplio respiro histórico; etnográficamente detallados e históricamente precisos. De hecho, por ejemplo, el libro presenta una gran cantidad de información detallada y complementada por numerosos pies de páginas. Salta a la vista que se trata de un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de varios años; que su autor tiene una enorme experiencia de investigación y sobre todo un detallado conocimiento no solamente del universo específico de estudio, sino de los debates más generales que lo enmarcan. No tengo duda alguna en afirmar que estudios de este peso son más y más raros en la actualidad.

Es refrescante y de cierto modo reconfortante encontrar un trabajo de tan larga mirada y que abarca décadas en vez de pocos años. La cultura inmediatista de corte neoliberal que ha permeado hondamente también al pensamiento académico y, consecuentemente, a los procesos de investigación, nos ha acostumbrado a estudios “apresurados”, coyunturales y funcionales, mirados a producir datos “útiles” es decir aplicables inmediatamente a la solución de problemas prácticos. Investigaciones que se desarrollan en breve tiempo, que sacrifican el trabajo de campo y que producen análisis superficiales que, por ende, y como diría una conocida antropóloga británica –Judith Oakley– “dejan la ignorancia intacta”, ya que carecen del peso específico, profundidad histórica y riqueza analítica del estudio que Bretón, en cambio, nos proporciona.

Como todos sus trabajos, éste también se caracteriza por la gran lucidez y la honestidad tanto intelectual como personal que guía las reflexiones del

autor claramente forjados desde la cercanía física, intelectual y hasta afectiva con “el campo”. Esta “cercanía al campo” que para algunos podría representar una debilidad, en mi opinión representa una fortaleza metodológica que no solamente no afecta mínimamente la rigurosidad del trabajo, sino que produce datos más ricos y cualitativamente superiores. A este propósito, quiero resaltar la metodología utilizada, que sí merece atención.

La metodología de investigación combina una variedad de métodos tales como la “observación participante”, entrevistas a lo largo de muchos años; estudio de documentos y fuentes de archivo, y así permite un acercamiento poliédrico al tema en cuestión. En este sentido, una de las contribuciones más generales de este libro es que nos invita a repensar la cuestión metodológica en las ciencias sociales y los límites de las disciplinas, las cuales por su propia naturaleza utilizan un conjunto de métodos que lleva necesariamente a una visión unilateral. Es decir, el reconocimiento de que la comprensión rica y profunda de los fenómenos sociales requiere de un acercamiento polifacético, requiere también de la interdisciplinariedad la cual, a su vez, significa el uso de una variedad de métodos que nos ayuden a aproximarnos a una mejor comprensión de los fenómenos. En este sentido, la metodología de investigación utilizada en este libro va más allá del tradicional método antropológico cuya validez, sin embargo, se reconfirma. Es decir, de ninguna manera el uso de métodos diversos significa un alejamiento de la etnografía, sino que al con-

trario, produce una etnografía aun más detallada, rica y cercana a la vida cotidiana de los sujetos de investigación. Considero que hay algo muy específico y valioso en una metodología cuyo meollo es la convivencia cotidiana con la gente, y que se da el tiempo y el trabajo de buscar el sentido profundo de las prácticas cotidianas tal como la gente misma las entiende. Un aporte fundamental de tal metodología es que el investigador termina enamorándose de estas prácticas ordinarias; de la gente; de sus formas de pensar y de hablar; de sus hábitos cotidianos; y es justamente esta dimensión afectiva y cotidiana la que permite producir un tipo de conocimiento que tiene una cualidad distinta y que, aun siendo académico y riguroso, es al mismo tiempo cercano al universo de estudio; que tiene sentido para la gente y no solamente para los lectores especialistas. La dimensión ética y política de esta metodología, o mejor dicho, una de sus dimensiones ético/políticas reside justamente en presentar un relato del universo de estudio tal que la gente misma se sienta representada y se reconozca en este relato. En el libro de Bretón, esta cercanía al universo de estudio se hace visible también en un estilo narrativo a “dos voces”, en el que la voz analítica y rigurosa del investigador se despliega paralelamente a la voz de los sujetos de investigación. Las dos voces se complementan y logran enriquecer tanto la comprensión del tema en cuestión como el gusto de la lectura.

Quiero terminar diciendo que éste es un libro que merece ser leído; más bien es una lectura obligatoria para

todos aquellos que están interesados en entender el movimiento indígena ecuatoriano, las dinámicas de cambio sociales en el agro ecuatoriano, así como mas en general los procesos sociales y de organización étnica en los Andes. Para quienes todavía creemos en la validez de investigaciones etnográficas que salen del involucramiento con el trabajo de campo en el tiempo, en lugar de operar con las teorías solamente; para quienes todavía creemos en la impor-

tancia de producir conocimiento "inútil", es decir no necesariamente dirigido al diseño de políticas o solamente destinado a producir "soluciones" a problemas de orden inmediatamente práctico, sino un conocimiento cuya validez reside en el gusto de "conocer" y en la aproximación a la comprensión de la complejidad de la vida humana en todas sus formas, este libro es un verdadero regalo.

ECUADOR DEBATE

N° 87



Centro Andino de Acción Popular

Quito-Ecuador, diciembre del 2012

COYUNTURA

Diálogo sobre la Coyuntura: Una escena electoral pautada por la supremacía del Estado
Conflictividad socio-política: Julio-Octubre 2012

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos
en la Costa del Ecuador, 1980-2009
El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly
Sectores medios y ciclo de protesta antineoliberal ecuatoriano:
El caso de la Unión Nacional de Educadores
Del altermundialismo a la protesta de los indignados: ¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?
El movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador

DEBATE AGRARIO-RURAL

“Organización comunitaria por el agua: caso de la comunidad del ‘río trezado”

ANÁLISIS

Pueblos indígenas en Canadá: libre determinación y derechos a la tierra
Ecuador y Venezuela en la lupa: entre el neodesarrollismo y el populismo

RESEÑAS

El pensamiento político de los movimientos sociales
Toacazo. En los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria

Suscripciones: Anual 3 números: exterior: US \$45 - Ecuador: \$15,50

Ejemplar suelto: Exterior US \$15 - Ecuador: \$5,50

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre - Telf. 2 522763

Apartado aéreo 17-15-173B Quito-Ecuador

PRESENTACIÓN

COYUNTURA

Diálogo sobre la Coyuntura: Una escena electoral pautada por la supremacía del Estado

Conflictividad socio-política: Julio-Octubre 2012

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos en la Costa del Ecuador, 1980-2009

Rafael Guerrero

El proceso de la acción colectiva según Charles Tilly

Eduardo González Calleja

Sectores medios y ciclo de protesta antineoliberal ecuatoriano: el caso de la Unión Nacional de Educadores

David Suárez, Lama Alibrahim, Miguel Ruiz

Del altermundialismo a la protesta de los indignados: ¿Nuevos discursos y nuevas formas de acción?

Julie E. Massal

El movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador

Sara Latorre Tomás

DEBATE AGRARIO-RURAL

“Organización comunitaria por el agua: caso de la comunidad del ‘río trenzado”

Andrea Ponce García

ANÁLISIS

Pueblos indígenas en Canadá: libre determinación y derechos a la tierra

Shin Imai

Ecuador y Venezuela en la lupa: entre el neodesarrollismo y el populismo

César Ulloa Tapia

RESEÑAS

El pensamiento político de los movimientos sociales

Hernán Ibarra

Toacazo. En los Andes Equinocciales tras la reforma agraria

Emilia Ferraro

